

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE LICENCIADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, **LUIS CARLOS AGUIRRE ACHINA**, C.I. **172010269-6** autor del trabajo de graduación intitulado: **“La Influencia de la Política Antidrogas Norteamericana en la Política Antinarcóticos Ecuatoriana, en el Periodo 2005 – 2007: Mecanismos y Orientaciones”**, previa a la obtención del grado académico de **Sociólogo con mención en Ciencias Sociales Aplicadas a las Relaciones Internacionales** en la Facultad de **Ciencias Humanas**

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 3 de mayo de 2011

Luis Carlos Aguirre Achina
C.I. 172010269-6

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y RELACIONES INTERNACIONALES

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE: SOCIÓLOGO CON
MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS NORTEAMERICANA EN LA
POLÍTICA ANTINARCÓTICOS ECUATORIANA, EN EL PERIODO 2005 – 2007:
MECANISMOS Y ORIENTACIONES

LUIS CARLOS AGUIRRE ACHINA

DIRECTOR: MARCO ROMERO CEVALLOS

QUITO 2011

DEDICATORIA:

Quiero dedicar este sencillo trabajo a mi
padre José Leonardo Aguirre y a mi
madre Guadalupe Achina. Debido a su
apoyo incondicional, consejos,
paciencia y perdón he podido culminar
esta carrera.

AGRADECIMIENTO

Un especial agradecimiento al Eco.
Marco Romero Cevallos a quien, en
gran medida, debo mi formación
profesional.

INDICE TEMÁTICO.

| | PÁGINA |
|--|---------------|
| Introducción | 1 |
| CAPITULO I | |
| Estados Unidos – Ecuador: Lucha Antidrogas | 7 |
| 1.1 Política Exterior de los Estados Unidos frente al Narcotráfico | 7 |
| 1.1.1 Definición. | 7 |
| 1.1.2 Características de la Política antinarcóticos norteamericana | 8 |
| 1.1.3 Lineamientos y su Evolución | 11 |
| 1.2 Política Doméstica Antidroga Estadounidense | 28 |
| 1.2.1 Actores Fundamentales | 31 |
| CAPITULO II | |
| Mecanismos y Orientaciones de la Política Antinarcóticos Norteamericana en la Política Antinarcóticos Ecuatoriana | 35 |
| 2.1 Política Antinarcóticos en el Ecuador | 36 |
| 2.1.1 Ley 108 | 37 |
| 2.1.1.1 Objetivos de la Ley 108 | 41 |
| 2.1.1.2 CONSEP | 41 |
| 2.1.2 Características de la Política Antidroga en el Ecuador | 42 |
| 2.1.3 Posición en la Cadena del Narcotráfico. | 44 |
| 2.2 Influencia de la Política Exterior de los Estados Unidos frente al narcotráfico en la Política Antinarcóticos del Ecuador. | 47 |
| 2.2.1 Convenciones Internacionales adscritas por el Ecuador. | 49 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2 Convenios Firmados entre el Ecuador y los Estados Unidos en el marco de la Lucha Anti Drogas. | 52 |
| 2.3 Otro Mecanismo de Incidencia: La Cooperación | 52 |
| 2.3.1 Cooperación Bilateral. | 54 |
| 2.3.2 Cooperación Económica entre Ecuador y Estados Unidos en el marco de la Lucha Anti Drogas. | 57 |
| 2.3.3. Hectáreas Erradicadas | 62 |
| 2.4 De la Narco Guerrilla al Narco Terrorismo: Un cambio en la política norteamericana luego del 11 de septiembre y su influencia en el Ecuador. | 63 |
| 2.5 Adendum | 66 |
| CONCLUSIONES | 69 |
| Bibliografía | 76 |
| Anexos | 83 |

RESUMEN

El presente trabajo académico estudia la influencia que ha tenido la política exterior norteamericana en la lucha contra el narcotráfico ecuatoriana en el período 2005 – 2007. Además de analizar la evolución de la política antinarcóticos norteamericana y su incidencia en la región andina con especial énfasis en el Ecuador.

Los mecanismos y orientaciones mediante los cuales se ejerce influencia externa tienen especial atención en el segundo capítulo del presente estudio; en el cual, a través de la cooperación, económica, militar y la convergencia ideológica de los gobernantes de turno ha logrado que el Ecuador se alinee a las políticas para combatir el narcotráfico diseñadas desde Washington.

LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS NORTEAMERICANA EN LA POLÍTICA ANTINARCÓTICOS ECUATORIANA, EN EL PERIODO 2005 – 2007: MECANISMOS Y ORIENTACIONES.

INTRODUCCIÓN.

Desde su formación, los Estados se encontraron con la necesidad de definir cómo se llevaría a cabo negocios y el interactuar con otros. Ya sea de manera formal o informal, los países establecen normas, políticas y tratados con respecto a cómo se llevará a cabo el comercio, la seguridad y el convivir con sus similares vecinos. Estas políticas se convirtieron en lo que actualmente conocemos y definimos como "la política exterior". Estas políticas tienen que evolucionar para permitir a los estados a alcanzar sus metas y satisfacer sus expectativas presentes y futuras. Nuestro mundo sigue cambiando, así como las divisiones políticas de la tierra y las naciones

Los Estados Unidos de América y la República del Ecuador no son diferentes de los otros países en el hecho que, individualmente, tuvieron también que establecer sus propias políticas externas para hacer frente al resto del mundo y proteger sus intereses. En la actualidad, con el mundo globalizado, esta tarea se vuelve muy difícil y compleja. Es posible que se crea que los diferentes países podrían establecer políticas exteriores convergentes para hacer frente a situaciones análogas; sin embargo, no siempre ocurre de esa manera. Los diferentes Estados, en general, crean y establecen condiciones especiales para hacer frente a problemas similares en función de la voluntad política del país y el tema en cuestión. No tendría mucho sentido pensar que los Estados deben establecer y seguir una política similar para hacer frente a situaciones iguales, independientemente del país o estado en particular.

Desde los años 70, cuando el consumo de cocaína despegó por primera vez en los EE.UU., este país ha estado luchando en América Latina en lo que Richard Nixon en 1973 bautizó como "la guerra contra las drogas ". Además, en 1986 bajo el gobierno de Ronald Reagan, el tráfico de drogas se declaró un problema de seguridad nacional, lo que lo convierte en una amenaza grave y sin duda una cuestión de suma importancia para los EE.UU. La

batalla contra el narcotráfico se colocó en la región andina, el punto de partida de la cadena de suministro.

En los años 80, la producción de drogas ilícitas y el tráfico fue reconocido por el gobierno de los EE.UU. como una amenaza creciente para la seguridad nacional dado el aumento de la cocaína en las calles norteamericanas y el consumo interno de heroína, lo que obliga a los políticos a debatir el mejor modo de afrontar con la industria de los narcóticos ilegales. Como resultado de las diferentes estrategias norteamericanas para combatir el narcotráfico en los años 90 este país decidió que la mejor manera de combatir el problema de las drogas era el combatir su oferta en los países de origen; por lo tanto, debido a la presión ejercida por el EE.UU., la erradicación de cultivos ilícitos en los países andinos no era una opción sino un alineamiento a esta forma de solucionar un problema eminentemente social.

Terminada la guerra fría a principios de 1990, el campo internacional estaba nuevamente en proceso de transformación. La Unión Soviética perdía su fuerza a finales de los 80's lo que se traducía en que ya no representaba una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El sistema comunista de Europa del este cayó. En sí lo que había dominado la política exterior estadounidense alrededor de 40 años ya no existía, lo que significaba que había que replantearse los objetivos de política exterior. Nuevos desafíos se avizoraban como por ejemplo la globalización iba alcanzando dimensiones nunca antes vistas, la economía se convertía en el nuevo instrumento de poder y de dominación.

A pesar de salir victorioso de la guerra fría, los Estados Unidos se enfrentaban a cambios y la interrogante era determinar cuál sería, de ahora en adelante, el papel estadounidense en el mundo. Se creía además que con el fin de la guerra fría se podía llegar a un período donde las amenazas a la seguridad del estado se verían reducidas al mínimo. Pero, post guerra fría nuevas amenazas serían replanteadas y en consideración se encuentran los siguientes temas:

- ☉ Conflictos Étnicos
- ☉ Contaminación del Medio Ambiente
- ☉ Democracia
- ☉ Derechos Humanos
- ☉ Terrorismo

☉ Narcotráfico¹

Así, con la guerra fría concluida, el tema del narcotráfico se convertiría en la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, reemplazando al habitual enemigo el comunismo. Con América Latina se logró establecer una agenda en la cual el tema del combate al narcotráfico sea de primer orden, y lo que logró Washington fue una nueva herramienta eficaz para un nuevo intervencionismo militar en la región.

Para enfrentar el narcotráfico, Los Estados Unidos creó unilateralmente estrategias que incluyen la creación de políticas que se centran en la erradicación de cultivos e interdicción en los países de la oferta y se aplica presión en puntos clave del flujo de drogas antes de llegar a los Estados Unidos. La mayoría de drogas ilícitas que circulan al interior de los E.E.U.U. provienen de México y de los países andinos. Con este enfoque, el Gobierno de Estados Unidos ha dado miles de millones de dólares en ayuda a estos países con la esperanza de bloquear el flujo. Es evidente que estas estrategias no han tenido éxito. El Ecuador dejó de ser tan solo un país de tránsito en la cadena del narcotráfico y en los últimos años se ha convertido en un país productor. A través de los medios de comunicaciones nacionales, la ciudadanía ha podido enterarse de laboratorios clandestinos de producción de drogas destruidos por la Policía Nacional y descubrir submarinos para transportar las drogas ilícitas, entre otros. A menudo crean una reacción negativa de la violencia y la consolidación de las mismas fuerzas que esperan contener.

Por otro lado, América Latina, con especial atención el Ecuador, continúa luchando con los problemas de la pobreza extrema, el tráfico de drogas, violaciones de los derechos humanos, la corrupción gubernamental, y otras plagas actuales tanto sociales, políticas y económicas.

Desde el punto de vista realista, la seguridad nacional ocupa un lugar preponderante para un estado. Así, para nuestro estudio, es evidente que la política estadounidense, en su papel de hegemon regional y mundial, considera tener la razón para obligar a los estados dependientes a luchar contra las drogas a favor de proteger su seguridad nacional.² Dentro

¹ Kissinger, Henry. La Diplomacia. México. Fondo de Cultura Económica. 1995. Flacso. Pág. 625

² Bagley, Bruce. La Política Exterior Estadounidense y la Guerra de las Drogas: Análisis de un fracaso político. En: La Economía Política del Narcotráfico: El Caso Ecuatoriano. FLACSO Quito. Pág. 178

de este marco, las relaciones que sostienen Los Estados Unidos y la región andina son bastante asimétricas.

La teoría realista presenta un mundo anárquico en el que la guerra es una constante entre los estados. Por ende estos no se guían por valores morales o éticos sino por la consecución de sus intereses, mantenerlos y aumentar su poder a cualquier costo. En este sentido, se entiende que las relaciones estatales están determinada por la fuerza, de ahí que para el presente trabajo, la teoría realista, es bastante útil porque permite explicar la decisión que ha tomado los Estados Unidos hegemónicamente, en la lucha antidrogas, con el fin de salvaguardar su seguridad nacional y persuadir a los países andinos a participar en esta lucha.

El realismo considera que:

- ☉ Los estados son los actores básicos del sistema internacional
- ☉ Las decisiones que tomen quienes estén al frente de un estado son racionales
- ☉ La Seguridad Nacional es un tema de primer orden en las agendas estatales³

El presente estudio académico busca intentar responder a la siguiente inquietud: ¿Cómo influyó la política antidrogas norteamericana en la política ecuatoriana antinarcóticos durante el periodo 2005 - 2007? Intentaremos analizar la influencia de la política antidrogas norteamericana en la política ecuatoriana antinarcóticos, determinando cuáles son sus mecanismos y orientaciones para lograr dicha influencia.

El objetivo principal de la presente investigación es analizar la Influencia de la política antidrogas norteamericana en la política antinarcóticos ecuatoriana, en el periodo 2005 – 2007: Mecanismos y Orientaciones. Los objetivos específicos están determinados a estudiar los orígenes, características y desarrollo de la política antinarcóticos de los dos países; además de establecer las relaciones entre la política antidroga de los Estados Unidos y la política antinarcóticos del Ecuador, principalmente en cuanto a orientaciones y mecanismos en los años 2005 - 2007

³ Bagley Óp. Cit.

El presente estudio se desarrollará a través de dos capítulos. El primero “Estados Unidos – Ecuador: Lucha Antidrogas” La evolución a través del tiempo de la política exterior norteamericana en materia antinarcóticos, así como también su política interna, desde sus orígenes hasta nuestros días y su impacto en las relaciones bilaterales con el Ecuador.

En el segundo capítulo “Mecanismos y Orientaciones de la Política Antinarcóticos Norteamericana en la Política Antinarcóticos Ecuatoriana” tratará de explicar la política antinarcóticos ecuatoriana y la influencia que ejerce los Estados Unidos en la misma, basándonos como punto principal de mecanismo de orientación la cooperación económica.

En cuanto a la metodología, para realizar el presente trabajo, se basará en una investigación teórica de carácter básicamente cualitativo, que incluye análisis acerca del informe “PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DROGA 2004 – 2008”, proporcionado por el CONSEP y los Reportes del Control Internacional Antinarcóticos (INCSR) del Departamento de Estado de Estados Unidos disponibles en su página web, tanto desde una perspectiva cualitativa, como de las orientaciones de la política antinarcóticos. Asimismo, la base para el presente análisis serán estudios académicos, documentos y análisis de las entidades tanto ecuatorianas como estadounidenses. Entre ellas, La Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), DEA, entre otras.

La pertinencia del presente estudio es que, para el Ecuador, la relación bilateral que mantiene con los Estados Unidos es de vital importancia, pero las prioridades que conforman estas agendas son divergentes una con la otra. Por un lado los Estados Unidos, sus prioridades, están basadas en ámbitos como Democracia y D.D.H.H, mientras que la prioridad del Ecuador es el comercio.

En materia antinarcóticos, su nivel de importancia también es diferente en los objetivos de política exterior de ambos países. La lucha que mantiene los Estados Unidos contra la droga ha tenido impacto en Ecuador, tanto en sus políticas antidrogas, como en su jurisdicción interna, demostrando el poder hegemónico que tiene en la región.

La guerra contra las drogas lleva alrededor de 40 años. Ha causado intervenciones, inestabilidad política, implantación de bases militares, ha incrementado la presencia

estadounidense en la región pero aparentemente no ha podido resolver el problema del tráfico ilegal de las drogas.

Entonces, el objetivo del presente trabajo es dar cuenta de cómo la estrategia y orientaciones norteamericanas en la lucha antidrogas han incidido en la lucha antidrogas en el Ecuador, durante los años 2005 – 2007.

1. ESTADOS UNIDOS – ECUADOR: LUCHA ANTIDROGAS

El presente capítulo de este estudio propone llevar adelante el análisis de la política exterior norteamericana en materia de antinarcótics. Su evolución a través del tiempo. Además que tratará de definir la política antidrogas interna, su jurisdicción y su tratamiento, identificando a los actores involucrados.

1.1 Política Exterior de los Estados Unidos frente al Narcotráfico

1.1.1 Definición.

En el año de 1982 el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, declara oficialmente la guerra contra las drogas. Posteriormente, en 1986 son señaladas como una amenaza a la seguridad nacional norteamericana.

En cuanto a la definición de política exterior norteamericana en materia antinarcótics podríamos decir que **“La Política de Washington para la región andina en el tema del narcotráfico se ha enfocado hacia la reducción de la oferta de narcótics mediante la erradicación y la sustitución de cultivos, la implementación de medidas judiciales y punitivas de control sobre delitos ligados al tráfico de drogas (el lavado de dinero, entre ellos) y la desarticulación de carteles”**⁴. Por otro lado, **“se parte de la presunción de que, al reducirse la oferta, el tráfico de drogas se hará más peligroso y costoso, lo cual a su vez producirá una disminución en la producción, aumentando los precios y actuando como factor de disuasión para la compra y el consumo de drogas por parte de los estadounidenses.”**⁵

Tanto Adrián Bonilla como Coletta Youngers –reconocidos internacionalistas– han resumido de manera clara lo que busca los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región andina. Bajo estas premisas, este país combate la oferta de las drogas para provocar una reducción en su consumo al interior del país norteamericano; ya que, en

⁴ BONILLA Adrián (ed.). Orfeo en el infierno una agenda de política exterior ecuatoriana. En La Agenda de Política Exterior Ecuador – Estados Unidos. Katalina Barreiro. Quito. Ed. Flacso-CAF-Academia Diplomática. 2002. Pág. 281

⁵ YOUNGERS Coletta A., EILEEN Rosin (eds.). Drogas y Democracia en América Latina: El Impacto de la Política de Estados Unidos. Washington D.C. Ed. Biblos. 2005. Pág. 15

teoría, atacando la oferta derivaría en un posible aumento en el precio de la droga para así retraer su demanda para incentivar la reducción en el consumo.

Con base a lo anterior, el tráfico ilícito de estupefaciente se lo entiende como un mercado internacional el cual debe ser atacado desde sus bases mismas. **“Para administrar de manera eficaz nuestros esfuerzos, definiremos el mercado mejor al estimar el flujo de las drogas ilícitas desde sus orígenes hasta nuestras calles. Mediremos nuestro éxito según nuestra capacidad de reducir la oferta de drogas.”**⁶

1.1.2 Características de la Política antinarcóticos norteamericana

Las características de ésta política, están plasmadas en el programa “Estrategia Nacional para el Control de las Drogas”, elaborado anualmente por el gobierno de los Estados Unidos desde 1989. Desde entonces, la característica fundamental ha sido la reducción de la oferta como una prioridad.⁷

Para señalar sus características, utilizaremos el informe elaborado en el año 2002 el cual señala que **“Si bien la mayor parte de nuestro programa para el control de las drogas está basado en nuestro país, algunos elementos de un programa eficaz de esa naturaleza sólo se pueden desarrollar en el extranjero. Al nivel internacional, nosotros y nuestros aliados atacaremos el poder y las finanzas de las organizaciones internacionales terroristas y delictivas que amenazan nuestra seguridad nacional. Apoyaremos a nuestros socios internacionales en sus esfuerzos para atacar el comercio de las drogas dentro de sus fronteras y trabajaremos a través de las instituciones bancarias y financieras internacionales para combatir las actividades de lavado de dinero relacionadas con las drogas y el terrorismo. Asimismo, haremos todo lo posible para fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en las naciones aliadas que están bajo el ataque del comercio de las drogas ilegales.”**⁸

⁶ NCJRS National Criminal Justice Reference Service. “Estrategia Nacional para el Control de las Drogas” <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ondcp/193590.pdf> Pág. 23 Acceso: 15/02/09

⁷ Véase: Embajada de México. “La Estrategia Nacional para el Control de las Drogas”

http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossier_combDrogas_infgral.htm Acceso: 15/02/10

⁸Óp. Cit., NCJRS National Criminal Justice Reference Service Pág. 23 Acceso 16/02/10

Entonces, según lo señalado en el párrafo anterior, la lucha iniciada por los Estados Unidos no puede ser desarrollada simplemente al interior de sus fronteras ya que existen diferentes eslabones dentro de la industria del tráfico de drogas ilegales que se desarrollan fuera de las jurisdicción interna estadounidense.

Los programas estadounidenses están enfocados básicamente a cinco puntos críticos:

- ☉ Aéreas de Cultivo
- ☉ Procesamiento del Cultivo
- ☉ Transportación
- ☉ Distribución
- ☉ Uso⁹

Otra característica del tipo de enfoque que se le da al combate de las drogas ilegales es que no es considerado como un tema de salud pública interna de los Estados Unidos que se remedia con programas de prevención; por el contrario, este problema es transformado en un conflicto internacional convirtiéndolo en una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Por tanto, las decisiones que se tomen en este sentido involucran no solamente a las agendas policiales, sino también a las fuerzas armadas tanto de Estados Unidos así como también de los países fuente.¹⁰

Los actores de esta guerra no son convencionales. Estos son:

- ☉ Estados – Nación
- ☉ Narcotraficantes
- ☉ Guerrillas
- ☉ Corporaciones Financieras (Lavado de Dinero)¹¹

⁹ U.S Department of State. International Narcotics Control Strategy Report 2006. En: <http://www.state.gov/p/nea/ci/ir/c19357.htm> Acceso: 18/02/10

¹⁰ Bonilla Adrián. Las Sorprendentes Virtudes de lo Perverso: Ecuador y Narcotráfico en los 90. Quito, Flacso-Abya-Yala-North South Center. 1993., Véase: Págs.: 22 - 23

¹¹ LAUFER Jacques. Las Plagas de América. Quito, CAAP, Ed. Alejandra Adoum. 1990. En: Política internacional y narcotráfico: Acercamiento al caso ecuatoriano por Adrián Bonilla. Pág. 219

Estos son los principales participantes dentro de una guerra en la cual convergen diferentes intereses de los actores; sin embargo, cabe señalar que este conflicto armado contra las drogas es librada curiosamente en los países andinos en vías de desarrollo.

La política exterior norteamericana define al narcotráfico como un enemigo a la seguridad del estado; se lo percibe como un deterioro a los intereses estadounidenses en términos económicos. Su costo, por citar un ejemplo, para el año 2005 se estimó en 1.5 billones de dólares para ayudar a los programas a nivel mundial. La cooperación económica para la región andina se repartió en:

- ☉ Para Bolivia: 90,2 millones de dólares
- ☉ Para Perú: 115.4 millones de dólares
- ☉ Para Colombia: 462.800.00 dólares
- ☉ Para Ecuador: 25,7 millones de dólares¹²

El tema de las drogas representa un problema social, económico y de seguridad para los Estados Unidos, ya que cuatro quintos de la droga que se consume al interior de este país provienen del extranjero. Es así que la política exterior norteamericana se enfoca en las “... **restricciones a la producción en los países de “origen”...**”¹³

Para los Estados Unidos –actor principal en la guerra contra las drogas- existe un dilema que reside en las opciones que tiene en su lucha contra las drogas y por sobre todo, cuál de ellas es la más efectiva; de las cuales podemos citar:

- ☉ Incremento en la ayuda militar y policial a los países de origen. (Se privilegia la fuerza)
- ☉ Opciones económicas (generar recursos rentables en las zonas de cultivo)
- ☉ Legalización de ciertas drogas¹⁴

¹² PEARL Raphael. “Drug Control: International Policy and Approaches” En: <http://www.usembassy.it/pdf/other/IB88093.pdf> Págs. 4 Acceso: 15/02/10

¹³ YOUNGERS Coletta A., EILEEN Rosin. Óp. Cit., Pág. 15

¹⁴ LAUFER, Óp. Cit., Pág. 219

1.1.3 Lineamientos y su Evolución

Un antecedente a lo que hoy conocemos como “Guerra contra las Drogas” podemos encontrar en las Guerras del Opio que fueron una serie de disputas entre China y varias naciones occidentales, sobre todo Inglaterra. El resultado final de las Guerras del Opio fue la apertura forzada de China al comercio y la humillación permanente del gobierno y el pueblo chino. Estas guerras tienen sus raíces en el creciente intercambio comercial las potencias occidentales y China. Este último ha estado involucrado en el comercio con Occidente desde los años 1600’s. Muchas naciones occidentales estaban acostumbradas a la negociación con los bienes -en lugar de dinero como lo hacían con China- y ese fue el inicio del interés occidental para controlar el comercio con esta nación asiática.

Cuando Gran Bretaña tomó el control de la India, que también adquirió el monopolio de la producción de opio en este país, a los comerciantes británicos se le ocurrió una brillante solución al problema del comercio chino. Mediante el contrabando de opio en China, los comerciantes podían adquirir una fuente constante de moneda china, para lo que crearon un mercado para el narcótico altamente adictivo. El gobierno chino, como es comprensible, protestó contra el creciente comercio de opio, y trató de hacer cumplir las estrictas leyes de China contra las drogas.

En 1839, el gobierno chino nombró Comisionado Lin Zexu para supervisar el puerto chino de Guangzhou. Zexu tomó una postura estricta contra el opio, incluso escribió una carta a la reina Victoria de declarar sus intenciones de poner fin al comercio de opio. Se confiscaron y destruyeron enormes cantidades de opio, lo que los británicos tomaron como excusa para iniciar la Primera Guerra del Opio. El gobierno chino fue vencido militarmente y se vio obligado a ceder a varias aspiraciones británicas. Esto lo consiguieron mediante la firma del Tratado de Nanjing, ganando el territorio de Hong Kong junto con los términos de intercambio muy favorables en 1843.

13 años después, la Segunda Guerra del Opio fue provocada por una incautación de un buque británico que había sido sospechoso de contrabando. Esta vez la fuerza militar británica fue acompañada por las naciones que querían una parte del lucrativo comercio en China como Francia y los Estados Unidos. En 1860, los chinos fueron obligados a firmar

un segundo tratado, el Tratado de Tianjin, que contemplaba la apertura de varios puertos chinos al comercio europeo, proporcionando el libre paso para los productos occidentales en este país asiático, y obligar a este último a pagar reparaciones a las naciones involucradas en la Segunda Guerra del Opio.

Las Guerras del Opio se utilizan a menudo como un claro ejemplo del imperialismo europeo en China. Al igual que muchas naciones en Asia, China se vio obligada a abrir sus fronteras al comercio en contra de su voluntad, y para ofrecer condiciones muy favorables del comercio a sus “socios” europeos. Los tratados desiguales, como los que pusieron fin a las guerras del opio trajeron consigo contratos muy lucrativos para el lado occidental, además de puertos exclusivos para los productos de estas potencias.

Posteriormente, en 1908, el presidente de Los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, alarmado por la adicción de las tropas norteamericanas al opio en tierras filipinas, convocó en 1909 en Shangai a los representantes de algunos Estados, entre ellos Alemania, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Holanda, Persia, Portugal, Rusia y Siam para analizar y dar respuesta a la problemática del comercio ilegal y la adicción al opio lo que originó la Comisión Internacional del Opio.

“El inicio de la lucha contra las drogas encerró un trasfondo más complejo que el descrito, puesto que las razones principales que motivaron a los Estados Unidos a tomar el liderazgo “moral” en el combate a las drogas fueron: a) reducir la resistencia China a las inversiones financieras norteamericanas; b) preocupación por la seguridad interna del país; c) preocupación por la salud de los consumidores, entre otras.”¹⁵

La cita en Shangai no tuvo mayor importancia. Sin embargo, **“logró generar un movimiento emocional que más tarde se vería plasmado en las legislaciones internas de los países y en convenciones internacionales.”¹⁶**

¹⁵ Valle, Alex. Control de drogas en el derecho penal máximo y el derecho penal mínimo. En: Entre el control social y los derechos humanos Los retos de la política y la legislación de drogas. En: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/160111/min_justicia/minj_controlsocial_derhumanos.pdf. Pág. 144. Acceso: 18/02/10

¹⁶ Ibid.

Volviendo al tema del presente estudio, hay que considerar que la lucha contra las drogas se inauguró en el gobierno de Richard Nixon en el año de 1970 - previo al anuncio de guerra oficial que se realizó en el gobierno de Reagan por un tema de seguridad nacional- con la consolidación de la DEA (Drug Enforcement Agency) mediante la reforma a “LAW ENFORCEMENT IN ILLICIT DRUG ACTIVITIES” cuyo literal número cuatro dice lo siguiente: **“Se establece en el Departamento de Justicia, un organismo que se conoce como la Drug Enforcement Administration, en lo sucesivo, "la Administración"”**¹⁷.

En la década de los ochentas, se prioriza la lucha contra las drogas o guerra contra las drogas debido al crecimiento acelerado de la exportación de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en un tema fundamental de la relación entre la región andina y los Estados Unidos; identificando a la problemática de las drogas como un problema externo, el cual deben ser atacadas **“...en cualquier lugar que fuesen cultivadas, procesadas o transportadas.”**¹⁸

Cuando se declara a las drogas ilícitas como una amenaza a la seguridad nacional - propuesta por el presidente Reagan (republicano)-, tuvo el respaldo de los representantes del partido demócrata. Jim Wright, vocero demócrata de la Cámara de Representantes de ese entonces señaló: **“Es hora de declarar una guerra sin límites, de movilizar nuestras fuerzas, tanto públicas como privadas, nacionales y locales, en un asalto coordinado en contra de esta amenaza que les está constando a nuestra economía cerca doscientos treinta mil millones de dólares”**¹⁹. Lo cual, se tradujo en un aumento en la ayuda económica norteamericana para la lucha antidrogas hacia los países de la región andina.

Por otro lado, en el año de 1985 se inicia la denominada “Guerra de baja intensidad” o también conocidos como “conflicto de baja intensidad”, cuya definición dice que **“... es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia.**

¹⁷ Justia US Law "Law Enforcement Illicit Drug Activities."

http://law.justia.com/us/codes/title5a/5a_4_97_1_.htm Acceso: 17/02/10

¹⁸ OLMO Rosa. Las Relaciones Internacionales de la Cocaína En:

http://www.nuso.org/upload/articulos/2323_1.pdf Acceso: 17/02/10

¹⁹ Public Broadcasting Service (PBS), Entrevista con el Senador Jim Wright. En:

<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/archive/stoppingdrugs2.html> Acceso: 16/02/10

El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia”²⁰.

En otras palabras, es un tipo de estrategia militar norteamericana para hacer frente a revoluciones o cualquier tipo de inestabilidad político social que pueda amenazar los interés de Estados Unidos.

Por baja intensidad se refiere a los recursos económicos militares utilizado por los Estados Unidos, que relativamente es muy pequeña frente a su poderío económico y está dirigido a tres objetivos principales:

- ☉ La Contrainsurgencia
- ☉ La Reversión de los Procesos Revolucionario Triunfantes
- ☉ Antiterrorismo

Una característica de este tipo de conflicto es que no se persigue la victoria militar tradicional en cuanto al vencimiento del total del enemigo, sino más bien obligarlo a cumplir compromisos que impliquen cambios de comportamiento hacia los Estados Unidos y sus intereses. Es decir, la victoria se mide por las políticas que hace la contraparte. Además que, esta guerra se lleva adelante en los países de la periferia, misma que puede significar la intervención en asuntos de política doméstica.

En lo que se refiere a nuestro tema de investigación, el C.B.I (Conflicto de Baja Intensidad), implicó el uso de la fuerza militar para el combate de la producción de drogas ilegales en el exterior; para lo que el Presidente Reagan autorizó varios operativos militares contra el narcotráfico. Lo cual significó una novedad en los Estados Unidos puesto que este problema estaba en manos de civiles.²¹

George H. W. Bush (20 de enero de 1989 – 20 de enero de 1993)

En el gobierno de George H. W. Bush se lanza la “Iniciativa Andina” en septiembre de 1989. Esta iniciativa trataría de aplicar la política antidrogas norteamericana la cual

²⁰ La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: “Del intervencionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto”. http://www.redri.org/Archivos_articulos/guerra%20baja%20intensidad-kreibohm.pdf Acceso: 18/02/10

²¹ Ibid.

consiste en reducir la producción de coca. El objetivo de esta iniciativa era de reducir la producción de la misma en un 50%. Así, la cantidad de \$2.2 billones fueron destinados para gasto militar, en especial para países como Bolivia, Perú y Colombia.²² **“La columna vertebral de la Iniciativa Andina fue la inclusión de las fuerzas armadas y policiales de América Latina en los esfuerzos antidrogas, y a las fuerzas que aceptaron esta misión Estados Unidos les dio considerable entrenamiento y apoyo”**²³

Esta iniciativa también tenía como objetivos:

- ☉ El fortalecimiento tanto político como institucional de los gobiernos que colaboraban con la lucha anti drogas
- ☉ Mejorar la efectividad a la hora de la aplicación de las leyes nacionales
- ☉ Trabajo conjunto destinado a combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico
- ☉ Fortalecimiento de la economía

Todo esto sumado al apoyo de Estados Unidos a las fuerzas armadas y policiales de cada país andino.²⁴

Un antecedente a la Iniciativa Andina fue la anteriormente mencionada Estrategia Nacional de Control de Drogas (página 7 de este estudio), en la que se hace referencia a un acuerdo que tiene que ser llevado a nivel presidencial entre los gobiernos que colaboran con la guerra contra las drogas. Aquí es donde se señala que para fortalecer el apoyo regional a los objetivos estadounidenses en el combate al narcotráfico, se debe intensificar la cooperación con los gobiernos de los países productores de la hoja de coca; para lo cual se debería llamar a la celebración de la cumbre Andina de drogas. La participación de los Estados Unidos en esa conferencia permitiría un amplio intercambio de puntos de vista sobre el problema, además que se intentaría explicar las estrategias norteamericanas relacionadas con el tema y lo ideal sería un acuerdo andino-estadounidense para alcanzar las metas

²² The Washington Office on Latin America (WOLA), ¿Peligro inminente? Las FF.AA. de Estados Unidos y la guerra contra las drogas, Tercer Mundo Editores/CEI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Flacso Quito. 1993, págs. 29-36.

²³ YOUNGERS Coletta A., EILEEN Rosin Óp. Cit., Págs. 3-4

²⁴ Youngers, Coletta A. " Collateral Damage: U.S. Drug Control in the Andes. Washington D.C.: WOLA, Drug War Monitor" En: http://clashumanrights.sdsu.edu/Latin_America/USP.html Acceso: 02/03/10

principales para controlar y erradicar el tráfico ilegal de drogas. Donde el componente económico, militar son las principales metas.²⁵

Siguiendo con lo anterior, en el año de 1989 se toman una serie de medidas que complementan esta iniciativa. Una de ellas es la Directiva de Seguridad Nacional N°18 en la cual se faculta a las fuerzas armadas a ingresar en aéreas conflictivas de guerrilleros y comerciantes de drogas ilegales, así como también se les da la posibilidad de arrestar a cualquier persona en el extranjero.²⁶

Asimismo, el 18 de septiembre del mismo año, el entonces secretario de defensa Richard Cheney declaraba que la lucha contra las drogas era un asunto de seguridad nacional al elaborar la “National Defense Authorizacion Act 18” en la cual concede al pentágono asumir el papel protagónico en la ofensiva contra la producción de drogas.²⁷

Poco tiempo después, la reunión de presidentes de la región andina firmaron la declaración de Cartagena en la que se insistía en la asistencia militar y económica para la lucha antidrogas. En esta cumbre, **“se enmarca en un análisis estratégico norteamericano, en un proceso de redefinición del concepto de seguridad nacional ahora que la guerra fría ha terminado, que el sistema de relaciones con Europa ha cambiado y que el “fantasma del comunismo” no será eficaz como argumento para el intervencionismo.”**²⁸ En esta reunión, se insta en varios puntos de los cuales:

- ☉ Para Bolivia y Perú: Coca por desarrollo (Cambio de la economía de la coca; es decir, enfocarse al desarrollo social y enfocarse a nuevos productos cultivables)
- ☉ Para Colombia: Restablecimiento de los precios del Café y otros productos primarios.

²⁵ 65 Education Resources Information. “National Drug Strategy. 1989 En: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1f/aa/2b.pdf Acceso 18/02/10

²⁶ PHD. DREYFUS Pablo. COCAINE, THE MILITARY AND SHINING PATH, 1980-1995 En: <http://www.hacer.org/pdf/Dreyfus00.pdf> Pág. 10 Acceso 18/02/10

²⁷ ZANDER Steven. “Military Responses in Nonpolitical Conflicts” En: Challenge and Response: Anticipating U.S. Military Security Concerns. Dr. Karl Magyar (ed). En: <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA421859&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf> Pág. 272 acceso: 19/02/10

²⁸ SÁNCHEZ, Rubén. Aspectos Internacionales de la política contra el narcotráfico en la región andina. Santa Fe de Bogotá, Parlamento Andino/ONUUNDCP/ octubre 2002.

- ☉ E.E.U.U.: Propugnaba por la destrucción de los cultivos de coca, además de un apoyo militar a quienes colaboraban con la lucha antidrogas.²⁹

Con todo lo anteriormente señalado, podemos acotar que la Iniciativa Andina en este gobierno pasó de ser una **“estrategia de aplicación de la ley a una estrategia militar”**³⁰, debido al incremento en los presupuestos para la ayuda militar.

William Clinton (20 de enero de 1993 – 20 de enero de 2001)

En el gobierno de William Clinton, la consigna fue la de promover la democracia y el libre comercio³¹. **“El TLCAN de 1994 tuvo parte de su origen en tal iniciativa. Después el presidente William Clinton invitó a 34 jefes de estado del continente a la Cumbre de las Américas para proponer la creación de un Área de Libre Comercio para América (ALCA). Sin embargo, esta iniciativa no prosperó en la región. Una causa fue que la percepción de algunos países latinoamericanos sobre el ALCA no fue muy positiva.”**³²

De igual manera en materia de seguridad, este gobierno consideraba las amenazas que existían contra Estados Unidos en el exterior; es decir, amenazas como:

- ☉ Conflictos étnicos
- ☉ Detrimiento del medio ambiente
- ☉ Narcotráfico.³³

La administración de Clinton intentó combatir el problema de las drogas con políticas de prevención. Tanto así que **“...se preparaba un cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas para centrarse más en la prevención del consumo que en la represión, informaron ayer funcionarios estadounidenses. Thomas McLarty, jefe de**

²⁹ Declaración de Cartagena. Los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos de América y Perú, reunidos en Cartagena de Indias. Colombia, el día 15 de febrero de 1990 En: <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/.../descargar.php?...> Acceso: 19/02/10

³⁰ Drug War Monitor. Collateral Damage: U.S. Drug Control Andes. Youngers Colleta. WOLA. En: [http://www.wola.org/media/ddhr_andes_brief\[1\].pdf](http://www.wola.org/media/ddhr_andes_brief[1].pdf) Pág. 14 Acceso 20/02/10

³¹ KISSINGER Henry. La Diplomacia. Pág. 773

³² Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. Conferencia Subregional Retos a la Seguridad y Defensa en un Ambiente Político Complejo: Cooperación y Divergencia en Suramérica. <http://www.ndu.edu/chds/SRC-Colombia09/Papers/Diaz%20Nieri%20PER.pdf> Acceso: 04/03/10

³³ Montufar Cesar. La seguridad nacional de E.E.U.U. en el nuevo orden global: de la vinculación y expansión a la seguridad patria y el antiterrorismo N° 5. UASB Quito. 2004. Pág. 82

gabinete de la Casa Blanca, anunció que Clinton cree que los recursos de la lucha contra las drogas deben ser destinados a la educación, al tratamiento y al combate a nivel nacional y estatal”³⁴ pero no fue así. De tal manera que -en un congreso de mayoría republicana- lo que estaba previamente asignado para la lucha contra las drogas se incrementó tanto que **“...a los cerca de USD 300 millones aprobados a través de los procesos normales, un paquete emergente de ayuda complementaria fue aprobado para el Plan Colombia. El total del paquete era de USD 1.3 billones para un período de dos años, la mayor parte estaba destinada para Colombia”³⁵**

Así surgió el Plan Colombia que es una propuesta presentada por el gobierno colombiano a finales de 1999 y posteriormente oficializado por el presidente Bill Clinton el 13 de julio de 2000, cuyo principal objetivo se basó en obtener apoyo político y financiero en su lucha contra los denominados ejércitos revolucionarios, narcotraficantes, autodefensas, y delincuentes comunes. El gobierno de Colombia lo calificó **“...como una estrategia integral para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado.”³⁶**

La propuesta del Plan Colombia consiste en un programa largo, muy amplio de gobierno, mismo que ha sido concebido como una herramienta de desarrollo tanto humano como social, enfocado a la búsqueda y establecimiento de la paz en la zona del conflicto.

En julio del año 2000, el congreso de los Estados Unidos aprobó la ampliación de las actividades de la lucha contra el narcotráfico en la región andina mediante la asignación de 1,3 billones de dólares. Buena parte de esa suma de dinero fue destinada al Plan Colombia.³⁷

El también llamado “Plan para la Paz, Prosperidad y Fortalecimiento del Estado”, “Plan Colombia” o “Plan Patriota”, está determinado –entre otras- en cuatro temas principales que son:

³⁴ Diario el tiempo. “Clinton Oficializa Su Estrategia Antidrogas” En: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-39410> Acceso: 04/02/10

³⁵ Drug War Monitor. Óp. Cit., Pág. 4

³⁶ Botero Sandra. El Plan Colombia y los colombianos: crónica y consecuencias de la desinformación Universidad Nacional de Colombia <http://www.ucecentral.edu.co/acn/obser/medios/pdf/14.pdf> Acceso: 05/03/10

³⁷ Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En: <http://bogota.usembassy.gov/wwwsrbl.html> Acceso: 05/03/10

- ☉ El aspecto de la economía
- ☉ Fortalecimiento del estado
- ☉ Proceso de Paz
- ☉ Lucha contra el Narcotráfico³⁸

Para nuestro trabajo, señalaremos brevemente algunos detalles acerca de estos temas involucrados en el plan Colombia.

Sobre la Economía.

La economía colombiana necesita de la asistencia extranjera para poder sostener un presupuesto para hacer frente a los grupos ilegales. En concreto, el tráfico de drogas ilícitas no era simplemente un problema de Colombia; se trata de incorporar al plan a las naciones consumidoras, por lo tanto, el problema debe abordarse con la cooperación internacional, además que su costo debe asignarse sobre la base de la capacidad económica de los países involucrados.

Debemos acotar que este proyecto responde a la política estadounidense anti drogas en cuanto a eliminar la producción. Por ende, uno de sus objetivos es cortar el financiamiento de grupos insurgentes que pueden desestabilizar política, económica y socialmente la estructura de un Estado. Lo que bajo la concepción norteamericana traerá seguridad en la región. **“...la implantación de la iniciativa colombiana en las zonas productoras de coca de la región meridional del país; una mayor interdicción de las drogas; un mayor apoyo a las actividades de erradicación de la Policía Nacional de Colombia; un desarrollo económico alternativo; y la asistencia para mejorar la capacidad de gobierno local y nacional de Colombia, incluida una mayor protección de la administración de justicia y los derechos humanos.”**³⁹

Sobre el Fortalecimiento del estado.

³⁸ SALGADO, Manuel. Drogas, terrorismo e insurgencia. Del Plan Colombia a la cruzada libertad duradera. UASB Quito. 2002. Pág. 56.

³⁹ Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos. El Presupuesto nacional de control de drogas: Informe anual 2001. En: <http://www.ncjrs.gov/ondcppubs/policy/strategy/index.html> Acceso: 06/02/10

La guerrilla y su expansión territorial a expensas de la presencia del Estado, se desarrolla en áreas donde el control del estado es marginal, además con la particularidad de que son remotas lo que se traduce en una posibilidad de desarrollar actividades de narcotráfico.

Para establecer las normas de una sociedad pacífica, las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial debían ser reformados y fortalecidos. Asimismo, se trató de fortalecer a las instituciones colombianas involucradas en la lucha contra las drogas (La DAS⁴⁰), con el fin de enfrentar las amenazas a la seguridad dentro de su territorio.

Sobre el Proceso de Paz

Una parte integral del Plan fue el llamado proceso de paz. Para ese entonces, una característica de este proceso fue que el gobierno de Colombia empezó a retirarse de un área del putumayo y lo declaró “zona de distensión”. Se la declaró así porque las fuerzas armadas, la policía y otras fuerzas de seguridad no podían entrar en él. Su objetivo era tratar de garantizar la seguridad necesaria para poder negociar un acuerdo de paz de las partes antes del final del mandato del presidente Pastrana. Como se sabe, el 20 de febrero 2002 desde la presidencia se puso fin al proceso de paz y ordenó al ejército volver a ocupar la zona de distensión.

Aunque el proceso de paz se concentró principalmente en las FARC, fue también elaborado para establecer el dialogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Plan también incluye obtener el desmantelamiento pacífico de las Autodefensas.

Los objetivos explícitos del proceso de paz eran:

- ☉ Establecer el control estatal sobre la nación entera.
- ☉ Lograr la plena aceptación de un régimen democrático
- ☉ Poner fin a las violaciones de derechos humanos (encaminados a acabar con el secuestro)

⁴⁰ DAS - Departamento Administrativo de Seguridad. Ente encargado de obtener y procesar información en los ámbitos nacional e internacional sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional colombiana. Tomado de: www.das.gov.co

- ☉ Poner fin a la participación de la guerrilla en el negocio del narcotráfico.⁴¹

Contra el narcotráfico.

El narcotráfico constituye una grave amenaza para Colombia debido a los grandes recursos que esta actividad ilícita genera. Además que sus vínculos con la violencia y la corrupción en las instituciones públicas y privadas pueden distorsionar la economía y desestabilizar la nación. El Plan llegó a especificar una serie de medidas que deben adoptarse para destruir la "Cadena de la droga", desde su agricultura hasta llegar a su consumo.

El objetivo principal era reducir la producción de la industria de la droga en un 50 por ciento en seis años. En la primera fase, la destrucción de la industria se concentra en la región del Putumayo y otras zonas del sur durante el primer año. La segunda fase de dos a tres años y tendrá lugar en el sudeste y centro de la país. Y la tercera fase, de tres a seis años que se llevará a cabo en toda Colombia. En síntesis se trata de atacar a los diferentes eslabones que constituyen el tráfico ilícito de drogas en conjunto con los demás estados que están involucrados con este plan.

El Plan trataría de incluir a países como: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela, mismos que lo rechazaron. El propósito de incluir a estos países era el de combatir de manera conjunta el problema de las drogas ya que **“el narcotráfico se había convertido en uno de los demonios de Washington desde la Administración Bush I a comienzos de los 1990’s, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría”**⁴²

Además que el condicionamiento estadounidense para proporcionar su ayuda, tanto en lo económico como militar, se basa en **“una imposición de una política represiva contra la oferta, donde Colombia se ha visto forzada a asumir la parte más dura de la lucha ideada e impuesta desde Washington”**.⁴³

⁴¹ Revista Fuerzas Armadas y Sociedad Chile. Plan Colombia (extracto): Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado En: <http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART411103dd9c243.pdf> Acceso: 06/02/10

⁴² HERNANDEZ Carlos. 11.Septiembre.2001: ¿Dramático resultado de la agresiva política exterior estadounidense? En: <http://www.ucm.es/info/nomadas/5/cshdz.htm> Acceso: 10/02/10

⁴³ RAMIREZ Socorro. La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia. En: El plan Colombia y la internacionalización del conflicto. UASB Quito. Pág. 17

En este sentido, El Ecuador, dentro de lo que define como seguridad nacional, no ha querido ser parte del Plan Colombia así como del conflicto interno del vecino país. Pero, **“no le ha quedado otra opción que hacerlo debido a las constantes presiones diplomáticas, comerciales y políticas.”**⁴⁴

Por otro lado, en el año 1999, el presidente del Ecuador de ese entonces, Jamil Mahuad, llegó a un acuerdo con el gobierno de Clinton, en el cual se autorizaba a aeronaves estadounidenses a usar el aeropuerto “Eloy Alfaro” localizado en la ciudad de Manta. El fin del uso de esta base suponía un esfuerzo norteamericano dirigido a favorecer a las tareas del combate al narcotráfico. **“Lo cierto es que la adquisición de este punto de apoyo en territorio ecuatoriano formaba parte de un esfuerzo norteamericano más amplio... después de que el Pentágono hubiese perdido el acceso a sus antiguas bases en Panamá. De hecho, Manta se sumaba a los aeropuertos Reina Beatriz en Aruba, el Hato en Curaçao y de Comalapa en El Salvador como nuevas Posiciones Operativas Adelantadas (Forward Operating Locations o FOLs.) para el desarrollo de este tipo de acciones.”**⁴⁵

Por otro lado, los Estados Unidos califica el actuar de los países que colaboran en la lucha contra las drogas de tal manera que existen posibles castigos o recompensas en base a la cooperación que, en este caso, los países andinos, demuestran en el combate al narcotráfico. Por citar, tenemos la “Ley de Preferencias Arancelarias” (ATPA en inglés) –que fue un antecedente del ATPDEA-, el cual trata de proporcionar una recompensa a la lucha contra el narcotráfico a través de la liberalización de ciertos aranceles a las importaciones de algunos productos originarios en estos países⁴⁶.

En el año 2001 la “Ley de Preferencias Arancelarias” expiró, lo cual dio paso a la “Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas” ATPDEA, misma que

⁴⁴ BONILLA Adrian. La Política ESTADOUNIDENSE y el CONFLICTO COLOMBIANO en la SEGURIDAD del ECUADOR. Quito. Flacso 2002

⁴⁵ LIZANO Ana. América Latina y la segunda administración Bush: un debate sobre seguridad. Flacso Quito 2008. Pág.89

⁴⁶ La Ley de Preferencia Comercial Andina de 1991, En:
<http://www.usembassy.org.ec/lincolnirc/libre/documentos/Ley%20de%20Preferencia%20Comercial%20Andina%20de%201991.pdf>.

liberalizaba a 700 productos adicionales a los que existían en el ATPEA. Estos productos variaban entre ropa, atún, manufacturas, etc.⁴⁷

En líneas generales, la lucha contra las drogas se ha vuelto un tema central entre América Latina y Estados Unidos. Asimismo la lucha militar que se realiza contra las drogas permitió al gobierno norteamericano acercarse a los países productores.

George Bush. (20 de enero de 2001 – 20 de enero de 2009)

En el año 2001, llega a la presidencia W. Bush quien continúa la línea de reducir la oferta de las drogas ilegales y con el apoyo al plan Colombia. Durante este año se lanza la “Iniciativa Regional Andina (ARI), como un refuerzo a la lucha de tráfico de drogas ilícitas; pero, esta vez, se incluye cooperaciones económicas a los países vecinos.⁴⁸

El congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de medidas adicionales al Plan Colombia destinadas, dentro de las cuales contaron con una cantidad de 882 millones de dólares para los países involucrados en esta nueva iniciativa.⁴⁹ Además que el uso desde esta cantidad podría ser susceptible a modificaciones según su modo de empleo.⁵⁰

Su acción se basa, entre otros en:

- ☉ *La ayuda a Colombia y a sus vecinos.*
- ☉ *Contiene aumentos para asistir a Bolivia y Perú.*
- ☉ *Otros.”*⁵¹

En suma, es un plan en el que se asegura el reforzamiento de las actividades militares de su antecesor Plan Colombia, por lo que se fortifica la presencia de los mismos en la región; además que, aparentemente, se trata de extender el conflicto fuera de las fronteras colombianas con la “ayuda” que es proporcionada desde Norteamérica.

⁴⁷ CAN intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SGdi895.doc

⁴⁸ Drug War Monitor. Óp. Cit., Pág. 5

⁴⁹ “DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. La Iniciativa Regional Andina En: <http://usinfo.state.gov/eSj>anolJarilOI042I0I.htm> Acceso: 10/03/10

⁵⁰ LIZANO Ana. Óp. Cit., Pág. 82

⁵¹ The White House George Bush <http://georgewebush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/03/20020323-9.es.html> Acceso: 10/03/10

En base a lo anterior, señalemos que nuestro país recibió alrededor de 80 millones de dólares como parte de cooperación militar, lo que sirvió para la logística de la base de Manta.⁵²

Dentro de esta iniciativa, La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID tendrá a cargo una acción fundamental con base a los 882 millones aprobados por el congreso norteamericano. Con ese dinero, la USAID podrá financiar proyectos contra el narcotráfico y que apoyen la democracia en los países andinos. Proyectos que deben estar encaminados a:

- ☉ Fortalecer la Democracia.
- ☉ Crecimiento económico (en base al comercio)
- ☉ Desarrollo Alternativo.⁵³

En este proyecto también constan programas diseñados para combatir las drogas ilícitas en países incluidos en la iniciativa: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.⁵⁴

Para el Ecuador, la ARI **“ha sido comprendida por medios oficiales como un mecanismo que proveerá de proyectos para el desarrollo de la frontera y zonas amazónicas y que impedirán la expansión de cultivos y de actividades relacionadas con el narcotráfico”**⁵⁵

Un suceso inesperado ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Los atentados a las torres gemelas y al pentágono en suelo norteamericano acentuó la importancia de resguardar sus propias fronteras; **“Dichos acontecimientos colocaron el tema de la seguridad como la prioridad de las autoridades norteamericanas.”**⁵⁶ Así que los esfuerzos del tráfico ilegal de drogas se extendió a la guerra contra el narco terrorismo en nombre de proteger su integridad y de su seguridad nacional. Además que se señalo a las FARC y a las

⁵² Socorro Ramírez. Óp. Cit., Págs. 103-114

⁵³ Bilateral Topics U.S. Narcotics Control Initiatives in Colombia En: <http://bogota.usembassy.gov/testimony2.html> Acceso: 10/03/10

⁵⁴ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. La Iniciativa Regional Andina. En: <http://usinfo.sate.gov/spanol/ari/o1042101.htm> Acceso: 10/03/10

⁵⁵ BONILLA ADRIAN. Orfeo en el infierno Óp. Cit., Pág. 283

⁵⁶ LIZANO Ana. Óp. Cit., Pág. 42

Autodefensas de Colombia (AU) como grupos terroristas a los que debían ser atacadas militarmente.

Asimismo, luego de los atentados, Estados Unidos se inclinó por un unipolarismo en sus relaciones internacionales lo que llevo a éste país **“...a abandonar espacios diplomáticos y a reafirmar la voluntad unilateral de Estados Unidos en diversas áreas, incluida la militar.”**⁵⁷ Lo que se tradujo en la posterior invasión a Irak.

Por otro lado, luego del 11-S los Estados Unidos -en especial el gobierno de George Bush- acortó su visión en cuanto a proclamar que Norteamérica tenía dos opciones: Están con ellos o están contra ellos.⁵⁸

Esta forma de ver al mundo, llevó a declaraciones como el General Nixon⁵⁹, quien aseguró que **“la necesidad de enfrentar al narcotráfico de acuerdo a su naturaleza de destrucción masiva” enfatizando la necesidad de medidas más allá de lo político**⁶⁰. Así también, se solicita al Departamento de Defensa (El Pentágono) a que se involucre más en el tema de la lucha contra las drogas conjuntamente con otras agencias de seguridad.

Barack Obama (20 de enero de 2009 – actualidad)

Aun cuando el presente estudio va hasta el año 2007, considero necesario dar cuenta de la política exterior norteamericana en la actualidad.

En enero de 2009, llega a la presidencia el Demócrata Barack Hussein Obama con un discurso de cambio en la política norteamericana, tanto interna como externa, con su frase “Change has come to America”

A pesar de enfrentar una agenda compleja, que incluye una profunda crisis económica, en su momento dos guerras y los problemas en Oriente Medio, el gobierno de Obama ha decidido prestar más atención a América Latina. Sus contactos con líderes de la región,

⁵⁷ Ibíd. Pág. 17

⁵⁸ Véase el discurso oficial de George Bush o lo que se conoce como doctrina Bush
<http://www.filosofia.org/his/20010921.htm> Acceso: 11/03/10

⁵⁹ El Teniente general Benjamin Randauph "Randy" Nixon es el Comandante General del Ejército de Estados Unidos del Pacífico y el ex comandante del norte de la División Multinacional en Irak.

⁶⁰ CHAVEZ Nashira. CUANDO los MUNDOS CONVERGEN: terrorismo, narcotráfico y migración post 9/11. Quito: FLACSO - Sede Ecuador: Abya-Yala. Pág. 59

modificaciones de algunas políticas, su participación en la última Cumbre de las Américas, entre otros, dan muestras de la postura del nuevo gobierno que se basa en la decisión de evitar declaraciones rimbombantes y concentrarse en algunos temas particulares, explorar las relaciones de su país por país, teniendo en cuenta los diferentes sistemas nacionales especificidades y abandonar la obsesión por la lucha contra el terrorismo haciendo hincapié en temas como la migración, el narcotráfico y la energía. La perspectiva de mantener y desarrollar esta estrategia dependerá de la capacidad de Obama para enfrentar la crisis económica, en el mercado internacional medio ambiente y en el complejo juego de los grupos de interés en Washington.

El Presidente Obama asumió el cargo con una agenda radical para restaurar la imagen de Estados Unidos a nivel mundial y reconstruir alianzas EE.UU. para enfrentar los desafíos comunes del siglo 21, como la inestabilidad económica, el cambio climático, la proliferación nuclear y el terrorismo. Así lo hizo saber durante su discurso en Discurso en Miami el 23 de mayo de 2008 sobre su política Exterior para América Latina señalando **“Es hora de una nueva alianza de las Américas. Después de ocho años de las erradas políticas del pasado, necesitamos un nuevo liderazgo para el futuro. Tras décadas de presionar por una reforma de arriba para abajo, necesitamos una agenda que avance la democracia, la seguridad y la igualdad de oportunidades. Mi política estará guiada por el principio sencillo de que lo que es bueno para el hemisferio es bueno para los Estados Unidos. Eso significa medir el éxito no sólo por los acuerdos que se logran entre gobiernos, sino también por el grado en que se realizan las esperanzas del niño de las favelas de Río, se logra la eficiencia de la policía en la Ciudad de México y se reduce la distancia entre Miami y La Habana”**⁶¹

La administración Obama entiende que, a pesar de que América Latina está creciendo importancia cotidiana en los Estados Unidos, las políticas norteamericanas hacia la región en los últimos años han sido generalmente ineficaces. Desde el 11 de septiembre, luego de los ataques de 2001, Washington, dentro de su agenda para América Latina, ha priorizado

⁶¹ Discurso de Barack Obama pronunciado en Miami en mayo del 2008. Véase: http://my.barackobama.com/page/content/temas_relaciones_exteriores Acceso: 7/10/10

temas como el narcotráfico y el terrorismo mientras que para la región andina los temas principales son el comercio y el desarrollo

Aun cuando Obama manejaba un lema de cambio en la política norteamericana, tanto interna como externa, planteó la continuación de la política exterior estadounidense en cuanto a la lucha contra el terrorismo en la región cuando dijo lo siguiente: **“Para el pueblo de Colombia - que han sufrido a manos de los asesinos de todo tipo - que significa luchar contra todas las fuentes de violencia-. Cuando yo sea Presidente, vamos a continuar con el programa andino contra las Drogas y su actualización para enfrentar los desafíos en evolución. Vamos a apoyar totalmente la lucha de Colombia contra las FARC. Vamos a trabajar con el gobierno para acabar con el reinado de terror de los paramilitares del derecho. Apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a terroristas que buscan refugio fuera de sus fronteras. Y arrojaremos luces sobre cualquier apoyo a las FARC que venga de gobiernos vecinos. Este comportamiento debe ser expuesto a la condena internacional, aislamiento regional, y - si es necesario - fuertes sanciones. No deben permanecer.”**⁶²

Asimismo, se predispone a asumir una responsabilidad compartida en la lucha antidrogas. **“... Y vamos a acabar con la demanda de drogas en nuestras comunidades, y restaurar los fondos para las fuerzas de tarea de drogas. Debemos ganar la lucha en nuestras propias calles, si vamos a asegurar la región.”**⁶³. Pero no dejará de lado la política militarizada para enfrentar el terrorismo en la región.

Obama prometió una responsabilidad compartida. "Responsabilidad "para afrontar los desafíos regionales y se comprometió a trabajar con México en tanto de la oferta y la demanda sean reducidas. Durante la Cumbre de las Américas, Obama dijo que los EE.UU. será un líder, no un profesor, de la democracia; centrándose en la difusión de conciliación a Venezuela y Cuba.⁶⁴

⁶² Ibid.

⁶³ Discurso de Barack Obama en Miami en mayo de 2008. Véase:

http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html Acceso: 7/10/10

⁶⁴ SAMUELS, Richards. *Advice to President Obama*. En:

<http://web.mit.edu/cis/Publications/ObamaAdvice2009.pdf> Acceso: 7/10/10

1.2 Política Doméstica Antidroga Estadounidense

Según la pagina web oficial de la Casa Blanca, la política antidroga estadounidense está basada dentro del plan “Estrategia Nacional de Control de Drogas”, mismo que se encuentra disponible para el público en general en la página web de dicha institución.

Este plan contempla 4 líneas básicas:

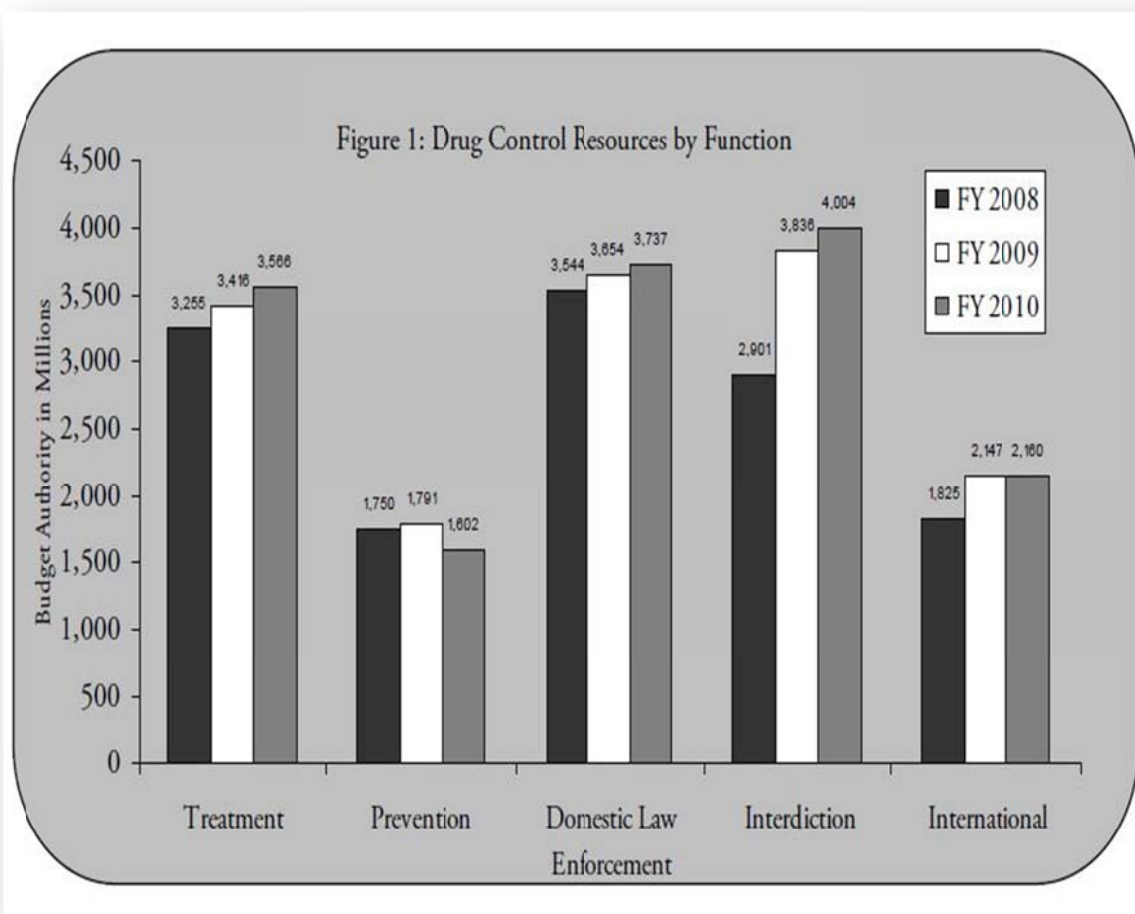
- ☉ Prevención del Abuso
- ☉ Tratamiento al abuso de drogas ilegales
- ☉ Aplicación de la ley nacional antidrogas
- ☉ La interdicción y el apoyo internacional contra las drogas.⁶⁵

Con estos lineamientos, la política nacional antidroga estadounidense busca combatir el uso, consumo y abuso de las mismas atacándolas tanto al interior del país como fuera de él. Además, se predispone que los programas de control de drogas elaborados por los Departamentos de Educación, Salud y de Servicios Humanos, del Interior, Asunto de Veteranos y de la Administración de Pequeños Negocios, estén centrados en la reducción de la demanda de actividades como la por ejemplo la prevención del abuso de sustancias y tratamiento.

Por otro lado, los Departamentos de Defensa, Seguridad Interior, Justicia, Estado, transporte y del tesoro están implicados en las operaciones destinadas a la reducción de la oferta con el apoyo internacional.

El presupuesto para la ejecución de este programa varía según su función y año como lo muestra la siguiente grafica:

⁶⁵Casa Blanca “National Drug Control Strategy FY 2010 Budget Summary” En:
<http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/10budget/fy10budget.pdf> Acceso: 11/03/10



Fuente: Casa Blanca. National Drug Control Strategy FY 2010 Budget Summary

Prevención del Abuso.

Para este lineamiento, el presupuesto asignado apoya a una gran variedad de programas educativos, de divulgación, dirigidos a prevenir el consumo de drogas ilícitas. Para cumplir con estos objetivos, se hace uso de los medios masivos de comunicación privados para educar y motivar a los jóvenes a desarrollar creencias y conductas antidrogas y estimular a los adultos a jugar un papel más eficaz en el mantenimiento de la juventud libre de drogas.

Tratamiento al abuso de drogas ilegales.

El programa para el tratamiento del abuso de drogas incluye fases como la detección y el tratamiento en el adicto, para lo cual el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense apoya la mayoría de los programas gubernamentales para proporcionar ayuda a quienes lo necesiten.

Aplicación de la Ley Nacional Antidroga

Los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, y Hacienda, conjuntamente con el Departamento de Defensa de De la Guardia Nacional, proporcionan apoyo a la aplicación de la ley estatal y local (según el caso).

Asimismo se pone énfasis en el contrabando que ocurre en la frontera con México. Se señala que tal contrabando es un punto vulnerable a la Seguridad de los Estados Unidos; por tanto, requiere mayor atención. Es de vital importancia –para este país- mejorar los sistemas de control para salvaguardar al pueblo norteamericano, la economía y el modo de vida de los efectos corrosivos del tráfico de drogas ilegales que se realizan en la frontera.

Tradicionalmente, la aplicación de la ley en los Estados Unidos se ha concentrado en las manos de los funcionarios de la policía local, aunque el número de la ley federal de los agentes del orden comenzó a aumentar en los finales del siglo 20. La mayor parte del trabajo se lleva a cabo por la policía y detectives en las ciudades y por los sheriffs y policías en las zonas rurales. Muchos gobiernos estatales también tienen los organismos policiales, y todos ellos tienen sistemas de patrulla de carreteras para hacer cumplir las leyes de tránsito.

La aplicación de la ley de Nacional Antidrogas es una categoría dentro del Control de Drogas, que combina los recursos para las unidades funcionales siguientes: investigación, inteligencia, estatales y locales, la asistencia, investigación y aplicación de la ley.

La interdicción y el apoyo internacional contra las drogas.

El Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, proporciona la ayuda necesaria en cuanto activos y personal para interceptar las drogas a lo largo de de las fronteras. En otras palabras, los esfuerzos por la fiscalización de drogas complementan con la detección y la supervisión de los esfuerzos del Departamento de Defensa, con el apoyo

del país socio, con la erradicación y los programas de desarrollo alternativo patrocinados por el Departamento de Estado.

En síntesis, la política domestica estadounidense en el control de drogas busca reducir el su consumo a través de lineamientos de control y erradicación tanto a nivel interno como externo.

1.2.1 Actores Fundamentales.

El gobierno de los Estados Unidos es el actor fundamental en la guerra contra las drogas, puesto que es quien propone estrategias para combatir la oferta y las actuaciones unilaterales propuestas por este gobierno.

Pero existen otros actores que ayudan a lograr los objetivos propuestos por los gobiernos estadounidenses a lo largo del tiempo.

La Guardia Costera.

Es la rama más pequeña de las que conforman las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Sus funciones principales son proteger a la población, el medio ambiente y los cauces económicos de EE.UU. y los intereses de seguridad en cualquier región marítima en que esos intereses pueden estar en riesgo, incluidas las aguas internacionales y las costas de Estados Unidos

Desde el 2004, la Guardia costera pasó a ser parte del Departamento de Seguridad Interna, **cuya función es interceptar embarcaciones que transportan droga.**⁶⁶ Entre sus múltiples misiones están la de vigilar las Fronteras marítimas de toda intromisión por:

- ☉ Detener el flujo de drogas ilegales, los extranjeros, y de contrabando en los Estados Unidos a través de las rutas marítimas
- ☉ Impedir la pesca ilegal
- ☉ La supresión de violaciones de la ley federal en la ámbito marítimo

⁶⁶ RAMOS José. LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL NARCOTRÁFICO Y LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO En: http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN5/4f5_Estados_Unidos_hacia_el_narcotrafico.pdf Acceso: 11/03/10

Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA

DEA (Drug Enforcement Administration) es una agencia que forma parte del Departamento de Justicia que se dedica a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, además contra el consumo de las mismas al interior de los Estados Unidos.

Su misión se basa en hacer cumplir las leyes antidrogas controladas y reglamentadas por el Estado norteamericano. Asimismo de extraditar a la justicia penal y civil de los Estados Unidos a quienes participan en el cultivo, fabricación o distribución de drogas ilegales.

La DEA tiene 227 oficinas al interior del país y 87 oficinas en 63 países.⁶⁷ Para la esta agencia, la región andina está considerada como la principal responsable de la producción de heroína y clorhidrato de cocaína del mundo. Las oficinas de la DEA en esta región están destinadas a luchar activamente contra los métodos de operaciones utilizadas por las distintas organizaciones de tráfico ilícito regional de drogas, participando en investigaciones bilaterales y actividades de inteligencia, promotor y combatir la conducta de los estupefacientes formación, así como participar en el enlace exterior.⁶⁸

La Sección Internacional de Formación de la DEA

Desde 1969, esta sección de la DEA ha llevado a cabo la lucha internacional contra el narcotráfico. Su misión se basa en la de identificar y entrenar personal de seguridad en el extranjero.

Los Objetivos de la ITR (The DEA International Training Section) cambian continuamente a medida que se desarrollen nuevos planes de estudio y las respuestas a las nuevas formas de realizar el tráfico ilegal de drogas. Además de hacer cumplir la ley a las actuales situaciones de tráfico internacional. Todos los programas internacionales de la DEA de

⁶⁷ U.S. Drug Enforcement Administration. <http://www.justice.gov/dea/agency/domestic.htm> Acceso: 11/03/10

⁶⁸ U.S. Drug Enforcement Administration. http://www.justice.gov/dea/pubs/international/andean_region.html Acceso: 11/03/10

formación tienen como objetivo principal la construcción de relaciones de trabajo regional entre los países.⁶⁹

FBI

Oficina Federal de Investigación (FBI): se originó de un grupo de agentes especiales creado en 1908 por el fiscal general Charles Bonaparte durante la presidencia de Theodore Roosevelt.⁷⁰

En lo que se refiere a nuestro estudio, el FBI participa en la lucha antidrogas mediante investigaciones, tratando de descifrar el modo en que se realiza el narcotráfico. Lo realiza conjuntamente con la DEA. La función del FBI en materia de antinarcóticos se basa en identificar y dismantelar los grandes carteles de las drogas. Asimismo, luego de los atentados del 11-S, su lineamiento fue de investigar y atacar a grupos terroristas fuera de los Estados Unidos. (Recordemos de la designación del grupo FARC como terroristas.)⁷¹

La Oficina Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley

Actualmente dirigida por el subsecretario David T. Johnson, es la encargada de asesorar al Presidente, al Secretario de Estado y a otras oficinas en el Departamento de Estado, así como también a otros departamentos y organismos del Gobierno de los EE.UU. La asesoría se basa en el desarrollo de las políticas y programas de combate a los estupefacientes y la delincuencia internacional.

Tiene como objetivos estratégicos:

- ☉ Reducir la entrada de drogas ilegales a los Estados Unidos
- ☉ Minimizar el impacto de la delincuencia internacional en territorio estadounidense

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

(INL) Es parte del Departamento de Estado que destina múltiples acciones de respuesta a la amenaza criminal. Dedicada al fortalecimiento de los sistemas de justicia penal, la lucha

⁶⁹ U.S. Drug Enforcement Administration <http://www.justice.gov/dea/programs/training/part18.html>
Acceso: 11/03/10

⁷⁰ FBI <http://www.fbi.gov/> Acceso: 11/03/10

⁷¹ WILSON James. <http://www.jstor.org/pss/2150121> Acceso: 11/03/10

contra el flujo de narcóticos ilegales, y reducir al mínimo la delincuencia transnacional, la INL desempeña un papel clave en la conducción del desarrollo y la sincronización de las drogas de los EE.UU. y la asistencia internacionales del crimen. El apoyo técnico de INL está adaptado para reforzar las capacidades de los países socios a través de programas específicos multilaterales, regionales y de país.

Como misión, la INL tiene como objetivo la Prevención de la producción, tráfico y abuso de drogas ilícitas. Para lo cual, se programa se centra en la construcción de capacidades de interdicción, erradicación, desarrollo alternativo sostenible, y la reducción de la demanda. Además, se incluyen el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades policiales y judiciales en ambos países de origen y de tránsito para investigar y enjuiciar principales organizaciones de tráfico de drogas y sus dirigentes, y para embargar y bloquear sus bienes.⁷²

La Oficina de las Naciones Contra la Droga y el Delito.⁷³

La UNODC, por sus siglas en inglés, fundada en 1997 a través de una fusión entre las Naciones Unidas para la Fiscalización y el Centro para la Prevención Internacional del Delito, ONUDD opera en todas las regiones del mundo a través de una extensa red de oficinas sobre el terreno. La ONUDD se basa en contribuciones voluntarias, principalmente de los gobiernos, el 90 por ciento de su presupuesto.

⁷² Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs <http://www.state.gov/p/inl/>

⁷³ Véase: <http://www.unodc.org/peruandecuador/es/index.html>

2. MECANISMOS Y ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA ANTINARCÓTICOS NORTEAMERICANA EN LA POLÍTICA ANTINARCÓTICOS ECUATORIANA

El presente capítulo analizará la influencia ejercida por los Estados Unidos en la política antinarcóticos ecuatoriana. Determinado cuáles han sido los mecanismo para ejecutarlos dando énfasis a la cooperación económica estadounidense. Además tratará de explicar brevemente la política antinarcóticos ecuatoriana

Las Políticas antinarcóticos estadounidense están diseñadas para atacar la oferta en los países de origen de la droga. Tales políticas han sido puestas en vigencia por los Estados Unidos desde su enunciación en 1971, y los diferentes gobiernos andinos que han debido seguir su lineamiento para evitar sanciones, así como también mantener el comercio bilateral con los diferentes países de la región, asimismo por una identidad ideológica de gobernantes gobiernos de turno en los países andinos y sobre todo para percibir beneficios que se pudieran obtener. Un ejemplo son las preferencias arancelarias que mantiene el Ecuador con los EE.U.U.

Como vimos en el capítulo anterior, Nixon fue quien declaró la guerra a las drogas⁷⁴ (WAR ON DRUGS), y que a través de los años no ha tenido un cambio significativo. Es decir, la política exterior antinarcóticos norteamericana mantiene su concepción represiva contra la producción y tránsito de las drogas ilegales durante los diferentes gobernantes estadounidense

La intervención a nivel interno se basa en:

- ☉ Aplicación de la Ley → Consiste en la investigación y encarcelamiento de quienes trafican con drogas ilegales. Así como también a los consumidores de drogas al interior de USA.
- ☉ Reducción de la demanda con programas de educación.

A nivel externo se basa en:

⁷⁴ Véase: Pág. 13 de esta tesis

- ☉ Combatir la oferta de droga de los países de la Región Andina. → Mediante la acción militar y los aportes económicos de los programas diseñados para erradicar los cultivos considerados ilícitos.⁷⁵

Esta intervención externa es notoria en países andinos como Colombia, Perú Ecuador y Bolivia, a los cuales se destina una ayuda económica externa significativa para los programas destinados al combate a las drogas.

2.1 POLITICA ANTINARCÓTICOS EN EL ECUADOR

La política antidrogas ecuatoriana tiene una reciente historia. Dentro de ella podemos identificar aspectos fundamentales como:

- ☉ Represión de la oferta para tratar el problema del uso indebido de drogas en el Ecuador.
- ☉ La hegemonía de los Estados Unidos a la hora de la definición del problema en el Ecuador
- ☉ La dimensión regional del mismo.

Históricamente, fue en 1982 cuando el Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, declaró la problemática de las drogas ilegales como una amenaza a la Seguridad Nacional de este país. Así, la política antidrogas estadounidense se orientó también hacia los países productores y no hacia los consumidores

Casi sin variaciones, este fue el modelo para la construcción de las políticas antidrogas en América Latina y especialmente en los países andinos. Por ello, aunque las realidades de estos países son diferentes, (Colombia tiene cultivos y produce, Bolivia y Perú tienen cultivos pero participan muy poco en el procesamiento y Ecuador ni tiene cultivos, ni procesa; por citar algunos casos de la región) los elementos de política son

⁷⁵ International Crisis Group. LA DROGA EN AMÉRICA LATINA II: OPTIMIZAR LAS POLÍTICAS Y REDUCIR LOS DAÑOS Informe sobre América Latina N° 26 – 14 de marzo de 2008 en: http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/26_la_droga_en_america_latina_ii.ashx Págs. 3 - 8
Acceso: 07/10/10

poco más o menos los mismos.⁷⁶ Lo que llevó a que la política antinarcóticos ecuatoriana reproduzca ciertas características de la norteamericana.

2.1.1 LEY 108

En general, sus objetivos se plantean de la siguiente manera:

☉ “*Combatir y erradicar la producción,*

☉ *Combatir la oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanen de estas actividades.*”⁷⁷

La ley expedida en 1990 por el congreso de ese entonces, promulgó una ley de carácter coercitivo y no con una visión de salud pública.

En este sentido, en el País se tomaron ciertas medidas que no correspondían de una manera coherente con la realidad ecuatoriana, sino mas bien a un seguimiento de las líneas internacionales norteamericanas en la lucha anti drogas en la región andina. Es decir, se siguió una línea represiva para frenar el problema del uso indebido de drogas ilegales y no como un problema de carácter social, reproduciendo los lineamientos norteamericanas.

Coincidentalmente, en 1989, año en el que se lanza Iniciativa Andina (programa auspiciado por los USA), la cooperación económica y militar aumentaron considerablemente. Obviamente esta ayuda contenía una condicionalidad que se refería al cumplimiento de los objetivos de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Quienes se adhirieron a los lineamientos norteamericanos, recibieron incentivos o recompensas económicas como por ejemplo el ATPDEA para el Ecuador. Por el contrario, quienes se atreviesen a oponerse podrían enfrentar algún tipo de retaliación entre las cuales se cortarían las líneas de comercio con Estados Unidos. En este marco de intimidaciones y compensaciones, en nuestro país se elaboró la denominada LEY 108. Esta ley trata sobre

⁷⁶ NUÑEZ, Jorge. Cacería de Brujos. Drogas “Ilegales” y Sistemas de Cárceles en Ecuador. Quito. Ed. Abya-Yala 2006. Pág.38

⁷⁷ Véase la Ley 108 en Anexos.

las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El éxito de dicha ley ha estado en función de la cantidad de personas detenidas acusadas a temas relacionados con las drogas. Esto ha producido un alto hacinamiento en las cárceles del Ecuador.

La LEY 108 denota una clara reproducción de su similar en E.E.U.U., por citar un ejemplo de lo mencionado es la sentencia mínima obligatoria. Otra característica de la Ley son las sentencias mínimas que fueron establecidas. Las mismas no tienen un principio de proporcionalidad. Es decir, no hace una clara distinción y juzga por igual a las mulas con las personas que trafican grandes cantidades de drogas ilícitas. Todos quienes son acusados de distribución o de tráfico ilegal están sujetos a una sentencia mínima obligatoria que se traducen en 10 años de cárcel; y que en enero de 2003 fue elevada a 12 años por el congreso del año 2003. Es decir, sí una persona es detenida por traficar unos pequeños gramos de marihuana es sentenciada a 12 años, igual que una persona que se le detenga con varios kilos.

Dicha ley, incluye categorías que son:

- ☉ Posesión
- ☉ Tráfico
- ☉ Transporte
- ☉ Etc

Sí una persona es sentenciada en varias ocasiones por estas categorías simultáneamente, podría encarar una pena de una máximo de 25 años. Años que son mayores al máximo que establece la ley ecuatoriana de un máximo de 16 años de reclusión.⁷⁸

La ley estipula sentencias por posesión sin importar la cantidad medida en gramos, además que están a la par de los delitos calificados como graves y violentos. En la legislación ecuatoriana, existen dos categorías de delitos:

- ☉ Los de Reclusión → Involucran Violencia y su detención inmediata sin derecho a fianza

⁷⁸ Se le recuerda al lector que este trabajo está limitado a los años 2005-2007

- ☉ De Prisión → Tienen derecho a fianza y la posibilidad de su libertad incluso durante el juicio.

Todas las acusaciones por drogas, al margen de la cantidad y las circunstancias sociales por las que incurren los traficantes de estas sustancias ilícitas, tienen el mismo nivel que el homicidio en primer grado o el robo a mano armada. Quienes son acusados de cualquier delito relacionado con las drogas no pueden solicitar su libertad bajo fianza y aquellos que son acusados de transportar droga, sin importar la cantidad ni el tipo de droga ilegal, tienen la misma sentencia que un delito de violación.

En resumidas cuentas, la ley 108 crea una tipo de jurisdicción paralela en donde no existe la presunción de inocencia, no tienen posibilidad de libertad bajo fianza y tienen sentencias totalmente desproporcionadas.

Si bien es cierto, se han dado casos en los que son capturados los capos de la drogas, la mayoría de los detenidos son los conocidos como mulas y sentenciados bajo esta ley. Por lo general, estas mulas son personas que se encuentran en circunstancias sociales bastante difíciles como por ejemplo las madres solteras o cabezas de familias que tienen que proveer de alimentos a sus seres queridos. Por otro lado, las mulas que fueron sentenciadas y privadas de su libertad, son fácil y rápidamente sustituidas por quienes controlan el negocio del narcotráfico de las drogas.

En resumen, la estructura judicial y policial ha establecido un trabajo represivo en la que trata de perseguir y detener personas con drogas ilícitas. **“Una característica muy perturbadora de la ley es su definición bajo el código penal ecuatoriano, que coloca la posesión de cualquier cantidad de drogas a la par que delitos graves y violentos.”**⁷⁹ Poe tanto, témenos que, la mayoría de personas detenidas por el tráfico de drogas son individuos de menor rango en la estructura de la industria del narcotráfico y saturando las cárceles de personas que trataron de llevar drogas ilícitas; además que la prisión no ha detenido este ilícito negocio.

⁷⁹ Edwards, Sandra. Políticas y Prisiones para el Control de Drogas Ilícitas: El Costo Humano WOLA. En: http://wola.org/media/Ecuador/ddhr_ecuador_memo4_esp.pdf Pág. 3

Entre otros, se encuentra que las actividades de prevención en el País se centran alrededor de las instituciones educativas de nivel secundario. Asimismo se indica que la prevención es una política de carácter prioritario para el aparato estatal.

Parece poco probable establecer un debate serio en el Ecuador sobre la legalización del consumo de ciertas drogas hoy consideradas ilegales.

Asimismo, varias organizaciones internacionales como la ONU, OEA, UE, entre otras, se han unido a la lucha contra las drogas. Se ha establecido algunos mecanismos multilaterales como de observación y recomendaciones para tratar el problema como la Comisión Antinarcóticos Interamericana para el Control y Abuso de Drogas de la OEA.

Acorde con lo anterior, los países de la región, en su mayoría, establecieron instituciones con las que tenían que manejar y coordinar la labor de los diversos actores relacionados con el control y monitoreo de las drogas ilícitas a nivel interno como externo. En Ecuador, por ejemplo, se creó el CONSEP (Consejo Nacional de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas), así como también El Observatorio Ecuatoriano de Drogas.

Para el Ecuador, con el Fin del Conflicto armado con el Perú, se abrió el debate sobre el futuro y los temas relevantes de la agenda de política exterior. El comercio es un tema principal en la agenda bilateral con los USA; lo que determino que **“la situación de vulnerabilidad del país ha hecho que el tema comercial esté sujeto a la colaboración en la lucha contra el narcotráfico ya sea de manera bilateral, con acuerdos como el de la Base de Manta, o por los beneficios del arancel cero que provee ATPA para los productos de la región andina.”**⁸⁰

Así también, el tráfico ilícito de drogas ilegales también modificó su accionar. **“el tráfico de drogas ilegales se adaptó fácilmente a las condiciones impuestas por la política antidroga. En lugar de existir, como antes, unos pocos carteles grandes, ahora hay**

⁸⁰ BARREIRO Katalina. La agenda de política exterior Ecuador-Estados Unidos. En Bonilla Adrian. Óp. Cit., Pág. 293.

pequeños cartelitos articulados entre sí por un sinnúmero de redes de relaciones económicas que desbordan las fronteras nacionales.”⁸¹

2.1.1.1 Objetivos de la Ley 108

Entre los principales objetivos, esta ley contempla:

- ☉ Combatir y erradicar la producción, el tráfico, la oferta
- ☉ Prevenir el consumo de drogas en el Ecuador para lo cual, tiene como base la educación y la información; así como también desarrollo de programas de rehabilitación
- ☉ Incentiva la sustitución de cultivos de coca. Entre otros.

“En los países andinos aparecieron verdaderos subsistemas penales, caracterizados por acoger la normativa internacional de las drogas ilegales, sin guardar ninguna coherencia con la legislación interna, ni proporcionalidad entre el delito y la pena y tampoco distinguir entre campos de control, como el consumo, cultivo, procesamiento y tráfico.”⁸²

2.1.1.2 CONSEP⁸³.

En el marco de la Ley 108, se crea el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como la institución oficial encargada de coordinar la acción del gobierno para el cumplimiento de dicha ley en el territorio. Esta institución es creada como una persona jurídica autónoma y con fondos propios.

La creación de este consejo es un paso óptimo de la Ley 108 debido a que por primera vez se crea una institución que coordina a los actores gubernamentales que luchan contra las redes del tráfico de drogas con el objetivo de evitar dispersiones en la acción contra el

⁸¹ Núñez, Jorge “Las cárceles en la época del narcotráfico: una mirada etnográfica”. En: Revista Nueva Sociedad. N° 208, marzo-abril de 2007

⁸² NUÑEZ, Jorge. “Hipertrofia Represiva: La Cuestión Carcelaria en América Latina” En: Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano, otoño, número 012 En: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/520/52001210.pdf> Acceso: 10/10/10

⁸³ EL CONSEP es el consejo nacional de control de sustancias estupefaciente y psicotrópicas del ecuador. Véase: <http://www.consep.ec/consep.php?c=1348> Acceso: 11/03/10

narcotráfico. Asimismo, el CONSEP trabaja en programas para la reducción de la demanda con programas de concientización.

También, con el funcionamiento del CONSEP, se empezó a controlar y regular el funcionamiento de los centros de rehabilitación públicos y privados para los adictos a las drogas lo cual no sucedía.

Previo a esta institución, el DINACONTES que era la División Nacional contra el tráfico ilícito de Estupefacientes era una rama de la Procuraduría, la cual se encargaba de toda la coerción y prevención de drogas.

2.1.2 Características de la Política Antidroga en el Ecuador

En el Registro Oficial N°. 239 firmado el 24 de diciembre de 2003, el entonces presidente de la república Lucio Gutiérrez firmó el decreto N° 1180 en el cual se oficializa la lucha contra las drogas como Política de Estado. **“Art. 1.- Política de Estado: La lucha contra la droga y sus efectos, constituye una línea política permanente del Estado Ecuatoriano, con el fin de alcanzar y garantizar la coexistencia de los integrantes de la sociedad, en un ambiente sano que tienda al desarrollo humano sostenido y sustentable. Por tanto, es su responsabilidad y la de sus instituciones, desarrollar, dirigir y ejecutar políticas y estrategias para el cumplimiento de ese propósito.”**⁸⁴

Así como también, dentro del decreto se estipula:

- ☉ Que la lucha antidroga es compromiso de todos (de responsabilidad compartida).
- ☉ Reducción de la demanda (a través de la prevención, al tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados)
- ☉ Control de la Oferta (Combate al narcotráfico)
- ☉ Colaboración Internacional
- ☉ Sistema descentralizado. En base de una optimización de la aplicación de la ley⁸⁵

El plan tiene como objetivos:

⁸⁴ Decreto Presidencial Registro Oficial No. 239 Miércoles 24 de diciembre de 2003 Decreto N° 1180 En: <http://70.84.141.178/~consep/consep.php?c=1369> Acceso: 11/03/10

⁸⁵ Ibid.

Entre Otros:

Para la Oferta la reducción del cultivo, producción, fabricación **“y distribución ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el desvío de sustancias controladas y los delitos conexos.”**⁸⁶

En relación a la demanda el plan estipula el **“Proteger la integridad psíquica y física de la comunidad, en especial de los niños, niñas y jóvenes, del uso indebido de sustancias psicoactivas; y asegurar el acceso a diferentes modalidades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social a la población afectada por el consumo indebido de drogas.”**⁸⁷

Se plante como estrategia fundamental el cumplir la Política Nacional Antidrogas. Para lo cual se provee:

- ☉ Enfrentar el problema de manera integral. Atacando en todos los frentes, tanto en la demanda, asistencia al afectados así como también para la rehabilitación y la reinserción social
- ☉ Contar con reglas que definan acciones y responsabilidades. Dando competencia a los organismos encargados.
- ☉ Contar con organismos sólidos y capacitados. Básicamente fortalecer al CONSEP tanto económica como institucionalmente.
- ☉ Generar recursos y aprovecharlos eficientemente. Generar un fondo económico en base al presupuesto general del estado, además de los fondos provenientes de la cooperación internacional.
- ☉ Planificar y coordinar las acciones. Coordinar a todos los organismos encargados de la lucha antidroga. Entre ellos el CONSEP, la Policía Nacional, etc.
- ☉ Explotar la tecnología y capacitar el recurso humano. Es decir, la modernización de las Instituciones involucradas en la lucha antidroga. Entre ellos la Policía Nacional, el sistema judicial, CONSEP; etc.

⁸⁶ CONSEP www.consep.gov.ec/html/pdf/plan.pdf Pág. 3 Acceso: 11/03/10

⁸⁷ Ibíd.

- ☉ Recurrir a las organizaciones no gubernamentales. Aprovechar la ayuda que se obtenga de ONGs y del apoyo privado también.
- ☉ Producir y utilizar información. Elaborar e intercambiar información de los organismos involucrados en la política antidroga ecuatoriana.
- ☉ La prevención de la drogadicción, como paso clave. Aplicando programas de prevención mediante información pública a través de los medios de comunicación masiva.
- ☉ El tratamiento, como mecanismo para recuperar a los individuos. Los programas diseñados para la rehabilitación y reinserción social deben estar encaminadas a la recuperación de las habilidades del individuo.

Existe un plan diseñado conjuntamente con la presidencia de la república, el CONSEP y los diferentes entes de control. El nombre de este plan es: “Plan Nacional de Prevención y Control de Droga”. Plantea programas y proyectos para enfrentar al problema de las drogas desde la prevención y el combate a la oferta conjuntamente. Es decir, Entidades de control, estatales, locales y la comunidad deben actuar como un todo.

Este plan reconoce también que **“... en los últimos años las condiciones se han modificado y de ser un “país de tránsito”, se ha empezado a sufrir los embates de este problema de manera mucho más directa, sea con presencia de campos de producción, generación y tráfico de sustancias químicas controladas, lavado de activos, así como incremento en el consumo”**⁸⁸

2.1.3 Posición en la Cadena del Narcotráfico.

El narcotráfico como expresión del crimen organizado ocupa un lugar prioritario en la agenda latinoamericana bajo la premisa de que es un tema que involucra a cada uno y a todos los países.⁸⁹

El fenómeno del narcotráfico, genera graves problemas asociados con la producción y el tráfico de las drogas, tales como:

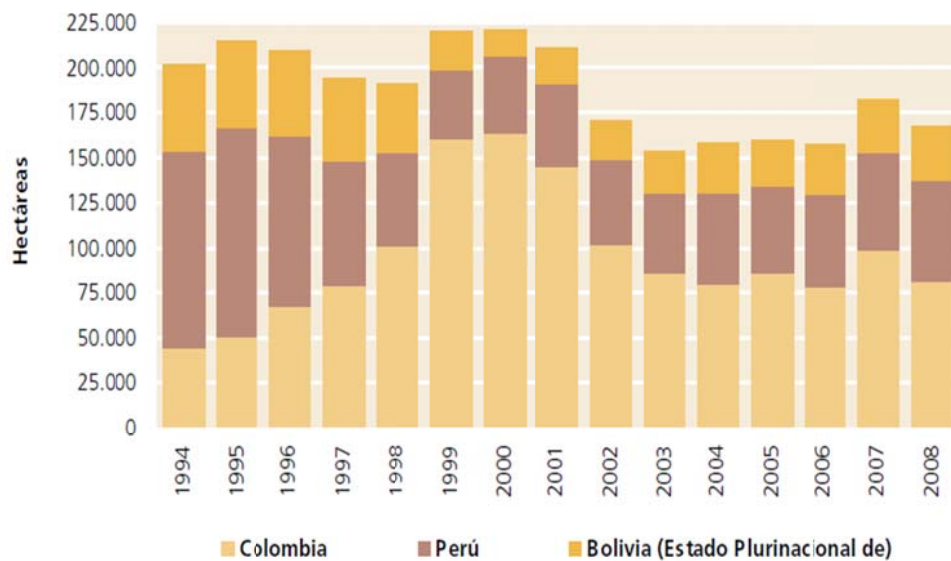
⁸⁸ www.consep.ec/imagesFTP/10524.CONSEPok_4.pdf Acceso: 03/09/09

⁸⁹ ROJAS Francisco. II [segundo] Informe del Secretario General de FLACSO: el CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL: una GRAVE AMENAZA a la democracia en América Latina y el Caribe Quito. Flacso. 2006. Pág. 15

- ☯ La Internacionalización de las Mafias
- ☯ Lucha por los Mercados
- ☯ El Crimen Organizado
- ☯ La Trata de Personas
- ☯ El Tráfico de Armas
- ☯ La Inseguridad Ciudadana
- ☯ Actos Terroristas⁹⁰

En la región andina, el Ecuador se encuentra ubicado entre Perú y Colombia, dos grandes productores de drogas ilícitas. Colombia con el agravante de su guerra civil interna que lleva más de 50 años. En estos dos países se siembran aproximadamente 130 mil hectáreas

Superficie cultivada de arbusto de coca en el mundo (hectáreas), 1994-2008

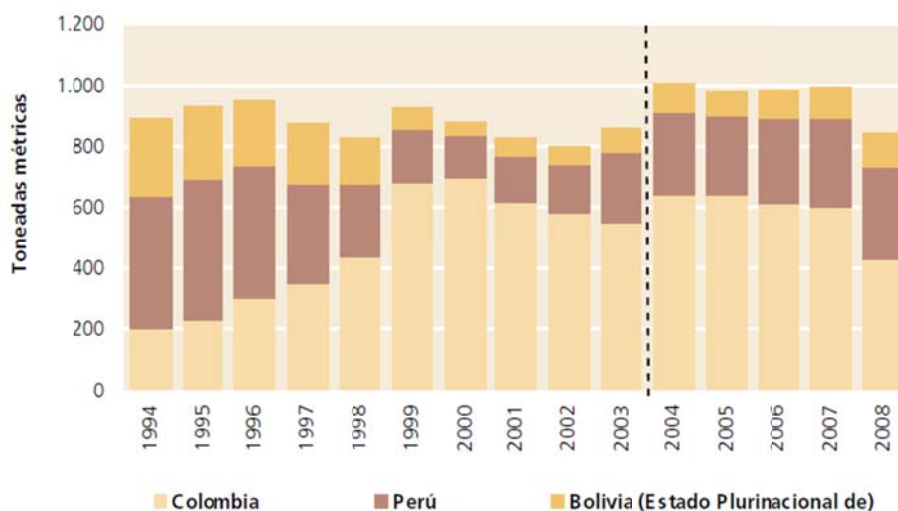


Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2009.

Y el porcentaje de la producción mundial de cocaína es de:

⁹⁰ YOUNGERS Coletta A., EILEEN Rosin. Óp. Cit., Págs. 23 - 25

Producción de cocaína en el mundo (toneladas métricas), 1994-2008



Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2009.⁹¹

El Ecuador ha sido definido por mucho tiempo como un país de tránsito de drogas ilegales las cuales tienen como destino mercados extranjeros, entre ellos los Estados Unidos⁹². Este tránsito de drogas ilegales en nuestro país trae consigo problemas asociados en los ámbitos sociales, económicos, políticos que hay que tomarlos en cuenta. Ya que el plus valor que se agrega desde su origen (los laboratorios clandestinos), hasta los mercados de mayor consumo de drogas, es bastante significativo en comparación al costo de su cultivo y procesamiento;⁹³ generando un excedente económico el cual le da la capacidad a los narco traficantes de estructurar organizaciones criminales con alto nivel de penetración en instituciones públicas tanto políticas, económicas y de justicia, lo cual empezará a generar un círculo vicioso.

⁹¹ Disponible en: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/Executive_summary_Spanish.pdf
Acceso 02/11/10

⁹² Departamento de Estado de Estados Unidos. "Países principales de tránsito o producción de drogas ilícitas Memorando presidencial a la secretaria de Estado". En: <http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2008/September/20080923073411pii0.2274897.html> Acceso: 25/10/09

⁹³ ESPINOSA Carlos. ¿Es Posible una Nueva Política de Narcotráfico en Ecuador? Ponencia para Panel, Delitos Internacionales, 9 de marzo, PLANEX 2006. En: http://www.observatoriofronteras.com/publicaciones/es_posible.pdf

El Ecuador es, por lo descrito anteriormente, un centro importante para la recolección y distribución de drogas que transitan vía terrestre, marítima, aérea, volviendo a nuestro país vulnerable frente a los problemas que genera el narcotráfico; uno de ellos la denominada narco política, que se refiere a la influencia que pueden ejercer los capos de la mafia en altos puestos burocráticos o de la justicia, poniendo en riesgo la seguridad misma del estado.⁹⁴

Por otro lado, el lavado de dinero, ha traído al Ecuador problemas asociados con el sicariato y la violencia civil en varias partes del país. Según el marco normativo ecuatoriano para reprimir el lavado de activos, el artículo 14 dice que: **“ Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: a) Tenga, adquiera, transfiera, ... o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito; b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito; c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en esta Ley; d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en esta Ley; e) Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos; y, f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país.”**⁹⁵

2.2 Influencia de la Política Exterior de los Estados Unidos frente al narcotráfico en la Política Antinarcóticos del Ecuador.

Una de las características de la política antinarcóticos de USA es su componente militar a la hora de combatir esta problemática. Luego de la guerra fría, el tráfico de drogas ilícitas llegó a ser un tema de primer orden en la agenda de seguridad de los Estados Unidos. **“A finales de los ochenta apareció la teoría de la narcoguerrilla, en ella se representaba la realidad colombiana en términos militares como un conflicto de baja intensidad en el**

⁹⁴ PAEZ Alexei. “La Inserción ecuatoriana en la dinámica andina del narcotráfico. En: la Economía Política del Narcotráfico: El Caso Ecuatoriano. Quito. Flacso Sede Ecuador. North South Center University of Miami. Bruce Bagley, Adrian Bonilla y Alexei Páez (eds). Págs. 143 - 145

⁹⁵ Ley para Reprimir el Lavado de Activos en el Ecuador. Disponible en http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu_lavado.pdf Acceso: 10/10/10 Véase también en anexos.

cual las actividades de los grupos subversivos eran financiadas con dinero de las drogas. Después de los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos, el término guerrilla fue suplantado por terrorismo, pero la lógica es prácticamente la misma.”⁹⁶

Acorde a lo anterior, los Estados Unidos mantenían el propósito de aumentar su presencia en la región andina y el continente suramericano. Algunas bases militares norteamericanas fueron estableciéndose. **“A finales de los noventa se firmaron convenios con Ecuador, Curazao y El Salvador para utilizar bases militares de estos países en operaciones antinarcóticos coordinadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para habilitar estas locaciones, Washington gastó 137 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente la mitad fueron asignados a Ecuador para equipar la Base Aérea de Manta.”⁹⁷**

En Ecuador, no solo la policía nacional estaba involucrada en la lucha contra el narcotráfico sino que también las Fuerzas Armadas se encargaron de la táctica antinarcóticos y con mayor énfasis luego de haber finalizado en conflicto limítrofe con el Perú.⁹⁸

En el año 2000, el ministerio de Defensa del Ecuador elabora el Libro Blanco en el cual se replantea la política de seguridad ecuatoriana. En dicho libro, se incluye al crimen organizado y al narcotráfico como amenazas a la seguridad nacional⁹⁹. Categorías que están relacionadas con el conflicto interno armado colombiano.¹⁰⁰

Durante los años 90’s, la agenda antidrogas estadounidense para los países andinos se establecieron ciertos ejes en lo penal:

- ☉ Reforma de la Policía en los países fuente
- ☉ Reforma Legal en los mismos

⁹⁶ Ibíd. Pág. 39

⁹⁷ Ibíd.

⁹⁸ GARCÍA, Berta. “Qué esperamos hoy de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas”, en Aportes Para la Paz Nº 9, Servicio de Paz y Justicia del Ecuador. Flacso Quito.

⁹⁹ RESDAL. Ecuador. Libro Blanco de la Defensa Nacional. En: <http://www.resdal.org/Archivo/ecu-libro-cap2.htm> Acceso: 10/10/10

¹⁰⁰ Núñez. Óp. Cit., Pág. 40

2.2.1 Convenciones Internacionales adscritas por el Ecuador.

En la actualidad, la comunidad internacional ha tenido que responder a la transnacionalización de los problemas asociados con el narcotráfico. Por lo que, los estados han tenido que realizar tareas conjuntas para combatir y prevenir los daños colaterales del crimen organizados.

Para nuestro estudio, dado el tiempo delimitado de 2005 - 2007, usamos el marco normativo ecuatoriano de 1998, en el que, en su parte de tratados y convenios internacionales cita que: **“Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.”**¹⁰¹ Es decir, dando superioridad frente a las demás leyes nacionales.

Entre las diferentes convenciones que ha firmado el Ecuador se encuentra:

☉ La Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961

Convención celebrada en la sede de la ONU a la que nuestro país no asistió¹⁰² pero que fue ratificada el 27 de agosto de 1964 en el Registro Oficial No. 320 y que se mantiene vigente.

Su base es la cooperación entre estados para el control de sustancia ilegales fundamentándose en objetivos comunes. Asimismo, entre sus resoluciones aprobadas por la conferencia están:

- *Asistencia Técnica*
- *Tratamiento de los Toxicómanos:*
- *Traficantes Ilícitos:*
- *Composición de la Comisión Internacional de Estupefacientes:*
- *Sistema Internacional de Fiscalización:*¹⁰³

¹⁰¹ Constitución Ecuatoriana 1998 Título VI, Capítulo 6, especialmente en el Art. 163

¹⁰² ONU. Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes.

En: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/convention_1961_es.pdf Pág. 2 Acceso 10/10/10

¹⁰³ *Ibíd.*

Años después, en la sede de la ONU, del 6 al 25 de marzo del año 1972, en Ginebra Suiza, se realiza la conferencia de Plenipotenciarios para evaluar las enmiendas que se recomendaron hacer en la convención de 1961. Misma que se refiere a la creación de la Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes¹⁰⁴ como parte misma de la secretaría de la ONU; asimismo, en su resolución N° II en la que se confirma la Asistencia para la Fiscalización de Estupefacientes para lo que se señala que:

“Recordando que la asistencia a los países en desarrollo es una manifestación concreta de la voluntad de la comunidad internacional de cumplir el compromiso enunciado en la Carta de las Naciones Unidas de promover el progreso social y económico de todos los pueblos,”¹⁰⁵ Para lo cual, se crea un fondo de la ONU para el control y fiscalización un año después¹⁰⁶. El Ecuador estuvo presente y fue reconocida por el Estado mediante registro oficial No. 335, de 28 de diciembre de 1973.

☪ **Convenio de Sustancias Psicotrópicas.**

Celebrada el 2 de febrero de 1971 en Viena¹⁰⁷ hace referencia a:

- La Fiscalización sobre el uso de drogas ilegales.
- Actualización constante de la lista de sustancias ilegales que se ven sujetas a fiscalización y control emitido por la OMS y las partes involucradas.
- Emisión sobre las disposiciones en cuanto a la reducción de la demanda de drogas

El Ecuador hace eco de este convenio mediante Decreto Supremo Nro. 776-C, de 29 de junio de 1973, publicado en el Registro Oficial No. 345, de 10 de julio de 1973; en el cual,

¹⁰⁴ La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es un órgano independiente y casi judicial compuesto por 13 miembros que supervisa el cumplimiento por los gobiernos de los tratados de fiscalización internacional de drogas y les presta apoyo al respecto. La Junta procura garantizar que las drogas se destinen a fines médicos y científicos e impedir su desviación hacia cauces ilegítimos, y establece límites máximos aplicables a las cantidades de estupefacientes que los países necesitan para fines médicos y científicos. También organiza misiones de investigación y visitas técnicas en los países afectados por el problema de la droga. Tomado de: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/fiscalizacion.shtml> Acceso 11/10/10

¹⁰⁵ ONU. Óp. Cit., Pág. 11

¹⁰⁶ Sistema de Documentos Oficiales de las Naciones Unidas <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/57/IMG/NR074357.pdf?OpenElement> Acceso 12/10/10

¹⁰⁷ ONU. Convenio Sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. En: http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf Acceso 12/10/10

el estado ecuatoriano se compromete y se adhiere a todos los artículos tratados de dicho convenio.

☉ **Convención de ONU Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.**

Celebrada en Viena Austria el 19 de Diciembre de 1988, señala disposiciones anteriormente no tratadas como el testaferrismo, el lavado de activos, entre otros. **“Establece amplias medidas contra el tráfico de drogas, como disposiciones contra el blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos. Como principal instrumento de cooperación internacional contra el tráfico de drogas, prevé la localización, congelación y confiscación de los ingresos y propiedades procedentes del tráfico de drogas, la extradición de los traficantes y la ejecución de los trámites procesales y penales. Los Estados partes se comprometen a eliminar o reducir la demanda de drogas.”**¹⁰⁸

Aquí también hace hincapié en la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de las drogas. En su artículo 10 se dice que:

“Las Partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales o regionales competentes, para prestar asistencia y apoyo a los Estados de tránsito y, en particular, a los países en desarrollo que necesiten de tales asistencia y apoyo, en la medida de lo posible, mediante programas de cooperación técnica para impedir la entrada y el tránsito ilícitos, así como para otras actividades conexas.”¹⁰⁹

Se solicita a los actores involucrados (en especial a los países productores) un compromiso para el cumplimiento de los anteriores convenios; se insta a incorporar legislaciones internas para castigar las labores asociadas con el narcotráfico, así como también agilidad para la extradición de quienes son acusadas de este delito.

¹⁰⁸ Las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. Oficina de Fiscalización. En: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/fiscalizacion.shtml> Acceso 12/10/10

¹⁰⁹ ONU. Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf pág. 14

El Ecuador aprobó este convenio el 12 de febrero de 1990 por el congreso de ese entonces publicada en el Registro Oficial No. 378 de 15 de febrero de 1990

2.2.2 Convenios Firmados entre el Ecuador y los Estados Unidos en el marco de la Lucha Anti Drogas.

Los Estados Unidos y Ecuador son partes en un tratado de extradición, que entró en vigor en 1873¹¹⁰, y un complemento de ese tratado que firmó en 1941. El Ecuador es Parte del Convenio de 1962 Única sobre Estupefacientes y 1972 el que se modifica protocolo, el Convenio de 1971 de Sustancias Sicotrópicas, y la Convención de Drogas de las Naciones Unidas 1988. Es También parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal de 1992, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos sobre la trata y tráfico ilícito de migrantes. La Convención Interamericana sobre Extradición, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. Se ha firmado también acuerdos como la Cumbre de las Américas, iniciativa de blanqueo de dinero y la OEA / CICAD en un documento de Estrategia de Lucha contra las Drogas Hemisférica. Ecuador y Estados Unidos tienen acuerdos sobre medidas para prevenir el desvío de sustancias químicas, en el intercambio de información sobre las transacciones de divisas de más de \$ 10,000, y un Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera. En octubre de 2007, Ecuador fue sede de la Oficina de las Naciones Unidas de Control de Drogas Jefes patrocinado de Ley de Agencias Conferencia Aplicación para América Latina y el Caribe.

2.3 Otro Mecanismo de Incidencia: La Cooperación

La cooperación ha encaminado sus recursos hacia la lucha contra la producción y el control de la oferta. La cooperación económica y técnica que recibe el Ecuador por parte de los Estados Unidos está dentro del acuerdo firmado en 1962 que se denomina: Acuerdo general

¹¹⁰ TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, suscrito en Quito el 28 de junio de 1872. Véase: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/traites/sp_traites-ext-ecu-usa.pdf. Acceso: 12/10/10

para la ayuda económica y técnica para propósitos afines entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos¹¹¹; acuerdo que se encuentra vigente hasta el día de hoy.

La cooperación que proporciona los Estados Unidos al Ecuador están dadas en primer lugar: la cooperación económica y logística a la Policía Nacional para que combata el cultivo y tránsito de drogas ilegales, y en segundo lugar: las preferencias arancelarias (ATPDEA) para la entrada de algunos productos ecuatorianos al mercado estadounidense a manera de recompensa por la lucha contra el narcotráfico que efectúa el Ecuador. **“El primer convenio contiene una cláusula mediante la cual la renovación de estos acuerdos está supeditada al incremento anual de las detenciones de personas e incautaciones de sustancias ilícitas, lo cual repercute en el incremento de la utilización de personal y recursos de la Policía Nacional al desarrollo de esta actividad en detrimento de las demás acciones concernientes al mantenimiento del orden público que debe realizar esta institución”**¹¹²

En líneas generales, la cooperación internacional, está supervisada, en el Ecuador, por la SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) –anteriormente INECI-. Los fondos destinados a la lucha anti drogas son considerados como cooperación no reembolsable. La SETECI **“La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional es la entidad responsable de coordinar la oferta y la demanda de la Cooperación Internacional No Reembolsable. Para ello, realiza procesos de seguimiento y continuidad de los compromisos adquiridos; organiza y participa en mesas de trabajo y de cooperación; gestiona el canje de deuda; negocia los proyectos en beneficio del país y elabora canastas de proyectos dirigidas a los diferentes sectores del desarrollo.”**¹¹³

¹¹¹ SETECI. Véase:

http://www.ageci.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=199

¹¹² Cordero David. La ley de drogas vigente como sistema jurídico paralelo En: Entre el control social y los derechos humanos Los retos de la política y la legislación de drogas. En: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/160111/min_justicia/minjcontrolsocial_derhumanos.pdf Pág. 197. Acceso: 12/10/10

¹¹³ *Ibíd.*

En los informes disponibles en su página web, tanto como Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2006 – 2007¹¹⁴ y el Informe de Cooperación Internacional No reembolsable 2007 - 2009¹¹⁵; tomamos las siguientes cifras que corresponde al periodo limitado para nuestro estudio, mismas que incumben a la Cooperación total por País procedente de fuentes bilaterales y no a ONG'S:

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|--------|--------|-------|
| Estados Unidos | 58,98 | 46,74 | 79,7 |
| TOTAL | 295,20 | 289,74 | 251.6 |
| Corresponde al total de la cooperación recibida por el Ecuador | 19,9% | 15,6% | 31,6% |

Fuente: Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2006 – 2007., y El Informe de Cooperación Internacional 2007 - 2009.

“La prioridad de cooperación estadounidense se centra en la Región 1 (Frontera Norte) con montos de acciones plurianuales que ascienden a USD 37,7 millones, en torno a temáticas relacionadas con actividades ilícitas, refugiados, pobreza, necesidades básicas insatisfechas entre otras.”¹¹⁶ Sin embargo, hay que considerar que dicha cooperación debe ser guiada bajo los parámetros que debe señalar el estado de acuerdo a sus intereses y a sus circunstancias sociales.

2.3.1 Cooperación Bilateral.

La iniciativa unilateral estadounidense busca mejorar la dotación de personal, movilidad y de comunicaciones de las fuerzas militares y policiales en la región fronteriza del norte. También entregan recursos a la Armada del Ecuador para la patrulla y ampliar las operaciones de interdicción en la costa noroeste de Ecuador y de las inspecciones en puerto.

¹¹⁴ Véase: Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2006 – 2007 Pág. 44 En:

http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=225

¹¹⁵ Véase: Informe de Cooperación Internacional 2010. Pág. 124 En:

http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=225

¹¹⁶ Ibíd. Pág. 126

La Aduana de EE.UU. y la Agencia de Protección de Fronteras de los USA, proporcionó asistencia técnica y orientación a las Aduanas y la Policía Nacional, desde 2004 a 2006, a aproximadamente 1.914 funcionarios que recibieron capacitación en el uso de armas de fuego, manejo de perros, de procesamiento de carga, técnicas de exploración, evaluación de riesgos, análisis de documentos, y la seguridad y los procedimientos de seguridad.

En 2006, el gobierno de Estados Unidos también proporcionó equipo de comunicaciones, vehículos terrestres, y el apoyo al programa canino para la detección de drogas.

El gobierno de Estados Unidos colaboró con el ejército ecuatoriano para contrarrestar las incursiones de insurgentes colombianos en la frontera norte. El Consejo de Asuntos Narcóticos Sección (NAS) y el Grupo Militar de los EE.UU. proporcionaron apoyo operativo, incluyendo artículos de uso militar, de combustible, uniformes y equipo de otro campo no letales. Además, los fondos antinarcóticos de los Departamentos de Estado y de Defensa de USA se utilizaron para construir una base policial antinarcóticos en el Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, fronteriza con el departamento de Putumayo, una importante área de producción de droga y un centro de actividad insurgente en Colombia.

Los Estados Unidos también prestaron apoyo a en el 2006 con la inteligencia financiera y las unidades de investigación siendo formados y entrenados para luchar contra el blanqueo de dinero y delitos financieros.

Existen también programas financiados por el gobierno de Estados Unidos que son administrados por USAID y ejecutado principalmente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la ONG CARE, que han contribuido con el gobierno ecuatoriano en la Frontera norte para el desarrollo social y productivo de la zona. También, la USAID ha trabajado en programas de infraestructura. En el 2006, construyó sistemas de saneamiento, carreteras y canales de riego.

Los EE.UU. apoyaron a los militares para facilitar su movilidad y las comunicaciones durante las operaciones cerca de la frontera norte. En 2007, los EE.UU. aumentó el apoyo a elementos de la Armada del Ecuador para movilizarse mejor, equipar y entrenar las actividades de interdicción de narcóticos en alta mar. Los Estados Unidos también

proporcionaron su colaboración en la aplicación de la ley, el desarrollo profesional, y las operaciones de planificación de la formación de la Armada del Ecuador en 2007.

El apoyo de EE.UU. a la policía a la Dirección Nacional Antidroga (DNA) ayudó a asegurar su movilidad y mejorar las comunicaciones, la detección de drogas y la capacidad de investigación para llevar a cabo las operaciones. Los EE.UU. también proporcionaron apoyo para la unidad canina de DNA y la policía especializada móviles anti-narcóticos (GEMA), que son elementos críticos de un control efectivo y la interdicción. En septiembre de 2007, la sede de la policía de DNA financiada por Estados Unidos se inauguró en la ciudad de Tulcán en la provincia de Carchi, al sur de la frontera con Colombia. La sede, que incluye dormitorios para 100 policías, casetas y áreas de inspección, mejorará el control de estupefacientes en la carretera principal entre Ecuador y Colombia y que servirá como base de operaciones de la GEMA.

La Cooperación en el sector judicial se fortaleció en 2007. Un proyecto cooperativo de tres años entre la Embajada, el Consejo Nacional de la Judicatura y una universidad local, creó la primera base de datos cada vez automatizado de todas las causas penales en proceso en todo el país desde 2003. La base de datos mejorará la gestión y la transparencia de la adjudicación de casos penales, ayudando a resolver los problemas perennes de los retrasos y la corrupción.

Los EE.UU. también apoyaron la aplicación de una Unidad de Inteligencia Financiera, así como las unidades policiales de investigación que está formado y entrenado para combatir el lavado de dinero y delitos financieros.

Todo esto en virtud de una iniciativa de tipo unilateral en la que quien propone y financia los programas de acción son los Estados Unidos.

De esta grande y complicada burocracia para el control de las drogas, la DEA es quien se encarga de elaborar trabajos de inteligencia para el control del tráfico de drogas. Asimismo,

la USAID, con menor trabajo, es quien se encarga de los proyectos de desarrollo local alternativo y de fortalecimiento de instituciones democráticas.¹¹⁷

La DEA tiene presencia en Ecuador, así como en México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. **“ Su papel es ofrecer inteligencia a la policía, no están autorizados para actuar en operativos, sin embargo, se conoce que a veces los agentes no sólo están presentes en los arrestos sino que participan activamente de los mismos, en ocasiones incluso interviene personal militar perteneciente al Comando Sur, puesto de avanzada militar estadounidense en la región. No obstante, en teoría el entrenamiento de las policías locales sigue siendo su función principal”**¹¹⁸

UDENOR

UDENOR, la agencia ecuatoriana de la frontera norte para el desarrollo establecida en 2000, fue creada para coordinar los programas de desarrollo económico y social en la región de la frontera norte del país, continuó la aplicación del plan del gobierno maestro de la frontera norte de desarrollo. Entre 2000 y 2007, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, ha proporcionado alrededor de US \$ 78 millones. En Noviembre de 2007, UDENOR fue suspendida en sus funciones debido a que **“El Presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto número 694, dispuso suprimir la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR), considerando que “se debe suprimir aquellas entidades públicas que, como el caso de UDENOR, ejercen competencias, funciones y atribuciones que otras instituciones realizan de mejor manera”.**”¹¹⁹

2.3.2 Cooperación Económica entre Ecuador y Estados Unidos en el marco de la Lucha Anti Drogas.

Entre 1996 y 1999 la asistencia económica para las fuerzas armadas y policía se incrementó de tres millones de dólares hasta alrededor de 13 millones de dólares¹²⁰. Por otro lado, los

¹¹⁷ NIELD, Rachel, U.S. Police Assistance and Drug Control Policies. En: YOUNGERS Coletta A., EILEEN Rosin. Óp. Cit., Pág. 61

¹¹⁸ Ibíd.

¹¹⁹ La Gaceta. Publicado el 7/11/2007 en:

http://www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=13&c_id=70&pg_id=32260

¹²⁰ Datos Obtenidos en Just Facts que es una página civil de guía para la defensa de EE.UU. y la asistencia de seguridad para América Latina y el Caribe. En:

Estados Unidos, con el gobierno de Mahuad en 1999, suscribieron un acuerdo en el cual el estado ecuatoriano permitía el establecimiento de una Base Operativa de avanzada FOL de las fuerzas armadas estadounidense en la ciudad de Manta. Con esto, el Ecuador incrementaba los aportes económicos recibidos por el país del norte. Por otro lado, solo en el año 2007, Colombia recibió como cooperación para la lucha contra el narcotráfico la suma de 386 millones de dólares.¹²¹

Pero Estados Unidos no solo abrió este tipo de bases en el Ecuador, sino que lo hizo también en el Salvador y la isla de Curazao para realizar similares acciones. **“Para habilitar estas locaciones militares, Washington ha gastado 137 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fueron asignados a equipar la base Manta en Ecuador. Es decir, ese país recibió sólo por este concepto treinta millones.”**¹²²

Este incremento de los recursos lineamientos hacía suponer que el tráfico ilegal de drogas en el Ecuador iba aumentando a lo largo del tiempo. Un indicador de ello es que el número de personas involucradas en el tráfico de drogas hacia los EE.UU., principalmente utilizando la modalidad conocida como las mulas crecía a la par de este fenómeno.

La cooperación económica que los Estados Unidos ha mantenido para la región andina y en especial el Ecuador irregular durante estos años. A nuestro país para el apoyo a policía y fuerzas armadas, USA aportó una cantidad de 17,742,101 de dólares en el 2005 y esta cifra disminuyó a 14,231,055 en el 2006 y para el 2007 fue de 17,709,055 de dólares.¹²³

Las siguientes cifras, debido a la limitación de nuestro trabajo de estudio (2005 – 2007) se obtuvieron del informe el INCSR (International Narcotics Control Strategy Report) 2206, 2007 y 2008. En ellas el presupuesto anual que destina el gobierno estadounidense para ayudar económicamente al Ecuador para la lucha contra las drogas es de:

<http://justf.org/Country?country=Ecuador&year1=1996&year2=2008&funding=All+Programs&x=56&y=12>
Acceso 15/10/10

¹²¹ ibíd. Colombia. En: <http://justf.org/Country?country=Colombia>

¹²² Quorum. Óp. Cit., Pág. 8

¹²³ Óp. Cit.

| Año | Presupuesto anual total para el control de la Droga | Desarrollo Alternativo | Erradicación |
|------|---|------------------------|--------------|
| 2005 | 25.7 | 14.4 | 10.9 |
| 2006 | 19.8 | 8.3 | 11.4 |
| 2007 | 17.3 | 8.4 | 8.9 |

Fuente: INCSR 2006, 2007,2008.

Durante estos años, la erradicación se aplicó mediante los siguientes instrumentos:

| Año | Controles Fronterizos | Policía y Formación Judicial | Infraestructura Policial | Operaciones Policiales | Otros |
|------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 2005 | 3,0 | 0,94 | 1,96 | 3,9 | 1,1 |
| 2006 | 2,3 | 0,87 | 1,32 | 2,75 | 4,7 |
| 2007 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 2,7 | 1,6 |

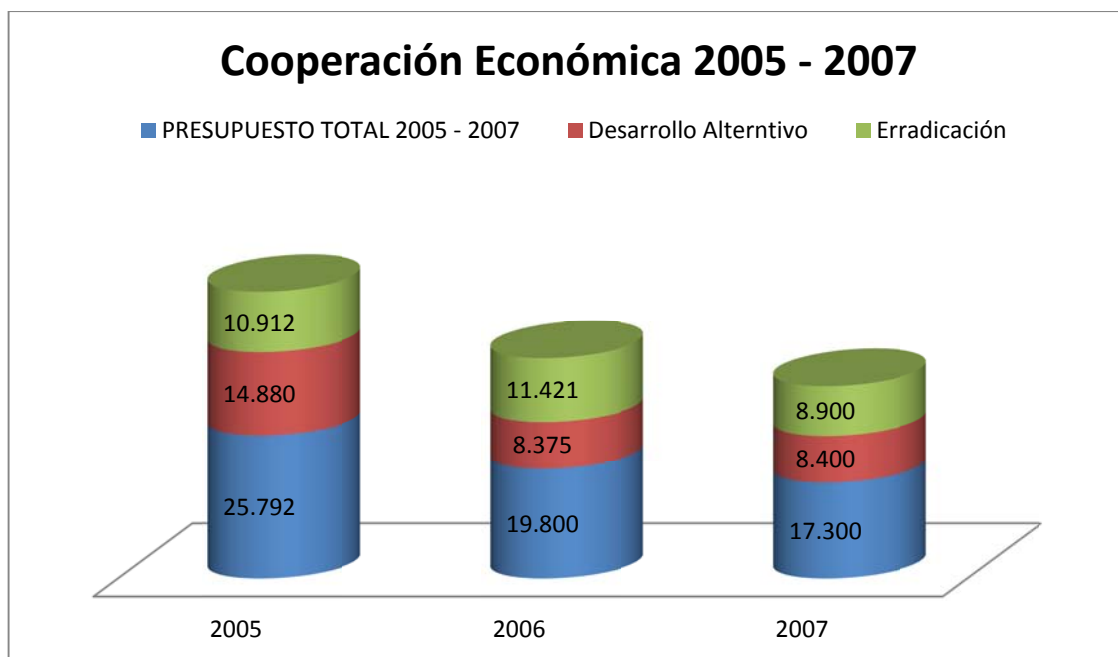
Fuente: INCSR 2006, 2007,2008

Lo anterior se tradujo en la siguiente evolución de las incautaciones:

| Incautaciones /Arrestos /Otros | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Coca (Todo) | 44,6 TM | 38,1 TM | 22,45 TM |
| Heroína | 230KG | 410KG | 180KG |
| Marihuana | 640KG | 1100KG | 740KG |
| Arrestos | 2.438 Personas | 3.327 Personas | 3.649 |
| Cultivos Destruídos | 36HA | 11HA | 36HA |

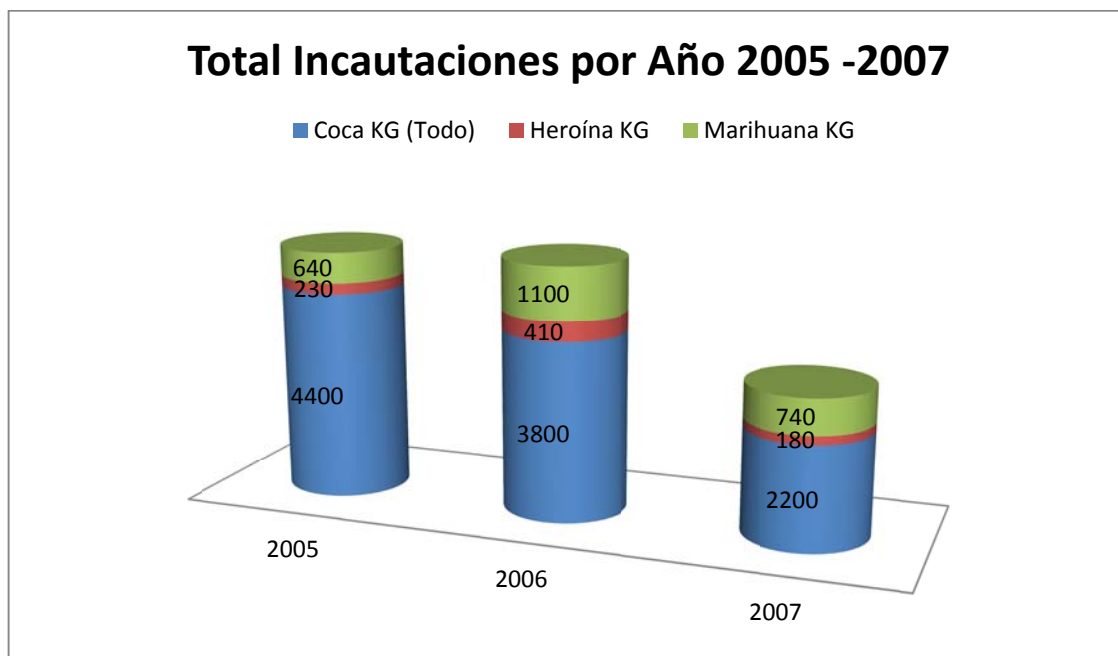
Fuente: INCSR 2006, 2007,2008

En total y comparando las cifras de estos años tenemos que:



Fuente: INCSR 2006, 2007, 2008

La evolución de las incautaciones de drogas ilegales provenientes del Ecuador se describe en el siguiente cuadro:



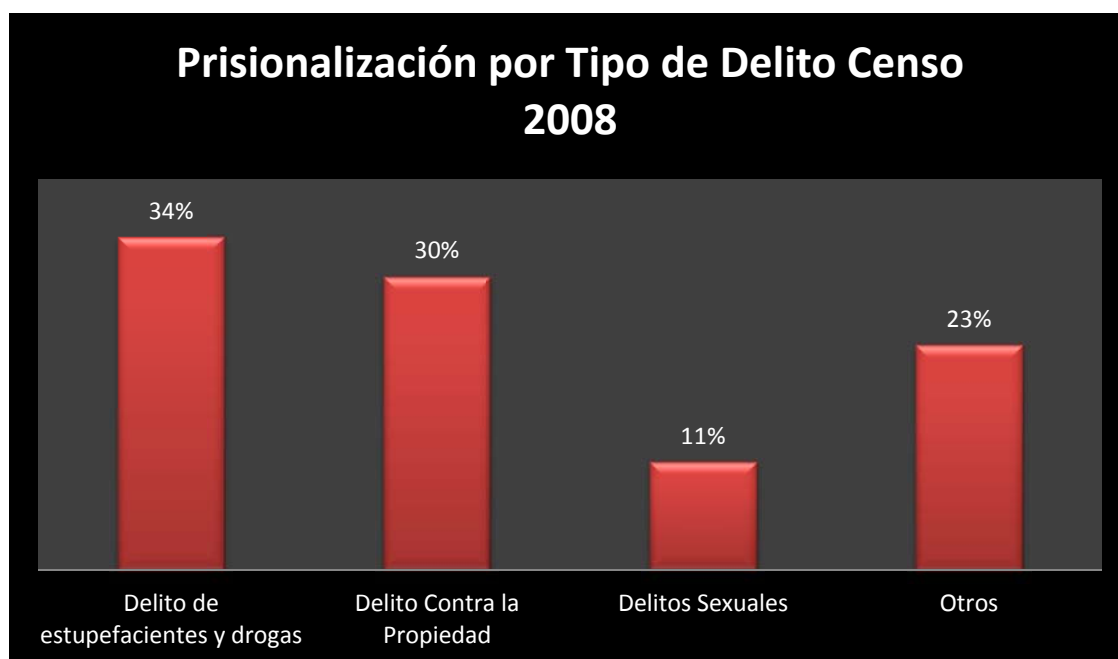
Fuente: INCSR 2006, 2007, 2008

Por otro lado, las de personas arrestadas por narcotráfico durante este periodo de tiempo fueron de:



Fuente: INCSR 2006, 2007, 2008

Hasta el 2008, según las cifras del censo social demográfico penitenciario 2008, el porcentaje de los delitos más frecuentes y que cumplen una condena es:



Fuente: Censo Social Demográfico Penitenciario.

El cuadro anterior explica que, hasta el año 2008, el 34% de los delitos cometidos por las personas privadas de libertad, corresponde al delito relacionado con el tráfico ilícito de drogas. Es el mayor porcentaje entre las diversas razones por las cuales se priva de libertad a las personas.

2.3.3. Hectáreas Erradicadas

El Ecuador no es un país productor de la hoja de coca sino más bien es un país considerado de tránsito para las drogas ilegales. Acorde al informe del INCSR de 2008,¹²⁴ hasta el 2007 las fuerzas militares de Ecuador y la policía localizaron y destruyeron unas 36 hectáreas de coca cultivadas en sitios dispersos cerca de la frontera con Colombia. Asimismo existe, hasta ese año, un aumento pequeño de plantaciones cultivadas desde el 2004.¹²⁵ Consecuencia, nuestro país produce cantidades relativamente menores de drogas en comparación con sus vecinos. Asimismo, el consumo de drogas ilegales como a marihuana

¹²⁴ International Narcotics Control Strategy Reporte (INCSR) es un informe anual elaborado por el Departamento de Estado al Congreso de acuerdo con la Ley de Ayuda Exterior. En él se describen los esfuerzos de los países clave para atacar todos los aspectos del tráfico internacional de drogas. Tomado de: <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/>

¹²⁵ INCSR 2008 En: <http://www.state.gov/documents/organization/102583.pdf> Pág. 132

no supera el 4,8% de la población¹²⁶ de acuerdo al Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años elaborado por la Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas.

Por otro lado, las incautaciones totales realizadas por el GOE en 2007 fueron 22,45 toneladas métricas (TM) de cocaína, 180 kilogramos (kg) de heroína y 740 kilogramos de marihuana. En comparación, en el 2006 el GOE incautaron 38,16 toneladas de cocaína, 410 kilogramos de heroína y 1.110 kg de marihuana. Mientras que las incautaciones globales de cocaína se redujeron desde 2006 hasta 2007, las incautaciones de la policía de DNA en 2007 fue (12,5 toneladas) superó con creces la cantidad incautada que en años anteriores.¹²⁷



Fuente: INCSR 2006, 2007, 2008

2.4 De la Narco Guerrilla al Narco Terrorismo: Un cambio en la política norteamericana luego del 11 de septiembre y su influencia en el Ecuador.

Tras los eventos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos dispuso un alcance a la estrategia de seguridad del año 2002. Tal estrategia era la National Security

¹²⁶ Oficina Contra La Droga y EL Delito de la ONU. Elementos Orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión. En: <http://www.unodc.org/documents/peru/ElementosOrientadores-Peru-June08.pdf> pág. 12. Acceso 10/10/10

¹²⁷ INCSR 2008. Óp. Cit., Pág. 131

Strategy NSS¹²⁸, misma que se basaba en establecer alianzas militares y, además, justificar los ataques preventivos como argumento para la seguridad nacional. Para el año 2006, dicho alcance determinó para el área andina **“cuatro prioridades estratégicas para la región: reforzar la seguridad, fortalecer las instituciones democráticas, promover la prosperidad, y la inversión en personas”**¹²⁹; A través de los años, la continuidad en la política exterior norteamericana se mantenía. Es decir, la represión armada para hacer frente al narcotráfico seguía en los planteamientos norteamericanos.

Acorde con lo anterior, la estrategia de seguridad estadounidense trataba de enviar un mensaje en el que se indica que los Estados Unidos mantendrá la seguridad nacional como un asunto prioritario en la agenda mundial. **“Además, lanzaremos una guerra de ideas para ganar la batalla contra el terrorismo internacional. Esto incluye: utilizar toda la influencia de Estados Unidos y trabajar muy estrechamente con los aliados y amigos para dejar claro que todos los actos del terrorismo son ilegítimos y, por tanto, el terrorismo debe tener la misma consideración que tiene la esclavitud...Al mismo tiempo que reconocemos que nuestra mejor defensa es un buen ataque, estamos también fortaleciendo la seguridad nacional de América para protegerla contra cualquier ataque y para detenerlo.”**¹³⁰

En las dos estrategias, tanto en la del 2002 como la del 2006, se establece que el primer enemigo a combatir es el terrorismo y se mantiene otros como lo son: drogas, tráfico de armas, etc. Para América latina, el escenario es claro. Se da prioridad a combatir el narcotráfico y a los carteles de la droga. **“En cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas, que desafían la seguridad del Estado, y el tráfico de drogas, que ayuda a financiar las operaciones de tales grupos.**

¹²⁸ La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSS) es un documento elaborado periódicamente por la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos para el Congreso en el que se esbozan las principales preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos y cómo el gobierno tiene previsto tratar con ellos. El fundamento legal para el documento está escrito en la Ley Goldwater-Nichols. El documento está disponible al público en general (caso contrario con la Estrategia Militar Nacional, SMN) y su aplicación se basa en la elaboración de orientaciones que figuran en los documentos justificativos (incluyendo los nuevos Estados miembros).

¹²⁹ NSS 2006 En: <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-060316-08.htm> Acceso: 16/10/10

¹³⁰ BUSH George. Discurso sobre la seguridad nacional en: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf> Pág. 9 Acceso 16/10/10

Actualmente estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y la provisión de seguridad básica al pueblo de Colombia”¹³¹

La política estadounidense de seguridad trata de afianzar estrategias regionales. De tal manera, en la estrategia del 2002, USA busca trabajar con organismos regionales que ya existen. Así, en el NSS del 2002 se señala que **“Siempre que sea posible, los Estados Unidos se basará en las organizaciones regionales y estatales competencias para cumplir con sus obligaciones de luchar contra el terrorismo. Cuando los gobiernos encuentran la lucha contra el terrorismo más allá de sus capacidades, que coincidirá con su fuerza de voluntad y su recursos con toda la ayuda que nosotros y nuestros aliados pueden proporcionar”, y “Vamos a trabajar con las instituciones regionales, tales como la Cumbre de las Américas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas para el beneficio de todo el hemisferio.”¹³²**

La política de seguridad estadounidense para el Ecuador, se lleva en el marco de la cooperación económica y militar para luchar contra el narcotráfico. Para lo mismo citamos al General John Craddock Jefe del Comando Sur de los EE.UU.¹³³ y en su POSTURA DE DECLARACIÓN de Marzo de 2006 Cita que: **“Ecuador permanece plagado por los cultivos ilícitos... ...seguimos para llevar a cabo actividades de cooperación en seguridad”¹³⁴.**

¹³¹ NSS 2002 en: <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf> Pág. 15 Acceso: 16/10/41

¹³² NSS 2002 Óp. Cit.

¹³³ General John Craddock es un ex General del ejército de Estados Unidos de cuatro estrellas. Su última misión militar fue el de Comandante, Comando Europeo de EE.UU. (USEUCOM) y el Supremo Comandante Aliado de la OTAN en Europa (SACEUR), así como el comandante del Mando Aliado de Operaciones (ACO) desde diciembre de 2006 al 30 de junio de 2009. También se desempeñó como Comandante, Comando Sur de los EE.UU. del 9 de noviembre de 2004 a diciembre de 2006. Después de su retiro en 2009, fue contratado por la MPRI, Inc., (a veces llamado Militar Professional Resources, Inc.) para servir como su presidente corporativo. Tomado de: <http://montevideo.usembassy.gov/usaweb/paginas/431-00ES.shtml>

¹³⁴ Craddock, Brantz. Posture Statement Of General Brantz J. Craddock, United States Army Commander, United States Southern Command. Before the 109th Congress Senate Armed Services Committee. 14 MARCH 2006. En: www.dod.gov/dodgc/olc/docs/TestCraddock060314.doc Acceso 30/10/10

El objetivo de los Estados Unidos para proveer de asistencia económica y militar al Ecuador se basa en la justificación del Andean Regional Initiative (ARI) y se señala de la siguiente manera: **“El objetivo de la asistencia al Ecuador es detener o prevenir cualquier desbordamiento de las actividades de la guerrilla de Colombia, y detener el tránsito de drogas con destino a Estados Unidos”**,¹³⁵

Con mayor detalle la ARI pretende actuar, en el Ecuador, de la siguiente manera: **“A través de la Iniciativa Andina Antidroga (ACI), los Estados Unidos apoyan una serie de esfuerzos para mejorar las capacidades de la profesionalidad de la policía y militares del Ecuador. Los fondos económicos de la ACI ayudarán con la cooperación marítima y costera para hacer frente a la posible explotación de la posición estratégica de Ecuador para el transbordo de estupefacientes, precursores químicos y los migrantes. Para complementar esta asistencia al Gobierno de Ecuador, los fondos de ACI intentarán mitigar el atractivo económico de la industria ilegal farmoquímica mediante el apoyo a programas de desarrollo económico en las zonas que se encuentran en riesgo particular”**,¹³⁶

2.5 Adendum

Aun cuando nuestra investigación está limitada a los años 2005 – 2007, no dejamos de mencionar sobre un hecho posterior al ataque a Angostura en territorio ecuatoriano provocado por fuerzas militares colombianas.

Las investigaciones sobre el hecho anteriormente mencionado sacaron a la luz pública las infiltraciones de la CIA en los departamentos de inteligencia en la policía y fuerzas armadas del Ecuador. Tal es el caso concreto del ex director de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, Coronel Mario Pazmiño, quien fue destituido por no haber brindado información pertinente al actual presidente Correa sobre el ataque colombiano en territorio ecuatoriano

¹³⁵ Andean Counterdrug Initiative (ACI) 2006 En: <http://fpc.state.gov/documents/organization/60720.pdf>
Pág. 14

¹³⁶ Documento de defensa para El Hemisferio Occidental. En:
<http://www.state.gov/documents/organization/42255.pdf> Pág. 515 Acceso:02/11/10

Tras los cuestionamientos presidenciales al departamento de Inteligencia del Ejército, el Ministerio de Defensa inicio una investigación en la cual arrojó como resultado la infiltración de la CIA en la institución.

“Cuando era Director de Inteligencia fue denunciado por organismos defensores de los derechos humanos y por otros militares, años antes del bombardeo de las fuerzas armadas colombianas en Angostura.”¹³⁷

Todo en base a un ocultamiento de información al Presidente sobre hechos relacionado al ataque colombiano y acusado de filtrar información clasificada a la CIA, su destitución fue inmediata.

“Con la investigación sobre la infiltración de la CIA y tras ser destituido fue acusado de entregar información a servicios externos de espionaje. Todavía falta saber cuál fue su trabajo durante los días previos y posteriores al ataque de Angostura.”¹³⁸

Revelando el más claro ejemplo de la infiltración norteamericana y su influencia en la en asuntos internos y de gran importancia para el Ecuador.

Asimismo, como un punto adicional, ponemos a consideración del lector la expulsión de la Embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, el 5 de abril de 2011 tras la divulgación de un cable diplomático en el cual presuntamente, desde esta embajada, se comunicaba al gobierno norteamericano sobre la corrupción en filas de la Policía Nacional, de manera particular del comandante Jaime Hurtado, y el conocimiento de este hecho del Presidente Correa; hecho que generó también la expulsión del Embajador ecuatoriano en Washington Luis Gallegos poniendo en riesgo las conversaciones bilaterales.

Este hecho coincidió con la renovación del ATPDEA, puesto que este convenio, en la práctica, finalizó el 14 de febrero del mismo año. Mucho se ha hablado de las repercusiones económicas en el sector exportador; sobre todo en el sector floricultor. Desde el gobierno se ha tratado de no generar nerviosismo por los impactos de la potencial no renovación de este convenio. El ministerio de Coordinación de Política Económica sostiene que **“tomando en**

¹³⁷ LUCAS, Kintto. ECUADOR - El camino del Coronel Mario Pazmiño. En: Alterinfos. En: <http://www.alterinfos.org/spip.php?article3347> Acceso: 13/12/10

¹³⁸ Ibíd.

cuenta todas las exportaciones beneficiarias del ATPDEA, esto implicaría una reducción del 28% al 27% de la razón utilidad sobre ingreso por exportación para todo el sector beneficiario del ATPDEA... es muy distinto a afirmar que las empresas reducirían sus márgenes de ganancia.”¹³⁹ Mientras que, desde distintos sectores exportadores se ha magnificado el impacto de la no renovación de este convenio. Sin embargo, desde el gobierno, ya se han elaborado planes de apoyo a los sectores afectados.

¹³⁹ Carta de la Ministra Coordinadora de la Política Económica Katuska King al Comité Empresarial Ecuatoriano. Disponible en: <http://www.wobook.com/WBzj5u66ZJ4q/Carta-A-Roberto-Aspiazu.html> Acceso: 23/04/2011

3. CONCLUSIONES

Desde que el consumo de cocaína despegó por primera vez en los EE.UU., este país ha estado luchando en América Latina en lo que Richard Nixon en 1973 bautizó como 'la guerra contra las drogas '. Además, en 1986 bajo el gobierno de Ronald Reagan, el tráfico de drogas se declaró un problema de seguridad nacional, lo que lo convierte en una amenaza grave y sin duda una cuestión de suma importancia para los EE.UU. La batalla contra el narcotráfico se colocó en la región andina, el punto de partida de la cadena de suministro.

Luego de la guerra fría, la guerra contra las drogas se constituye como una de las prioridades de la agenda bilateral con algunos de los países de la región andina, como lo son Colombia, Perú y Bolivia. En el caso ecuatoriano, nuestro país ha sido señalado, desde los Estados Unidos, como un país de tránsito de sustancias ilegales, por tanto su apoyo ha estado destinado a fortalecer a los organismos de control como son la policía y fuerzas armadas; mismas que han recibido fondos para adecuarse a la lucha antidrogas propuesta por los Estados Unidos.

El fin de la Guerra Fría fue visto como el colapso del bloque socialista. Por lo tanto, los EE.UU. se quedaron sin su adversario superior causando un cambio en la agenda de seguridad norteamericana puesto que por mucho tiempo fue la amenaza comunista. Desaparecida la Unión Soviética, Washington rápidamente identificó un nuevo conjunto de amenazas redefiniendo su agenda externa dando vital importancia al tráfico de drogas; generando un aumento del poder hegemónico de USA sobre América Latina. La nueva agenda para la región, se reorientó hacia campañas antidrogas y el fortalecimiento de la democracia además del respeto a los derechos humanos como medio para garantizar los intereses de Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico colocó, a la región andina, en el punto de partida de la cadena de suministro. Perú y Bolivia Colombia fueron los principales productores de pasta de coca, esta pasta era transportada para ser refinado y transformado en cocaína y luego de contrabando en los Estados Unidos y Europa.

En los años 80, la producción y el tráfico de drogas ilícitas fueron reconocidos por los gobiernos de EE.UU. como una amenaza creciente para la seguridad nacional dado el aumento del consumo de la cocaína y heroína al interior del territorio norteamericano, lo

que obliga a los políticos para debatir el mejor modo de confrontar a la industria ilegal de narcóticos, así mismo el presidente George HW Bush define a los carteles de la droga y grupos armados colombianos como las FARC como amenaza para la sociedad estadounidense.

Como resultado de lo anterior, los EE.UU. proponen varias estrategias en los años 90 para combatir la oferta contra las drogas, en los países de origen. En este caso, los países andinos. Por lo tanto, debido a la presión ejercida por el EE.UU. en la erradicación de cultivos ilícitos en la región, la industria de la droga ilegal ha reestructurado sus operaciones de producción de cultivos ilícitos en mayoritariamente en Colombia concentrando allí la producción y la fabricación de cocaína. Sin embargo, en los últimos años, el Ecuador pasó de ser un país de tránsito de la droga para convertirse también en un país productor. Para tal aseveración, en los últimos años la policía nacional, conjuntamente con el ejército ha destruido algunos laboratorios clandestinos de elaboración de pasta base; así como también submarinos para el transporte de narcóticos ilegales.

Después de haber elevado el tráfico de drogas al nivel de amenaza nacional, los EE.UU. se centraron sobre todo en "el enemigo externo (la oferta de cocaína) y no el problema interno (la demanda de la cocaína) que ha sido la pieza central para explicar el fracaso de EE.UU. en la lucha antidrogas en América Latina. De esta manera, el gobierno de EE.UU. optó por el enfoque capitalista bajo la creencia racional que erradicar las drogas en su origen derivaría en una disminución de su disponibilidad en las calles de EE.UU., por lo que la reducción de la oferta podría causar un aumento en el precio de mercado desalentando a los consumidores al momento de su compra.

A pesar de esta realidad, los EE.UU. eligió poner énfasis al control y la interdicción de la producción de las drogas ilícitas desde el mediados de los 80 en el marco de la "Estrategia Andina", una política que permitió, además, a los EE.UU., militarizar la lucha contra las drogas. Esta estrategia está dirigida a tres componentes: la erradicación de cultivos de drogas, la interdicción de las rutas de tráfico de drogas y desarrollo alternativo, sin embargo, la mayor parte de los recursos se concentró en los dos primeros componentes.

Y, posteriormente, se puso en marcha la 'Iniciativa Andina ', una estrategia que se centraba en la determinación de Bush de militarizar la campaña de la guerra contra la oferta de la drogas. Muestra de ello, es la firma un convenio en 1999 para que fuerzas militares estadounidenses puedan usar la base ubicada cerca a la ciudad de Manta.

Desde finales de los años 1980 hasta nuestros días las iniciativas para la lucha contra las drogas se concentran en la interdicción del tráfico de drogas y el reducir la oferta.

Según la pagina web oficial de la Casa Blanca, la política antidroga estadounidense está basada dentro del plan “Estrategia Nacional de Control de Drogas”, mismo que se encuentra disponible para el público en general en la página web de dicha institución.

Este plan contempla 4 líneas básicas: Prevención del Abuso, Tratamiento al abuso de drogas ilegales, Aplicación de la ley nacional antidrogas, La interdicción y el apoyo internacional para la lucha contra las drogas.

Con estos lineamientos, la política nacional antidroga estadounidense busca combatir el uso, consumo y abuso de las mismas atacándolas tanto al interior del país como fuera de él. Además, se predispone que los programas de control de drogas elaborados por los Departamentos de Educación, Salud y de Servicios Humanos, del Interior, Asunto de Veteranos y de la Administración de Pequeños Negocios, estén centrados en la reducción de la demanda de actividades como la por ejemplo la prevención del abuso de sustancias y tratamiento.

En el Registro Oficial N°. 239 firmado el 24 de diciembre de 2003, el entonces presidente de la república Lucio Gutiérrez firmó el decreto N° 1180 en el cual se oficializa la lucha contra las drogas como Política de Estado. Es responsabilidad de Estado y la de sus instituciones, desarrollar, dirigir y ejecutar políticas para cumplir con este objetivo. Se estipula que: Que la lucha antidroga es compromiso de todos (de responsabilidad compartida), la reducción de la demanda (a través de la prevención, al tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados), el control de la Oferta (Combate al narcotráfico), entre otros. Y tiene como objetivos: la reducción de la oferta y el tratamiento así como planes para reducir la demanda.

En síntesis, el Ecuador tomó parámetros para su política antidrogas que no guardaban coherencia con realidad de su situación sino que es la consecuencia de la imposición de la política externa para la lucha contra el narcotráfico norteamericana.

La iniciativa andina propuesta por el gobierno norteamericano incrementó la cooperación económica y militar hacia la región andina. Cooperación supeditada al cumplimiento y consecución de los objetivos de la lucha anti drogas norteamericana. Los países que se alinearon a esta lucha fueron acreedores a reconocimientos como la ATPDEA para el Ecuador y quienes se oponían recibirían amenazas como el recorte en el comercio con tal país.

En el marco del escenario anteriormente descrito, nuestro país realizó y aprobó la Ley 108, Ley que se refería la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El éxito de dicha ley ha estado en función de la cantidad de personas detenidas acusadas a temas relacionados con las drogas. Esto ha producido un alto hacinamiento en las cárceles del Ecuador.

La LEY 108 denota una clara reproducción de su similar en E.E.U.U., por citar un ejemplo de lo mencionado es la sentencia mínima obligatoria. Otra característica de la Ley son las sentencias mínimas que fueron establecidas. Las mismas no tienen un principio de proporcionalidad. Es decir, no hace una clara distinción y juzga por igual a las mulas y a personas que trafican grandes cantidades de drogas lícitas. Estos casos no tienen una sentencia acorde a detalles particulares. Por el contrario, Todos quienes son acusados de distribución o de tráfico ilegal, están sujetos a una sentencia mínima obligatoria que se traducen en 10 años de cárcel; y que en enero de 2003 fue elevada a 12 años por el congreso del año 2003. Es decir, sí una persona es detenida por traficar unos pequeños gramos de marihuana es sentenciada a 12 años, igual que una persona que se le detenga con varios kilos.

En el tema económico, nuestro país recibió beneficios debido a la cooperación realizada por los Estados Unidos. Tal asistencia pasó de 13 millones en 1999 a 42 millones de dólares en el 2004. La influencia en la política antinarcóticos ecuatoriana se debe a las grandes cantidades de dinero aportados por USA para cumplir con los objetivos de la lucha contra

las drogas; además de no perder líneas de comercio y por una convergencia ideológica entre los presidentes de turno.

Alrededor de 30 años continuos y miles de millones de dólares después no estamos más cerca de resolver el problema. Es decir, no se ha reducido el uso indebido de drogas y su disponibilidad en los Estados Unidos es permanente.

El aumento dramático en el tráfico de drogas plantea peligros reales a los países en todo el Hemisferio Occidental. El tráfico de drogas trae consigo problemas asociados como la delincuencia civil, exacerba la violencia y por lo tanto aumenta en gran medida los problemas de la seguridad ciudadana.

En años anteriores, el abuso de drogas ilícitas, solía ser un problema menor en América Latina, en la actualidad ha alcanzado proporciones epidémicas en ciudades como Quito, Guayaquil y en las principales ciudades de la región.

El mayor consumidor mundial de drogas ilícitas, los Estados Unidos, también se enfrenta a un sin número de problemas derivados del abuso de drogas ilícitas, como la violencia civil. La respuesta de la política desarrollada en Washington, sin embargo, ha respondido en con el fin de ser "duro" en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; por lo tanto, la retórica de guerra contra las drogas prevalece hoy en día.

La guerra contra las drogas ha sido una prioridad en la orden del día de las diferentes administraciones norteamericanas y se está combatiendo con más fervor que nunca. Los movimientos conservadores y religiosos siguen apoyando la guerra contra las drogas con la ingenua creencia de que un día las drogas desaparecerán de la faz de la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no debería el gobierno intenta reducir el abuso de drogas?

La guerra contra las drogas no sólo es ineficaz, sino que tiene la capacidad de empeorar las cosas. Todas las técnicas de las administraciones públicas enseñan a los niños y a los jóvenes que las drogas son "tabú" y "prohibido". Esto, en realidad lo que provoca es una curiosidad de probarlas en lugar de rechazarlas. Es su manera de rebelarse contra un sistema en donde las normas es una tendencia humana natural. En los Países Bajos, donde el uso de la marihuana es tolerada, la sociedad ha alcanzado con éxito la separación de

"drogas blandas" y "las drogas duras". Para ilustrarlo ponemos un ejemplo del año 2001. La prevalencia del consumo de marihuana en E.E.U.U. (edades 12 +) fue de 36,9%¹⁴⁰ de Holanda sólo el 17%¹⁴¹

Mientras que la guerra contra las drogas no pueda reducir el uso indebido de drogas, produce gran cantidad de condenas y encarcelamientos con el agravante del hacinamiento en las cárceles con acusados de tráfico de drogas que no son violentos (mulas).

La guerra contra las drogas es un problema, no una solución. Cada año se produce algún tipo de error en sus objetivos al tratar de reducir la oferta o empeora las cosas y su consumo aumenta. En realidad causa el aumento de la criminalidad, la pérdida innecesaria de vidas y el encarcelamiento.

Miles de millones de dólares son desperdiciados todos los años, porque los políticos conservadores estadounidenses no lo quieren ver. Si el gobierno de EE.UU. desea realmente ayudar, tiene que dejar el enfoque militarista con el que ha tratado de manejar toda la problemática de las drogas. Es necesario reevaluar sus tácticas, concentrándose en la educación y la rehabilitación, en vez de la desinformación y el encarcelamiento. Tal vez, si esto llegara a suceder, de hecho se verá una disminución en el uso indebido de drogas.

Desde mediados de la década de 1970, el gobierno de EE.UU. ha gastado miles de millones de dólares en programas de asistencia antidrogas destinados a reducir el flujo de drogas ilícitas desde los países andinos que son catalogados de origen -o de tránsito como el nuestro- a los Estados Unidos. Pero el problema continúa.

La Administración de Obama ha seguido con el apoyo de EE.UU. para el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, con lo que existe una continuidad en la política exterior norteamericana para la región andina en el marco de la guerra contra las drogas.

¹⁴⁰ The World Factbook también conocido como The CIA World Factbook es un recurso de referencia elaborados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con información de almanaque de estilo sobre los países del mundo. Para Holanda Véase: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html>. Acceso: 4/11/10

¹⁴¹ Para Estados Unidos véase: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html> Acceso: 4/10/11

Los costos sociales que la guerra contra las drogas que han tenido, son más o menos comparables a los costos sociales del alcohol y el tabaco, lo que demuestra que no hay opciones fáciles cuando se trata de políticas de drogas. Los esfuerzos agresivos para limitar el consumo a través de un enfoque represivo tienden a restringir los gastos del consumo de drogas, mientras que, al mismo tiempo, desata los altos costos de la ejecución y el encarcelamiento en un contexto de aumento de la violencia en torno a las bandas criminales que ejecutan el tráfico de drogas. Por el contrario, la legalización del alcohol y el tabaco reduce drásticamente los costos de ejecución con respecto a estas sustancias, mientras que los costos de consumo siguen siendo altos.

En consecuencia, nuestro análisis concluye que en última instancia, existe un gran potencial para mejorar la actual política de criminalización de la marihuana y la cocaína. El objetivo de minimización de costos es probable que pueda lograrse mejor a través de la despenalización o legalización. Sobre esa base, la despenalización y legalización tanto debe ser considerado seriamente en las discusiones de la reforma política.

La guerra contra las drogas ha fracasado. Es hora de reemplazarla con una estrategia más humana donde el problema de las drogas sean tratadas desde una óptica de salud pública con programas de prevención y no de represión. Por el contrario, en los últimos años, por información de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad ecuatorianas encuentran laboratorios de procesamiento clandestinos indicando que ya no somos simplemente un país de tránsito; se encuentran submarinos para transportar la droga señalando que no se han conseguido los objetivos de esta guerra. Como se ha manejado esta problemática, estas políticas sencillamente han fracasado.

Bibliografía

Andean Counterdrug Initiative (ACI) 2006:

<http://fpc.state.gov/documents/organization/60720.pdf>

Bagley, Bruce. “La Política Exterior Estadounidense y la Guerra de las Drogas: Análisis de un fracaso político”, en: Bruce Bagley, Adrián Bonilla y Alexei Páez; *La Economía Política del Narcotráfico: El Caso Ecuatoriano*. FLACSO Quito.

Barreiro, Katalina. “La agenda de política exterior Ecuador-Estados Unidos”. En Adrian Bonilla, ed. *Orfeo en el infierno: Una agenda de política exterior ecuatoriana*. FLASCO Quito

Bonilla, Adrián. *Las sorprendentes virtudes de lo perverso: Ecuador y Narcotráfico en los 90*. Quito: Serie Ciencias Políticas, FLACSO Quito

Bonilla, Adrian. *Orfeo en el infierno: Una agenda de política exterior ecuatoriana*: FLACSO Quito

Bonilla, Adrián. “Política Exterior del Ecuador: 25 años de vulnerabilidad.” En Revista del Servicio Exterior Ecuatoriano. *Relaciones Internacionales del Ecuador*. Quito: AFESE. N°44. FLACSO Quito

Botero Sandra. *El Plan Colombia y los colombianos: crónica y consecuencias de la desinformación* Universidad Nacional de Colombia

<http://www.ucentral.edu.co/acn/obser/medios/pdf/14.pdf>

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs <http://www.state.gov/p/inl/>

Casa Blanca “National Drug Control Strategy FY 2010 Budget Summary”:

<http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/10budget/fy10budget.pdf>

Chávez Nashira. *Cuando los Mundos Convergen: terrorismo, narcotráfico y migración post 9/11*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador: Abya-Yala.

CONSEP <http://www.consep.ec/consep.php?c=1348>

Cordero David. *La ley de drogas vigente como sistema jurídico paralelo En: Entre el control social y los derechos humanos Los retos de la política y la legislación de drogas*.

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/160111/min_justicia/minjcontrolsocial_d erhumanos.pdf

DAS - Departamento Administrativo de Seguridad. Ente encargado de obtener y procesar información en los ámbitos nacional e internacional sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional colombiana: www.das.gov.co

Del Olmo Rosa. Las Relaciones Internacionales de la Cocaína En:

http://www.nuso.org/upload/articulos/2323_1.pdf

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. La Iniciativa Regional Andina. En:

<http://usinfo.sate.gov/spanol/ari/o1042101.htm>

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. “Países principales de tránsito o producción de drogas ilícitas Memorando presidencial a la secretaria de Estado”.

<http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2008/September/20080923073411pii0.2274897.html>

Diario el tiempo. “Clinton Oficializa Su Estrategia Antidrogas” En:

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-39410>

Discurso de Barack Obama pronunciado en Miami en mayo del 2008.

http://my.barackobama.com/page/content/temas_relaciones_exteriores

Discurso de Barack Obama en Miami en mayo de 2008.

http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html

Discurso sobre la seguridad nacional de Bush: [http://e-](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf)

[spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf)

Doctrina Bush <http://www.filosofia.org/his/20010921.htm>

Documento de defensa para El Hemisferio Occidental. En:

<http://www.state.gov/documents/organization/42255.pdf>

Edwards, Sandra. US-Ecuadorian Relations as a New President Takes Office. Special Update: Ecuador. Washington Office on Latin America. WOLA

Edwards, Sandra. Colombian Conflict Impacts Ecuador. Special Update: Ecuador. Washington Office on Latin America. WOLA

Edwards, Sandra. The U.S. Forward Operating Location in Manta: The Ecuadorian Perspective. Washington Office on Latin America. WOLA.

Edwards, Sandra. Políticas y Prisiones para el Control de Drogas Ilícitas: El Costo Humano WOLA: http://wola.org/media/Ecuador/ddhr_ecuador_memo4_esp.pdf

Embajada de Estados Unidos en Bogotá.: <http://bogota.usembassy.gov/wwwsrbl1.shtml>

Embajada de México. “La Estrategia Nacional para el Control de las Drogas:

http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossier_combDrogas_infgral.htm

Espinosa Carlos. ¿Es Posible una Nueva Política de Narcotráfico en Ecuador? Ponencia para Panel, Delitos Internacionales, 9 de marzo, PLANEX 2006:
http://www.observatoriofronteras.com/publicaciones/es_posible.pdf

Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSS)
<http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-060316-08.htm>

FBI <http://www.fbi.gov/>

García, Berta. “Qué esperamos hoy de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas”, Aportes Para la Paz N° 9, Servicio de Paz y Justicia del Ecuador. Flacso Quito.

Hernández Carlos. 11. Septiembre. 2001: ¿Dramático resultado de la agresiva política exterior estadounidense? <http://www.ucm.es/info/nomadas/5/cshdz.htm>

Informe Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2006 – 2007
http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=225

Informe de Cooperación Internacional 2010
http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=225

International Crisis Group. La droga en América Latina II: Optimizar las Políticas y Reducir los Daños. Informe sobre América Latina N° 26 – 14 de marzo de 2008:
http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/26_la_droga_en_america_latina_ii.ashx

International Narcotics Control Strategy Reporte (INCSR)
<http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/>

Justia US Law "Law Enforcement Illicit Drug Activities."
http://law.justia.com/us/codes/title5a/5a_4_97_1_.htm

Just Facts:
<http://justf.org/Country?country=Ecuador&year1=1996&year2=2008&funding=All+Programs&x=56&y=12>

Kissinger Henry, La Diplomacia. Fondo de Cultura Económica. FLACSO Quito

La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: “Del intervencionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto”.
http://www.redri.org/Archivos_articulos/guerra%20baja%20intensidad-kreibohm.pdf

La Gaceta.

http://www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=13&c_id=70&pg_id=32260

Las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. Oficina de Fiscalización. En:

<http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/fiscalizacion.shtml>

Laufer Jacques. Las Plagas de América. Quito, Caap, Ed. Alejandra Adoum. 1990. En: Política Internacional y Narcotráfico: Acercamiento al caso ecuatoriano. FLACSO Quito

Lucas, Kintto. ECUADOR - El camino del Coronel Mario Pazmiño. En: Alterinfos. En:

<http://www.alterinfos.org/spip.php?article3347>

Lizano Ana. América Latina y la segunda administración Bush: un debate sobre seguridad. Flacso Quito

Ministerio de Coordinación de la Política Económica. Carta de la Ministra King al Comité Empresarial Ecuatoriano. <http://www.wobook.com/WBzj5u66ZJ4q/Carta-A-Roberto-Aspiazu.html>

Montufar Cesar. La seguridad nacional de EE.UU. en el nuevo orden global: de la vinculación y expansión a la seguridad patria y el antiterrorismo N° 5. UASB Quito. 2004.

National Criminal Justice Reference Service: <http://www.ncjrs.gov/>

National Drug Strategy. 1989 En:

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1f/a/a/2b.pdf

Núñez, Jorge. Cacería de Brujos. Drogas “Ilegales” y Sistemas de Cárceles en Ecuador. Quito. Ed. Abya- Yala 2006.

Núñez, Jorge. “Hipertrofia Represiva: La Cuestión Carcelaria en América Latina” En: Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano, otoño, número 012:

<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/520/52001210.pdf>

Núñez, Jorge “Las cárceles en la época del narcotráfico: una mirada etnográfica”. En: Revista Nueva Sociedad. N° 208, marzo-abril de 2007. FLACSO Quito

Oficina Contra La Droga y EL Delito de la ONU. Elementos Orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión.

<http://www.unodc.org/documents/peru/ElementosOrientadores-Peru-June08.pdf>

Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos. El Presupuesto nacional de control de drogas: Informe anual 2001:

<http://www.ncjrs.gov/ondcppubs/policy/strategy/index.html>

ONU. Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes.

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/convention_1961_es.pdf

ONU. Convenio Sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971:

http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf

ONU. Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sicotrópicas de 1988: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

Páez Alexei. “La Inserción ecuatoriana en la dinámica andina del narcotráfico. En: la Economía Política del Narcotráfico: El Caso Ecuatoriano. Quito. Flacso Sede Ecuador. North South Center University of Miami. Bruce Bagley, Adrian Bonilla y Alexei Páez

Pear, Raphael. Drug Control: International Policy and Approaches:

<http://www.usembassy.it/pdf/other/IB88093.pdf>

PhD. Dreyfus Pablo. Cocaine, the Military and Shining Path, 1980-1995:

<http://www.hacer.org/pdf/Dreyfus00.pdf>

Public Broadcasting Service (PBS), Entrevista con el Senador Jim Wright.:

<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/archive/stoppingdrugs2.html>

Ramírez Socorro. La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia. En: El plan Colombia y la internacionalización del conflicto. UASB Quito.

Ramírez, Socorro. Bilateral Topics U.S. Narcotics Control Initiatives in Colombia:

<http://bogota.usembassy.gov/testimony2.html>

Ramos José. La Política de Estados Unidos Hacia el Narcotráfico y La Frontera Norte de México:

[http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN5/4f5_Estados_Unidos_hacia_e
l_narcotrafico.pdf](http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN5/4f5_Estados_Unidos_hacia_el_narcotrafico.pdf)

Registro Oficial No. 239 Miércoles 24 de diciembre de 2003 Decreto N° 1180:

<http://70.84.141.178/~consep/consep.php?c=1369>

RESDAL. Ecuador. Libro Blanco de la Defensa Nacional:

<http://www.resdal.org/Archivo/ecu-libro-cap2.htm>

Revista Fuerzas Armadas y Sociedad Chile. Plan Colombia (extracto): Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado

<http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART411103dd9c243.pdf>

Rivera, Fredy. “Ecuador: los bemoles de la guerra contra las drogas”, en: Youngers, Coletta A., Rosin, Eileen (eds.). Drogas y Democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos. FLACSO Quito.

Rojas Francisco. El Crimen Organizado Internacional: Una Grave Amenaza a la Democracia en América Latina y el Caribe Quito. Flacso. 2006.

Salgado, Manuel. Drogas, terrorismo e insurgencia. Del Plan Colombia a la cruzada libertad duradera. UASB Quito. 2002.

Samuels, Richards. Advice to President Obama:
<http://web.mit.edu/cis/Publications/ObamaAdvice2009.pdf>

Sánchez, Rubén. Aspectos Internacionales de la política contra el narcotráfico en, El narcotráfico en la región andina. Santa Fe de Bogotá, Parlamento Andino/ONUIUNDCP/ octubre 2002.

Sistema de Documentos Oficiales de las Naciones Unidas <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/57/IMG/NR074357.pdf?OpenElement>

The Washington Office on Latin America (WOLA), ¿Peligro inminente? Las FF.AA. de Estados Unidos y la guerra contra las drogas, Tercer Mundo Editores/CEI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Flacso Quito. 1993,

The World Factbook <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html>

U.S. Drug Enforcement Administration. <http://www.justice.gov/dea/agency/domestic.htm>

U.S. Drug Enforcement Administration. Andean Region.
http://www.justice.gov/dea/pubs/international/andean_region.html

U.S. Drug Enforcement Administration Programs Training
<http://www.justice.gov/dea/programs/training/part18.html>

The White House George Bush <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/03/20020323-9.es.html>

Valle, Alex. “Control de drogas en el derecho penal máximo y el derecho penal mínimo.” En: Entre el control social y los derechos humanos Los retos de la política y la legislación de drogas: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/160111/min_justicia/minj_controlsocial_derhumanos.pdf.

Youngers, Coletta A. Collateral Damage: U.S. Drug Control in the Andes. Washington D.C.: WOLA, Drug War Monitor. Youngers, Coletta A., Rosin, Eileen (eds.). Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos. Informe Especial de WOLA Junio 2005. FLACSO Quito

Youngers, Coletta A. “Drogas, narcoterrorismo y relaciones entre Estados Unidos y América Latina”, en: Camacho, Álvaro (ed.), Narcotráfico: Europa, EEUU, América Latina. España: FLACSO Quito

Youngers, Coletta A. " Collateral Damage: U.S. Drug Control in the Andes. Washington D.C.: WOLA, Drug War Monitor":
http://clashumanrights.sdsu.edu/Latin_America/USP.html

Zander Steven. “Military Responses in Nonpolitical Conflicts” En: Challenge and Response: Anticipating U.S. Military Security Concerns. Dr. Karl Magyar (ed):
<http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA421859&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf>

ANEXO I

| |
|--|
| LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION |
|--|

| | |
|---|----------------------|
| Norma: Codificación # 25 | Status: Vigente |
| Publicado: Registro Oficial Suplemento # 490 | Fecha: 27-12-2004 |

H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS

TITULO PRELIMINAR

DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION
Y CARACTERISTICAS DE ESTA LEY

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanen de estas actividades.

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárase de interés nacional la consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes.

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan las autoridades a las que compete su aplicación.

Art. 3.- Ambito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:

1.- El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de esas plantas;

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas,

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a fiscalización;

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas;

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;

5.- La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a fiscalización;

6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje;

7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas;

8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, insumos o precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas;

9.- La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades que mencionan los numerales precedentes, la organización de empresas que tengan ese propósito y la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a posibilitarlas;

10.-Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 127 de 18 de Octubre del 2005.

11.- Las demás actividades conexas con esta materia.

Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.- Esta Ley contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos tipificados en esta Ley y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.

Art. 5.- Connotación especial de términos.- Los términos utilizados por esta Ley, sus anexos y normas secundarias tendrán el alcance que les confieran:

- a) Los convenios internacionales sobre esta materia ratificados por el Ecuador;
- b) Los organismos internacionales creados por los convenios internacionales sobre esta materia; y,
- c) El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.

Las definiciones que adopte el Consejo Directivo se referirán a las que se enuncian en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador o en sus

anexos actualizados.

En caso de duda prevalecerán los términos adoptados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.

Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan incorporadas a esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador.

Art. 7.- Publicación de planes nacionales.- Para la aplicación de la presente Ley se contará con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por el Presidente de la República.

Título Primero

ORGANIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP)

Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley créase, con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine.

Art. 9.- Bienes y recursos.- El CONSEP contará, para su funcionamiento, con los siguientes bienes y recursos:

- 1.- Las asignaciones que obligatoriamente deberán constar cada año en el Presupuesto General del Estado;
- 2.- Los aportes de instituciones oficiales nacionales e internacionales;
- 3.- El producto de las multas impuestas por infracciones a esta Ley;
- 4.- El dinero, títulos, valores y otros bienes comisados o el producto de su enajenación;
- 5.- El producto de las inversiones y los intereses de los dineros aprehendidos o incautados y de los valores de la venta de los bienes muebles e inmuebles objeto de tales medidas; y,
- 6.- Las donaciones, herencias y legados que el Consejo Directivo del CONSEP resuelva aceptar.

Las donaciones de personas privadas serán deducibles del monto gravable sujeto al pago del impuesto a la renta.

Art. 10.- Destino de las multas.- El CONSEP constituirá un fondo con los dineros

de las multas impuestas por infracciones a esta Ley, que será destinado a financiar las actividades de prevención y rehabilitación, conforme a la resolución que adopte el Consejo Directivo.

DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Art. 11.- De la Procuraduría General del Estado.- En relación con esta Ley, al Procurador General del Estado le corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Velar por el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, a cuyo efecto podrá requerir de cualquier autoridad del Estado o adoptar, por su propia iniciativa, las medidas administrativas o las acciones judiciales que sean necesarias;
- b) Dictar regulaciones obligatorias con el fin de coordinar el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de precursores y otros productos químicos especiales; de narcolavado; de prevención y rehabilitación y de otros aspectos relativos a esta Ley, que llevan a cabo las entidades u organismos del sector público o privado con finalidad social, a efecto de evitar la dispersión de recursos y asegurar la eficacia de los planes y proyectos respectivos;
- c) Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo y de los directores nacionales del CONSEP;
- d) Ejercer vigilancia sobre el funcionamiento del CONSEP y demandar del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo de este organismo o de otras autoridades y órganos competentes del Estado, las medidas o acciones que se precisen para establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los trabajadores, empleados, funcionarios, depositarios o contratistas de dicha entidad que sean responsables de infracciones, faltas o perjuicios económicos en el desempeño de sus cargos o actividades;
- e) Gestionar y suscribir, en representación del Estado Ecuatoriano, previa autorización del Presidente de la República, acuerdos o convenios de cooperación económica, científica, técnica o social, con organismos internacionales, públicos o privados, relativos a los fines de esta Ley;
- f) Ejercer la representación oficial del Estado ante los organismos internacionales creados para los fines previstos en esta Ley, delegarla y designar a los funcionarios de la Procuraduría o del CONSEP que deban participar en sus reuniones; y,
- g) Las demás que le asignen esta Ley y sus reglamentos.

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 12.- Del Consejo Directivo del CONSEP.- El Consejo Directivo será el organismo rector de la aplicación de esta Ley.

El Consejo Directivo estará integrado por:

El Procurador General del Estado o el Subprocurador, quien lo presidirá;
El Ministro de Gobierno o su delegado;

El Ministro de Educación y Cultura o su delegado;
El Ministro de Salud Pública o su delegado;
El Ministro de Bienestar Social o su delegado;
El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; y,
El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.
El Consejo Directivo podrá pedir la concurrencia a sus sesiones de delegados de cualquier otro organismo del Estado o invitar a los representantes del sector privado organizado en las áreas de prevención y tratamiento.

Actuará como Secretario del Consejo Directivo el Secretario Ejecutivo del CONSEP.

Art. 13.- Atribuciones del Consejo Directivo.- El Consejo Directivo ejercerá las siguientes atribuciones y funciones:

- 1.- Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y comercialización, para la represión de la producción y del tráfico ilícito y para la rehabilitación de personas afectadas por su uso. El plan será sometido a la aprobación del Presidente de la República;
- 2.- Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas y actividades entre las entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y evaluar su ejecución;
- 3.- Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución y remitirlo para su aprobación al Presidente de la República;
- 4.- Designar comisiones especiales, que informarán sobre sus actividades al Presidente del Consejo Directivo;
- 5.- Aprobar los reglamentos internos;
- 6.- Dictaminar sobre la conveniencia de la suscripción de los convenios internacionales sobre las materias regidas por esta Ley o de la adhesión del país;
- 7.- Autorizar a su Presidente la suscripción de acuerdos y compromisos de cooperación internacional técnica y económica;
- 8.- Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e informar a los organismos correspondientes;
- 9.- Emitir dictámenes de aplicación obligatoria sobre los reglamentos orgánicos o estatutos de cualquier institución u organización que contemplen actividades regidas por esta Ley;
- 10.- Recabar de entidades de los sectores público y privado ayuda específica concerniente al suministro de información o realización de trabajos especiales, relativos al alcance del objetivo y aplicación de esta Ley;
- 11.- Orientar y supervisar las campañas referentes al consumo y tráfico ilícitos de las sustancias sujetas a fiscalización;
- 12.- Resolver sobre la utilización con fines de investigación científica o terapéutica de plantas, productos intermedios o finales de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que hubieren sido aprehendidos o incautados, de acuerdo a la Ley;

- 13.- Autorizar la enajenación de sustancias sujetas a fiscalización de las que disponga el CONSEP a personas o instituciones previamente calificadas;
- 14.- Calificar a las personas naturales o jurídicas que puedan ser autorizadas por la Secretaría Ejecutiva para la importación de sustancias sujetas a fiscalización;
- 15.- Conocer y resolver, en el término máximo de quince días, las consultas sobre las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría Ejecutiva;
- 16.- Expedir el Reglamento para la venta u otras formas de enajenación de los bienes muebles e inmuebles y de los insumos, precursores químicos u otros productos químicos específicos, a que se refiere esta Ley;
- 17.- Aprobar los valores que debe cobrar el CONSEP, por los servicios que proporcione relativos al control de las drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas; por los peritajes que realice o por los trabajos que no sean de carácter administrativo, previstos en esta Ley o en el reglamento. Estos recursos servirán para financiar el funcionamiento del CONSEP.

El control del uso y tenencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes con fines médicos y terapéuticos estará a cargo del Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez";

- 18.- Informar anualmente al Presidente de la República sobre sus actividades;
- y,
- 19.- Las demás que le otorgaren esta Ley y su reglamento.

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Art. 14.- De la Secretaría Ejecutiva, sus funciones y atribuciones.- La Secretaría Ejecutiva será el organismo técnico y operativo del CONSEP y tendrá las siguientes funciones y atribuciones, que ejercerá en coordinación con los otros organismos y autoridades encargados de la aplicación de esta Ley:

- 1.- Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamentos;
- 2.- Programar campañas encaminadas a obtener mayor eficiencia en la aplicación del plan nacional y supervisar su ejecución;
- 3.- Preparar el anteproyecto de presupuesto y remitirlo oportunamente al Consejo Directivo para el trámite pertinente;
- 4.- Administrar los recursos y los bienes del CONSEP, de acuerdo con las leyes y reglamentos;
- 5.- Requerir, recopilar y procesar los datos e informaciones sobre cultivo de plantas, producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incurso en los ilícitos determinados, movimiento y tráfico de esas sustancias y otras informaciones previstas por esta Ley y los convenios internacionales; preparar y mantener registros; organizar y conservar actualizado un archivo general que sistematice la información, que será mantenida bajo reserva; elaborar estadísticas, proyecciones y previsiones con esos datos; solicitar y suministrar información a los jueces y fiscales competentes y a los organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados con esta materia, e intercambiarla en el

- caso de datos estadísticos e informaciones para investigación;
- 6.- Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso indebido de las sustancias fiscalizadas que se realicen a nivel nacional, para que se ejecuten con sujeción al plan nacional;
 - 7.- Importar, previa autorización del Consejo Directivo, sustancias sujetas a fiscalización, que, de conformidad con los convenios internacionales, sean reservadas para el Estado, a fin de mantenerlas como existencias normales y especiales y para su venta a hospitales, centros médicos, laboratorios y farmacias;
 - 8.- Expedir informe previo favorable para que el Banco Central del Ecuador pueda conceder permisos o certificados de importación o exportación de las sustancias sujetas a fiscalización;
 - 9.- Conceder autorizaciones y licencias para la producción de precursores u otros productos químicos específicos, según las definiciones de los anexos de esta Ley, o de drogas o preparados de uso terapéutico que, en sus fórmulas, contengan sustancias sujetas a fiscalización;
 - 10.- Fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan y, en caso de que se registren faltantes, enviar el acta de fiscalización al Fiscal competente;
 - 11.- Inscribir, previa la respectiva calificación, a los profesionales que soliciten la entrega de recetas especiales para prescribir sustancias estupefacientes o psicotrópicas o drogas que las contengan, y controlar las correspondientes recetas en las farmacias donde hayan sido despachadas y el archivo final de los talonarios devueltos a la Secretaría Ejecutiva por los profesionales, con las comprobaciones del caso;
 - 12.- Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para recomendar al Consejo Directivo y al Gobierno Nacional la adopción de medidas encaminadas a lograr su eliminación o atenuación;
 - 13.- Elaborar informes periciales en las causas por infracciones previstas por esta Ley;
 - 14.- Colaborar con la Función Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y sus organismos especializados, el Servicio de Vigilancia Aduanera y sus dependencias o repartos, para el esclarecimiento de infracciones previstas por esta Ley;
 - 15.- Actuar como depositaria de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, incautación y comiso e intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hayan sido objeto de aprehensión, incautación y comiso;
 - 16.- Coordinar la capacitación de servidores públicos y personal de entidades privadas calificadas para el ejercicio de actividades de prevención y rehabilitación; y,
 - 17.- Las demás que le otorgaren la Ley o su reglamento.

Art. 15.- Del Secretario Ejecutivo.- El Secretario Ejecutivo, que será el representante legal del CONSEP, tendrá a su cargo la dirección técnica, la gestión administrativa de la Secretaría Ejecutiva y la coordinación con las demás instituciones encargadas del cumplimiento de esta Ley.

El Secretario Ejecutivo nombrará a los servidores del CONSEP o contratará personal temporario, dentro de los límites contemplados en la Ley y su presupuesto. Para designar directores departamentales, requerirá la autorización previa del Presidente del Consejo Directivo.

El Secretario Ejecutivo ejercerá, por sí o por delegación, la jurisdicción coactiva para recaudar créditos y multas.

Art. 16.- Designación y requisitos.- El Secretario Ejecutivo será elegido por el Consejo Directivo, previa terna presentada por su Presidente. Deberá ser ecuatoriano por nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad, tener formación o títulos académicos de nivel superior, y acreditar probidad notoria y experiencia en actividades vinculadas con materias afines a las de esta Ley. No podrá ejercer su profesión, tener otro empleo o intervenir como candidato en contiendas electorales.

El Secretario Ejecutivo será removido libremente por el Consejo Directivo.

Título Segundo DE LA PREVENCIÓN

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley.

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio en general deberán participar activamente en las campañas de prevención.

Art. 19.- Lugares de residencia, trabajo o reunión colectiva.- Los propietarios, administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva y los empleadores que tengan un personal permanente de más de diez trabajadores observarán los instructivos expedidos por el CONSEP sobre propaganda e información preventiva.

Art. 20.- Obligación de información.- Los propietarios, administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva comunicarán al agente policial o a la oficina más cercana del CONSEP la existencia de circunstancias que hagan presumir la presencia en el interior o alrededor de esos lugares de núcleos de consumo o la práctica de actos de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas.

Art. 21.- Agencias y operadores turísticos.- Las agencias y operadores turísticos observarán en sus actividades las instrucciones que el CONSEP expida dentro del plan y programa de prevención.

Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborará con los programas de control y prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta Ley. Colaborarán de manera especial en la protección del menor que se encuentre expuesto al tráfico o consumo indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 23.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables de actos culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan una vida sana y contribuyan a la erradicación del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas preventivos de orientación e información tendientes a eliminar el uso de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 24.- Control de actividades deportivas.- El Consejo Nacional de Deportes, la Federación Deportiva Nacional, las federaciones deportivas provinciales y sus filiales controlarán e impedirán en las actividades que dirigen el uso de drogas u otras sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 25.- Medios de comunicación colectiva.- Los medios de comunicación colectiva contribuirán a las campañas de prevención, especialmente a las de carácter informativo, en la forma que determinen conjuntamente la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y la Secretaría de Comunicación.

Art. 26.- Prohibición.- Prohíbese la producción, circulación y venta de carteles, afiches, adhesivos, calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier

tipo de grabación que sugieran, ensalcen o induzcan al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Título Tercero

DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y DE LA REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS

Art. 27.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.- Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico.

Art. 28.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias.

Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado.

El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Art. 29.- Casos de menores y extranjeros.- Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Juez de la Niñez y Adolescencia de la respectiva jurisdicción.

Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley de Inmigración y Extranjería, sus reglamentos e instructivos, serán expulsados del país, luego de concluido el tratamiento emergente, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley, al día siguiente de haber concluido el tratamiento emergente.

Art. 30.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.

Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización hubiere sido conducida a un centro de detención, el Director o funcionario responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas siguientes a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al Juez de la Niñez y

Adolescencia, si se tratare de un menor de edad, o a la oficina más cercana de la Dirección de Migración, si se tratare de un extranjero.

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva jurisdicción.

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.

Art. 32.- Información sobre casos.- Los directores de hospitales, clínicas y otros centros de salud en los cuales se trate a personas afectadas por el uso de sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP sobre las actividades cumplidas por el servicio especializado y el número y características de los casos tratados.

Art. 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo Directivo del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de sustancias sujetas a fiscalización que se presenten en determinadas zonas del país, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración económica del CONSEP, creará casas asistenciales o secciones especializadas, con adecuado personal en las ya existentes, en los lugares que estimare adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito.

Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP en la forma prevista por el inciso tercero del artículo 28 y estarán sujetos a su vigilancia y control.

Art. 34.- Solicitud de tratamiento.- La asistencia médica a las personas dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus representantes legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio Público, el Juez de la Niñez y Adolescencia correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan el caso.

Art. 35.- Derecho a trabajo.- Las personas afectadas por el uso de sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido rehabilitadas, según certificación de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, y que presentaren solicitudes de trabajo a entidades públicas o privadas, tendrán el mismo tratamiento, en igualdad de condiciones, que los demás aspirantes.

La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y

Remuneraciones del Sector Público o la Dirección General de Trabajo y Recursos Humanos, en sus campos de actividades respectivos, vigilarán el cumplimiento de la norma prevista en el inciso precedente.

Título Cuarto

DEL CONTROL DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION

Art. 36.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales puedan extraerse sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbese la siembra o cultivo de la adormidera o amapola (*Papaver somniferum* L.), de las papaveráceas, del arbusto de coca (*Erythroxylon coca*), de las erytroxyláceas, de la marihuana (*Cannabis sativa* L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización. La denominación de estas plantas será incluida por el Consejo Directivo del CONSEP en el respectivo anexo de esta Ley.

Asimismo será prohibida la recolección, almacenamiento, transporte o utilización de esas plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.

Art. 37.- De la elaboración, producción, fabricación y distribución de sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbese toda forma de elaboración, producción, fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier acto o proceso que tienda a ese fin.

La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de uso terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, solo podrán ser efectuadas por laboratorios o empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.

Los laboratorios o empresas que deseen elaborar medicamentos y otros productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, para concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante.

Los laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia y venta de los preparados antes señalados.

Prohíbese la distribución de muestras de esos preparados.

Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito de ellas.

Art. 39.- Restricciones sobre importación de sustancias sujetas a fiscalización o drogas que las contengan.- Prohíbese la importación de las sustancias sujetas a fiscalización que no tengan uso terapéutico o fines de investigación, según las resoluciones del Comité de Expertos en Fármacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o uso científico o industrial, conforme a la calificación legal.

Sólo podrán importarse las drogas y preparados susceptibles de uso terapéutico previa autorización escrita concedida, para cada caso, por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y demás organismos previstos en esta Ley, con determinación del peso y la concentración de las sustancias sujetas a fiscalización. La autorización caducará después de seis meses de la fecha de su otorgamiento.

Art. 40.- Requisitos para trámite de importación, exportación o entrega de sustancias sujetas a fiscalización.- Los funcionarios del Banco Central del Ecuador no tramitarán los certificados o permisos de importación o exportación de sustancias sujetas a fiscalización o de drogas que las contengan, si los interesados no presentan la autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP.

Los funcionarios o empleados aduaneros y de las oficinas postales, navieras, aéreas o de cualquier otro medio de transporte, o personas que de cualquier modo dependan de ellos, no podrán entregar, retirar ni autorizar el retiro de sustancias sujetas a fiscalización y de drogas o preparados que las contengan y que se hayan importado sin la respectiva autorización escrita de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP.

Si las sustancias ingresadas al país o que estuvieren por egresar no se ajustaren con exactitud a los términos de identificación, cantidad, peso y concentración determinados en la referida autorización, o si ésta apareciere alterada, falsificada o no existiere, los funcionarios y empleados a los cuales se refiere el inciso precedente retendrán las sustancias y los bultos o paquetes que las contengan y, dentro de las siguientes veinte y cuatro horas, con el informe y documentos respectivos, los entregarán a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y suscribirán la correspondiente acta de entrega recepción.

Si el hecho constituye delito, los funcionarios correspondientes darán inmediato aviso, acompañando antecedentes, a uno de los funcionarios del Ministerio Público, para que dé inicio a la indagación previa, y, de encontrar méritos, resolver la apertura de la instrucción fiscal.

Art. 41.- Cultivo, importación, exportación o elaboración autorizada.- El Consejo Directivo del CONSEP autorizará por escrito el cultivo de plantas o la elaboración, importación o exportación de sustancias sujetas a fiscalización a instituciones científicas de los sectores público o privado, que lo soliciten motivadamente con fines exclusivos de investigación, experimentación o adiestramiento de personal encargado de control, represión o rehabilitación.

En la autorización se especificará las plantas o sustancias requeridas, sus características cuantitativas y cualitativas y su destino.

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP controlará la utilización de esas autorizaciones.

Art. 42.- Venta de sustancias sujetas a fiscalización que puede realizar la Secretaría.- La Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrá vender a laboratorios, centros asistenciales, boticas y farmacias u otras empresas que ofrezcan la suficiente garantía técnica y moral las sustancias sujetas a fiscalización según las normas de esta Ley. Realizará cada una de las ventas en las cantidades que previamente se justificaren como necesarias para la elaboración de drogas y preparados terapéuticos y para tratamiento médico o fines científicos e industriales.

Art. 43.- Requisitos para la venta al público.- Las sustancias sujetas a fiscalización y las drogas o preparados que las contengan sólo se venderán en los establecimientos autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, previa calificación de la solvencia moral y técnica de sus propietarios y responsables. Se llevará un registro actualizado de esos establecimientos.

La venta se realizará únicamente por prescripción en recetarios especiales hecha por un profesional facultado por el Código de la Salud e inscrito en el registro de la Dirección Provincial de Salud y del CONSEP. Para obtener la inscripción, el profesional deberá presentar su título en la Dirección Provincial de Salud respectiva, que le conferirá el registro a menos que haya sido sentenciado como culpable de alguna de las infracciones reprimidas por esta Ley.

Art. 44.- Autorizaciones.- La Secretaría Ejecutiva del CONSEP autorizará la producción, venta, importación y exportación de insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos, preparados o derivados, previa calificación de los productores, vendedores, importadores o exportadores, efectuada por el Consejo Directivo. Deberá fijar las cantidades y características de los productos a los que se refiere la autorización.

Art. 45.- Caducidad de recetas.- Las recetas o prescripciones en que se ordene el despacho de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de drogas o preparados terapéuticos que las contengan caducarán a las setenta y dos horas de su expedición. En consecuencia, no podrán ser despachadas luego de ese lapso.

Art. 46.- Registros de existencias, consumo y ventas de sustancias sujetas a fiscalización.- Los hospitales, clínicas, farmacias, boticas y droguerías que adquieran a la Secretaría Ejecutiva sustancias estupefacientes o psicotrópicas y drogas o preparados que las contengan, o que las importen a través de ella o directamente, llevarán un registro actualizado de existencias, consumo y ventas, y un archivo especial en el que se guardarán, debidamente numeradas y por orden cronológico, las recetas en que se ordene el despacho. Las recetas serán enviadas trimestralmente, para las comprobaciones del caso, a la Secretaría Ejecutiva, que deberá conservarlas por un período de diez años, sea en archivo o mediante el uso de microfilm o procesos similares.

Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública o de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrán verificar, en cualquier tiempo, los mencionados requisitos y archivos.

Art. 47.- De la oferta, distribución, venta o colocación, suministro o entrega no autorizada.- Prohíbese la oferta en general, la oferta para la venta, la colocación, el suministro, la distribución y la entrega de sustancias sujetas a fiscalización en cualesquiera condiciones, cuando no estuvieren autorizadas por esta Ley y por los organismos competentes.

Art. 48.- Del corretaje o intermediación en la negociación.- Prohíbese toda forma de corretaje o intermediación en la negociación de sustancias sujetas a fiscalización y su adquisición, excepto en los casos de comercialización expresamente contemplados en esta Ley.

Art. 49.- Restricciones para el envío, exportación y transporte de sustancias.- Solo el CONSEP, previa calificación, podrá autorizar actividades u operaciones de envío o remisión en general, envío en tránsito, exportación o transporte de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 50.- Mención obligatoria en envases o anexos.- En las etiquetas o, en todo caso, en las notas o folletos explicativos que acompañen a los envases de fármacos, drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización se deberá hacer constar, en forma notoria, este particular y las advertencias que sean necesarias para la seguridad del usuario.

Art. 51.- Del transporte de sustancias.- Prohíbese a las personas naturales o jurídicas que no hubieren sido previamente calificadas y autorizadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP el transporte de sustancias sujetas a fiscalización, por cualquier medio o sistema de transporte.

Art. 52.- Del facilitamiento de bienes para la realización de actividades de cultivo, producción, almacenamiento o transporte ilícitos.- Prohíbese la venta, arrendamiento, entrega en anticresis, préstamo o cualquier forma de facilitamiento de bienes, a sabiendas o con razonables y coincidentes indicios de que van a ser dedicados a actividades de cultivo, producción, fabricación, almacenamiento o transporte o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización.

Asimismo, prohíbese la elaboración, fabricación, transporte o distribución de equipos, materiales o insumos utilizables en el cultivo, la producción o transporte ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización realizadas a sabiendas de que van a ser utilizados en esos fines, o ante razonables y coincidentes indicios de que aquello vaya a ocurrir.

Art. 53.- De la conversión, transferencia, encubrimiento, ocultamiento o tenencia de bienes procedentes de actividades ilícitas.- Prohíbese la conversión o la transferencia de bienes con el fin de encubrir u ocultar su origen ilegítimo procedente del cultivo, producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 54.- De la organización, gestión o financiación de actividades de cultivo, producción y tráfico ilícito.- Prohíbese la organización, la gestión o la financiación de actividades tanto de cultivo de las plantas a las que se refiere esta Ley como de elaboración, producción, fabricación y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Prohíbese, asimismo, la organización, gestión o financiación, con conocimiento, de actividades previas, complementarias o subsidiarias de las señaladas en el inciso precedente.

Art. 55.- De la instigación a realizar actividades de cultivo, producción, uso o tráfico ilícito.- Prohíbese inducir, incitar, instigar o promover, por cualquier medio, la realización de actividades de cultivo de plantas, elaboración, producción o fabricación, uso o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, o de actuaciones complementarias o subsidiarias de aquellas, o a la asociación o confabulación para ejecutarlas.

Título Quinto DE LAS INFRACCIONES Y LAS PENAS

Art. 56.- De las infracciones a esta Ley.- Son infracciones a la presente Ley los actos punibles sancionados por ella. Se dividen en delitos de acción pública y contravenciones.

Capítulo Primero DE LOS DELITOS

Art. 57.- Sanción para la siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a fiscalización.- Quienes siembren, cultiven, cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta Ley y cualesquiera otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, según se determina en los anexos a esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Quienes recolecten plantas de las variedades determinadas en esta Ley serán sancionados con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 58.- Sanción para la elaboración, producción, fabricación o preparación.- Quienes extraigan, purifiquen, cristalicen, recristalicen, sintetizen o por cualquier forma o procedimiento elaboren, produzcan, fabriquen, preparen o envasen sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o infringiendo las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 59.- Sanción para la oferta, corretaje o intermediación.- A quienes se les sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias sujetas a fiscalización, o a quienes realicen el corretaje o intermediación en la negociación de ellas, se les sancionará con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 60.- Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a cualquier título, de dichas sustancias, realizada en contravención a los preceptos de esta Ley.

Art. 61.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No serán responsables los transportistas que desconocieren el contenido de la carga transportada.

Art. 62.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 63.- Calificación de la persona dependiente.- El estado de dependencia de una persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere.

Art. 64.- Administración indebida.- Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras personas cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a fiscalización o medicamento que las contenga, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la persona hubiere consentido; y, con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales, si no hubiere consentido. Se presume de derecho la falta de consentimiento del menor de edad o del incapaz absoluto.

Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas causare incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta días, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales, si esa incapacidad o enfermedad

superare el lapso mencionado, la pena será de nueve a doce años de reclusión menor extraordinaria y multa de cuarenta y cinco a seis mil salarios mínimos vitales generales. Si provocare la incapacidad o enfermedad permanente o la muerte de la persona, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 65.- Administración a deportistas.- Quien administre a un deportista, profesional o aficionado, o lo induzca a usar sustancias estupefacientes o psicotrópicas, drogas u otros preparados que las contengan, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

Si el deportista consiente en ello será sancionado con igual pena.

Art. 66.- Destinación de bienes para depósito o consumo.- Quienes, fuera de los casos autorizados en esta Ley, destinaren bienes inmuebles o muebles para que en ellos se cultiven, produzcan, fabriquen, trafiquen y mantengan en depósito, o por cualquier concepto suministren o administren sustancias sujetas a fiscalización o plantas de las que se puedan extraer, serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 67.- Receta injustificada.- El profesional que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.

Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz absoluto, la pena será de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

En caso de reincidencia, será además privado definitivamente del ejercicio profesional.

Art. 68.- Falsificación, forjamiento o alteración de recetas.- Quien falsifique, forje o altere recetas médicas o las utilice con el fin de procurarse sustancias sujetas a fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 69.- Despacho indebido.- El propietario, administrador o empleado de

droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos que despache sustancias sujetas a fiscalización o preparados que las contengan, sin receta o con recetas caducadas o falsificadas, forjadas o alteradas, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales y clausura definitiva del establecimiento. En caso de ser profesional, será además privado definitivamente de su ejercicio.

Art. 70.- Producción, mantenimiento y tráfico de precursores u otros productos químicos específicos.- Quienes sin las autorizaciones y requisitos previstos por esta Ley mantengan, elaboren, fabriquen, produzcan o transporten precursores u otros productos químicos específicos destinados a la elaboración de sustancias sujetas a fiscalización o trafiquen con ellos, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 71.- Faltante de precursores.- Los propietarios o responsables de establecimientos o empresas autorizados para elaborar, mantener o comercializar precursores u otros productos químicos específicos en los que se determine faltantes injustificados en sus existencias, serán reprimidos con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 72.- Tenencia o mantenimiento de materias primas o insumos para uso ilícito.- Quienes mantengan bajo su tenencia o cuidado materias primas, insumos, precursores u otros productos químicos específicos a sabiendas de que serán utilizados en la siembra, cultivo, producción, elaboración o fabricación ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

Art. 73.- Enriquecimiento ilícito.- La persona respecto de quien existan presunciones de que es productor o traficante ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de precursores u otros productos químicos específicos o se halle involucrado en otros delitos previstos por esta Ley, y que directamente o por persona interpuesta realice gastos o aumente su patrimonio o el de un tercero en cuantía no proporcionada a sus ingresos sin justificar la legalidad de los medios empleados para efectuar esos gastos u obtener el incremento patrimonial, será sancionado con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria.

Art. 74.-Nota: Artículo derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 127 de 18 de Octubre del 2005.

Art. 75.- Represión a testaferros.- Quien preste su nombre o el de la empresa en que participe para adquirir bienes con recursos provenientes de delitos sancionados por esta Ley, será reprimido con pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 76.- Sanción a servidores públicos que permitan o procuren la impunidad.- El servidor público, el agente de la Fuerza Pública, el auxiliar de la Administración de Justicia, el Juez o miembro del Tribunal Penal, el Agente o Ministro Fiscal que altere u oculte pruebas de los delitos tipificados en esta Ley con el fin de favorecer a los responsables, será sancionado con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

En caso de evasión de los detenidos o presos por delitos contemplados en esta Ley, los funcionarios y empleados encargados de guardarlos, conducirlos o vigilarlos, serán reprimidos con las penas enunciadas en el inciso precedente.

Los condenados quedarán permanentemente inhabilitados para desempeñar funciones o cargos públicos.

Art. 77.- Cohecho.- Quien intente cohechar a quien conoce o juzga uno de los delitos reprimidos por esta Ley o a la autoridad o agente de ella que lo investiga, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Si se consuma el cohecho, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales, tanto para quien lo propuso como para quien lo aceptó.

Art. 78.- Intimidación.- Quien amenazare causar daño a la persona, familiares o bienes de quienes conocen, investigan en cualquier fase o juzgan uno o más delitos tipificados en esta Ley, será reprimido con reclusión ordinaria de cuatro a seis años y multa de cuarenta a dos mil salarios mínimos vitales generales.

Si se consuma la intimidación, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de cien a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Los actos administrativos o judiciales que sean consecuencia del cohecho o intimidación comprobados son nulos y sin ningún valor. El Juez que conozca el juicio sobre el cohecho o la intimidación declarará la nulidad al momento de resolver la causa.

Art. 79.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.- Quien ponga sustancias sujetas a fiscalización en las ropas o bienes de una persona, con el objeto de involucrarla en alguno de los delitos sancionados por esta Ley, o realice alguna otra acción tendiente a dicho fin o disponga u ordene tales hechos, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Si quien incurre en las acciones tipificadas en el inciso precedente fuere autoridad, servidor público o fingiere cumplir órdenes de autoridad competente, la pena será de reclusión mayor ordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 80.- Intimidación o extorsión con la amenaza de involucrar en delitos.- Quien, en cualquier forma o por cualquier medio, intimide o extorsione a una o varias personas con la amenaza de involucrarlas en delitos reprimidos por esta Ley, forjando hechos falsos o agravando los que se hubieren producido, será sancionado con cuatro a ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 81.- Organización, gestión o financiamiento de actividades delictivas.- Quien organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos previstos por esta Ley como delitos, será sancionado con la pena mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 82.- Promoción de delitos.- Quien instigue, incite o induzca a cometer cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley, será sancionado con un cuarto de la mitad de la pena que se impusiere al autor o autores del delito principal.

Art. 83.- Comiso especial.- Además de las penas establecidas en este capítulo, el Juez dispondrá el comiso especial:

- a) De los bienes muebles e inmuebles, útiles, sustancias y objetos de laboratorios en los que se ejecuten las actividades ilícitas señaladas en este capítulo, cuando su dueño participe, las permita, dirija, financie u organice, o si son resultado de actividades ilícitas sancionadas por esta Ley;
- b) De los medios de transporte que hubieren sido utilizados para movilizar sustancias sujetas a fiscalización, siempre que se comprabare que los propietarios son responsables de su transporte o hubieren utilizado o permitido dicha movilización; y,
- c) Del dinero aprehendido y del que tuvieren los encausados en cuentas corrientes de instituciones bancarias y de ahorro, de títulos valores e

instrumentos de libre conversión y curso legal como cheques, cheques de viajeros, títulos al portador, bonos, giros postales o, en general, cualquier documento negociable, cuando sean el producto de las infracciones tipificadas en esta Ley.

El destino de estos bienes será el determinado en esta Ley.

Art. 84.- Producción o comercialización de bienes determinados en el artículo 26.- Quien produzca o comercialice carteles, afiches, adhesivos, calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier tipo de grabación que sugieran, ensalcen o induzcan al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales y el comiso de dichos bienes.

Art. 85.- Atenuantes.- Para efectos de la aplicación de las penas previstas en esta Ley se consideran circunstancias atenuantes:

- a) Ser menor de veinte y un años de edad;
- b) Haber actuado por presiones, amenazas o bajo violencia superables;
- c) Rusticidad del infractor de tal naturaleza que revele que cometió el ilícito por ignorancia;
- d) Indigencia; y,
- e) Las demás contempladas en el Código Penal.

Art. 86.- Atenuante trascendental.- Quien hallándose implicado en infracciones previstas por esta Ley suministrarle a la Policía Nacional, Ministerio Público o jueces competentes datos e informaciones precisas, verdaderas y comprobables, que condujeren a descubrir presuntos culpables de ilícitos previstos en ella, sancionados con pena igual o mayor que la contemplada para la infracción por la que se le juzga, será reprimido con un tercio a la mitad de la pena modificada por las atenuantes establecidas en el artículo precedente, en caso de haberlas, o de la que le correspondería en ausencia de ellas.

Art. 87.- Concurrencia de infracciones y acumulación de penas.- En caso de concurrencia de varias infracciones contempladas en esta Ley, se acumularán las penas determinadas para cada una de tal manera que la pena acumulada aplicable sea el resultado de la suma de las penas correspondientes a cada infracción, hasta un máximo de veinte y cinco años.

Igual acumulación de penas se aplicará cuando concurran infracciones a esta Ley con otras que tuvieren alguna conexión, o cuando se hubieren consumado los delitos previstos en los artículos 77 y 78.

Art. 88.- Prescripción de la acción y de la pena.- La acción penal por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de veinte y cinco años. El referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha de la resolución de instrucción fiscal.

La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor de cinco años.

Capítulo Segundo

DE LAS CONTRAVENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU JUZGAMIENTO

Art. 89.- De las contravenciones.- Son contravenciones las violaciones a preceptos de esta Ley no reprimidas con penas de privación de la libertad. Serán sancionadas con multa, suspensión temporal de funciones o de permiso para operar, clausura del establecimiento, cancelación o destitución y comiso.

Art. 90.- Incumplimiento de obligaciones generales.- Serán sancionadas con multa de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas de derecho privado que incumplan las obligaciones señaladas en los artículos: 2, inciso segundo; 32, 35, 37, inciso tercero, y 40. La reincidencia en la falta dará lugar a la suspensión temporal de funciones o de permiso para operar. La reiteración durante los doce meses siguientes se sancionará con destitución o cancelación o, en su caso, la clausura del establecimiento.

Si el sancionado fuere servidor público, en caso de reincidencia o reiteración será destituido por la respectiva autoridad nominadora, a petición del Secretario Ejecutivo del CONSEP.

Art. 91.- Empresas u organizaciones que no cumplan las normas sobre difusión de avisos o publicaciones.- Serán reprimidos con multa de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales los responsables de empresas, residencias colectivas y ambientes especiales que incumplan las obligaciones establecidas en los artículos 19 y 20.

En caso de reincidencia, la multa será duplicada.

Art. 92.- Entrega de fármacos sin observancia de requisitos.- Con pena igual que la contemplada en el artículo precedente serán reprimidos los responsables de hospitales, clínicas y farmacias, boticas y droguerías que incumplan cualquiera de las obligaciones contempladas en el artículo 46 de la presente Ley.

Art. 93.- Expedición de recetas con infracción de los requisitos previstos por la Ley.- Serán sancionados con multas de cinco a cien salarios mínimos vitales generales los profesionales que expidan recetas de fármacos que contengan sustancias sujetas a fiscalización, siempre que no constituya delito de mayor gravedad, sin estar inscritos en la Dirección de Salud o sin utilizar los formularios especiales que disponga el reglamento.

En caso de reincidencia, serán eliminados del registro de profesionales que pueden expedir esas recetas.

Art. 94.- Elaboración, distribución o venta de drogas o preparados.- Los laboratorios u otras empresas que en la elaboración, distribución o venta de drogas u otros preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización incumplan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados con multa de cien a quinientos salarios mínimos vitales generales, siempre que no constituya un delito de mayor gravedad.

La reincidencia en las infracciones a que se refiere el inciso precedente se sancionará con multa de doscientos a mil salarios mínimos vitales generales y la clausura definitiva del laboratorio o empresa correspondiente.

Art. 95.- Propietarios o responsables de establecimientos en que se despache sin receta válida.- Los propietarios, representantes legales o responsables técnicos de establecimientos farmacéuticos en que se haya despachado más de tres veces sin receta previa, con recetas caducadas o de profesionales no autorizados, drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados con multa de veinte a cien salarios mínimos vitales generales, si no fueren responsables de un delito sancionado con pena mayor.

La reincidencia será sancionada con multa de cuarenta a doscientos salarios mínimos vitales generales.

La persistencia en la conducta señalada en el inciso primero se sancionará con multa de doscientos a quinientos salarios mínimos vitales generales y clausura del establecimiento.

Art. 96.- Faltantes o excedentes de sustancias.- Si en las farmacias, boticas o droguerías autorizadas para vender al público sustancias sujetas a fiscalización se comprobare faltantes o excedentes en las existencias de ellas, o de preparados que las contengan, los propietarios de esos establecimientos, sus representantes legales y responsables técnicos serán sancionados con multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos vitales generales, a menos que la

diferencia fuere tan pequeña que pudiera imputarse a errores de los que suelen ocurrir en pesajes o mediciones o a las características de estabilidad de la fórmula farmacéutica correspondiente y cuya tolerancia máxima se establecerá en forma tabular en el reglamento de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de la pena correspondiente a los delitos de los que fueren responsables.

La reincidencia será sancionada con el doble de la mencionada multa y la clausura temporal del establecimiento por un período de hasta noventa días.

Si se persistiere en esa conducta, el establecimiento será clausurado en forma definitiva y los preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización serán comisados, sin perjuicio de las penas aplicables a los delitos que hubieren cometido los propietarios o responsables de esos establecimientos.

Art. 97.- Autoridades deportivas.- Serán sancionados con multa de cien a quinientos salarios mínimos vitales generales y destitución de sus cargos, o con una de estas penas solamente, los representantes legales de la Federación Deportiva Nacional, de las federaciones nacionales por deporte, de las federaciones deportivas provinciales y sus filiales o dependencias afines que incumplan negligente o dolosamente la obligación constante en el artículo 24.

Art. 98.- Responsabilidad solidaria.- Si las multas por contravenciones se impusieren a establecimientos, empresas o personas jurídicas de derecho privado, sus representantes legales, propietarios o administradores serán solidariamente responsables del pago.

Art. 99.- Del procedimiento para su juzgamiento.- Las contravenciones tipificadas en esta Ley serán juzgadas por los jueces de contravenciones de la respectiva jurisdicción, con sujeción a las normas aplicables a las contravenciones de cuarta clase previstas en el Libro V del Código de Procedimiento Penal.

Art. 100.- En todos los procesos penales relativos a esta Ley, el Procurador será notificado con la resolución de instrucción fiscal y con todas las demás providencias y resoluciones que se dicten.

Título Sexto

DE LAS ACTUACIONES PREPROCESALES, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

DE LA RETENCION, APREHENSION E INCAUTACION DE BIENES

Art. 101.- Retención.- Si por cualquier modo llegare a conocimiento del CONSEP

el ingreso al territorio nacional de una nave aérea, marítima, fluvial o de cualquier otro medio de transporte comercial en el que se movilizaren sustancias cuyo tráfico se encuentre prohibido en esta Ley, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrá disponer la retención de los medios de transporte y la aprehensión de las sustancias mientras se realiza la investigación. La retención no excederá de tres días.

Art. 102.- Aprehensión.- La Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos especializados, tendrá a su cargo el control e investigación de los delitos tipificados en esta Ley, el descubrimiento y detención de los infractores, la entrega vigilada de bienes o sustancias sujetas a fiscalización y la aprehensión inmediata de:

- a) Sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización, cualquiera sea su estado, y las plantas de las que pueda extraérselas;
- b) Equipos, laboratorios, precursores y otros productos químicos específicos, y de otros medios destinados a la producción o fabricación de las sustancias sujetas a fiscalización;
- c) Bienes y objetos empleados para el almacenamiento y conservación de sustancias sujetas a fiscalización, y de los vehículos y más medios utilizados para su transporte;
- d) Dinero, valores, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales y más bienes que se estime que son producto de la comisión de los actos tipificados en esta Ley.

La Policía Nacional, para cumplir los fines señalados en este artículo, podrá realizar todas las investigaciones documentales, de laboratorio o cualquier otra de naturaleza técnico - científica.

Art. 103.- Identificación y depósito de bienes aprehendidos.- Quienes procedieren a la aprehensión a la que se refiere el artículo precedente, identificarán en su totalidad los bienes muebles e inmuebles, sustancias, dineros, valores, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales; y al presunto o presuntos propietarios, en actas separadas, que remitirán al Fiscal competente dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. El Fiscal, al dictar la resolución de instrucción fiscal, ordenará el depósito de todo lo aprehendido en el CONSEP, así como de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores y otros productos químicos específicos. Estos bienes y materiales estarán a las órdenes del Fiscal competente para la verificación de la prueba material de la infracción.

Esta norma legal no comprende a los narcodependientes o consumidores que hubieren sido capturados en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas destinadas para su propio consumo. Estas personas serán consideradas enfermas y sometidas a tratamiento de rehabilitación. Esta norma, por su carácter de especial, tendrá efecto retroactivo.

Art. 104.- Venta en pública subasta de bienes aprehendidos.- El Tribunal o la correspondiente Sala del fuero, al dictar sentencia condenatoria definitiva, dispondrá la venta de los bienes inmuebles de propiedad de los autores, cómplices y encubridores de las infracciones previstas en esta Ley, que los hubieren utilizado en la comisión del delito u obtenido como consecuencia de los mismos o que los hubieren tenido en posesión con estos fines.

Esta venta se realizará en pública subasta, con sujeción al reglamento que expedirá el Consejo Directivo del CONSEP.

Para el perfeccionamiento de la venta se requerirá de informe favorable de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado, dentro de los límites previstos en la Ley de Contratación Pública.

Art. 105.- Informe pericial.- Previamente a la realización de la venta de cualquiera de los bienes a que se refiere el artículo precedente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP solicitará a una de las universidades o escuelas politécnicas del país que designe peritos especializados para cada caso que sea necesario y a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC, de tratarse de inmuebles, para que efectúen el avalúo correspondiente. Entre otros factores, este avalúo tendrá en cuenta el valor actual de dichos bienes en el mercado.

Art. 106.- Venta de bienes muebles o perecibles.- Los bienes muebles o perecibles podrán ser vendidos por el CONSEP, antes de que se dicte sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento que expedirá el Consejo Directivo de este organismo. Con los dineros, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales u otros valores se formará un fondo, cuyos intereses e inversiones corresponderán, por partes iguales, a la Procuraduría General del Estado, Policía Nacional, CONSEP, Dirección Nacional de Rehabilitación Social e Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA).

Ejecutoriada la sentencia absolutoria o condenatoria de los imputados, se procederá de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Art. 107.- Destino de los fondos.- Ejecutoriada la sentencia condenatoria dictada en contra de los imputados que hubiesen sido propietarios de los bienes muebles e inmuebles que se vendieren, los valores depositados en el Banco Central del Ecuador por concepto de su venta y los dineros comisados así como también los instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales que hayan sido negociados, se los distribuirá definitivamente a las siguientes instituciones, en los porcentajes que a continuación se detallan: 50%

(cincuenta por ciento) para la Policía Nacional y que será destinado a la lucha contra el narcotráfico; 15% (quince por ciento) para el CONSEP, que será utilizado en el cumplimiento de los fines que a este organismo le asigna ésta Ley; 20% (veinte por ciento), para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que será destinado para la rehabilitación de los internos de los respectivos establecimientos; el 15% (quince por ciento), que se distribuirá en partes iguales entre el Instituto Nacional del Niño y la Familia; Consejo Nacional de las Mujeres; el Consejo Nacional de Discapacidades; y, los Hospitales Psiquiátricos Lorenzo Ponce de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Julio Endara de Quito. El Banco Central acreditará estos valores, automáticamente, en las cuentas de dichos organismos.

Los valores que se distribuyen a las entidades e instituciones ya establecidas no se invertirán en gastos corrientes.

Art. 108.- Acta de destrucción de sembríos y laboratorios.- Cuando las autoridades de la investigación procedan a la destrucción de plantas, sustancias o laboratorios, dejarán constancia de ello en una acta que se agregará al proceso, y que contendrá, además de la identidad del propietario o presunto responsable, una descripción prolija de las plantas, el estado de los sembríos y la extensión del terreno cultivado, de las sustancias, equipos, instalaciones y otros bienes que se encontraren en los sembríos y en los laboratorios y de los medios utilizados para esa destrucción. Previamente a la destrucción se tomarán muestras para el análisis.

Las sustancias sujetas a fiscalización serán destruidas cuando haya imposibilidad o riesgo fundado para su transporte para entregarlas al fiscal competente.

Quienes suscriban el acta serán civil y penalmente responsables por la veracidad de su texto.

Art. 109.- Incautación.- El Tribunal Penal dispondrá la incautación de todos los bienes, dineros y más valores que hubieren sido utilizados para la comisión de los delitos o que fueren producto o rédito de ellos. Serán además constituidos en depósito.

El Juez podrá requerir del Ministerio de Economía y Finanzas, de las entidades del sistema financiero nacional, de los registradores de la propiedad, mercantiles o especiales, o de cualquier otra entidad, funcionario o empleado público, toda la información necesaria sobre la situación financiera de las personas naturales o jurídicas presuntamente involucradas en infracciones a esta Ley.

Art. 110.- Depósito en el Banco Central del Ecuador.- Todo dinero en moneda

nacional o extranjera será depositado, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la aprehensión o incautación en la Cuenta Especial de Depósitos del CONSEP en el Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador, podrá invertir, por intermedio de las bolsas de valores, hasta el ochenta y cinco por ciento de los dineros depositados en la adquisición de bonos, cédulas hipotecarias o cualquier papel fiduciario de alto rendimiento y liquidez.

El rendimiento de tales inversiones se depositará en una subcuenta especial abierta en el Banco Central del Ecuador, a órdenes del CONSEP, para contribuir a la financiación de su presupuesto y destinarlo exclusivamente a gastos de equipamiento e inversión.

El Banco Central del Ecuador regulará el funcionamiento y la forma de obtener los reembolsos de valores para fines de restitución de dineros a los imputados absueltos.

El Banco indicado notificará al CONSEP todas las operaciones de compra y venta de papeles fiduciarios que realicen. No cobrará comisión alguna por su intervención.

Art. 111.- Disposición de bienes.- No obstante lo dispuesto en esta Ley, el Consejo Directivo del CONSEP podrá asignar en comodato los bienes muebles o inmuebles incautados o comisados por infracciones a esta Ley, a las entidades u organismos que tienen a su cargo la aplicación de la misma, a la Dirección de Rehabilitación Social y a las de finalidad educativa o cultural.

Las obras de arte de imposible reposición serán entregadas en custodia o comodato a la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" y les serán devueltas al imputado o acusado de infracciones a esta Ley, que fuere absuelto, a menos que dichas obras hubiesen sido adquiridas con el producto del tráfico ilícito de drogas o utilizadas para este fin. Si la sentencia fuere condenatoria, dichas obras serán vendidas con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y su producto distribuido en la forma establecida en la misma.

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 52 de 4 de Julio del 2005.

Art. 112.- Restitución de bienes.- Si fuere absuelto el imputado propietario de los bienes incautados, éstos le serán restituidos por el CONSEP cuando lo disponga el Juez, una vez canceladas las medidas cautelares.

Las instituciones a las que se hubiere entregado bienes los devolverán en el estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal deterioro por el uso legítimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o cubrir la

indemnización que fije el Juez, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

El dinero o el valor que representen los instrumentos monetarios o documentos bancarios, financieros o comerciales aprehendidos o incautados se devolverá en moneda nacional, según la cotización del mercado libre para la compra de la divisa incautada a la fecha de la devolución, con los respectivos intereses legales vigentes fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Procederá la acción de indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Capítulo Segundo COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Art. 113.- Competencia.- Para conocer, sustanciar y juzgar los delitos tipificados en esta Ley se aplicarán las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

Art. 114.- Casos de fuero.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o los presidentes de las cortes superiores serán competentes para sustanciar y juzgar en los casos de fuero que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, les corresponde conocer.

Art. 115.- Reglas para radicar la competencia.- Las reglas para radicar la competencia serán las señaladas en el Código Penal.

Art. 116.- Acción popular.- Se concede acción popular para denunciar las infracciones señaladas en esta Ley.

Art. 117.- Tratamiento de excepción.- En esta clase de juicios no se admitirá caución, ni se concederá condena condicional, prelibertad ni libertad controladas, ni los beneficios de la Ley de Gracia y del Indulto.

La rebaja de penas a favor del sentenciado que demuestre conducta ejemplar será concedida por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.

Art. 118.- Análisis químico de las sustancias aprehendidas.- Las sustancias aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo efecto se tomarán muestras de ellas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP entregará a los peritos designados por el Fiscal, quienes presentarán su informe en el término que éste les concediere.

El Fiscal designará peritos a los profesionales especializados que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio Público.

Las pericias así practicadas, alcanzaran el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio.

Art. 119.- Asistencia judicial recíproca.- Los fiscales, jueces y tribunales de lo penal podrán solicitar asistencia de sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales y la investigación de los delitos previstos en esta Ley.

Esta asistencia se referirá, entre otros hechos, a la detención y remisión de imputados y acusados, previo el procedimiento establecido en la Ley, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, inspecciones de lugar, envío de elementos de prueba, identificación y análisis de sustancias sujetas a fiscalización e incautación de bienes.

Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso, presentadas y valoradas en la etapa del juicio, conforme a las reglas de la sana crítica.

Los requerimientos de asistencia recíproca se harán por vía diplomática o por conducto de la INTERPOL.

Art. 120.- Medidas cautelares.- Una vez que el Fiscal haya dictado la resolución de instrucción, solicitará al Juez Penal la adopción de las medidas cautelares de prisión preventiva y las reales de secuestro, prohibición de enajenar y retención; y de manera especial, la prohibición de enajenar todos los bienes del imputado y la inmovilización de sus cuentas monetarias y bancarias y de las acciones y participaciones sociales.

Para que se inscriba la prohibición de enajenar se enviará circular por el medio más rápido posible, a todos los registradores de la propiedad, mercantiles y especiales de la República, quienes, en el término de veinte y cuatro horas posteriores a su recepción, informarán al Juez del cumplimiento de dicha orden. Si no lo hicieren, el Juez insistirá en su orden, y si ésta no fuere cumplida, pedirá la destitución de quien la incumpla.

Para la inmovilización de las acciones bancarias, cuentas monetarias, corrientes y de ahorros el Juez oficiará inmediatamente al Superintendente de Bancos y Seguros, quien en el término de veinte y cuatro horas, dará cumplimiento a esta orden, notificando con ella a las entidades del sistema financiero del país, que estarán obligadas a inmovilizar esos valores y confirmar su cumplimiento, por escrito, en el término de cuarenta y ocho horas, al Superintendente de Bancos y Seguros y al Juez.

En los casos de fuero, el Juez competente comisionará la diligencia de

destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido aprehendidas, a uno de los tribunales penales.

Se tomarán las muestras respectivas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP entregará a los peritos.

De lo actuado se dejará constancia en acta.

Art. 121.- Destrucción de sustancias sujetas a fiscalización.- Dentro de los quince días siguientes a la resolución de la instrucción, a pedido del Fiscal, el Juez dispondrá que se proceda a la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido aprehendidas, salvo que, si se tratare de insumos, precursores químicos u otros productos químicos específicos, el Consejo Directivo del CONSEP podrá disponer, dentro de los sesenta días siguientes a su recepción, la utilización por una entidad del sector público, su enajenación para fines lícitos o su destrucción. La enajenación se realizará en la forma que decida este organismo y a favor de las personas naturales o jurídicas previamente calificadas.

Para la destrucción se verificará la integridad de la envoltura y la identidad de la sustancia, y se comprobará el peso bruto y el peso neto, verificando si corresponde al que consta en el informe de investigación. En esta diligencia intervendrán el Juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del CONSEP y el Secretario del Juzgado.

Art. 122.- Consulta obligatoria.- No surtirá efecto el auto en que se revoque la prisión preventiva, de suspensión o cesación de medidas de aprehensión, retención e incautación, si no es confirmado por el superior, previo informe obligatorio del Ministro Fiscal correspondiente, quienes emitirán su opinión en el término de veinte y cuatro horas posteriores a la recepción del proceso.

Art. 123.- Sentencia.- El Tribunal o la correspondiente Sala del fuero, al dictar sentencia, en la apreciación de los hechos y las pruebas atenderá las reglas de la sana crítica.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal o la correspondiente Sala del fuero ordenará el comiso y entrega definitiva de los bienes al CONSEP.

Tratándose de bienes inmuebles se protocolizará copia certificada de la sentencia para que sirva de título, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Estas diligencias se practicarán gratuitamente.

En la sentencia se ordenará la destrucción de las muestras de las sustancias incautadas.

El auto en que se revoque la prisión preventiva, de cesación de medidas de aprehensión, retención e incautación, el sobreseimiento provisional o definitivo, dictado por el Juez y las sentencias condenatorias y absolutorias serán obligatoriamente elevadas en consulta a la respectiva Corte Superior, quien resolverá, previo informe obligatorio que emitirá el Ministro Fiscal dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas.

Si el proceso tuviese más de cien hojas, a este plazo se agregará, un día más por cada cien fojas.

El incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución inmediata de los magistrados, quienes serán reemplazados de conformidad con la Ley.

A efectos de que se cumpla la prohibición de enajenar de acciones y participaciones sociales de compañías sujetas al Control de la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, el Juez le oficiará para que realice la notificación respectiva a los administradores y registradores de lo mercantil. La publicación por la prensa del aviso respectivo surtirá los efectos de notificación.

Las transferencias realizadas en violación de estas prohibiciones serán anuladas por el respectivo Superintendente.

Inmediatamente después de dictada la resolución de instrucción fiscal, el Juez ordenará la entrega en depósito a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP de todos los bienes incautados.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 124.- Leyes aplicables.- En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta Ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Art. 125.- Prohibición para ocupar cargos en el CONSEP.- Quienes hubieren sido destituidos de un cargo en instituciones del sector público no podrán ejercer función alguna en el CONSEP.

Tampoco podrán ocupar función alguna, ni ser trabajadores, contratistas o depositarios de este organismo, quienes tengan con los funcionarios, servidores o trabajadores de la Procuraduría General del Estado o del Ministerio Público, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En todo caso, los de mayor jerarquía desplazarán a los inferiores y al margen de esta circunstancia, los de mayor antigüedad tendrán preferencia sobre los recientemente nombrados o contratados.

Art. 126.- Salario mínimo vital general.- El salario mínimo vital general a que se

refiere esta Ley se entenderá que es el establecido para los trabajadores en general.

DEROGATORIAS Y ANEXOS

Art. 127.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda, derógase la codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 612 del 27 de enero de 1987.

Art. 128.- Quedan incorporados a esta Ley los Anexos I, II, III y IV, que corresponden a Definiciones, Clasificación de Estupefacientes, Psicotrópicas, Precursores Químicos y otros Productos Químicos Específicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El CONSEP asume todos los derechos y obligaciones derivados de los convenios celebrados por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Salud Pública con los organismos nacionales, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales públicos o privados, en materia de prevención del uso indebido de drogas, represión del tráfico ilícito y fiscalización de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

SEGUNDA.- Los procesos que al momento de entrar en vigencia la presente Ley estuvieren en trámite, seguirán sustanciándose de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y el Código de Procedimiento Penal.

TERCERA.- Hasta que se designen los jueces de contravenciones, conforme dispone el Art. 390 del Código de Procedimiento Penal vigente, las contravenciones tipificadas en esta Ley serán juzgadas por el jefe zonal o el jefe regional del CONSEP, de no existir la primera de estas jefaturas, dentro de su respectiva jurisdicción, con sujeción a las normas aplicables a las contravenciones de cuarta clase previstas en el Libro V del Código de Procedimiento Penal.

De la resolución del jefe zonal se podrá apelar, en el término de ocho días, ante el jefe regional y de las de éste ante el Secretario Ejecutivo del CONSEP, en última instancia, los cuales se pronunciarán en igual término.

Las contravenciones que se cometan dentro de la jurisdicción que corresponda a la capital de la República, serán juzgadas de acuerdo con el reglamento a

esta ley y con sujeción al procedimiento establecido en esta disposición, en lo que fuere aplicable.

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 52 de 4 de Julio del 2005.

CUARTA.- Los bienes muebles e inmuebles que hubiesen sido incautados o comisados con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 25, Ley Reformativa a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y normas relativas a la Procuraduría General del Estado, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre de 1997, y que se encontraren en depósito del CONSEP, serán vendidos con sujeción a las normas establecidas en esta Ley y el producto de esta venta y los dineros incautados tendrán igual destino que el previsto en los artículos 106 y 107 de esta Ley.

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 52 de 4 de Julio del 2005.

QUINTA.- Por esta única vez, con el producto de la venta de los bienes y los demás valores a los que se refieren los artículos 106 y 107 de esta Ley, se constituirá un fondo, cuyo uso será determinado por el Consejo Directivo del CONSEP, que se destinará a la adquisición de tres helicópteros para la Policía Nacional.

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 52 de 4 de Julio del 2005.

Art. FINAL.- Esta Ley, sus reformas y derogatorias, entró en vigencia desde la fecha de sus respectivas publicaciones en el Registro Oficial.

ANEXOS: I, II, III Y IV

Nota: Para leer ANEXOS, Registro Oficial Suplemento 490 de 27 de Diciembre de 2004, página 17. ([ver...](#))

ANEXO II

Fuente: Registro Oficial No. 523, Quito, Ecuador, lunes 17 de septiembre de 1990.¹

LEY 108

CONGRESO NACIONAL EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS C O N S I D E R A N D O

QUE es deber fundamental del Estado proteger a los ecuatorianos y a sus instituciones de los peligros del uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

QUE es necesario incrementar los mecanismos de prevención del uso indebido de drogas, que altera los procesos síquicos de las personas;

QUE es necesario armonizar la legislación ecuatoriana con las convenciones internacionales sobre el uso y tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

QUE es indispensable el funcionamiento de una institución pública autónoma que organice y concentre los recursos humanos y financieros destinados a la lucha contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas;

QUE es de importancia prioritaria movilizar a la comunidad ecuatoriana, a través de todas las instituciones públicas o privadas, para contrarrestar los efectos funestos del narcotráfico que socaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad;

QUE la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 612, del 27 de enero de 1987, es incompleta y no refleja la realidad actual del país.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente:

LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS²

TITULO PRELIMINAR DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION Y CARACTERISTICAS DE ESTA LEY

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanen de estas actividades.

¹ La transcripción de esta ley conserva los errores observados en el texto del Registro Oficial donde se publicó.

² A partir de la vigencia de la Ley 25 de 1997, por disposición del artículo 16, este título fue cambiado por el de LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárase de interés nacional la consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes.

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan las autoridades a las que compete su aplicación.

Art. 3.- Ambito de la Ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:

1.- El cultivo de plantas de las que se pueden extraer elementos utilizables para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de esas plantas;

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a fiscalización;

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas;

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;

5.- La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a fiscalización;

6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje;

7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas;

8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, insumos o precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas;

9.- La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades que mencionan los numerales precedentes, la organización de empresas que tengan ese propósito y la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a posibilitarlas;

10.- La conversión o transferencia de bienes o valores que procedan de la ejecución de las actividades mencionadas en los numerales precedentes y la utilización, "blanqueo o

lavado" de los recursos obtenidos de la producción o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización; y,

11.- Las demás actividades conexas con esta materia.

Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.- Esta Ley contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos tipificados en esta Ley y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.

Art. 5.- Sustancias sujetas a fiscalización.- Se definen y tratan como sustancias sujetas a fiscalización las incluidas en listas o cuadros anexos a esta Ley, en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador y en las actualizaciones de esos anexos efectuados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas, CONSEP. En caso de duda, prevalecerá el contenido de estas últimas.³

Art. 6.- Connotación especial de términos.- Los términos utilizados por esta Ley, sus anexos y normas secundarias tendrán el alcance que les confieran:

- a) Los convenios internacionales sobre esta materia ratificados por el Ecuador;
- b) Los organismos internacionales creados por los convenios internacionales sobre esta materia; y,
- c) El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas, CONSEP.

Las definiciones que adopte el Consejo Directivo se referirán a las que se enuncian en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador o en sus anexos actualizados.

En caso de duda prevalecerán los términos adoptados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas, CONSEP.

Art. 7.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan incorporadas a esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador.

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones contenidas en los convenios internacionales, o de conflictos con las normas de esta Ley, prevalecerán estas últimas.

Art. 8.- Publicación de planes nacionales.- Para la aplicación de la presente Ley se contará con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por el Presidente de la República.

TITULO PRIMERO

³ Este artículo fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997)

O R G A N I Z A C I O N
DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Y PSICOTROPICAS (CONSEP)

Art. 9.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley créase, con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine.

Art. 10.- Bienes y recursos.- El CONSEP contará, para su funcionamiento, con los siguientes bienes y recursos:

- 1.- Las asignaciones que obligatoriamente deberán constar cada año en el Presupuesto General del Estado;
- 2.- Los aportes de instituciones oficiales nacionales e internacionales;
- 3.- El producto de las multas impuestas por infracciones a esta Ley;
- 4.- El dinero, títulos, valores y otros bienes comisados o el producto de su enajenación;
- 5.- El producto de las inversiones de los dineros aprehendidos o incautados realizadas en la forma que determina esta Ley; y,⁴
- 6.- Las donaciones, herencias y legados que el Consejo Directivo del CONSEP resuelva aceptar.

Las donaciones de personas privadas serán deducibles del monto gravable sujeto al pago del impuesto a la renta.

Las asignaciones deferidas estarán exentas del impuesto a la herencia.

Art. 11.- Destino de bienes comisados y multas.- El Consejo Directivo resolverá sobre el destino de los bienes, títulos o valores comisados y, específicamente, sobre la conveniencia de su enajenación, cuando no fueren de manifiesta utilidad al CONSEP.

Si alguna de las instituciones a las que compete la aplicación de esta Ley tuviere interés en dichos bienes, el Consejo Directivo del CONSEP, previo informe del Secretario Ejecutivo, podrá entregarlos en préstamo.

Para el caso de precursores u otros productos químicos específicos, se aplicarán las normas previstas en esta Ley.

⁴ Véase la modificación introducida por el artículo 1 de la Ley 25 de 1997.

Con el valor de los bienes comisados y de las multas impuestas por infracciones a esta Ley se formará un fondo, cuyos recursos serán asignados por el Consejo Directivo del CONSEP, previo informe de la Secretaría Ejecutiva, para atender necesidades específicas de prevención, control, represión y rehabilitación.⁵

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 12.- Del Consejo Directivo del CONSEP.- El Consejo Directivo será el organismo rector de la aplicación de esta Ley.

El Consejo Directivo estará integrado por:

El Procurador General del Estado o el Subprocurador, quien lo presidirá;

El Ministro de Gobierno o su delegado;

El Ministro de Educación Pública o su delegado;

El Ministro de Salud Pública o su delegado;

El Ministro de Bienestar Social o su delegado;

El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; y,

El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.

El Consejo Directivo podrá pedir la concurrencia a sus sesiones de delegados de cualquier otro organismo del Estado o invitar a los representantes del sector privado organizado en las áreas de prevención y tratamiento.

Actuará como Secretario del Consejo Directivo el Secretario Ejecutivo del CONSEP.

Art. 13.- Atribuciones del Consejo Directivo.- El Consejo Directivo ejercerá las siguientes atribuciones y funciones:

1.- Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y comercialización, para la represión de la producción y del tráfico ilícito y para la rehabilitación de personas afectadas por su uso. El plan será sometido a la aprobación del Presidente de la República;

2.- Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas y actividades entre las entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y evaluar su ejecución;

⁵ Véase la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 25 de 1997. A continuación de este artículo 11 el artículo 3 agregó un párrafo titulado "De la Procuraduría General del Estado"..

- 3.- Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución y remitirlo para su aprobación al Presidente de la República;
- 4.- Designar comisiones especiales, que informarán sobre sus actividades al Presidente del Consejo Directivo;
- 5.- Aprobar los reglamentos internos;
- 6.- Incorporar a las listas o cuadros de sustancias sujetas a control las que así fueren calificadas por los organismos internacionales correspondientes, actualizar o modificar las definiciones de palabras técnicas y resolver sobre reclamos respecto a la integración de esas listas o el alcance de las definiciones;⁶
- 7.- Dictaminar sobre la conveniencia de la suscripción de los convenios internacionales sobre las materias regidas por esta Ley o de la adhesión del país;
- 8.- Autorizar a su Presidente la suscripción de acuerdos y compromisos de cooperación internacional técnica y económica;
- 9.- Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e informar a los organismos correspondientes;
- 10.- Emitir dictámenes de aplicación obligatoria sobre los reglamentos orgánicos o estatutos de cualquier institución u organización que contemplen actividades regidas por esta Ley;
- 11.- Recabar de entidades de los sectores público y privado ayuda específica concerniente al suministro de información o realización de trabajos especiales, relativos al alcance del objetivo y aplicación de esta Ley;
- 12.- Orientar y supervisar las campañas referentes al consumo y tráfico ilícitos de las sustancias sujetas a fiscalización;
- 13.- Resolver sobre el destino de los bienes a los que se refiere el artículo 11 de esta Ley y, excepcionalmente, sobre la conservación de plantas y sustancias sujetas a fiscalización o de laboratorios o equipos aprehendidos o incautados, para destinarlos a fines científicos de entrenamiento o producción o uso con propósitos terapéuticos, modo de utilización que será controlado por la Secretaría Ejecutiva;⁷
- 14.- Autorizar la enajenación de sustancias sujetas a fiscalización de las que disponga el CONSEP a personas o instituciones previamente calificadas;

⁶ Este numeral fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997)

⁷ Véase la modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 25 de 1997.

15.- Calificar a las personas naturales o jurídicas que puedan ser autorizadas por la Secretaría Ejecutiva para la importación de sustancias sujetas a fiscalización;

16.- Conocer y resolver, en el término máximo de quince días, las consultas sobre las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría Ejecutiva;⁸

17.- Informar anualmente al Presidente de la República sobre sus actividades; y,

18.- Las demás que le otorgaren esta Ley y su Reglamento.

Art. 14.- Funciones específicas del Presidente del Consejo Directivo.- Previa autorización expresa del Presidente de la República, el Presidente del Consejo Directivo ejercerá la representación del Ecuador ante los organismos creados por convenios internacionales sobre la materia regida por esta Ley y designará a quienes deban asistir a sus reuniones.⁹

Art. 15.- Actuaciones del Presidente del Consejo Directivo en actos y contratos específicos.- El Presidente del Consejo Directivo suscribirá, a nombre del Estado ecuatoriano, los acuerdos o compromisos de cooperación técnica o económica con organismos internacionales y los convenios con entidades nacionales aprobadas por el Consejo Directivo.

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Art. 16.- De la Secretaría Ejecutiva, sus funciones y atribuciones.- La Secretaria Ejecutiva será el organismo técnico y operativo del CONSEP y tendrá las siguientes funciones y atribuciones, que ejercerá en coordinación con los otros organismos y autoridades encargados de la aplicación de esa Ley:

1.- Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamentos;

2.- Coordinar la ejecución y aplicación de los convenios internacionales sobre esta materia;

3.- Programar campañas encaminadas a obtener mayor eficiencia en la aplicación del plan nacional y supervisar su ejecución;

4.- Preparar el anteproyecto de presupuesto y remitirlo oportunamente al Consejo Directivo para el trámite pertinente;

5.- Administrar los recursos y los bienes del CONSEP, de acuerdo con las leyes y reglamentos;

⁸ El artículo 5 de la Ley 25 de 1997 agregó dos numerales después de éste.

⁹ Los artículos 14, 15 y 16, numeral 2, fueron suprimidos por disposición del artículo 6 de la Ley 25 de 1997.

6.- Requerir, recopilar y procesar los datos e informaciones sobre cultivo de plantas, producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incursoas en los ilícitos determinados, movimiento y tráfico de esas sustancias y otras informaciones previstas por esta Ley y los convenios internacionales; preparar y mantener registros; organizar y conservar actualizado un archivo general que sistematice la información, que será mantenida bajo reserva; elaborar estadísticas, proyecciones y previsiones con esos datos; solicitar y suministrar información a los jueces competentes y a los organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados con esta materia, e intercambiarla en el caso de datos estadísticos e informaciones para investigación;

7.- Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso indebido de las sustancias fiscalizadas que se realicen a nivel nacional, para que se ejecuten con sujeción al plan nacional;

8.- Importar, previa autorización del Consejo Directivo, sustancias sujetas a fiscalización, que, de conformidad con los convenios internacionales, sean reservadas para el Estado, a fin de mantenerlas como existencias normales y especiales y para su venta a hospitales, centros médicos, laboratorios y farmacias;

9.- Expedir informe previo favorable para que el Banco Central del Ecuador pueda conceder permisos o certificados de importación o exportación de las sustancias sujetas a fiscalización;

10.- Conceder autorizaciones y licencias para la producción de precursores u otros productos químicos específicos, según las definiciones de los anexos de esta Ley, o de drogas o preparados de uso terapéutico que, en sus fórmulas, contengan sustancias sujetas a fiscalización;

11.- Fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan y, en caso de que se registren faltantes, enviar el acta de fiscalización a los jueces competentes, para el respectivo enjuiciamiento;

12.- Inscribir, previa la respectiva calificación, a los profesionales que soliciten la entrega de recetas especiales para prescribir sustancias estupefacientes o psicotrópicas o drogas que las contenga, y controlar las correspondientes recetas en las farmacias donde hayan sido despachadas y el archivo final de los talonarios devueltos a la Secretaría Ejecutiva por los profesionales, con las comprobaciones del caso;

13.- Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para recomendar al Consejo Directivo y al Gobierno Nacional la adopción de medidas encaminadas a lograr su eliminación o atenuación;

14.- Elaborar informes periciales en las causas por infracciones previstas por esta Ley;

15.- Colaborar con la función jurisdiccional, el Ministerio Público, la fuerza pública y sus organismos especializados, la policía militar aduanera y sus dependencias o repartos, para el esclarecimiento de infracciones previstas por esta Ley;

16.- Actuar como depositaria de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, incautación y comiso e intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hayan sido objeto de aprehensión, incautación y comiso;

17.- Coordinar la capacitación de servidores públicos y personal de entidades privadas calificadas para el ejercicio de actividades de prevención y rehabilitación; y,

Art. 17.- Del Secretario Ejecutivo.- El Secretario Ejecutivo, que será el representante legal del CONSEP, tendrá a su cargo la dirección técnica, la gestión administrativa de la Secretaría Ejecutiva y la coordinación con las demás instituciones encargadas del cumplimiento de esta Ley.

El Secretario Ejecutivo nombrará a los servidores del CONSEP o contratará personal temporario, dentro de los límites contemplados en la Ley y su presupuesto. Para designar directores departamentales, requerirá la autorización previa del Presidente del Consejo Directivo.

El Secretario Ejecutivo ejercerá, por sí o por delegación, la jurisdicción coactiva para recaudar créditos y multas.

Art. 18.- Designación y requisitos.- El Secretario Ejecutivo será elegido por el Consejo Directivo, previa terna presentada por su Presidente. Deberá ser ecuatoriano por nacimiento, mayor de 35 años de edad, tener formación o títulos académicos de nivel superior, y acreditar probidad notoria y experiencia en actividades vinculadas con materias afines a las de esta Ley. No podrá ejercer su profesión, tener otro empleo o intervenir como candidato en contiendas electorales.

El Secretario Ejecutivo será, removido libremente por el Consejo Directivo.

TITULO SEGUNDO DE LA PREVENCIÓN

Art. 19.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley.

Art. 20.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en general deberán participar activamente en las campañas de prevención.

Art. 21.- Lugares de residencia, trabajo o reunión colectiva.- Los propietarios, administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva y los empleadores que tengan un personal permanente de más de diez trabajadores observarán los instructivos expedidos por el CONSEP sobre propaganda e información preventiva.

Art. 22.- Obligación de información.- Los propietarios, administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva comunicarán al agente policial o a la oficina más cercana del CONSEP la existencia de circunstancias que hagan presumir la presencia en el interior o alrededor de esos lugares de núcleos de consumo o la práctica de actos de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas.

Art. 23.- Agencias y operadores turísticos.- Las agencias y operadores turísticos observarán en sus actividades las instrucciones que el CONSEP expida dentro del plan y programa de prevención.

Art. 24.- Deber General.- Toda persona colaborará con los programas de control y prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta Ley. Colaborarán de manera especial en la protección del menor que se encuentre expuesto al tráfico o consumo indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 25.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables de actos culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan una vida sana y contribuyan a la erradicación del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas preventivos de orientación e información tendientes a eliminar el uso de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 26.- Control de actividades deportivas.- El Consejo Nacional de Deportes, la Federación Deportiva Nacional, las Federaciones Deportivas Provinciales y sus filiales controlarán e impedirán las actividades que dirigen el uso de drogas u otras sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 27.- Medios de comunicación colectiva.- Los medios de comunicación colectiva contribuirán a las campañas de prevención, especialmente a las de carácter informativo, en la forma que determinen conjuntamente la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y la Secretaría Nacional de Comunicación Social.

Art. 28.- Prohibición.- Prohíbese la producción, circulación y venta de carteles, afiches, adhesivos, calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier tipo de grabación que sugieran, ensalcen o induzcan al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

TITULO TERCERO DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y DELA REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS

Art. 29.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.- Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico.

Art. 30.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la fuerza pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias.

Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado.

El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Art. 31.- Casos de menores y extranjeros.- Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Tribunal de Menores de la respectiva jurisdicción.

Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley de Inmigración y Extranjería, sus reglamentos o instructivos, serán expulsados del país al día siguiente de haber concluido el tratamiento emergente.

Art. 32.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.

Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización hubiere sido conducida a un centro de detención, el director o funcionario responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas siguientes a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al Tribunal de Menores respectivo, si se tratare de un menor de edad, o a la oficina más cercana de la Dirección de Migración, si se tratare de un extranjero.

Art. 33.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de menores de edad se contará con el Tribunal de Menores de la respectiva jurisdicción.

La Corte Nacional de Menores y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.

Art. 34.- Información sobre casos.- Los directores de hospitales, clínicas y otros centros de salud en los cuales se trate a personas afectadas por el uso de sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP sobre las actividades cumplidas por el servicio especializado y el número y características de los casos tratados.

Art. 35.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo Directivo del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de sustancias sujetas a fiscalización que se presenten en determinadas zonas del país, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración económica del CONSEP, creará casas asistenciales o secciones especializadas, con adecuado personal en las ya existentes, en los lugares que estimare adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito.

Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP en la forma prevista por el inciso tercero del artículo 30 y estarán sujetos a su vigilancia y control.

Art. 36.- Solicitud de tratamiento.- La asistencia médica a las personas dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus representantes legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio Público, el Tribunal de Menores correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan el caso.

Art. 37.- Derecho a trabajo.- Las personas afectadas por el uso de sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido rehabilitadas, según certificación de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, y que presentaren solicitudes de trabajo a entidades públicas o privadas, tendrán el mismo tratamiento, en igualdad de condiciones, que los demás aspirantes.

La Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo o la Dirección General de Trabajo y Recursos Humanos, en sus campos de actividades respectivos, vigilarán el cumplimiento de la norma prevista en el inciso precedente.

TITULO CUARTO DEL CONTROL DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION

Art. 38.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales pueden extraerse sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbese la siembra o cultivo de la adormidera o amapola (papaver somniferum L.), de las papaveráceas, del arbusto de coca (erytroxilon coca), de las eritroxiláceas, de la marihuana (cannabis sativa L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de

sustancias sujetas a fiscalización. La denominación de estas plantas será incluida por el Consejo Directivo del CONSEP en el respectivo anexo de esta Ley.

Asimismo será prohibida la recolección, almacenamiento, transporte o utilización de esas plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.

Art. 39.- De la elaboración, producción, fabricación y distribución de sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbese toda forma de elaboración, producción, fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier acto o proceso que tienda a ese fin.

La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de uso terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, sólo podrán ser efectuadas por laboratorios o empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.

Los laboratorios o empresas que desearan elaborar medicamentos y otros productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, para concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante.

Los laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia y venta de los preparados antes señalados.

Prohíbese la distribución de muestras de esos preparados.

Art. 40. Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito de ellas.

Art. 41. Restricciones sobre importación de sustancias sujetas a fiscalización o drogas que las contengan.- Prohíbese la importación de las sustancias sujetas a fiscalización que no tengan uso terapéutico o fines de investigación, según las resoluciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o uso científico o industrial, conforme a la calificación legal.

Sólo podrán importarse las drogas y preparados susceptibles de uso terapéutico previa autorización escrita concedida, para cada caso, por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y demás organismos previstos en esta Ley, con determinación del peso y la concentración

de las sustancias sujetas a fiscalización. La autorización caducará después de seis meses de la fecha de su otorgamiento.

Art. 42.- Requisitos para trámite de importación, exportación o entrega de sustancias sujetas a fiscalización.- Los funcionarios del Banco Central del Ecuador no tramitarán los certificados o permisos de importación o exportación de sustancias sujetas a fiscalización o de drogas que las contengan, si los interesados no presentan la autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP.

Los funcionarios o empleados aduaneros y de las oficinas postales, navieras, aéreas o de cualquier otro medio de transporte, o personas que de cualquier modo dependan de ellos, no podrán entregar, retirar ni autorizar el retiro de sustancias sujetas a fiscalización y de drogas o preparados que las contengan y que se hayan importado sin la respectiva autorización escrita de la Secretaria Ejecutiva del CONSEP.

Si las sustancias ingresadas al país o que estuvieren por egresar no se ajustaren con exactitud a los términos de identificación, cantidad, peso y concentración determinados en la referida autorización, o si ésta apareciere alterada, falsificada o no existiere, los funcionarios y empleados a los cuales se refiere el inciso precedente retendrán las sustancias y los bultos o paquetes que las contengan y, dentro de las siguientes veinticuatro horas, con el informe y documentos respectivos, los entregarán a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y suscribirán la correspondiente acta de entrega recepción.

Si el hecho constituye delito, los funcionarios correspondientes darán inmediato aviso, acompañando antecedentes, a uno de los funcionarios del Ministerio Público, para que presente la excitativa fiscal.

Art. 43.- Cultivo, importación, exportación o elaboración autorizada.- El Consejo Directivo del CONSEP autorizará por escrito el cultivo de plantas o la elaboración, importación o exportación de sustancias sujetas a fiscalización a instituciones científicas de los sectores público o privado, que lo soliciten motivadamente con fines exclusivos de investigación, experimentación o adiestramiento de personal encargado de control, represión o rehabilitación.

En la autorización se especificarán las plantas o sustancias requeridas, sus características cuantitativas y cualitativas y su destino.

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP controlará la utilización de esas autorizaciones.

Art. 44.- Venta de sustancias sujetas a fiscalización que puede realizar la Secretaría.- La Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrá vender a laboratorios, centros asistenciales, boticas y farmacias u otras empresas que ofrezcan la suficiente garantía técnica y moral, las sustancias sujetas a fiscalización con sujeción a las normas de esta Ley. Realizará cada una de las ventas en las cantidades que previamente se justificaren como necesarias

para la elaboración de drogas y preparados terapéuticos, para tratamiento médico o fines científicos e industriales, todo lo cual será objeto de fiscalización.

Art. 45.- Requisitos para la venta al público.- Las sustancias sujetas a fiscalización, así como drogas o preparados que las contengan sólo se expendrán en los establecimientos autorizados por la Secretaría Ejecutiva, previa calificación de la solvencia moral y técnica de sus propietarios y responsables. Se llevará un registro actualizado de esos establecimientos.

El expendio se realizará únicamente por prescripción en recetarios especiales hecha por un profesional facultado por el Código de Salud e inscrito en el registro de la Dirección Provincial de Salud y del CONSEP.

Para obtener la inscripción, el profesional deberá presentar su título en la Dirección Provincial de Salud respectiva, la que conferirá el registro, a menos que haya sido sentenciado como culpable de alguna de las infracciones reprimidas por esta Ley.

Art. 46.- Autorizaciones.- La Secretaría Ejecutiva autorizará la producción, venta, importación y exportación de insumos, componentes, precursores u otros productos químicos específicos, preparados o derivados, previa calificación de los productores, vendedores, importadores o exportadores, efectuada por el Consejo Directivo. Deberá fijar las cantidades y características de los productos a los que se refiere la autorización.

Art. 47.- Caducidad de recetas.- Las recetas o prescripciones en que se ordene el despacho de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de drogas o preparados terapéuticos que las contengan caducarán a las cuarenta y ocho horas de su expedición; en consecuencia, no podrán ser despachadas, luego de ese lapso.

Art. 48. Registros de existencias, consumo y ventas de sustancias sujetas a fiscalización.- Los hospitales, clínicas, farmacias, boticas y droguerías que adquirieren a la Secretaría Ejecutiva sustancias estupefacientes o psicotrópicas, drogas o preparados que las contengan o que las importaren a través, de ella o directamente, llevarán un registro actualizado de existencias, consumo y ventas, y también un archivo especial en el que se guardarán, debidamente numeradas y por orden cronológico, las recetas en que se ordene el despacho. Las recetas serán enviadas trimestralmente, para las comprobaciones del caso, a la Secretaría Ejecutiva, que deberá conservarlas por un período de diez años, sea en archivo o mediante el uso de microfilm o procesos similares.

Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública o de la Secretaría Ejecutiva podrán verificar, en cualquier tiempo, los mencionados requisitos y archivos.

Art. 49.- De la oferta, distribución, venta o colocación, suministro o entrega no autorizada.- Prohíbese la oferta en general, la oferta para la venta, la colocación, el suministro, la distribución y la entrega de sustancias sujetas a fiscalización en cualesquiera condiciones, cuando no estuvieren autorizadas por esta Ley y por los organismos competentes.

Art. 50.- Del corretaje o intermediación en la negociación.- Prohíbese toda forma de corretaje o intermediación en la negociación de sustancias sujetas a fiscalización y su adquisición, excepto en los casos de comercialización expresamente contemplados en esta Ley.

Art. 51.- Restricciones para el envío, exportación y transporte de sustancias.- Sólo el CONSEP, previa calificación, podrá autorizar actividades operaciones de envío o remisión en general, envío en tránsito, exportación o transporte de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 52.- Mención obligatoria en envases o anexos.- En las etiquetas o, en todo caso, en las notas o folletos explicativos que acompañen a los envases de fármacos, drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización se deberá hacer constar, en forma notoria, este particular y las advertencias que sean necesarias para la seguridad del usuario.

Art. 53.- Del transporte de sustancias.- Prohíbese a las personas naturales o jurídicas que no hubieren sido previamente calificadas y autorizadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP el transporte de sustancias sujetas a fiscalización, por cualquier medio o sistema de transporte.

Art. 54.- Del facilitamiento de bienes para la realización de actividades de cultivo, producción, almacenamiento o transporte ilícitos.- Prohíbese la venta, arrendamiento, entrega en anticresis, préstamo o cualquier forma de facilitamiento de bienes, a sabiendas o con razonables y coincidentes indicios de que van a ser dedicados a actividades de cultivo, producción, fabricación, almacenamiento o transporte o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización.

Asimismo, prohíbese la elaboración, fabricación, transporte o distribución de equipos, materiales o insumos utilizables en el cultivo, la producción o transporte ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización realizadas a sabiendas de que van a ser utilizados en esos fines, o ante razonables y coincidentes indicios de que aquello vaya a ocurrir.

Art. 55.- De la conversión, transferencia, encubrimiento, ocultamiento o tenencia de bienes procedentes de actividades ilícitas.- Prohíbese la conversión o la transferencia de bienes con el fin de encubrir u ocultar su origen ilegítimo procedente del cultivo, producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Art. 56.- De la organización, gestión o financiación de actividades de cultivo, producción y tráfico ilícito.- Prohíbese la organización, la gestión o la financiación de actividades tanto de cultivo de las plantas a las que se refiere esta Ley como de elaboración, producción, fabricación y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Prohíbese, asimismo, la organización, gestión o financiación, con conocimiento, de actividades previas, complementarias o subsidiarias de las señaladas en el inciso precedente.

Art. 57.- De la instigación a realizar actividades de cultivo, producción, uso o tráfico ilícito.- Prohíbese inducir, incitar, instigar o promover, por cualquier medio, la realización de actividades de cultivo de plantas, elaboración, producción o fabricación, uso o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, o de actuaciones complementarias o subsidiarias de aquéllas, o a la asociación o confabulación para ejecutarlas.

TITULO QUINTO DE LAS INFRACCIONES Y LAS PENAS

Art. 58.- De las infracciones a esta Ley.- Son infracciones a la presente Ley los actos punibles sancionados por ella. Se dividen en delitos y contravenciones y son de acción pública y pesquisables de oficio.

CAPITULO PRIMERO DE LOS DELITOS

Art. 59.- Sanción para la siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a fiscalización.- Quienes siembren, cultiven, cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta Ley y cualesquiera otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, según se determina en los anexos a esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta u ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Quienes recolecten plantas de las variedades determinadas en esta Ley serán sancionados con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 60.- Sanción para la elaboración, producción, fabricación o preparación.- Quienes extraigan, purifiquen, cristalicen, recristalicen, sinteticen o por cualquier forma o procedimiento elaboren, produzcan, fabriquen, preparen o envasen sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o infringiendo las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 61.- Sanción para la oferta, corretaje o intermediación.- A quienes se les sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias sujetas a fiscalización, o a quienes realicen el corretaje o intermediación en la negociación de ellas, se les sancionará con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 62.- Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a cualquier título, de dichas sustancias, realizada en contravención a los preceptos de esta Ley.

Art. 63.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No serán responsables los transportistas que desconocieren el contenido de la carga transportada.

Art. 64.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 65.- Disminución de penas por tenencia para uso personal.- La sanción será de un mes a dos años de prisión cuando, por la escasa cantidad y demás circunstancias de la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, se colija que ellas están destinadas a uso personal inmediato del tenedor.

En este caso, comprobada su dependencia física o síquica de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previo informe de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, el Juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someter al culpable a medidas de seguridad curativa, por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación.

La disminución o sustitución de penas previstas en este artículo se aplicará siempre que el Juez comprobare que el implicado no tiene antecedentes de traficante de sustancias sujetas a fiscalización y demostrare buena conducta anterior y ejemplar comportamiento en el centro de detención.

Art. 66.- Calificación de la persona dependiente.- El estado de dependencia de una persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido

la dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere.

Art. 67.- Administración indebida.- Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras personas cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a fiscalización o medicamento que las contenga, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la persona hubiere consentido; y con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales, si no hubiere consentido. Se presume de derecho la falta de consentimiento del menor de edad o del incapaz absoluto.

Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas causare incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta días, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales. Si esa incapacidad o enfermedad superare el lapso mencionado, la pena será de nueve a doce años de reclusión menor extraordinaria y multa de cuarenta y cinco a seis mil salarios mínimos vitales generales. Si provocare la incapacidad o enfermedad permanente o la muerte de la persona, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 68.- Administración a deportistas.- Quien administre a un deportista, profesional o aficionado, o lo induzca a usar sustancias estupefacientes o psicotrópicas, drogas u otros preparados que las contengan, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

Si el deportista consiente en ello será sancionado con igual pena.

Art. 69.- Destinación de bienes para depósito o consumo.- Quienes, fuera de los casos autorizados en esta Ley, destinaren bienes inmuebles o muebles para que en ellos se cultiven, produzcan, fabriquen, trafiquen y mantengan en depósito, o por cualquier concepto suministren o administren sustancias sujetas a fiscalización o plantas de las que se puedan extraer, serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 70.- Receta injustificada.- El profesional que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.

Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz absoluto, la pena será de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

En caso de reincidencia, será además privado definitivamente del ejercicio profesional.

Art. 71.- Falsificación, forjamiento o alteración de recetas.- Quien falsifique, forje o altere recetas médicas o las utilice con el fin de procurarse sustancias sujetas a fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 72.- Despacho indebido.- El propietario, administrador o empleado de droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos que despache sustancias sujetas a fiscalización o preparados que las contengan, sin receta o con recetas caducadas o falsificadas, forjadas o alteradas, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales y clausura definitiva del establecimiento. En caso de ser profesional, será además privado definitivamente de su ejercicio.

Art. 73.- Producción, mantenimiento y tráfico de precursores u otros productos químicos específicos.- Quienes sin las autorizaciones y requisitos previstos por esta Ley mantengan, elaboren, fabriquen, produzcan o transporten precursores u otros productos químicos específicos destinados a la elaboración de sustancias sujetas a fiscalización o trafiquen con ellos, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 74.- Faltante de precursores.- Los propietarios responsables de establecimientos o empresas autorizados para elaborar, mantener o comercializar precursores u otros productos químicos específicos en los que se determine faltantes injustificados en sus existencias, serán reprimidos con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 75.- Tenencia o mantenimiento de materias primas o insumos para uso ilícito.- Quienes mantengan bajo su tenencia o cuidado materias primas, insumos, precursores u otros productos químicos específicos a sabiendas de que serán utilizados en la siembra, cultivo, producción, elaboración o fabricación ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales.

Art. 76.- Enriquecimiento ilícito.- La persona respecto de quien existan presunciones de que es productor o traficante ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de precursores u otros productos químicos específicos o se halle involucrado en otros delitos previstos por esta Ley, y que directamente o por persona interpuesta realice gastos o aumente su patrimonio o el de un tercero en cuantía no proporcionada a sus ingresos sin justificar la legalidad de los medios empleados para efectuar esos gastos u obtener el incremento patrimonial, será sancionado con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria.

Art. 77.- Conversión o transferencia de bienes.- Quienes a sabiendas de que bienes de cualquier clase han sido adquiridos a través de la realización de los delitos tipificados en este Capítulo, con el propósito de ocultar tal origen contribuyeren a negociarlos,

convertirlos o transferirlos a otras actividades, serán sancionados con cuatro a ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.¹⁰

Si la comisión de esta infracción se hubiere realizado mediante la organización de una asociación destinada a preparar, facilitar, asegurar los resultados o garantizar la impunidad, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art.- 78. Represión a testaferros.- Quien preste su nombre o el de la empresa en que participe para adquirir bienes con recursos provenientes de delitos sancionados por esta Ley, será reprimido con pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 79.- Sanción a servidores públicos que permitan o procuren la impunidad.- El servidor público, el agente de la fuerza pública, el auxiliar de la Administración de Justicia, el Juez o miembro del Tribunal Penal, el Agente o Ministro Fiscal que altere u oculte pruebas de los delitos tipificados en esta Ley con el fin de favorecer a los responsables, ***o que de cualquier manera procure su impunidad,***¹¹ será sancionado con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

En caso de evasión de los detenidos o presos por delitos contemplados en esta Ley, los funcionarios y empleados encargados de guardarlos, conducirlos o vigilarlos, serán reprimidos con las penas enunciadas en el inciso precedente.

Los condenados quedarán permanentemente inhabilitados para desempeñar funciones o cargo públicos.

Art.- 80. Cohecho.- Quien intente cohechar a quien conoce o juzga uno de los delitos reprimidos por esta Ley o a la autoridad o agente de ella que lo investiga, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Si se consuma el cohecho, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales, tanto para quien lo propuso como para quien lo aceptó.

Art. 81.- Intimidación.- Quien amenazare causar daño a la persona, familiares o bienes de quienes conocen, investigan en cualquier fase o juzgan uno o más delitos tipificados en esta Ley, será reprimido con reclusión ordinaria de cuatro a seis años y multa de cuarenta a dos mil salarios mínimos vitales generales.

¹⁰ Véase la modificación introducida por el artículo 7 de la Ley 25 de 1997 a este inciso.

¹¹ La frase destacada con negrillas e itálica fue declarada inconstitucional mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997).

Si se consuma la intimidación, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de cien a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Los actos administrativos o judiciales que sean consecuencia del cohecho o intimidación comprobados son nulos y sin ningún valor. El juez que conozca el juicio sobre el cohecho o la intimidación declarará la nulidad al momento de resolver la causa.

Art. 82.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.- Quien ponga sustancias sujetas a fiscalización en las ropas o bienes de una persona, con el objeto de involucrarlo en alguno de los delitos sancionados por esta Ley, o realice alguna otra acción tendiente a dicho fin o disponga u ordene tales hechos, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.

Si quien incurre en las acciones tipificadas en el inciso precedente fuere autoridad, servidor público o fingiere cumplir órdenes de autoridad competente, la pena será de reclusión mayor ordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 83.- Intimidación o extorsión con la amenaza de involucrar en delitos.- Quien, en cualquier forma o por cualquier medio, intimide o extorsione a una o varias personas con la amenaza de involucrarlas en delitos reprimidos por esta Ley, forjando hechos falsos o agravando los que se hubieren producido, será sancionado con cuatro a ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 84.- Organización, gestión o financiamiento de actividades delictivas.- Quien organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos previstos por esta Ley como delitos, será sancionado con la pena mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

Art. 85.- Promoción de delitos.- Quien instigue, incite o induzca a cometer cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley, será sancionado con un cuarto de la mitad de la pena que se impusiere al autor o autores del delito principal.

Art. 86.- Comiso especial.- Además de las penas establecidas en este Capítulo, el juez dispondrá el comiso especial:

a) De los bienes muebles e inmuebles, útiles, sustancias y objetos de laboratorios en los que se ejecuten las actividades ilícitas señaladas en este Capítulo, cuando su dueño participe, las permita, dirija, financie u organice, o si son resultado de actividades ilícitas sancionadas por esta Ley;

b) De los medios de transporte que hubieren sido utilizados para movilizar sustancias sujetas a fiscalización, siempre que se compruebe que los propietarios son responsables de su transporte o hubieren utilizado o permitido dicha movilización; y,

c) Del dinero aprehendido y del que tuvieran los encausados en cuentas corrientes de instituciones bancarias y de ahorro, de títulos valores e instrumentos de libre conversión y curso legal como cheques, cheques de viajeros, títulos al portador, bonos, giros postales o, en general, cualquier documento negociable, cuando sean el producto de las infracciones tipificadas en esta Ley.¹²

Art. 87.- Producción o comercialización de bienes determinados en el artículo 28.- Quien produzca o comercialice carteles, afiches, adhesivos, calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier tipo de grabación que sugieran, enlacen o induzcan al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales y el comiso de dichos bienes.

Art. 88.- Atenuantes.- Para efectos de la aplicación de las penas previstas en esta Ley se consideran circunstancias atenuantes:

- a) Ser menor de veintiún años de edad;
- b) Haber actuado por presiones, amenazas o bajo violencia superables;
- c) Rusticidad del infractor de tal naturaleza que revele que cometió el ilícito por ignorancia;
- d) Indigencia; y,
- e) Las demás contempladas en el Código Penal.

Art. 89.- Atenuante trascendental.- Quien hallándose implicado en infracciones previstas por esta Ley suministrare a la Policía Nacional, Ministerio Público o jueces competentes datos e informaciones precisas, verdaderas y comprobables, que condujeran a descubrir presuntos culpables de ilícitos previstos en ella, sancionados con pena igual o mayor que la contemplada para la infracción por la que se le juzga, será reprimido con un tercio a la mitad de la pena modificada por las atenuantes establecidas en el artículo precedente, en caso de haberlas, o de la que le correspondería en ausencia de ellas.

Art. 90.- Concurrencia de infracciones y acumulación de penas.- En caso de concurrencia de varias infracciones contempladas en esta Ley, se acumularán las penas determinadas para cada una de tal manera que la pena acumulada aplicable sea el resultado de la suma de las penas correspondientes a cada infracción, hasta un máximo de veinticinco años.

Igual acumulación de penas se aplicará cuando concurren infracciones a esta Ley con otras que tuvieran alguna conexión, o cuando se hubieren consumado los delitos previstos en los artículos 80 y 81.

¹² El artículo 8 de la Ley 25 de 1997 dispuso la introducción un inciso al final de este artículo.

Art. 91.- Prescripción de la acción y de la pena.- La acción penal por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de veinte y cinco años. El referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha del auto cabeza de proceso.

La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor de cinco años.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS CONTRAVENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU JUZGAMIENTO

Art. 92.- De las contravenciones.- Son contravenciones las violaciones a preceptos de esta Ley no reprimidas con penas de privación de la libertad. Serán sancionadas con multa, suspensión temporal de funciones o de permiso para operar, clausura del establecimiento, cancelación o destitución y comiso.

Art. 93.- Incumplimiento de obligaciones generales.- Serán sancionadas con multa de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas de derecho privado que incumplan las obligaciones señaladas en los artículos 2, inciso segundo; 34, 37, 39, inciso tercero, y 42. La reincidencia en la falta dará lugar a la suspensión temporal de funciones o de permiso para operar. La reiteración durante los doce meses siguientes se sancionará con destitución o cancelación o, en su caso, la clausura del establecimiento.

Si el sancionado fuere servidor público, en caso de reincidencia o reiteración será destituido por la respectiva autoridad nominadora, a petición del Secretario Ejecutivo del CONSEP.

Art. 94.- Empresas u organizaciones que no cumplan las normas sobre difusión de avisos o publicaciones.- Serán reprimidos con multa de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales los responsables de empresas, residencias colectivas y ambientes especiales que incumplan las obligaciones establecidas en los artículos 21 y 22.

En caso de reincidencia, la multa será duplicada.

Art. 95.- Entrega de fármacos sin observancia de requisitos.- Con pena igual que la contemplada en el artículo precedente serán reprimidos los responsables de hospitales, clínicas y farmacias, boticas y droguerías que incumplan cualquiera de las obligaciones contempladas en el artículo 48 de la presente Ley.

Art. 96.- Expedición de recetas con infracción de los requisitos previstos por la Ley.- Serán sancionados con multas de cinco a cien salarios mínimos vitales generales los profesionales que expidan recetas de fármacos que contengan sustancias sujetas a fiscalización, siempre que no constituya delito de mayor gravedad, sin estar inscritos en

la Dirección de Salud o sin utilizar los formularios especiales que disponga el Reglamento.

En caso de reincidencia, serán eliminados del registro de profesionales que pueden expedir esas recetas.

Art. 97.- Elaboración, distribución o venta de drogas o preparados.- Los laboratorios u otras empresas que en la elaboración, distribución o venta de drogas u otros preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización incumplan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados con multa de cien a quinientos salarios mínimos vitales generales, siempre que no constituya un delito de mayor gravedad.

La reincidencia en las infracciones a que se refiere el inciso precedente se sancionará con multa de doscientos a mil salarios mínimos vitales generales y la clausura definitiva del laboratorio o empresa correspondiente.

Art. 98.- Propietarios o responsables de establecimientos en que se despache sin receta válida.- Los propietarios, representantes legales o responsables técnicos de establecimientos farmacéuticos en que se haya despachado más de tres veces sin receta previa, con recetas caducadas o de profesionales no autorizados, drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados con multa de veinte a cien salarios mínimos vitales generales, si no fueren responsables de un delito sancionado con pena mayor.

La reincidencia será sancionada con multa de cuarenta a doscientos salarios mínimos vitales generales.

La persistencia en la conducta señalada en el inciso primero se sancionará con multa de doscientos a quinientos salarios mínimos vitales generales y clausura del establecimiento.

Art. 99.- Faltantes o excedentes de sustancias.- Si en las farmacias, boticas o droguerías autorizadas para vender al público sustancias sujetas a fiscalización se comprobare faltantes o excedentes en las existencias de ellas, o de preparados que las contengan, los propietarios de esos establecimientos, sus representantes legales y responsables técnicos serán sancionados con multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos vitales generales, a menos que la diferencia fuere tan pequeña que pudiera imputarse a errores de los que suelen ocurrir en pesajes o mediciones o a las características de estabilidad de la fórmula farmacéutica correspondiente y cuya tolerancia máxima se establecerá en forma tabular en el Reglamento de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de la pena correspondiente a los delitos de los que fueren responsables.

La reincidencia será sancionada con el doble de la mencionada multa y la clausura temporal del establecimiento por un período de hasta noventa días.

Si se persistiere en esa conducta, el establecimiento será clausurado en forma definitiva y los preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización serán comisados, sin

perjuicio de las penas aplicables a los delitos que hubieren cometido los propietarios o responsables de esos establecimientos.

Art. 100.- Autoridades deportivas.- Serán sancionados con multa de cien a quinientos salarios mínimos vitales generales y destitución de sus cargos, o con una de estas penas solamente, los representantes legales de la Federación Deportiva Nacional, de las Federaciones Nacionales por Deporte, de las Federaciones Deportivas Provinciales y sus filiales o dependencias afines que incumplan negligente o dolosamente la obligación constante en el artículo 26.

Art. 101.- Responsabilidad solidaria.- Si las multas por contravenciones se impusieren a establecimientos, empresas o personas jurídicas de derecho privado, sus representantes legales, propietarios o administradores serán solidariamente responsables del pago.

Art. 102.- Del procedimiento para su juzgamiento.- El Comisario de Salud juzgará las contravenciones en cada jurisdicción provincial donde se hubiere cometido la infracción, con sujeción a las normas aplicables a las contravenciones de cuarta clase que se contemplan en el Libro Quinto del Código de Procedimiento Penal.

De la resolución del Comisario de Salud podrá apelarse, en el término máximo de tres días, ante la Dirección Nacional de Salud, la cual, dentro de los seis días hábiles posteriores a la recepción del expediente, dictará su resolución, que causará ejecutoria.¹³

TITULO SEXTO
DE LAS ACTUACIONES PREPROCESALES, COMPETENCIA Y
PROCEDIMIENTO
CAPITULO PRIMERO
DE LA RETENCION, APREHENSION E INCAUTACION DE BIENES

Art. 103.- Retención.- Si por cualquier modo llegare a conocimiento del CONSEP el ingreso al territorio nacional de una nave aérea, marítima, fluvial o de cualquier otro medio de transporte comercial en el que se movilizaren sustancias cuyo tráfico se encuentre prohibido en esta Ley, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrá disponer la retención de los medios de transporte y la aprehensión de las sustancias mientras se realiza la investigación. La retención no excederá de tres días.

Art. 104.- Aprehensión.- La Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos especializados, tendrá a su cargo el control e investigación de los delitos tipificados en esta Ley, el descubrimiento y detención de los infractores, la entrega vigilada de bienes o sustancias sujetas a fiscalización y la aprehensión inmediata de:

a) Sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización, cualquiera sea su estado, y las plantas de las que pueda extraérselas;

¹³ Véanse la modificación introducida por el artículo 9 de la Ley 25 de 1997 y el artículo nuevo que a continuación agregó el artículo 10.

- b) Equipos, laboratorios, precursores y otros productos químicos específicos, y de otros medios destinados a la producción o fabricación de las sustancias sujetas a fiscalización;
- c) Bienes y objetos empleados para el almacenamiento y conservación de sustancias sujetas a fiscalización, y de los vehículos y demás medios utilizados para su transporte;
- d) Dinero, valores, instrumentos, monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales y demás bienes que se estime que son producto de la comisión de los actos tipificados en esta Ley.

La Policía Nacional, para cumplir los fines señalados en este artículo, podrá realizar todas las investigaciones documentales, de laboratorio o cualquier otra de naturaleza técnico-científica.

Art. 105.- Identificación de bienes aprehendidos.- Quienes procedieren a la aprehensión a que se refiere el artículo precedente identificarán las sustancias, los bienes y al presunto propietario o tenedor, en acta separada, que se remitirá al juez dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. El juez, al dictar el auto cabeza de proceso, ordenará la incautación y el depósito de esos bienes. Esta medida cautelar podrá ser revocada excepcionalmente siempre que se acredite ante el juez que, a pesar de la suma diligencia y cuidado puestos, el titular del derecho no pudo conocer el destino ilícito dado a los bienes a los que se refieren los literales c) y d) del artículo precedente.

Si se tratare de insumos, precursores químicos u otros productos químicos específicos, el Consejo Directivo del CONSEP podrá disponer, dentro de los sesenta días siguientes a su recepción, la utilización por una entidad del sector público, su enajenación para fines lícitos o su destrucción. La enajenación se realizará en la forma que decida este organismo y a favor de las personas naturales o jurídicas previamente calificadas.¹⁴

Art. 106.- Acta de destrucción de sembríos y laboratorios.- Cuando las autoridades de la investigación procedan a la destrucción de plantas, sustancias o laboratorios, dejarán constancia de ello en un acta que se agregará al proceso, y que contendrá, además de la identidad del propietario o presunto responsable, una descripción prolija de las plantas, el estado de los sembríos y la extensión del terreno cultivado, de las sustancias, equipos, instalaciones y otros bienes que se encontraren en los sembríos y en los laboratorios y de los medios utilizados para esa destrucción. Previamente a la destrucción se tomarán muestras para el análisis.

Las sustancias sujetas a fiscalización serán destruidas cuando haya imposibilidad o riesgo fundado para su transporte para entregarlas al juez competente.

Quienes suscriban el acta serán civil y penalmente responsables por la veracidad de su texto.

¹⁴ Véanse la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 25 de 1997 y los cuatro artículos nuevos agregados por el artículo 12.

Art. 107.- Incautación.- El Tribunal Penal dispondrá la incautación de todos los bienes, dineros y más valores que hubieren sido utilizados para la comisión de los delitos o que fueren producto o rédito de ellos. Serán además constituidos en depósito.

El juez podrá requerir del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, de las entidades del sistema financiero nacional, de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles o especiales, o de cualquier otra entidad, funcionario o empleado público, toda la información necesaria sobre la situación financiera de las personas naturales o jurídicas presuntamente involucradas en infracciones a esta Ley.

Art. 108.- Depósito en el Banco Central del Ecuador.- Todo dinero en moneda nacional o extranjera será depositado, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la aprehensión o incautación en la Cuenta Especial de Depósitos del CONSEP en el Banco Central del Ecuador o, donde éste no funcionare, en el Banco Nacional de Fomento.

El Banco Central del Ecuador o el Banco Nacional de Fomento, en su caso, podrá invertir, por intermedio de las Bolsas de Valores, hasta el ochenta y cinco por ciento de los dineros depositados en la adquisición de bonos, cédulas hipotecarias o cualquier papel fiduciario de alto rendimiento y liquidez.

El rendimiento de tales inversiones se depositará en una Subcuenta Especial abierta en el Banco Central del Ecuador, a órdenes del CONSEP, para contribuir a la financiación de su presupuesto y destinarlo exclusivamente a gastos de equipamiento e inversión.

El Banco Central del Ecuador y el Banco Nacional de Fomento regularán el funcionamiento y la forma de obtener los reembolsos de valores para fines de restitución de dineros a los sindicados absueltos.

Los bancos indicados notificarán al CONSEP todas las operaciones de compra y venta de papeles fiduciarios que realicen. No cobrarán comisión alguna por su intervención.

Art. 109.- Disposición de bienes.- El Consejo Directivo del CONSEP podrá entregar provisionalmente los bienes aprehendidos o incautados a las instituciones públicas que determine, para que los usen bajo su responsabilidad.

Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impuso el comiso o extinguida la acción penal o la pena, el Consejo Directivo dispondrá definitivamente de esos bienes.

Art. 110.- Restitución de bienes.- Si fuere absuelto el sindicado propietario de los bienes incautados, éstos le serán restituidos por el CONSEP cuando lo disponga el juez, una vez canceladas las medidas cautelares.

Las instituciones a las que se hubiere entregado bienes los devolverán en el estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal deterioro por el uso legítimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o cubrir la indemnización que fije el juez, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

El dinero o el valor que representen los instrumentos monetarios o documentos bancarios, financieros o comerciales aprehendidos o incautados se devolverá en moneda nacional, según la cotización del mercado libre para la compra de la divisa incautada a la fecha de la devolución, con los respectivos intereses legales vigentes fijados por la Junta Monetaria.

Procederá la acción de indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.

CAPITULO SECUNDO COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Art. 111.- Competencia.- Para conocer, sustanciar y juzgar los delitos tipificados en esta Ley se aplicarán las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

Art. 112.- Casos de fuero.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o los Presidentes de las Cortes Superiores serán competentes para sustanciar y juzgar en los casos de fuero que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, les corresponde conocer.

Art. 113.- Reglas para radicar la competencia.- Las reglas para radicar la competencia serán las señaladas en el Código Penal.

Art. 114.- Acción popular.- Se concede acción popular para denunciar las infracciones señaladas en esta Ley.

Art. 115.- Tratamiento de excepción.- En esta clase de juicios no se admitirá caución, ni se concederá condena condicional, prelibertad ni libertad controladas, ni los beneficios de la Ley de Gracia y del indulto.

La rebaja de penas a favor del sentenciado que demuestre conducta ejemplar será concedida por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.

Art. 116.- Valor probatorio de actuaciones preprocesales.- El parte informativo de la fuerza pública y la declaración preprocesal rendida por el indiciado en presencia del Agente Fiscal constituirán presunción grave de culpabilidad, siempre que se hallare justificado el cuerpo del delito.¹⁵

Art. 117.- Análisis químico de las sustancias aprehendidas.- Las sustancias aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo efecto se tomarán muestras de ellas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP entregará a los peritos designados por el juez, quienes presentarán su informe en el término que éste les concediere.

¹⁵ Este artículo fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997)

El juez designará peritos a los profesionales que presten sus servicios en los laboratorios del sector público registrado en el CONSEP.

El resultado del examen o análisis químico constituirá prueba plena sobre la existencia material del delito.

Art. 118.- Asistencia judicial recíproca.- Los jueces de lo penal podrán solicitar asistencia de sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales y la investigación de los delitos previstos en esta Ley.

Esta asistencia se referirá, entre otros hechos, a la detención y remisión de sindicados, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, inspecciones de lugar, envío de elementos de prueba, identificación y análisis de sustancias sujetas a fiscalización e incautación de bienes.

Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso como legalmente actuadas y valoradas por el juez conforme a las reglas de la sana crítica.

Los requerimientos de asistencia recíproca se harán por vía diplomática o por conducto de la INTERPOL.

Art.- 119. Medidas cautelares.- En el auto cabeza de proceso se ordenarán las medidas cautelares de carácter personal y real previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal que fueren procedentes y, de manera especial, la prohibición de enajenar todos los bienes del sindicado y la inmovilización de sus cuentas monetarias y bancarias, y de las acciones y participaciones sociales.

Para que se inscriba la prohibición de enajenar se enviará circular telegráfica a todos los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y especiales de la República, quienes, en el término de veinte y cuatro horas posteriores a su recepción, informarán al juez del cumplimiento de dicha orden. Si no lo hicieren, el juez insistirá en su orden, y si ésta no fuere cumplida, pedirá la destitución de quien la incumpla.

Para la inmovilización de las acciones bancarias, cuentas monetarias, corrientes y de ahorros el juez oficiará inmediatamente al Superintendente de Bancos, quien en el término de veinte y cuatro horas, dará cumplimiento a esta orden, notificando con ella a las entidades bancarias, financieras y de ahorros del país, que estarán obligadas a inmovilizar esos valores y confirmar su cumplimiento, por escrito, en el término de cuarenta y ocho horas, al Superintendente de Bancos y al juez.

En los casos de fuero, el juez competente comisionará la diligencia de destrucción a uno de los Tribunales Penales.

Se tomarán las muestras respectivas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP entregará a los peritos.

De lo actuado se dejará constancia en acta.

Art. 120.- Dstrucción de sustancias sujetas a fiscalización.- En el mismo auto cabeza de proceso el juez dispondrá que, dentro de los quince días siguientes, se proceda a la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido aprehendidas, salvo que el CONSEP aplicare lo previsto en el inciso segundo del artículo 105.

Para la destrucción se verificará la integridad de la envoltura y la identidad de la sustancia, y se comprobará el peso bruto y el peso neto, verificando si corresponde al que consta en el informe de investigación. En esta diligencia intervendrán el juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del CONSEP y el secretario del juzgado.

Art. 121.- Consulta obligatoria.- No surtirá efecto el auto en que se revoque la prisión preventiva, de suspensión o cesación de medidas de aprehensión, retención e incautación, si no es confirmado por el superior, previo informe obligatorio y **favorable**¹⁶ del Ministro Fiscal correspondiente, quienes emitirán su opinión en el término de veinte y cuatro horas posteriores a la recepción del proceso.

Art. 122.- Sentencia.- El juez, al dictar sentencia, en la apreciación de los hechos y las pruebas atenderá las reglas de la sana crítica.

En la sentencia condenatoria, el juez ordenará el comiso y entrega definitiva de los bienes al CONSEP.

Tratándose de bienes inmuebles se protocolizará copia certificada de la sentencia para que sirva de título, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Estas diligencias se practicarán gratuitamente.

En la sentencia se ordenará la destrucción de las muestras de las sustancias incautadas. Sea condenatoria o absolutoria, la sentencia será obligatoriamente elevada en consulta al superior. Mientras éste no resuelva, no se pondrá en libertad al procesado.

A efectos de que se cumpla la prohibición de enajenar de acciones y participaciones sociales de compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, el Juez le oficiará para que realice la notificación respectiva a los administradores y Registradores de lo mercantil. La publicación por la prensa del aviso respectivo surtirá los efectos de notificación.

Las transferencias realizadas en violación de estas prohibiciones serán anuladas por el respectivo Superintendente.

En el auto inicial se ordenará también la entrega en depósito a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP de todos los bienes incautados.

¹⁶ Esta expresión fue declarada inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997)

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 123.- Leyes aplicables.- En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta Ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Art. 124.- Prohibición para ocupar cargos en el CONSEP.- Quienes hubieren sido destituidos de un cargo en instituciones del sector público no podrán ejercer función alguna en el CONSEP.¹⁷

Art. 125.- Salario mínimo vital.- El salario mínimo vital a que se refiere esta Ley se entenderá que es el establecido para los trabajadores en general, vigente al momento de la comisión de la infracción.

Art. 126.- Reforma a la Ley General de Bancos.- En la Ley No. 006, publicada en el Registro Oficial No. 97, del 29 de diciembre de 1988, sustitúyese el artículo 4, que reforma a la Ley General de Bancos, por el siguiente:

"

Art. 4.- A continuación del artículo 42 agrégase el siguiente:

"Art La calificación de idoneidad general, responsabilidad y condiciones establecidas en el artículo precedente también será ejercida por el Superintendente de Bancos respecto a los cesionarios y suscriptores, previamente a la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, en los siguientes casos: a) Transferencia de acciones emitidas por una entidad sujeta a control de la Superintendencia de Bancos, salvo el caso de sucesión por causa de muerte; y, b) Suscripción de acciones en los aumentos de capital de las entidades sujetas a control de la Superintendencia de Bancos, cuando el suscriptor no haya sido accionista o siendo accionista trate de aumentar su porcentaje de acciones frente al total de acciones en circulación.

El Superintendente de Bancos establecerá mediante resolución los montos mínimos a los cuales se sujetarán las calificaciones referidas en el inciso precedente y fijará también las fuentes de información que requerirá. El Superintendente de Bancos queda autorizado para pedir las informaciones que le permitan aplicar lo que este artículo dispone, informaciones que de manera obligatoria le serán suministradas por todas las entidades del sector público, inclusive las Fuerzas Armadas, la Policía y sus dependencias, y también otras entidades del sector privado que el Superintendente señale en cada caso. Todas estas informaciones se manejarán con la debida reserva.

El incumplimiento del requisito señalado en este artículo producirá la nulidad de la inscripción, sin perjuicio de que el Superintendente de Bancos imponga al administrador que hubiese dispuesto la inscripción a las sanciones previstas en la Ley."

DEROGATORIAS Y ANEXOS

¹⁷ Véase el inciso segundo agregado por el artículo 15 de la Ley 25 de 1997.

Art. 127.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima, derógase la codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 612, del 27 de enero de 1987.

Art. 128.- En la Ley Orgánica del Ministerio Público deróganse: a) El literal d) del artículo 3; b) En los artículos 4 y 48, las frases "la División Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes" y "el Director General de la División Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes", respectivamente; c) En el artículo 11, los literales h) e i); y, d) Los artículos 41, 42, 43, 47 y 54.

Art. 129.- Quedan incorporados a esta Ley los anexos I, II, III y IV, que corresponden a Definiciones, Clasificación de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores Químicos y otros Productos Químicos Específicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Hasta que se apruebe el presupuesto del CONSEP, sus servidores percibirán las remuneraciones con cargo a los presupuestos de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Salud Pública, en lo pertinente. Los gastos variables que realice el CONSEP seguirán haciéndose con cargo a las partidas específicas de esos presupuestos, correspondientes al año de 1990.

SEGUNDA: El CONSEP continuará ocupando, hasta el 31 de diciembre de 1990, los locales de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Salud que estuvieron asignados a la DINACONTES y al Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes. El Estado destinará, a partir del ejercicio financiero de 1991, los inmuebles apropiados para su funcionamiento.

TERCERA: El CONSEP asume todos los derechos y obligaciones derivados de los convenios celebrados por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Salud Pública con los organismos nacionales, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales públicos o privados, en materia de prevención del uso indebido de drogas, represión del tráfico ilícito y fiscalización de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

CUARTA: La Procuraduría General del Estado transferirá gratuitamente al CONSEP, con intervención de la Contraloría General del Estado, los bienes muebles de su propiedad que estuvieren designados a la DINACONTES, previa resolución del Procurador General del Estado y la formación del correspondiente inventario.

Los bienes inmuebles que hubieren sido donados a la Procuraduría General del Estado para efectos de prevención del uso indebido de drogas y represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas serán transferidos al CONSEP, conforme al Reglamento General de Bienes del Sector Público.

QUINTA: El Procurador General del Estado seleccionará el personal idóneo de la División Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, DINACONTES, que con sus respectivas partidas presupuestarias se trasladará al CONSEP, en las mismas condiciones en que se encontraren al expedirse esta Ley. Los cargos de los servidores de la DINACONTES que no fueren seleccionados quedarán vacantes y sus partidas presupuestarias pasarán al CONSEP.

El Ministerio de Salud Pública transferirá gratuitamente al CONSEP los bienes muebles que a la fecha de expedición de esta Ley se encontraren destinados al Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes. Igualmente procederá a donar los bienes inmuebles que hubieren sido destinados al Ministerio de Salud Pública para fines de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

SEXTA: El personal del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes, con sus respectivas partidas presupuestarias, se trasladará al CONSEP, en las mismas condiciones en que se encontraren al expedirse esta Ley.

SEPTIMA: Los procesos que al momento de entrar en vigencia la presente Ley estuvieren en trámite, seguirán sustanciándose de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y el Código de Procedimiento Penal.

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos noventa.

[Firmado]

Dr. Antonio Rodríguez Vicéns

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL, ENC.

[Firmado]

Carlos Alberto Soto

SECRETARIO GENERAL, ENC.

ANEXO III

Declaración de Cartagena *

Las partes consideran que toda estrategia que las comprometa a poner en práctica o a consolidar un programa general intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda, el consumo y la oferta, y comprender entendimientos acerca de la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio y la inversión, así como acerca de la lucha contra el tráfico de las drogas ilícitas y de las iniciativas diplomáticas y de opinión pública.

Las partes reconocen que estos son elementos conexos que se refuerzan mutuamente. El progreso que se logre en uno contribuirá al progreso en los otros y el fracaso en cualquiera de ellos amenazará el éxito en los restantes. El orden en que se mencionan en el presente documento no pretende asignarles una prioridad determinada.

La cooperación económica de las iniciativas internacionales no pueden resultar eficaces a menos que vayan acompañadas de programas enérgicos en contra de la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas. Es evidente que para que sean plenamente eficaces los esfuerzos, tendientes a reducir la oferta, tienen que ir acompañados de una reducción apreciable de la demanda. Las partes reconocen que el intercambio de información sobre los programas para el control de la demanda redundará en beneficio de sus países.

Las partes reconocen que la índole y el efecto del tráfico de drogas ilícitas, y de su represión, varían en cada uno de los tres países andinos y que el presente documento no puede plantearlos plenamente. Las partes negociarán acuerdos bilaterales y multilaterales, de conformidad con sus acciones en contra de las drogas ilícitas en los que constaran sus responsabilidades y

* Los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos de América y Perú, reunidos en Cartagena de Indias, Colombia, el día 15 de febrero de 1990, emitieron la siguiente Declaración.

compromisos con respecto a la cooperación económica y a la intensificación de las medidas de control.

A. Entendimientos relativos a los aspectos económicos y al desarrollo alternativo

Las partes reconocen que el tráfico de drogas ilícitas tiene a largo plazo un impacto negativo sobre sus economías. En algunas de las partes las ganancias de la producción y el comercio de la coca y el tráfico de drogas ilícitas contribuyen, en diferente medida, a la entrada de divisas y a la generación de empleos o ingresos. La supresión de la producción y el comercio de la coca tendrá costos económicos significativos, inmediatos y prolongados que afectarán de manera diferente a cada uno de los países andinos.

El presidente de los Estados Unidos solicitará al Congreso que autorice nuevos fondos para este programa durante los años fiscales de 1991 a 1994, a fin de apoyar a las tres partes andinas en sus esfuerzos por rectificar los trastornos socioeconómicos a largo y corto plazo, ocasionados por una lucha eficaz contra las drogas ilícitas.

Este aporte de los Estados Unidos se efectuará dentro del marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes que realicen las partes andinas, las cuales reiteran la importancia de llevar a la práctica o fortalecer políticas económicas sólidas para el aprovechamiento eficaz de ese aporte. Los Estados Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con las partes andinas en una amplia gama de iniciativas para el desarrollo, el comercio y la inversión, a fin de vigorizar y sostener el crecimiento económico a largo plazo.

El desarrollo alternativo orientado a la sustitución de la economía de la coca en Bolivia y el Perú, y el tráfico de drogas ilícitas en las partes andinas, necesita de programas de cooperación que abarquen los siguientes campos:

A corto plazo se requiere la creación y/o fortalecimiento de programas sociales de emergencia y del apoyo a la balanza de pagos, a fin de contrarrestar los costos sociales y económicos derivados de la sustitución. A mediano y largo plazo se requieren programas de inversión y medidas para generar las condiciones económicas que darán lugar a la sustitución definitiva de la economía de la coca en los países donde existe, o el sector de la economía afectado por el tráfico de estupefacientes. De igual manera, se requiere la ejecución de programas destinados a preservar el equilibrio ecológico.

1. Desarrollo alternativo y sustitución de cultivos:

Para fomentar el aumento de las oportunidades de empleo y de ingresos en todo el aparato productivo y llevar a la práctica o fortalecer una política económica sólida que sostenga el crecimiento económico a largo plazo, los Estados Unidos apoyarán, entre otras, las medidas dirigidas a estimular el desarrollo rural de amplia base, fomentar las exportaciones no tradicionales y construir o reforzar la infraestructura productiva.

Las partes, de acuerdo con las políticas respectivas de Bolivia, Colombia, los Estados Unidos y Perú, determinarán la asistencia económica que se requiera para asegurar la solidez de las políticas económicas y sostener el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos, lo cual, a mediano plazo, contribuirá a sustituir los ingresos, el empleo y la entrada de divisas en los países en los cuales éstos han sido generados por la economía ilegal de la coca. Los Estados Unidos están dispuestos a financiar actividades económicas de esta índole por medio de recursos nuevos y concesionarios.

A fin de lograr un programa completo de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, las partes acuerdan que, además de la cooperación que faciliten los Estados Unidos, hará falta que otras fuentes aporten su cooperación económica, así como mayores estímulos a la inversión y al comercio exterior. Las partes concertarán sus gestiones para conseguir el apoyo de las instituciones multilaterales y de otros organismos económicos para estos programas, a medida que las tres partes andinas lleven a la práctica o continúen desarrollando una sólida política económica y un programa eficaz contra los estupefacientes.

Las partes tienen el convencimiento de que una lucha integral contra el tráfico de drogas ilícitas perturbará el mercado de la "coca y sus derivados y reducirá el precio que se paga por ellos. A medida que esta lucha tenga éxito, los que se dedican al cultivo de la coca y a su primera elaboración, buscarán fuentes supletorias de ingresos por sustitución de cultivos o por cambio de empleo. Las partes colaborarán a fin de hallar actividades financiadas por el exterior que produzcan ingresos alternativos. Los Estados Unidos están dispuestos a considerar el financiamiento de actividades tales como la investigación, la divulgación, el crédito, y otros servicios de apoyo a la agricultura, y el respaldo a iniciativas dirigidas por el sector privado para la formación de microempresas y agroindustrias.

Así mismo, los Estados Unidos cooperarán con las partes andinas para promover mercados viables tanto nacionales como externos a fin de colocar la producción generada por los programas de desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos.

2. Mitigación del impacto social y económico de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas:

A medida que las partes andinas lleven a la práctica o continúen desarrollando unos programas eficaces de interdicción de la corriente de drogas ilícitas y de erradicación de los cultivos, les hará falta una ayuda de rápido desembolso para mitigar los costos sociales y económicos tanto de pequeña como de gran escala. Las partes colaborarán para identificar la índole de la ayuda que se requiera. Los Estados Unidos están dispuestos a conceder apoyo a la balanza de pagos a fin de satisfacer las necesidades de divisas. Los Estados Unidos, así mismo, considerarán el financiamiento de programas sociales de emergencia, tales como el afortunado programa boliviano, que facilita diversas oportunidades, entre ellas, de empleo a la población pobre directamente afectada por la lucha contra las drogas ilícitas.

3. Iniciativas comerciales, estímulo a las exportaciones y a la inversión extranjera privada:

El aumento del comercio y de la inversión privada también es esencial para facilitar el crecimiento económico sostenido y para contribuir a compensar los trastornos económicos que resulten de cualquier programa eficaz contra las drogas ilícitas. Las partes buscarán conjuntamente el crecimiento del comercio entre los tres países andinos y los Estados Unidos, facilitando efectivamente el acceso al mercado de los Estados Unidos y fortaleciendo la promoción de las exportaciones, incluyendo la identificación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos exportables. Los Estados Unidos también considerarán la facilitación de la debida asistencia técnica y financiera para ayudar a que los productos agrícolas andinos cumplan con los requisitos de admisión.

Las partes podrán considerar el establecimiento de políticas económicas y de inversión, y de leyes y reglamentos que fomenten la inversión privada. Donde existan las condiciones propicias, los Estados Unidos promoverán las inversiones privadas en los tres países andinos, tomando en cuenta las particularidades y potencialidades de cada uno de ellos.

B. Entendimientos relativos al ataque contra las drogas ilícitas

Las partes reafirman su voluntad de lucha integral contra el tráfico de estupefacientes, mediante el ataque contra todos los aspectos de este comercio: la producción, transporte y consumo. Dicha acción integral comprende los siguientes campos:

- Las medidas preventivas que reduzcan el consumo y por consiguiente la demanda

- Las acciones de control y represión contra el cultivo ilegal, la elaboración y comercialización de drogas ilícitas.

- El control de las sustancias químicas esenciales para la producción de drogas ilícitas y los medios necesarios para su transporte.

- El decomiso, la incautación y el reparto de las ganancias ilícitas y de los bienes usados para la comisión de delitos relativos a los estupefacientes.

- El empleo coordinado de los organismos policiales, militares, fiscales y judiciales dentro del marco de la soberanía nacional de cada una de las partes.

- Las medidas para lograr la reducción neta en el cultivo ilegal de coca.

Las partes se comprometen a la evaluación permanente de sus medidas de cooperación con el fin de que el presidente de los Estados Unidos, según corresponda, solicite al Congreso que proporcione mayor asistencia a las partes andinas. Las partes, puesto que actúan dentro de un marco de respeto por los Derechos Humanos, reafirman que nada socavaría más esta lucha contra los estupefacientes que el desprecio a los Derechos Humanos por quienes están empeñados en esta tarea.

1. Prevención y demanda

Las partes se comprometen a respaldar el desarrollo y la expansión de programas acerca de la prevención integral, tales como la educación pública preventiva tanto en las zonas rurales como urbanas, el tratamiento de los consumidores dependientes de la droga y la información dirigida a alentar la oposición pública a la producción, el comercio y consumo de drogas ilícitas. Dichos programas son fundamentales para enfrentarse con éxito al flagelo de los estupefacientes.

Las partes reconocen que los esfuerzos de prevención en los cuatro países se beneficiarán del intercambio de información relativa a los programas exitosos de prevención y de acuerdos de cooperación bilateral y multilateral que amplíen las gestiones en este terreno.

Con este fin, las partes se comprometen a contribuir con recursos económicos, materiales y técnicos para apoyar dichos programas de prevención integral.

2. Una interdicción

La batalla contra un producto ilícito ha de hacer hincapié en la demanda que tenga, en su producción y comercio. Es esencial interrumpir la corriente de drogas

ilícitas que se dirige del productor al consumidor. Las partes se comprometen a vigorizar las medidas que tomen dentro de sus países para interrumpir la corriente de drogas ilícitas y aumentar la coordinación y cooperación entre ellas, a fin de facilitar esta lucha. Los Estados Unidos están dispuestos a proporcionar mayor cooperación en el equipamiento y la capacitación de los organismos policiales de las partes andinas.

3. Intervención de las Fuerzas Armadas de los respectivos países

La represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia de carácter policial. Sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y de conformidad con el interés soberano de cada Estado y con su propio ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte. Las partes podrán establecer los debidos entendimientos bilaterales y multilaterales de cooperación, de conformidad con sus intereses, necesidades y prelación.

4. Cooperación en materia de información e inteligencia

Las partes se comprometen a aumentar el intercambio de información e inteligencia a fin de fortalecer la acción de organismos competentes. Las partes darán curso a entendimientos bilaterales y multilaterales de cooperación en materia de información e inteligencia, según sus intereses nacionales y prioridades.

5. Erradicación y desaliento del cultivo ilícito

La erradicación puede ser una parte esencial en la lucha contra el tráfico ilícito en cada país. En cada caso, los programas de erradicación han de elaborarse cuidadosamente, midiendo sus posibles efectos sobre la producción ilícita total de drogas en cada país, calculando sus costos y beneficios relativos a otras formas de combatir las drogas ilícitas, determinando si ganarían mayor eficacia si fueran voluntarios o involuntarios o si combinaran ambas características, y estimando sus probables consecuencias políticas y sociales.

Las partes reconocen que para erradicar los cultivos ilícitos es deseable la participación de los propios agricultores y la adopción de medidas que los ayuden a obtener ingresos lícitos. Se fomentarán nuevas oportunidades económicas, tales como programas para el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos, para que contribuyan a disuadir a los agricultores de comenzar cultivos ilícitos o de aumentarlos. El objetivo es lograr una reducción sostenida del área total de los cultivos ilícitos.

Los programas de erradicación deberán proteger la salud de la población y preservar el ecosistema

6. Control de activos financieros

Las partes convienen en identificar, seguir, congelar, decomisar y aplicar otros procedimientos legales para la disposición de los ingresos provenientes de los delitos del tráfico de narcóticos en sus respectivos países, y en atacar los aspectos financieros del comercio de drogas ilícitas. De conformidad con sus respectivas leyes, cada una de las partes buscará la adopción de medidas tendientes a definir, tipificar y sancionar penalmente el lavado de dinero, al igual que incrementar los esfuerzos para hacer efectiva la legislación vigente. Las partes convienen en establecer fórmulas que exceptúen el secreto bancario.

7. Decomiso y reparto de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas

Las partes se comprometen a adoptar un sistema para el decomiso y reparto de las ganancias y los bienes provenientes del tráfico de drogas ilícitas, y a establecer programas eficaces al respecto. En caso de propiedades de traficantes de drogas ilícitas incautadas en los Estados Unidos, en los cuales Bolivia, Colombia y Perú hayan proporcionado ayuda al gobierno de los Estados Unidos, este gobierno se compromete a transferir dichos bienes incautados al gobierno que brinde su asistencia, en la medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos. Las partes procurarán también establecer acuerdos entre las partes andinas y otros países para el reparto de los bienes incautados.

8. Control de las sustancias químicas esenciales usadas en la producción de drogas ilícitas

Es indispensable el control en los Estados Unidos de la exportación de las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de la cocaína. Así mismo se requiere una mayor fiscalización de la importación y producción nacional de dichas sustancias por las partes andinas. Deberán coordinarse unas gestiones conjuntas para eliminar el comercio ilícito de las mismas.

Las partes acuerdan:

- Reforzar la represión del movimiento de sustancias químicas que hayan ingresado en el país, legal o ilegalmente, y que estuvieran desviándose para la elaboración de drogas ilícitas. Ello incluye el control de puntos críticos y el establecimiento de programas de investigación y vigilancia en los que colaboren estrechamente los organismos fiscalizadores de todas las partes.

- Ampliar el desarrollo de un sistema interno para advertir el movimiento de las sustancias químicas esenciales, desde la venta y reventa hasta la entrega al usuario definitivo.

- Cooperar bilateral y multilateralmente para intercambiar la información necesaria para seguir el movimiento nacional e internacional de las sustancias químicas esenciales a fin de fiscalizar su venta y uso.

- Apoyar las acciones auspiciadas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, para elaborar y llevar a la práctica un acuerdo regional interamericano sobre sustancias químicas esenciales.

9. Control de armamentos, aeronaves, navíos, explosivos y equipo de comunicaciones utilizados en el tráfico ilícito de drogas.

En toda la cadena de cultivo, producción y distribución, el tráfico de drogas ilícitas depende en gran parte de los armamentos, explosivos, equipo de comunicaciones y del transporte aéreo, marítimo y fluvial.

Las partes acuerdan:

- En sus respectivos países reforzar la fiscalización de movimiento ilegal de armas y explosivos y de la venta, reventa y matrícula de aeronaves y embarcaciones marítimas, lo cual deberá ser realizado por sus propias autoridades.

Las partes acuerdan establecer programas de fiscalización en sus respectivos territorios que incluyan:

- La matrícula de navíos y aeronaves.
- La adopción de normas legales que permitan la incautación eficaz de aeronaves y embarcaciones.
- El control sobre la concesión de licencias de piloto y la capacitación de éstos.
- El registro de campos de aviación en sus respectivos países.
- La elaboración de las medidas de control sobre el equipo de comunicaciones que se utiliza en el tráfico de drogas ilícitas, en la medida que lo permitan sus respectivas leyes e intereses nacionales.

Los Estados Unidos acuerdan colaborar con las partes andinas para impedir la exportación de armamento de los Estados Unidos a los traficantes de drogas ilícitas en las tres naciones andinas.

10. Cooperación en el campo legal:

Las partes se comprometen a cooperar en compartir pruebas instrumentales en las formas admitidas por sus procedimientos judiciales. También acuerdan buscar los mecanismos que permitan el intercambio de información sobre decisiones legislativas y judiciales a fin de optimizar los procedimientos legales contra el tráfico de drogas ilícitas.

Las partes reconocen el valor de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la administración de justicia, incluida la protección de los jueces, del personal judicial y demás personas que toman parte en esos procedimientos.

C. Entendimientos relativos a iniciativas diplomáticas y de opinión pública

El flagelo de tráfico de drogas ilícitas y su consumo no respeta fronteras, amenaza la seguridad y desgasta la estructura económica y social de nuestros pueblos. Resulta esencial adoptar y ejecutar una estrategia integral que promueva la plena toma de conciencia sobre los efectos destructivos de la producción ilegal, el tráfico ilícito y el consumo indebido de estupefacientes. En este sentido, las partes se comprometen a usar todos los medios políticos y económicos a su alcance para llevar a la práctica unos programas destinados a lograr dicho objetivo.

1. Fortalecimiento de la opinión pública en favor de la intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

La toma de conciencia de la opinión pública que debe ser fortalecida también a través de una acción diplomática activa y decidida. Las partes se comprometen a reforzar la elaboración de programas mutuos que conduzcan al intercambio de ideas, de experiencias y de especialistas en la materia. Las partes exhortan a la comunidad internacional a que intensifiquen el programa de información pública que destaca el peligro del tráfico de narcóticos en todas sus etapas. En este sentido las partes se comprometen a dar su respaldo activo a los programas interamericanos relativos a la toma de conciencia del público y a la reducción de la demanda, y respaldarán la elaboración de un plan para la educación en materia de prevención en la reunión interamericana de Quito del año en curso.

2. Cumbre económica.

En la Cumbre Económica de 1989 celebrada en París, se estableció un grupo de trabajo de Acción Financiera,

a fin de averiguar cómo los gobiernos pueden promover la Cooperación y la acción eficaz contra el lavado de dinero obtenido del tráfico de drogas ilícitas.

Estados Unidos será el anfitrión de la próxima Cumbre Económica que se celebrará en Houston entre el 9 y el 11 de julio de 1990, y aprovecharán esa ocasión para que se otorgue una atención amplia y prioritaria a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.

Las partes exhortan a los países de la Cumbre Económica y a los demás participantes en el grupo de acción financiera a que concedan mayor importancia al estudio de aquellas medidas económicas que ayuden a reducir las acciones del tráfico de estupefacientes. En particular, las partes instan a los países de la Cumbre Económica a que den los pasos necesarios para asegurar que los bienes decomisados del tráfico de drogas ilícitas en Bolivia, Colombia y Perú se utilicen para financiar programas de interdicción, desarrollo alternativo y prevención en nuestros países.

3. Planteamientos y coordinación multilaterales.

Las partes se proponen coordinar su actuación en las instituciones económicas multilaterales a fin de asegurar para Bolivia, Colombia y Perú una más amplia cooperación en el marco de una sólida política económica.

4. Informe a la sesión especial de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de drogas.

Las Naciones Unidas, al reconocer que el problema del narcotráfico representa una grave amenaza para la seguridad de los estados y la estabilidad económica, y al exhortar a que se formule un plan de Acción Mundial, ha convocado una sesión especial, que se reunirá del 20 al 23 de febrero del año en curso, para considerar la magnitud de este fenómeno. La ocasión será propicia para reiterar la necesidad de la entrada en vigor, a la mayor brevedad, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la cual estipula medidas energéticas contra el tráfico de drogas ilícitas, mientras reconoce los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca.

Las partes solicitan que, durante esa Sesión Especial, se considere la inclusión de las gestiones de cooperación a las que se refiere el presente documento, para el desarrollo de programas concretos encaminados a reforzar la respuesta multilateral al flagelo de los estupefacientes, tal como recomienda la Resolución número 44/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

5. Informes a la Reunión de Ministros de la OEA y a la CICAD

La Organización de los Estados Americanos ha convocado una reunión interamericana de los ministros encargados de los programas nacionales de estupefacientes, que se celebrará en Ixtapa, México, del 17 al 20 de abril de 1990. Las partes instan a que dicha reunión de ministros y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, CICAD, den prioridad a los entendimientos expuestos en el presente documento y apoyen su pronta aplicación, dentro del marco de la cooperación regional contra los estupefacientes.

6. Reunión Trilateral de Madrid

Las partes destacan la importancia del documento emitido en la Reunión Trilateral de Madrid, sus alcances y los esfuerzos que se realizan a nivel europeo y, en particular, con la finalidad de adoptar políticas e iniciativas concretas contra el tráfico de drogas ilícitas.

7. Reunión Cumbre Mundial Ministerial para reducir la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína.

Las partes destacan con satisfacción la convocatoria a una Reunión Cumbre Mundial Ministerial para reducir la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, que se llevará a cabo en Londres, del 9 al 11 de abril de 1990. Esta Reunión servirá para resaltar el papel que ha de desempeñar la reducción de la demanda en los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir el tráfico de drogas ilícitas y pondrá énfasis en los costos sociales, económicos y humanos de ese comercio. Las partes acuerdan coordinar sus acciones y futuras estrategias en este sentido, con el objetivo de progresar sobre la base de esta importante iniciativa.

8. Gestiones ante los países de tránsito.

A través de organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como los Jefes de los Organismos Nacionales de Represión del Uso Indebido de Estupefacientes (HONLEA), nuestros países participan en gestiones importantes de coordinación. Las partes se comprometen a reforzar la cooperación con los países de tránsito en la represión del tráfico de drogas ilícitas.

9. Conferencia mundial sobre el control de las drogas ilícitas.

Con el fin de adelantar hacia los propósitos convenidos en la Cumbre de Cartagena, las partes convocan una conferencia mundial en 1991, a fin de fortalecer la cooperación internacional en la eliminación del consumo indebido, el tráfico ilícito y la producción de estupefacientes.

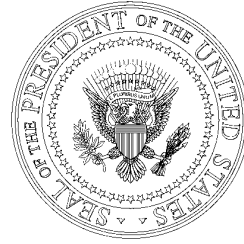
10. Reunión de seguimiento de la Cumbre de Cartagena.

A fin de hacer el seguimiento sobre el progreso de los acuerdos que surjan de los entendimientos del presente documento, las partes convienen en realizar una reunión de alto nivel, en un plazo que no exceda de los seis meses.

Suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, a los 15 días del mes de febrero de 1990.

Jaime Paz Zamora, presidente de la República de Bolivia; Virgilio Barco Vargas, presidente de la República de Colombia; George Bush, presidente de los Estados Unidos de América; Alan García, presidente de la República del Perú

ANEXO IV



Estrategia Nacional para el Control de las Drogas

The White House
February 2002

TO THE CONGRESS OF THE UNITED STATES:

I am pleased to transmit the 2002 National Drug Control Strategy, consistent with the Office of National Drug Control Policy Reauthorization Act of 1998 (21 U.S.C. 1705).

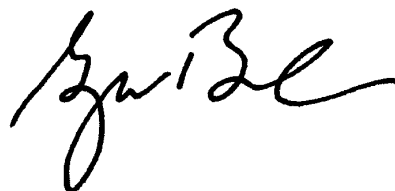
Illegal drug use threatens everything that is good about our country. It can break the bonds between parents and children. It can turn productive citizens into addicts, and it can transform schools into places of violence and chaos. Internationally, it finances the work of terrorists who use drug profits to fund their murderous work. Our fight against illegal drug use is a fight for our children's future, for struggling democracies, and against terrorism.

We have made progress in the past. From 1985 to 1992, drug use among high school seniors dropped each year. Progress was steady and, over time, dramatic. However, in recent years we have lost ground. This Strategy represents the first step in the return of the fight against drugs to the center of our national agenda. We must do this for one great moral reason: over time, drugs rob men, women, and children of their dignity and of their character.

We acknowledge that drug use among our young people is at unacceptably high levels. As a Nation, we know how to teach character, and how to dissuade children from ever using illegal drugs. We need to act on that knowledge.

This Strategy also seeks to expand the drug treatment system, while recognizing that even the best treatment program cannot help a drug user who does not seek its assistance. The Strategy also recognizes the vital role of law enforcement and interdiction programs, while focusing on the importance of attacking the drug trade's key vulnerabilities.

Previous Strategies have enjoyed bipartisan political and funding support in the Congress. I ask for your continued support in this critical endeavor.



THE WHITE HOUSE

ÍNDICE

| | |
|--------------|----------|
| INTRODUCCIÓN | página 1 |
|--------------|----------|

| | |
|------------------------|----------|
| PRIORIDADES NACIONALES | página 7 |
|------------------------|----------|

| | |
|---|-----------|
| I Detener el uso antes de que comience: educación y acción comunitaria | página 8 |
| II La curación de los usuarios de drogas en los Estados Unidos: llevar los recursos de tratamiento allí donde se necesitan | página 12 |
| III Perturbación del mercado: ataque a las bases económicas del comercio de las drogas | página 20 |

| | |
|-----------|-----------|
| APÉNDICES | página 29 |
|-----------|-----------|

| | |
|---|------------|
| A Resumen del presupuesto nacional para el control de las drogas | página 21 |
| B Reestructuración del presupuesto nacional para el control de las drogas | página 35 |
| C Reconocimientos | página 37 |
| D Datos relacionados con las drogas | página 43 |
| E Lista de siglas | página 119 |

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2001, la Universidad de Michigan publicó su encuesta anual, “*Vigilancia del futuro*” (*Monitoring the Future*), en la que se cuantifica el uso de las drogas entre los jóvenes estadounidenses. Pocos son los cambios respecto al informe del año anterior; la mayoría de los indicadores permanecieron estables. El informe generó pocos comentarios públicos.

No obstante, lo señalado por la *Vigilancia del futuro* fue preocupante. Si bien el uso de las drogas entre los alumnos de los grados 8vo, 10mo y 12do permanece estable, esos niveles están cercanos a niveles récord altos. Más del 50% de los que cursan el último año de la escuela secundaria han experimentado con drogas ilegales al menos una vez antes de graduarse. Y durante el mes anterior a la encuesta, el 25% de esa población usó drogas ilegales y el 32% señaló que se había embriagado al menos una vez.

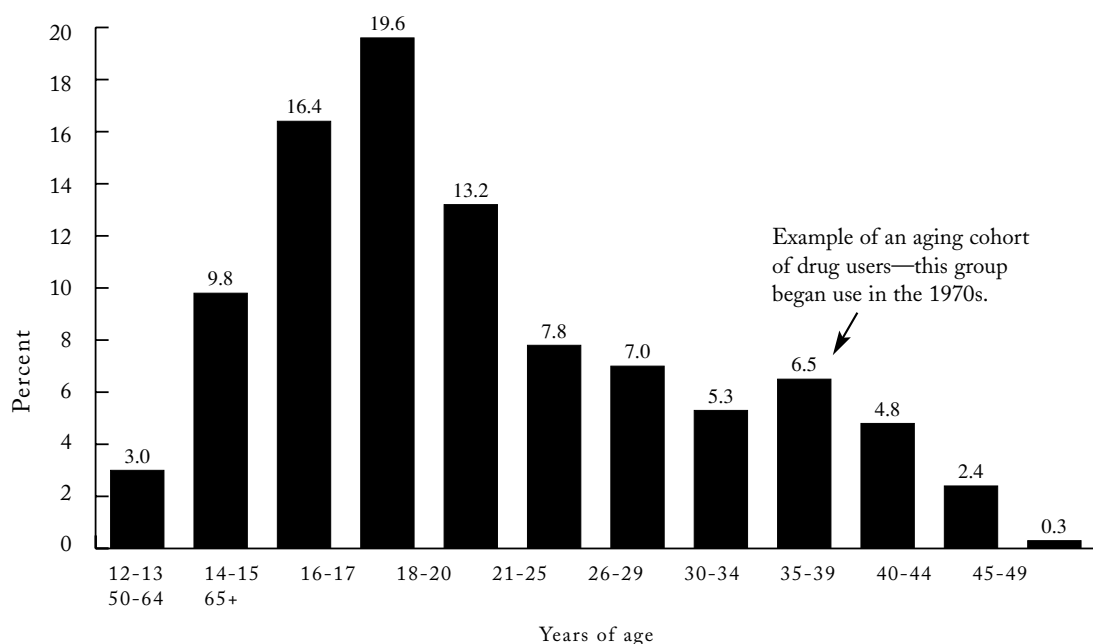
Eso no es nada nuevo. De hecho, el uso de las drogas entre nuestros jóvenes se ha mantenido a niveles inaceptablemente elevados durante la mayor parte del último decenio. Al igual que en los años sesenta y setenta, el uso de las drogas se ha convertido en algo más aceptable para nuestra juventud.

Como señalan con tesón los tal llamados “reformadores” de la política sobre drogas, las personas que usan marihuana o cocaína una o dos veces no necesariamente pasan a una vida de adicción a las drogas; así como no todos los adolescentes que manejan en estado de embriaguez terminan en la sala de emergencias. Sin embargo es elevado el porcentaje que continúa usando drogas. Los datos recientes del Centro Nacional sobre Adicción y Abuso de Sustancias Psicoactivas de la Universidad de Columbia muestran que cerca del 60% de los niños que prueban la cocaína o el LSD durante la escuela secundaria siguen usándolos para el momento de la graduación.

Aun cuando no establecen una relación causal, otros datos del Centro muestran que un joven que fume marihuana tiene una probabilidad ochenta y cinco veces mayor de probar la cocaína. Los datos de otro estudio muestran que mientras más temprano se inicie el uso de las drogas, mayor es la probabilidad de que se desarrolle, con posterioridad, un problema con los mismos. Según la última “*Encuesta Nacional de Hogares sobre el Abuso de las Drogas*” (*National Household Survey on Drug Abuse*), los adultos que usaron por primera vez la marihuana a la edad de 14 años o antes, tienen una probabilidad cinco veces mayor de ser clasificados como dependientes o adictos a las drogas que los adultos que usaron la marihuana por primera vez a los 18 años de edad o más. Y si la experiencia de largo plazo de muchos de los nacidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (refiérase a la Figura 1 en la página siguiente) es válida para los adolescentes de hoy (sospecha reforzada por descubrimientos recientes en el campo de las imágenes cerebrales), las consecuencias del uso de las drogas por esos adolescentes se harán sentir durante muchos decenios.

Ése es el desafío enorme que enfrenta nuestra nación. El uso de las drogas entre los adolescentes de hoy amenaza con tener repercusiones por muchos años en campos tan disímiles como las tasas delictivas, el éxito de nuestras universidades, la productividad de nuestra base industrial y la cohesión de nuestras familias.

Hoy es más que aceptado que las consecuencias individuales del uso de las drogas pueden ser mortales, hecho que representa un avance respecto a los decenios anteriores cuando las drogas se consideraban como una puerta hacia la iluminación o por lo menos, como una diversión inocua. Pero las consecuencias para la sociedad no son menos graves. Aun cuando el decirlo se considere pasado de moda en algunos círculos, la tolerancia del uso de las drogas es particularmente corrosiva para cualquier pueblo que se gobierne a sí mismo.

Figure 1: Drug Use Varies by Age but the Cohort Effect Lasts a Lifetime**Percentage Reporting Past Month Use of an Illicit Drug**

Source: 2000 National Household Survey on Drug Abuse

Las democracias sólo pueden florecer cuando los ciudadanos valoran su libertad y aceptan la responsabilidad personal. El uso de las drogas erosiona la capacidad del individuo para lograr ambos ideales. Disminuye la capacidad del individuo para funcionar con efectividad en muchas de las esferas de la vida: como estudiante, como progenitor, como cónyuge, como empleado e incluso como colega o como uno de tantos conductores de vehículos. Y si bien hay quienes sostienen que el uso de las drogas representa una expresión de autonomía individual, de hecho es enemigo de la libertad personal y reduce la capacidad de participar en la vida de la comunidad y en la promesa que son los Estados Unidos.

El presidente Bush afirmó: “Tenemos que reducir el uso de las drogas por una muy importante razón moral: con el pasar del tiempo, las drogas despojan a los hombres, a las mujeres y a los niños de su dignidad y de su solvencia moral. Las drogas ilegales son enemigas de la ambición y de la esperanza. Al luchar contra las drogas, luchamos por el alma de nuestros conciudadanos”.

Por desgracia, muchos de nuestros conciudadanos están hundidos en una vida de drogas. Las cerca de cuatrocientos setenta salas de emergencias hospitalarias participantes en la Red de Advertencia del Uso de las Drogas nos dan una idea del alcance del problema: cada año se tratan cerca de 175.000 incidentes relacionados con la cocaína en las salas de emergencias, mientras que los casos relacionados con la heroína y la marihuana casi alcanzan los 97.000 para cada una de ellas. Según las estimaciones generadas por la *Encuesta de Hogares*, 2,8 millones de estadounidenses son “dependientes” de las drogas ilegales, mientras que 1,5 millones adicionales caen en la categoría menos grave de “usuarios abusivos”. Con el transcurrir del tiempo, las drogas transformarán a esas personas, de ciudadanos productivos a adictos. Como nación tenemos que unirnos para iniciar la larga y desafiante tarea de devolverlos a una vida saludable.

METAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LAS DROGAS

Metas bienales: Una reducción del 10% en el uso actual de drogas ilegales por el grupo de personas entre 12 y 17 años de edad.

Una reducción del 10% en el uso actual de drogas ilegales por adultos de 18 años o más.

Metas quinquenales: Una reducción del 25% en el uso actual de drogas ilegales por el grupo de personas entre 12 y 17 años de edad.

Una reducción del 25% en el uso actual de drogas ilegales por adultos de 18 años o más.

El avance logrado respecto a todas las metas se medirá a partir de la línea de base establecida por la Encuesta Nacional de Hogares sobre el Abuso de las Drogas - 2000. Todas las metas de la estrategia persiguen reducir el uso “actual” de “cualquier droga ilícita”, según las definiciones de la encuesta de hogares. El uso del alcohol y de los productos del tabaco, si bien ilegales para los menores, no se incluye en esas estimaciones.

La reconstrucción del consenso

Para enfrentar el desafío de reducir el uso de las drogas ilegales se requerirá más que una gama de iniciativas con objetivos específicos que se concentren en los elementos claves del problema de las drogas. Se requerirá más que una estrategia con cinco vertientes o que un plan de implementación de quince puntos porque, a diferencia de la actitud de poder lograrlo en la lucha contra el terrorismo, la confianza en la capacidad de nuestras instituciones públicas (educativas, de rehabilitación, de aplicación de la ley y militares) para luchar contra el uso de las drogas se ha visto socavada.

El cinismo fácil que ha surgido alrededor del problema de las drogas no es casual. Ha sido alimentado por el objetivo intencional de una campaña, mantenida por decenios, propugnada por los que proponen la legalización, por los críticos cuyo mantra es “nada funciona”, y cuya percepción principal parece ser que pueden evitar el tener que proponer lo indecible (un mundo en el que las drogas sean omnipresentes, y donde el uso y la

adicción se dispararían), siempre que se puedan esconder detrás de la anodina crítica de que los esfuerzos para controlar las drogas “no son viables”.

Pero la historia reciente demuestra lo contrario. Durante finales de los años ochenta y principios de los años noventa, una ciudadanía y un gobierno comprometidos se enfrentaron al problema de las drogas e hicieron que el uso disminuyera, observándose descensos en todos los años entre 1985 y 1992 entre los alumnos del 12do grado. El gobierno federal proporcionó liderazgo, al igual que los progenitores y el clero, los medios de comunicación, los grupos comunitarios, y los dirigentes estatales y locales.

Las buenas nuevas son que, en muchos casos, lo que funcionó entonces puede funcionar ahora. Para recuperar el terreno perdido sólo tenemos que desenterrar las lecciones de ese pasado reciente. Sabemos que cuando lo enfrentamos, el problema de las drogas emprende la retirada. Nosotros enfrentaremos el problema de las drogas; el problema retrocederá. Ésa es una afirmación que este documento apoya con metas cuantificables y basadas en el uso.

La Estrategia Nacional para el Control de las Drogas tendrá específicamente como objetivo reducir el uso del mes pasado o uso “actual” de las drogas ilegales, en el grupo de personas entre 12 y 17 años de edad, en un 10% dentro de un período de dos años y en un 25% dentro de un período de cinco años. De manera similar, la estrategia establece la meta de reducir el uso actual de las drogas entre los adultos (18 años de edad o más) en un 10% dentro de un período de dos años y en un 25% dentro de un período de cinco años.

Las burocracias son famosas por protegerse a sí mismas pero el presente documento se separará de esa consabida práctica gubernamental al admitir que nuestras instituciones dedicadas a la lucha contra las drogas no han trabajado con toda la efectividad debida. De conformidad con las metas de la Agenda Administrativa del Presidente, nuestra tarea consiste en lograr que esas instituciones funcionen mejor. El buen gobierno lo exige y garantizarlo es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras.

El progreso hacia la reducción del uso de las drogas ilegales se ha visto frustrado no sólo por los esfuerzos intencionales de los que propugnan la legalización sino también por los bien intencionados defensores de diferentes escuelas de pensamiento respecto al control de las drogas; personas que no siempre comprenden la complejidad del problema ni las formas en que los diferentes esfuerzos por controlar las drogas se refuerzan entre sí.

En parte, ello es función del amplio alcance disciplinario del problema, en el que participan peritos con una diferencia en cuanto a perspectiva y formación como la existente entre un científico de investigación, que está desarrollando un producto farmacéutico para luchar contra la adicción, y un agente de la DEA que desmantela a una organización que trafica en metanfetaminas. A lo largo de los años, algunos han propugnado la concentración exclusiva en el control de la oferta. Otros han insistido en que el tratamiento de los

usuarios fuertes es la solución. Otros han argüido que la prevención es la clave.

Todos tienen parcialmente razón. Lo que la nación necesita es un esfuerzo honesto para integrar esas estrategias.

Reduciéndola a sus elementos más esenciales, la política para el control de las drogas tiene apenas dos elementos: modificación de la conducta individual para desalentar y reducir el uso y la adicción a las drogas, y perturbar el mercado de las drogas ilegales. Esos dos elementos se refuerzan entre sí.

Por ejemplo, se puede demostrar que el tratamiento contra las drogas es efectivo para la reducción de la criminalidad. El mantenimiento del orden público ayuda a “desviar” a los usuarios hacia el tratamiento y hace que el sistema para el tratamiento funcione de manera más eficiente, al proporcionarle a los proveedores del tratamiento la posibilidad de ejercer influencia sobre los clientes a los que prestan servicio. Los programas de tratamiento reducen el problema para las instituciones del orden público al contraer el mercado de las drogas ilegales. Es difícil encontrar en la política pública un ejemplo más claro de simbiosis.

De manera similar, los programas de prevención siempre son atractivos ya que eliminan el uso de las drogas antes de que comience y con ello, reducen la carga impuesta al sistema de tratamiento y en última instancia, al sistema de justicia penal. Los programas de prevención logran su mejor funcionamiento en un entorno donde se castigue la violación de las leyes y donde desde un principio, se desaliente a los jóvenes a probar las drogas ilegales.

Esos elementos diferentes de nuestro programa para el control de las drogas son en realidad las dos caras de una misma moneda. En algunos campos, como en los sistemas de tratamiento contra las drogas y del mantenimiento del orden público, la conexión es excepcionalmente fuerte y se debe explotar. Como se describirá más adelante en mayor detalle, esa

vinculación brinda una oportunidad única para poner el tratamiento contra las drogas a disposición de un conjunto numeroso de individuos adictos.

Una variante de esa vinculación es igual de aplicable a las muchas otras personas con quien el usuario de drogas entra en contacto, sea un hermano, un patrono o un vecino. El tratamiento funciona. Pero ni siquiera el mejor programa de tratamiento contra las drogas puede ayudar a un usuario que no busque esa ayuda. Quizás el mayor desafío individual para nuestra nación en este campo consiste en crear un entorno en el que los estadounidenses enfrenten el uso de las drogas en forma honesta y directa, alentando a los que lo necesitan a entrar y mantenerse en el tratamiento.

La presente estrategia trata de aplicar los principios antes enunciados en los campos fundamentales de la prevención, el tratamiento y la reducción de la oferta. Después de esas secciones se incluyen cuadros que resumen la solicitud presupuestaria del Presidente para el año fiscal 2003 para los programas de control de las drogas. Inmediatamente después de esa sección se encuentra un apéndice de datos que cubren toda una gama de temas relacionados con las drogas, incluidos los patrones de uso, información sobre el tratamiento contra las drogas, tendencias en la oferta y el consumo total, arrestos relacionados con las drogas y arrestos de individuos cuyas pruebas de laboratorio dieron positivas para drogas en el momento de la aprehensión.

Integración del presupuesto y el desempeño

El Presidente ha comprometido al gobierno federal a administrar basándose en los resultados. Donde más se necesita ese tipo de gestión es en los esfuerzos federales para el control de las drogas, donde la coordinación del trabajo de más de cincuenta instituciones nacionales de programas para el control de las drogas puede convertirse con rapidez en algo abrumador, tanto para el poder ejecutivo como para el Congreso. La presente estrategia esquematiza dos iniciativas que introducirán la gestión orientada hacia los resultados en los esfuerzos para el control de las drogas: el mejoramiento de la formulación presupuestaria y la gerencia basada en el desempeño.

En el pasado, la tarea de administrar los programas antidrogas se complicó por los métodos utilizados en el cálculo del presupuesto para el control de las drogas. La información presupuestaria presentada cada año con la estrategia no representa dólares administrados reales. Con pocas excepciones, los dólares registrados no se reflejan como rubros individuales en el presupuesto presidencial ni en las leyes de adjudicaciones. Más bien, reflejan porcentajes de las adjudicaciones totales para las instituciones y los programas, utilizándose una serie de métodos diferentes para estimar la parte dedicada al control de las drogas.

Las revisiones independientes, realizadas algunas para la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) y otras hechas por inspectores generales de otras instituciones federales, han revelado que muchos de los métodos de estimación podrían no reflejar con precisión los esfuerzos de las instituciones en cuestión. Aun cuando las técnicas de estimación fueran perfectas, las cifras resultantes seguirían siendo difíciles de utilizar. Esas cifras, que por lo general reflejan estimaciones generadas después de

haber tomado decisiones fundamentales, no son adecuadas para una administración significativa del presupuesto por el poder ejecutivo ni para las deliberaciones en el Congreso.

Además se presenta información sobre una serie de costos que son una consecuencia del uso de las drogas en vez de gastos orientados hacia la reducción del mismo. Debido a que no reflejan criterios respecto a la política contra las drogas, serán excluidos del presupuesto para su control. Esos costos se seguirán registrando como parte del informe anual (“Costos económicos para la sociedad del abuso de las drogas” (Economic Costs to Society of Drug Abuse)).

La ONDCP desarrollará, en consulta con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) y otras instituciones federales, una nueva metodología para identificar los gastos pertinentes al control de las drogas. Esa nueva metodología tratará de vincular todos los fondos pertinentes a las drogas directamente con los dólares reales identificados en las presentaciones hechas al Congreso por las instituciones a cargo del control de las drogas que acompañan la presentación anual del proyecto de presupuesto presidencial. De considerarse que un rubro individual en el presupuesto de una institución tiene una fuerte asociación con el control de las drogas, entonces el 100% de ese rubro se incluiría en el presupuesto para su control.

La reducción del alcance del presupuesto para el control de las drogas y su presentación en términos de dólares reales hará que sea una herramienta más útil para los formuladores de políticas. La adjudicación de recursos se convertirá en parte del proceso para la toma de decisiones en vez de ser sólo información registrada a posteriori.

Además de ser más preciso, el nuevo presupuesto para el control de las drogas se concentrará en las instituciones y los programas que produzcan resultados mensurables. Ello hará posible mejorar la responsabilidad/rendición de cuentas y por primera vez,

creará una base para la comparación de los resultados de las actividades para la reducción de la oferta y la demanda, y servirá de apuntalamiento para un sistema que permita movilizar los activos hacia campos de efectividad máxima.

Si bien todas las cifras presupuestarias usadas en la presente estrategia se generan utilizando la metodología actual, en el capítulo del presente documento titulado “*Resumen presupuestario*” se incluye un cuadro que muestra un esquema aproximado de la nueva metodología.

Además de cambiar la presentación del presupuesto, la ONDCP seguirá trabajando para instaurar la responsabilidad/rendición de cuentas en los programas para el control de las drogas mediante el uso de su Sistema para la Medición de la Efectividad del Desempeño, el cual mide los resultados de los programas federales para el control de las drogas. Con ello, el gobierno estará en capacidad de tomar decisiones más informadas pertinentes a la política y administrativas respecto a la adjudicación de los recursos. Trabajando a partir de nuestro objetivo fundamental (reducir el uso de las drogas en los Estados Unidos), el gobierno medirá su éxito, en lo concerniente a la política, con datos sobre el uso de las drogas, y al nivel programático, con los indicadores pertinentes. Ese sistema de gestión basado en el desempeño nos ayudará a orientar nuestros esfuerzos hacia programas efectivos y nos señalará el camino para mejorar los programas con un desempeño insuficiente.

El gobierno está comprometido con la responsabilidad/rendición de cuentas gubernamental. La política pertinente a las drogas no será una excepción. Al mejorar el sistema con el que se administran los programas para las drogas, lograremos alcanzar resultados.

Estrategia Nacional para el Control de las drogas:
PRIORIDADES NACIONALES

ELEMENTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTANTES

- **Programa para Escuelas Seguras y Libres de Drogas: \$644 millones**

(\$634,8 millones relacionados con las drogas). Este programa subvenciona actividades relacionadas con la prevención de las drogas y la violencia entre los jóvenes. Con miras a mejorar la evaluación y dirigir mejor las actividades del programa, la ONDCP trabajará conjuntamente con el Departamento de Educación para desarrollar un plan de evaluación útil que impondrá la rendición de cuentas por parte del programa y alertará a las escuelas respecto a los campos problemáticos.

- **Programa para Comunidades Libres de Drogas: \$60 millones.**

Este programa brinda asistencia a los grupos comunitarios para crear y sustentar coaliciones comunitarias y antidrogas efectivas que luchen contra el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco entre los jóvenes. El gobierno propone un aumento de \$9,4 millones respecto al nivel aprobado para el año fiscal 2002. Más aún, esa solicitud incluye \$2 millones para el Instituto Nacional de Coaliciones Comunitarias Antidrogas. Ese Instituto proporcionará educación, capacitación y asistencia técnica a los dirigentes de las coaliciones y a los equipos comunitarios, además de ayudar a las coaliciones a evaluar su propio desempeño.

- **Campaña Nacional Antidrogas entre los Jóvenes en los Medios de Comunicación:**

\$180 millones. La campaña en los medios de comunicación utiliza mensajes pagados para orientar las actitudes de los jóvenes y de los progenitores respecto al uso de las drogas y sus consecuencias. Los anuncios pagados, dirigidos y de efecto elevado en los medios de comunicación (tanto al nivel nacional como local) buscan reducir el uso de las drogas mediante cambios en las percepciones de los adolescentes respecto al peligro y el rechazo social de las drogas.

- **Programa del Cuerpo de Progenitores Contra las Drogas: \$5 millones.**

Esta nueva iniciativa, subvencionada a través de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, alentará a los progenitores a ayudar a que sus hijos se mantengan libres de las drogas mediante su capacitación en las habilidades y métodos para la prevención de las drogas.

Detener el uso antes de que comience: educación y acción comunitaria

El sentido común nos dice que el evitar que los jóvenes experimenten en primer lugar con las drogas es preferible a los pasos posteriores y más costosos del tratamiento, la rehabilitación y el posible encarcelamiento.

La prevención del uso de las drogas antes de que comience, evita a las familias la angustia de ser testigos de un desliz relativo hacia las garras de la adicción y protege a la sociedad de muchos riesgos, tales como los creados por trabajadores cuyas facultades mentales están embotadas por la acción de productos químicos. La prevención es además el enfoque más efectivo respecto al costo para el problema de las drogas, evitándole a la sociedad la carga del tratamiento, la rehabilitación, la pérdida de productividad y otras patologías sociales, cuyos costos se estiman en \$160.000 millones al año.

Sabemos que la prevención funciona. Sabemos que al evitar que los jóvenes usen drogas hasta la edad de 18 años, inclusive, la probabilidad de que las usen como adultos es muy baja. Sabemos que el uso del alcohol por los jóvenes se ha vinculado a toda una gama de patologías sociales, incluido el uso de las drogas ilegales. Sabemos asimismo que la prevención requiere un esfuerzo real y sostenido por los adultos y los pares. En otras palabras, es mucho lo que sabemos. Y lo que sabemos nos plantea un desafío: cumplir con nuestra responsabilidad compartida para lograr evitar que los jóvenes usen drogas.

Los programas de prevención incluyen a escuelas y organizaciones basadas en la fe, a grupos cívicos y a los medios de comunicación. Pero el elemento individual indispensable de un programa de prevención efectivo no es en absoluto un programa. Los progenitores y otros encargados de los jóvenes tienen una influencia tremenda respecto al uso de las drogas entre sus muchachos. La intuición nos sugiere eso; los datos lo confirman. Según la Asociación para unos Estados Unidos Libres de Drogas, los muchachos cuyos progenitores (o abuelos) les enseñaron los peligros

de las drogas tienen una probabilidad 36% inferior de fumar marihuana, 50% inferior de usar inhalantes, 56% inferior de usar cocaína y 65% inferior de usar LSD.

Pero no basta con los progenitores por sí solos. Las escuelas, las comunidades, los medios de comunicación tienen que ofrecer mensajes de prevención libres de toda ambigüedad y transmitir un mensaje directo de que el uso de las drogas es peligroso, es incorrecto y no será tolerado.

Al nivel de los programas basados en la escuela, la prevención de las drogas incluye impartir una educación sobre las mismas basada en la investigación y en los hechos, y en la enseñanza de habilidades para rechazarlas. Muchos programas efectivos de prevención transmiten los peligros del consumo de bebidas alcohólicas por los menores. Pero los programas efectivos de prevención van más allá del simple enunciado de los peligros del uso de las drogas, peligros que pueden parecer remotos a muchos jóvenes. Una característica de muchos programas efectivos de prevención consiste en motivar a los jóvenes a ver y comprender su propio valor y propósito en la sociedad como parte de una comunidad más amplia. Para los jóvenes, la comprensión del lugar propio en la sociedad y el aprendizaje de asumir la responsabilidad de las propias acciones son por lo menos tan importantes como conocer los riesgos de fumar marihuana.

El presidente Bush señaló: “Reconocemos que la labor más importante para reducir el uso de las drogas se realiza en los hogares y en las aulas estadounidenses, en las iglesias, en las sinagogas y las mezquitas, en los sitios de trabajo y en nuestros vecindarios. Las familias, las escuelas, las comunidades y las organizaciones basadas en la fe moldean la moral de los jóvenes. Ellas enseñan a los niños la diferencia entre el bien y el mal, el respeto por la ley, el respeto de los demás y el respeto de sí mismos”.

El uso de las drogas sólo disminuirá cuando los progenitores, los maestros, los dirigentes religiosos y cívicos, y los patronos se unan para reafirmar los principios de la responsabilidad personal. Los que trabajan al nivel comunitario están marcando una diferencia imperecedera en nuestro problema con las drogas, aplicando la comprensión renovada de los estadounidenses respecto a la importancia de trabajar en forma conjunta como ciudadanos para rechazar la

si bien es menos probable que los estudiantes de secundaria con intenciones de proceder con la educación superior usen drogas ilegales que sus otros compañeros, según los datos de *Vigilancia del Futuro*, para el momento en que se gradúan del colegio universitario se han puesto a la par de los demás. También los administradores de nuestros colegios universitarios y universidades tienen que mejorar el control del consumo de bebidas alcohólicas por los

PROGRAMAS EDUCATIVOS EFECTIVOS PROYECTO STAR

El Proyecto STAR es un programa de prevención de base amplia que enseña a los jóvenes habilidades y técnicas sociales para resistirse al uso de las drogas, a pesar de que puedan ser presionados por sus pares. A diferencia de muchos programas de prevención, el Proyecto STAR opera en la comunidad, en los medios de comunicación, en los hogares y en las escuelas. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas, los hallazgos de la investigación sobre el proyecto demuestran que los

estudiantes que entraron en el programa en el tercer año de la secundaria y cuyos resultados se midieron en el último año, mostraron un uso significativamente menor de la marihuana (cerca de 30% menos), de cigarrillos (cerca del 25% menos) y del alcohol (cerca de 20% menos) que los niños de las escuelas que no ofrecían el programa. Según los hallazgos, el factor que más efecto tuvo sobre los estudiantes fue una mayor percepción de la intolerancia de sus amigos respecto al uso de las drogas.

amenaza que nos afecta a todos. El recién reautorizado Programa de Apoyo para Comunidades Libres de Drogas proporcionará recursos de importancia crítica para ampliar los programas de prevención en todo el país, incluidos pueblos pequeños, zonas rurales y comunidades indígenas, todos los cuales se han visto golpeados fuertemente, en los últimos años, por los problemas con las drogas que históricamente han plagado nuestras ciudades grandes.

Las coaliciones comunitarias cubren a las comunidades geográficas pero el uso de las drogas puede florecer en otros tipos de comunidades, incluidos los colegios universitarios y universidades. Para muchos progenitores resulta sorprendente que,

menores. Si bien no está regulado por los mismos estatutos que las drogas ilegales, el consumo de bebidas alcohólicas por menores es ilegal, se encuentra a niveles epidémicos en muchos colegios universitarios y sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. Este gobierno proporcionará liderazgo nacional y recursos a aquéllos que trabajen para prevenir el abuso de las drogas al nivel comunitario. Por ejemplo, la Campaña Nacional Antidrogas entre los Jóvenes en los Medios de Comunicación, en asociación con el Ad Council y las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de los Estados Unidos, difundirá el mensaje de que las coaliciones comunitarias son catalizadores vitales para prevenir el uso de las drogas. El Programa del Cuerpo de Progenitores Contra las Drogas, subvencionado a través de la Corporación para el

Servicio Nacional y Comunitario, alentará a los progenitores a ayudar a los niños a mantenerse libres de las drogas, capacitándolos en las habilidades y métodos para la prevención, y fomentará la cooperación, al nivel nacional, entre una red de organizaciones de progenitores y las coaliciones comunitarias antidrogas.

Este trabajo real de reducir el uso de las drogas encuentra oposición en los teóricos de salón que

Es innecesario señalar que tenemos que reducir los grandes daños asociados con el uso de las drogas. Pero debiera ser igualmente obvio que eso lo tenemos que hacer en formas que no aumenten el uso de las drogas ni socaven nuestros propios esfuerzos de prevención. Ha llegado el momento de dejar atrás el argumento sobre la reducción del daño que sólo logra distraernos. Estamos a favor de reducir tanto el uso de las drogas como las consecuencias que conlleva.

COALICIONES COMUNITARIAS QUE LOGRAN RESULTADOS

La Asociación para Luchar (Fighting Back Partnership) de Vallejo, California, se creó en respuesta a la tasa delictiva en alza de la ciudad hacia finales de los años ochenta, debido en gran medida a las actividades de las pandillas y al uso de la metanfetamina y la cocaína “crack”. Una coalición de iglesias, individuos e instituciones en los campos del tratamiento del abuso de sustancias psicoactivas, el mantenimiento del orden público y la educación, así como empresas privadas, emprendieron la acción en tres

frentes: revitalizar los vecindarios, ayudar a los jóvenes y alentar a los individuos que lo necesitaban a que iniciaran el tratamiento. Hoy, en esa ciudad de 118.000 habitantes y con una gran diversidad racial, el uso de las drogas y los delitos en los vecindarios han disminuido, el número de pacientes bajo tratamiento contra el abuso de sustancias psicoactivas ha aumentado, las llamadas solicitando ayuda policial se han reducido y los residentes afirman que Vallejo es un sitio más seguro y deseable para vivir.

quieren cambiar la definición del problema y normalizar el uso de las drogas. La legalización abierta de las drogas, meta a la que se opone una sólida mayoría de los estadounidenses, descansa en la falsa premisa de que debido a que algunas personas inevitablemente tomarán malas decisiones, la sociedad debe proporcionar los medios para esas opciones y pagar por sus consecuencias. Esas consecuencias podrían ser devastadoras, comenzando por un aumento en el uso de las drogas, hecho reconocido incluso por los propugnadores de la legalización. Los esfuerzos para legalizar las drogas, sea sin tapujos o bajo cualquier otro disfraz, como por ejemplo, la “reducción del daño”, representan lo más desastroso en lo que a política social se refiere. Este gobierno se opondrá a ellos.

Éste es un esfuerzo en el que todos los estadounidenses tienen un papel que desempeñar. En los hogares, las escuelas, los templos religiosos, los sitios de trabajo y las organizaciones cívicas y sociales podemos establecer normas que reafirmen el valor de la responsabilidad y del ser un buen ciudadano, y que desechen el concepto de que el uso de las drogas es congruente con la “búsqueda de la felicidad” por un pueblo libre y que se gobierne a sí mismo. Con el liderazgo nacional y la participación de la comunidad podemos recrear la fórmula que ayudó a los Estados Unidos a lograr el éxito contra las drogas en el pasado, y lo haremos. Nuestros esfuerzos estarán marcados por la decisión, uniremos a coaliciones de individuos con calificaciones únicas, e inyectaremos una renovada determinación al desafío de prevenir el uso de las drogas.

ELEMENTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTANTES

- **Programa de Tratamiento Contra el Abuso de las Drogas - SAMHSA.**

El Presidente se comprometió a añadir \$1.600 millones al sistema de tratamiento contra las drogas a lo largo de un período de cinco años. Las siguientes mejoras para la Administración de Servicios de Salud Mental y para el Abuso de las Sustancias Psicoactivas (SAMHSA, por sus siglas en inglés) proporcionarán fondos adicionales para ampliar la capacidad del sistema de tratamiento:

- **Programa de Ampliación Dirigida de la Capacidad (TCE, por sus siglas en inglés): \$109 millones adicionales.** Esos fondos adicionales ayudarán a la SAMHSA a ampliar el programa de tratamiento TCE, el cual está diseñado para apoyar una respuesta rápida y estratégica a las tendencias emergentes en el abuso de las sustancias psicoactivas. Esta propuesta incluye \$50 millones a ser utilizados en un nuevo componente del programa TCE. El nuevo componente se estructuraría para reservar fondos para concursos al nivel estatal, ponderados según la necesidad de los servicios de tratamiento de cada estado.
- **Subvención en Bloque para la Prevención y Tratamiento del Abuso de las Sustancias Psicoactivas (SAPT, por sus siglas en inglés): \$60 millones adicionales** (de los cuales, \$43 millones estarán relacionados con las drogas). Ese aumento para la Subvención en Bloque SAPT de la SAMHSA proporcionará fondos adicionales a los estados para servicios de prevención y tratamiento. Los estados usan esos fondos para prestar servicios de tratamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres con niños dependientes, y a las minorías raciales y étnicas.

- **Fomento del tratamiento contra las drogas en el sistema de justicia penal -**

Departamento de Justicia: Proporcionar recursos para fomentar el tratamiento contra las drogas y la intervención temprana para los individuos que entren en contacto con el sistema de la justicia penal es de importancia crítica para poner fin al ciclo del delito y las drogas. Esta iniciativa amplía dos programas de tratamiento dentro de la justicia penal cuyo propósito consiste en reducir la reincidencia entre esas poblaciones.

- **Programa de Tratamiento Residencial para el Abuso de las Sustancias Psicoactivas (RSAT, por sus siglas en inglés): \$7 millones adicionales.** Este mejoramiento ampliará el programa RSAT a \$77 millones en el año fiscal 2003. El programa RSAT es una subvención basada en una fórmula que distribuye fondos a los estados para apoyar el tratamiento contra las drogas y el alcohol en las penitenciarías estatales.
- **Programa de los Tribunales para las Drogas: \$2 millones adicionales.** Esos recursos adicionales ampliarán este programa a \$52 millones en el año fiscal 2003. El Programa de los Tribunales para las Drogas proporciona alternativas al encarcelamiento mediante el uso del poder de coacción del tribunal para imponer la abstinencia y cambiar la conducta a través de una combinación de sanciones crecientes, exámenes obligatorios de drogas, tratamiento y programas eficaces postratamiento.

La curación de los usuarios de estupefacientes en los Estados Unidos: llevar los recursos de tratamiento allí donde se necesitan

Muchas personas dejan de usar las drogas por su propia cuenta. Algunas lo hacen cuando tienen que enfrentar las consecuencias personales del uso, como la pérdida de una licencia profesional, de un empleo o de la libertad personal. Algunas no lo hacen o no pueden hacerlo. Su uso de las drogas ha progresado hasta la adicción y necesitan nuestra ayuda.

Para brindarles esa ayuda, el gobierno federal requiere una evaluación más confiable de las necesidades a los niveles estatal y local para guiar la ampliación de modalidades o tipos particulares de tratamiento contra las drogas. Necesitamos mejor información sobre qué funciona para ese tratamiento y dónde no son suficientes las capacidades disponibles. Además tenemos que lograr estandarizar las evaluaciones que se apliquen y garantizar que los necesitados de tratamiento se coloquen en los sitios apropiados.

Sin embargo, durante más de un decenio, la agenda pública en este campo se ha interesado en forma exclusiva en el aspecto de la capacidad para el tratamiento: si el gobierno federal está invirtiendo lo suficiente para poner los servicios de tratamiento a disposición de aquéllos que los necesitan.

Pero, ¿cuál es la necesidad total? ¿Cuál es la capacidad del sistema de tratamiento contra las drogas de nuestra nación? Y, por consiguiente, ¿cuál es el nivel “correcto” de fondos federales para el tratamiento? Sorprendentemente, hasta hace poco, los formuladores de políticas usaban una serie de herramientas burdas y deficientes para estimar la capacidad de tratamiento y el número de individuos que lo necesitan.

Nuestra comprensión de la necesidad de tratamiento avanzó de manera significativa con la publicación, en septiembre de 2001, de los nuevos datos de la *Encuesta Nacional de Hogares sobre el Abuso de las Drogas*. Al incorporar en la encuesta preguntas basadas en el “Manual diagnóstico y estadístico de los

trastornos mentales (DSM-IV)”, estamos ahora, por primera vez, en capacidad de estimar que hay aproximadamente 2,8 millones de usuarios “dependientes”, junto con otros 1,5 millones de usuarios que se considera dentro de la categoría menos grave de “usuario abusivo”.

Según la definición del DSM-IV, la dependencia de las drogas, caracterizada por problemas de salud, problemas emocionales, dificultad para reducir el uso, tolerancia, síndrome de abstinencia y otros síntomas, es más grave que el abuso. El abuso de las drogas se caracteriza por problemas laborales, en el hogar y en la escuela; problemas con la familia o los amigos; exposición voluntaria al peligro físico; y problemas con las fuerzas del orden público. Los individuos en ambas categorías tendrán dificultad para poner fin al uso de las drogas sin recibir tratamiento.

El sistema de tratamiento, tal y como está estructurado en la actualidad, no logra ayudar a todas las personas que se consideran en necesidad de ser tratadas; según estimaciones conservadoras, sólo 800.000 individuos habrían recibido tratamiento en el año anterior a la encuesta. El Presidente se comprometió a apoyar una ampliación de \$1.600 millones en la ayuda federal para el tratamiento dentro de un período de cinco años. En congruencia con ese compromiso, el presupuesto presidencial para 2003 solicita un incremento aproximado de \$100 millones en el gasto federal de tratamiento para la Administración de Servicios de Salud Mental y para el Abuso de las Sustancias Psicoactivas. (Ese mejoramiento es parte de un aumento general para el tratamiento equivalente a \$224 millones para el año fiscal 2003.)

Pero la encuesta de hogares contiene otro hallazgo sorprendente que sostiene que la ampliación del sistema de tratamiento no es suficiente por sí sola. La gran mayoría de los usuarios caracterizados como individuos con dependencia o abuso no se ven a sí

mismos como personas en necesidad de tratamiento, lo cual frustra la labor de los proveedores del mismo. Esa tendencia es particularmente pronunciada entre los adolescentes y los adultos jóvenes. De los 3,9 millones de individuos que se estimó necesitaban tratamiento y no lo recibieron en 2000, menos del 10% (apenas 381.000) indicó que consideraba realmente necesitar ayuda.

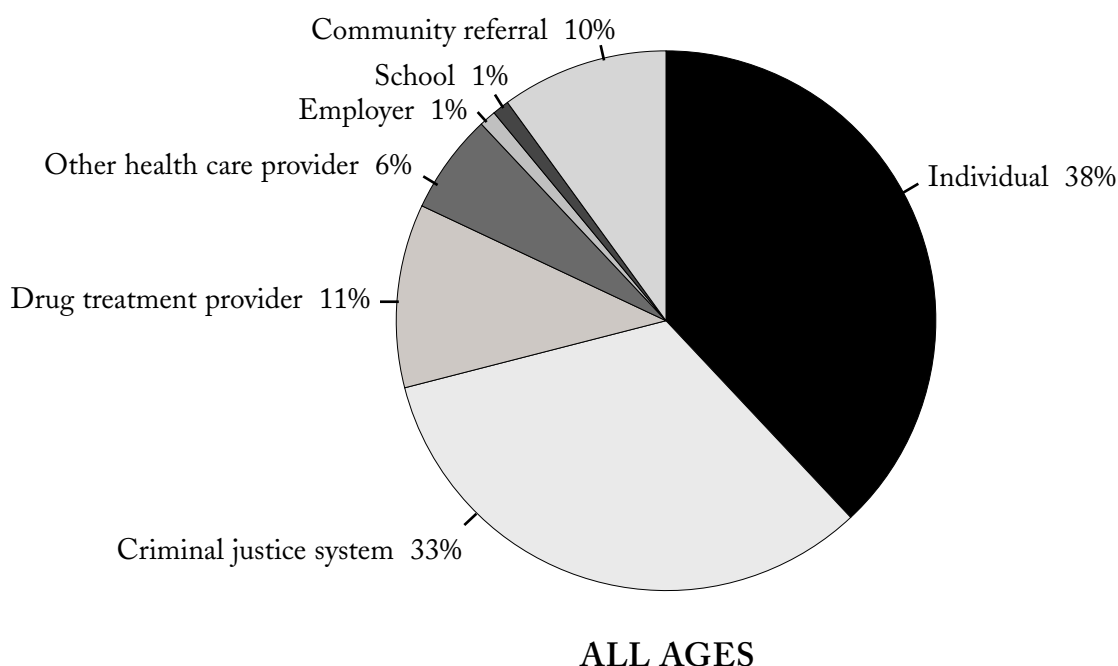
Hay razones para pensar que esa última estimación es demasiado baja. La encuesta de la cual se derivó omite a los individuos que se encuentran en la actualidad bajo tratamiento residencial y no cubre a algunos grupos, como los sin techo que no viven en refugios. La ONDCP convocará a peritos para aprovechar e incrementar el trabajo significativo realizado por el Departamento de Servicios Humanos y de Salud y otros para tratar de determinar con mayor precisión el número de individuos que están recibiendo en la actualidad servicios de tratamiento contra las drogas, así como el número de aquéllos que estén tratando

de acceder a ese tratamiento. Para ayudar en ese proceso se utilizarán nuevos sistemas para la recopilación de datos, como el Sistema Nacional de Vigilancia de los Resultados del Tratamiento (que está siendo desarrollado por la ONDCP y el Centro de Tratamiento Contra el Abuso de las Sustancias Psicoactivas), lo cual proporcionará información nueva y de importancia vital sobre las admisiones a los tratamientos, tiempos de espera y resultados del tratamiento.

Pero la conclusión obvia a la que se llega partiendo de los datos es de hecho la correcta: la mayoría de las personas que necesitan tratamiento contra las drogas cree que no tiene problema alguno. Para decirlo con una frase popular: están en plena negación de la realidad. Si hubiera dudas sobre el papel de la coacción para colocar bajo tratamiento a las personas, esos hallazgos debieran aclararlas.

La mayoría de los usuarios de drogas, al menos los afortunados, conocen la coacción. Las personas que

Figure 2: Drug Treatment Admissions by Source of Referral: All Ages and Ages 12–17



Note: Individual includes self-referral, and referral by a family member or by friends.
Source: Treatment Episode Data Set (2001)

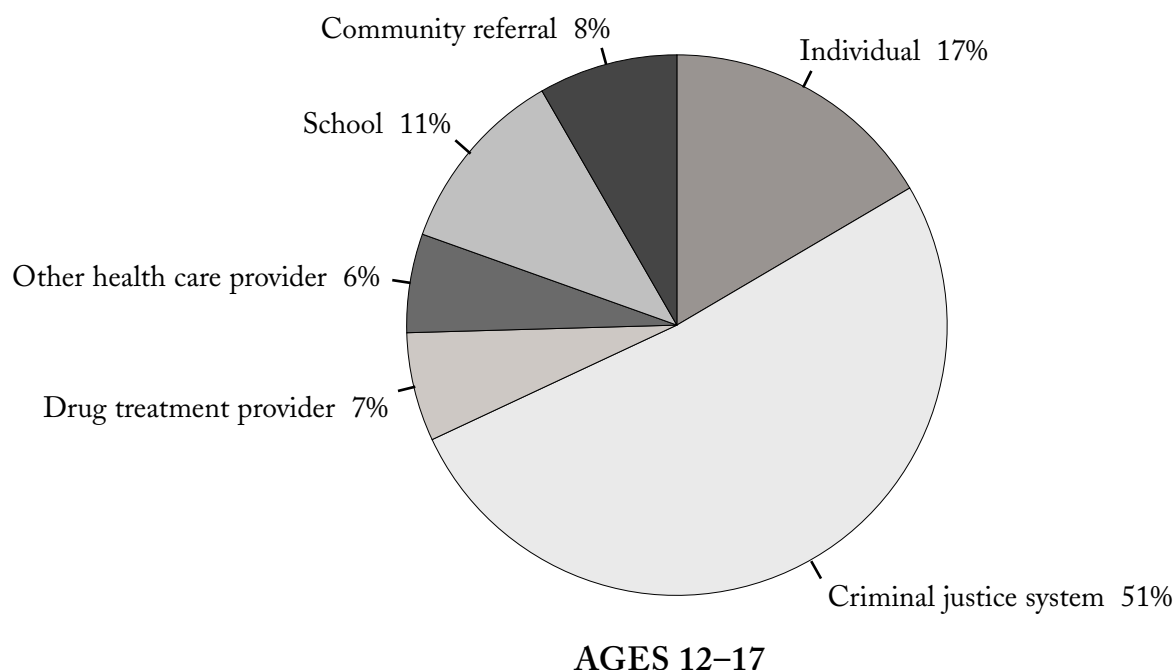
necesitan el tratamiento son afortunadas si se tropiezan con la coacción nacida de la compasión de sus familiares, amigos, patronos, el sistema de justicia penal y otros. Una presión de esa naturaleza no necesita excusa alguna; la salud y la seguridad del adicto y de la comunidad lo exigen.

La coacción compasiva comienza con la familia, los amigos y la comunidad. Los estadounidenses tienen que comenzar a enfrentar el uso de las drogas, y por ende a los usuarios, en forma honesta y directa. Tenemos que alentar a los que lo necesitan a que entren y permanezcan en el tratamiento.

Es bien sabido que los usuarios esconden con frecuencia su relación con las drogas ilegales. Pero analizando los datos más recientes de la encuesta de hogares, sabemos que hay más de 4 millones de estadounidenses que, según las definiciones del DSM-IV, sufren de una combinación o mezcla de dificultades que van desde problemas emocionales hasta problemas con las fuerzas del orden público.

Los usuarios de drogas pueden ser reservados o sigilosos al respecto pero sus problemas son a menudo evidentes para aquéllos de nosotros que estemos dispuestos a detectarlos.

Los investigadores estiman que más de la mitad de toda la cocaína y la heroína es comprada por individuos que están formalmente bajo el control del sistema de justicia penal, sea en libertad previa al juicio, en libertad condicional o en libertad bajo palabra. En las ciudades importantes, entre el 50 y el 80% de los arrestados dieron pruebas positivas para las drogas en el momento de la aprehensión. La Oficina de Estadísticas de Justicia estima que cada año son liberados, al nivel estatal, 150.000 presos sin recibir tratamiento contra las drogas, convirtiendo así quizás al sistema de justicia penal en el aliado natural más importante del sistema de tratamiento contra las drogas. Este gobierno trata de capitalizar el vínculo entre la prisión y el tratamiento mediante la ampliación del Programa de Tratamiento Residencial para el Abuso de las Sustancias Psicoactivas, un



programa de subvención federal que distribuye fondos a los estados para apoyar el tratamiento contra el alcohol y las drogas en las penitenciarías estatales.

Al nivel federal, con la meta de lograr un sistema penitenciario libre de drogas, la Oficina de Prisiones fomentará una participación del 100% entre los presos en los programas de tratamiento penitenciario, mejorando asimismo la continuidad del tratamiento para las personas que sean puestas en libertad bajo la supervisión comunitaria. La Oficina también tratará de hacerles un análisis de orina para la detección de drogas a todos los presos federales dentro de los sesenta días siguientes a su liberación y aplicará las sanciones apropiadas si el examen resulta positivo.

Asimismo, el gobierno propone aumentar el apoyo federal para el Programa de los Tribunales de Drogas en el año fiscal 2003. Los tribunales de drogas utilizan el poder de coacción del poder judicial para imponer la abstinencia y cambiar la conducta mediante una combinación de sanciones crecientes, exámenes obligatorios de drogas, tratamiento y programas eficaces postratamiento. En la actualidad, hay unos setecientos ochenta y dos tribunales en operación en

cuarenta y nueve estados, representando una de las innovaciones más prometedoras de los últimos tiempos. Con frecuencia, los programas de intervención cuidadosamente modulados, como los tribunales de drogas, representan la única forma de liberar a un usuario de las garras de la adicción. El gobierno federal emprenderá una revisión longitudinal de programas seleccionados de tribunales de drogas para determinar los efectos de largo plazo de su participación.

El sistema de justicia penal no es en absoluto el único instrumento de influencia que tienen los proveedores del tratamiento sobre los usuarios, la mayoría de los cuales trabajan para ganarse la vida. Las empresas saben que el uso de las drogas entre sus empleados es nocivo para las ganancias, traduciéndose directamente en un mayor ausentismo e incumplimiento del horario, en una mayor rotación de los empleados, en mayores daños y robos de propiedades de la empresa, y en un número mayor de reclamos de compensación por los trabajadores.

La industria privada, incluida la amplia mayoría de las compañías que integran las Fortune 500, han adoptado, con toda celeridad, políticas para eliminar

LO QUE FUNCIONA EN LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DROGAS: LA OPERACIÓN PAR

La Operación de Responsabilidad y Conciencia de los Progenitores (PAR, por sus siglas en inglés), que presta servicio a cinco condados de la Florida, comenzó en 1970 en forma similar a muchos programas eficaces: un progenitor preocupado debido al uso de drogas por su hija emprendió la acción. La Red de Apoyo Familiar de la organización, una iniciativa concebida para reducir el uso de la marihuana entre los jóvenes, tiene una tasa de retención superior, manteniendo al 88% de

sus clientes bajo tratamiento después de diez meses. La Operación PAR también brinda programas de tratamiento contra las drogas para las personas que han cometido un delito grave y la tasa de reencarcelamiento después de dos años para los individuos que han concluido el Programa de Tratamiento Seguro y de Largo Plazo Contra las Drogas es del 17%. Un programa para delincuentes juveniles produce resultados similares.

HALLAZGOS FUNDAMENTALES SOBRE EL TRATAMIENTO CONTRA LAS DROGAS

- Cerca de diez mil clientes participantes en programas basados en la comunidad en once ciudades fueron comparados, antes y después del tratamiento, respecto a una serie de resultados fundamentales. Dependiendo de la modalidad de tratamiento, los datos mostraron reducciones en el uso semanal de heroína (entre el 44 y el 69%), de cocaína (entre el 56 y el 69%) y de marihuana (entre el 55 y el 67%); reducciones en las conductas ilegales (entre el 36 y el 61%); y mejoramiento en la condición laboral (entre el 4 y el 12%).
- Un año después de ser dados de alta del tratamiento, el uso de la droga ilegal primaria de elección descendió en un 48%; los arrestos disminuyeron en un 64%; la actividad ilegal autodeclarada bajó en un 48%; y el número de visitas de atención médica relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas descendió en más de un 50%.
- Cinco años después de ser dados de alta, hubo una reducción del 21% en el uso de cualquier droga ilegal (reducciones del 45% en el uso de la cocaína en polvo, del 17% en el uso de la cocaína “crack”, del 14% en el uso de la heroína, y del 28% en el uso de la marihuana). Se registraron descensos similares en la actividad delictiva: reducciones del 30% en la venta de drogas, del 23% en la victimización de otros, del 38% en el escalamiento o allanamiento de morada con fines de delinquir, y del 56% en el hurto de vehículos.

Fuentes: Estudio de los Resultados del Tratamiento Contra el Abuso de las Drogas, Estudio Nacional de Evaluación del Mejoramiento del Tratamiento y Estudio de los Resultados de la Investigación de los Servicios.

las drogas de los sitios de trabajo, incluidos programas de asistencia a los empleados, los cuales pueden requerir que éstos participen en programas de tratamiento. El éxito de las grandes empresas podría haber tenido la consecuencia imprevista de hacer más atractivas a las pequeñas empresas para los empleados que usan drogas, ya que es menor la probabilidad de que éstas últimas sometan a escrutinio a sus empleados para determinar si usan drogas, sea antes de contratarlos como durante su empleo. Los empleados de las empresas más pequeñas tienen menor probabilidad de acceso a los programas de asistencia para los empleados.

Orientación de los recursos hacia los objetivos del tratamiento

Ya la mayoría de los estadounidenses están acostumbrados a la idea de que la recuperación de la adicción es un desafío que dura toda la vida, pero pocos comprenden lo que eso significa para los programas de tratamiento. En pocas palabras, para muchas personas, el poner fin a una vida de uso de las drogas implica intentar el tratamiento más de una vez y más de una sola modalidad de tratamiento.

AYUDAR A LAS FAMILIAS AYUDARSE A SÍ MISMAS

En 1995, una pequeñísima bodega ubicada en el Lado Este Bajo de Manhattan fue el escenario de un tiroteo entre la policía y vendedores locales de drogas, en el que resultó muerta una persona y un funcionario policial quedó paralizado. Al año siguiente, en ese mismo local de la esquina, La Bodega de la Familia abrió sus puertas con un plan innovador para lograr que el tratamiento contra las drogas funcionara mejor, prestando ayuda a las personas relacionadas con acusados penales que usaban drogas, incluidos los familiares y

amigos. La estrategia, ayudar a las familias a ayudar a sus seres queridos, ha logrado un gran éxito. Los resultados preliminares de un estudio realizado por el Instituto de Justicia Vera indican que los participantes en el programa de La Bodega redujeron en forma significativa su uso de drogas ilegales. Durante un período de seis meses, el uso de cocaína en el mes anterior entre los participantes de La Bodega disminuyó del 42% a apenas el 10% (comparado con un descenso del 27 al 21% en un grupo control o testigo).

Los programas de tratamiento eficaces enfrentan un desafío sobrecogedor. La investigación ha demostrado que el uso de las drogas puede cambiar la función y la estructura misma del cerebro, disminuyendo la capacidad para discernir, para controlar los impulsos y para cumplir con las responsabilidades. Los adelantos en las técnicas para producir imágenes cerebrales están permitiendo que los científicos observen, en tiempo real, los cambios neuroquímicos que ocurren en el cerebro a medida que procesa información o responde a estímulos, incluidas las drogas ilegales o los medicamentos usados en los tratamientos pertinentes.

Las técnicas de producción de imágenes cerebrales revelan que las drogas ilegales, como la metileno-bioximetanfetamina (MDMA, por sus siglas en inglés), mejor conocida como éxtasis, modifican los procesos químicos cerebrales debido a que dañan las neuronas y alteran las funciones responsables de la liberación de serotonina, un compuesto químico del cerebro responsable de regular la memoria y otras funciones cognitivas, tales como el razonamiento verbal y la capacidad de mantener la atención. Otros estudios sugieren que los efectos tóxicos de esa droga persisten por mucho tiempo después que el individuo deja de usarla.

Si bien cerca de la mitad de todos los tratamientos son subvencionados con medios privados o no federales, los formuladores de políticas que ponderan las interrogantes pertinentes a los gastos para el tratamiento han encontrado que su trabajo se ha simplificado por un cálculo basado en el propio interés. Resumiendo, los costos para proporcionar el tratamiento contra las drogas se vuelven insignificantes en comparación con los costos de no brindar tratamiento alguno. Por ende, el apoyo al tratamiento (es decir, ayudar a los usuarios a romper el ciclo de la adicción) tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista fiscal, además de ser lo correcto.

Una cuestión de importancia es la capacidad de tratamiento y ya se habló con anterioridad de la iniciativa presidencial de \$1.600 millones para incrementar la capacidad del sistema. Sin embargo, la concentración exclusiva en la capacidad de tratamiento ha desviado la atención de otros aspectos importantes, por ejemplo, cómo orientar los recursos actuales para el tratamiento de manera más eficaz, y cómo mejorar la calidad y la disponibilidad de los servicios postratamiento.

UNIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE

Al intentar producir la transformación personal de un usuario de drogas cuya vida se ha descontrolado totalmente, tiene todo sentido recurrir al poder transformador de la fe. El papel de la religión y de la espiritualidad para prevenir y tratar el abuso de las sustancias psicoactivas está documentado en los resultados de un estudio de dos años titulado “*Que Dios me ayude: abuso de sustancias psicoactivas, religión y espiritualidad*” (*So Help Me God: Substance Abuse, Religion and Spirituality*), hecho por el

Centro Nacional sobre la Adicción y el Abuso de las Sustancias Psicoactivas de la Universidad de Columbia. El informe encontró que la participación en programas de tratamiento basados en la espiritualidad aumenta las probabilidades de mantener la abstinencia y concluyó que “la religión y la espiritualidad pueden desempeñar un papel poderoso en la prevención y el tratamiento del abuso de las sustancias psicoactivas y en el mantenimiento de la sobriedad”.

Al considerar el papel federal en la ampliación del sistema de tratamiento, la sola diversidad de enfoques para liberar a los individuos de la adicción arguye a favor de la necesidad de concentrarnos más en nuestra capacidad para dirigir a aquéllos que necesitan ayuda hacia la modalidad o tipo más apropiado de tratamiento. Este gobierno ha dado un paso de envergadura en ese sentido al solicitar un incremento de \$109 millones para el Programa de Ampliación Dirigida de la Capacidad (TCE), subvenciones otorgadas a las ciudades, pueblos, condados y estados con mayores necesidades. El programa tiene además como objetivo los grupos de alta prioridad para el tratamiento, como los adolescentes, las mujeres embarazadas, y las minorías étnicas y raciales.

Los programas de tratamiento se presentan en muchas formas diferentes. Varían de una comunidad terapéutica para pacientes residentes en la zona rural de Catskills (donde durante dieciocho meses, los clientes aprenden disciplina y habilidades básicas de la vida), a una clínica de consulta externa en Los Angeles (donde los adictos a la heroína hacen cola

para recibir la dosis diaria de metadona y orientación periódica), a un programa prolongado y basado en la fe en Portland, Oregón (que utiliza el poder de la fe como parte esencial del proceso de tratamiento).

Los aspectos más intensivos del tratamiento tienen una duración relativamente corta y si queremos que la abstinencia prolongada sea una expectativa realista, es necesario que haya un componente postratamiento. Para un número cada vez mayor de personas, la abstinencia es impuesta por los familiares, los amigos, el patrono o el sistema de justicia penal. Para decenas de millares, la clave para eliminar las drogas es un programa en doce pasos, como Narcóticos Anónimos, una historia de éxito estadounidense que fue modelado siguiendo los lineamientos del movimiento de Alcohólicos Anónimos y que comenzó a desarrollarse en los años cuarenta. El éxito de Narcóticos Anónimos y de otros programas similares surge en gran medida de un énfasis inquebrantable en la abstinencia y en el apoyo de otros individuos que también enfrentan el desafío de mantener la recuperación durante el resto de sus vidas.

ELEMENTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTANTES

- **Control y Aplicación de la Ley al Nivel de las Fronteras: \$76,3 millones adicionales**

(de los cuales más de \$11,4 millones están relacionados con las drogas). Este mejoramiento de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. incluye la contratación de quinientos setenta agentes adicionales para la aplicación de la ley en las fronteras nacionales y para combatir el narcotráfico internacional.

- **Enjuiciamientos por Drogas en la Frontera Sudoeste: \$50 millones.**

El presupuesto presidencial para el año fiscal 2003 mantiene una subvención de \$50 millones para la Iniciativa de Enjuiciamiento por Drogas en la Frontera Sudoeste. Ese programa brinda un apoyo de importancia crítica a los condados que se encuentran a lo largo de la frontera sudoeste en lo pertinente a los costos para detener y enjuiciar los casos de drogas referidos a ellos por los fiscales de los EE.UU.

- **Iniciativa Andina Antidrogas (ACI, por sus siglas en inglés): \$731 millones.**

El presupuesto para el año fiscal 2003 solicita un aumento de \$106 millones respecto a los fondos adjudicados a la cuenta de la ACI para el año fiscal 2002. Esa solicitud incluye recursos para continuar con los programas de aplicación de la ley, control fronterizo, reducción de los cultivos, desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional, administración de justicia y derechos humanos. En el caso de Colombia, los fondos se utilizarán para varias categorías amplias, incluida la operación y mantenimiento de equipos aéreos proporcionados con fondos suplementarios del Plan Colombia; apoyo operativo a la Policía Nacional Colombiana y a la Brigada Antinarcóticos del Ejército colombiano; y programas para la aplicación de herbicidas. Los fondos adicionales brindarán apoyo a los programas humanitarios, sociales, económicos y de desarrollo alternativo, que revisten importancia crítica, y que son ejecutados por la Agencia para el Desarrollo Internacional; apoyarán a los grupos vulnerables; y proporcionarán recursos a los proyectos de reforma del sector justicia.

Perturbación del mercado: ataque a las bases económicas del comercio de las drogas

Son pocos los campos de la política pública que muestran vínculos tan claros como los que existen entre la disponibilidad y el uso de las drogas ilegales. En pocas palabras, la demanda de drogas tiende a variar según su precio y disponibilidad. La perturbación de esa relación de mercado brinda a los formuladores de políticas una influencia y un poder claro para reducir el uso.

Durante decenios, la comprensión del “efecto de la oferta” tenía más un carácter anecdótico que una base científica. Un ejemplo citado a menudo tiene que ver con el uso de la heroína por los efectivos militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam. El sudeste asiático ofrecía una heroína fuerte y barata, que fue usada por un número suficiente de efectivos estadounidenses como para provocar una amplia preocupación en Washington y la creación de un programa sin precedentes para someter a exámenes para drogas a los que regresaban de la guerra. Al final, esa estrategia prudente no sirvió en parte para nada. Al regresar a un mundo donde la heroína era cara, impura y difícil de obtener, la gran mayoría de los soldados simplemente dejó de usarla. En un primer momento, la oferta fomentó la demanda. Con posterioridad, la carencia de oferta, eliminó la demanda.

El efecto de la oferta ayuda a explicar por qué algunos países logran mucho más éxito que otros en controlar el uso de las drogas por sus ciudadanos. Incluso países con sistemas bien administrados para el mantenimiento del orden público pueden ser atropellados si la geografía conspira en su contra, haciendo difícil la interdicción de las drogas ilegales al nivel de la frontera o tierra adentro.

Consideremos a Malasia, nación con una fuerza eficaz para el control de las drogas y con sanciones estrictas para el tráfico (incluida la sentencia de

muerte obligatoria para ciertos delitos pertinentes a las drogas). La peor desgracia de Malasia es algo sobre lo cual tiene poco control: estar ubicada a horcajadas sobre las rutas del narcotráfico de sus vecinos Birmania y Tailandia, lo cual determina que la heroína sea abundante y barata. A consecuencia de ello, la población de Malasia tiene un grave problema de adicción a la heroína intravenosa.

Parece obvio que la disponibilidad es una precondition para el uso. Sin embargo, la disponibilidad es un término relativo: lo que realmente le importa al usuario de drogas es que el mercado de las drogas ilegales produzca disponibilidad a un precio razonable. La comprensión de esto se ha visto impedida por la concepción popular de que los adictos enloquecidos harán cualquier cosa por conseguir una dosis. Independientemente de la compulsión que los impulse, lo cierto es que la mayoría de los adictos están muy conscientes del precio y la pureza de las drogas que consumen y son muy sensibles a ello. Los adictos tienen que gastar casi todo su dinero en drogas ilegales; la elevación de los precios de drogas como la cocaína y la heroína no los lleva, como por arte de magia, a pedir más limosnas, ni a pedir más dinero prestado ni a robar más. (Por el contrario, la introducción de una droga omnipresente y de bajo costo, como la cocaína “crack”, puede estimular tremendamente el consumo.) Por encima de todo, incluso los usuarios fuertes de drogas son consumidores racionales y la señal del mercado transmitida por una reducción de la disponibilidad (o una serie desalentadora de transacciones en las que resulten timados) puede ser un estímulo poderoso para entrar en un programa de tratamiento.

La investigación reciente sugiere que los usuarios casuales, incluso los adolescentes, son susceptibles a los efectos de la oferta. Una ponencia de

investigación titulada “*La marihuana y la juventud*” (*Marijuana and Youth*), patrocinada por la Fundación Robert Wood Johnson, concluye que los cambios en los precios de la marihuana “contribuyeron en forma significativa a las tendencias en el uso de la marihuana por los jóvenes entre 1982 y 1998, en particular durante la contracción del uso desde 1982 hasta 1992”. Esa contracción fue el resultado de muchos factores, incluido un esfuerzo concertado entre las instituciones federales para perturbar la producción interna; esos factores contribuyeron a la duplicación del precio en la calle de la marihuana en el término de un año.

No debe sorprendernos que las personas que consumen drogas reaccionen a las fuerzas del mercado. El mercado de las drogas es en efecto un mercado extenso, el cuál enfrenta numerosos obstáculos que aunque frecuentemente pasan desapercibidos pueden ser utilizados como puntos de presión.

Las organizaciones narcotraficantes de envergadura y sus proveedores enfrentan el colosal desafío administrativo de supervisar el cultivo de centenares de millares de acres de cultivos para las drogas y de importar millares de toneladas de productos químicos ilícitos hasta zonas remotas de producción que, con frecuencia, están bajo el control de ejércitos guerrilleros. Después, los traficantes tienen que transportar cientos de toneladas de drogas ilegales a lo largo de continentes y a través de intermediarios y de todo un laberinto de organizaciones especializadas en el contrabando transfronterizo; y de ahí, a las manos de los distribuidores de nivel medio en un país extranjero, donde los gerentes principales nunca se arriesgarán a poner pie.

Aun el éxito (es decir, el embarque de drogas ilegales hacia los Estados Unidos) conlleva su propio conjunto de desafíos, incluido el insólito problema del dinero. El comercio de las drogas depende del sistema bancario internacional para lavar o blanquear

miles de millones de dólares cada año, una empresa cada vez más incierta en un momento en que las transacciones financieras son sometidas a un escrutinio cada vez mayor. Allí donde no logra infiltrar los sistemas bancarios locales, el comercio de las drogas tiene que recurrir al contrabando a la inversa, en masa, de enormes sumas de efectivo, que con frecuencia pesan dos o tres veces más que las drogas originalmente contrabandeadas. Cada uno de esos procesos implica una serie de sistemas muy bien sincronizados. Pero todo sistema muy bien sincronizado tiene sus debilidades. La complejidad y la simple amplitud del comercio de las drogas será su mayor debilidad.

Al montar programas para la aplicación de la ley en nuestra nación y conjuntamente con nuestros socios internacionales en ultramar, el gobierno federal se orientará basándose en ese entendimiento del comercio de las drogas ilegales como un mercado. Para administrar de manera eficaz nuestros esfuerzos, definiremos el mercado mejor al estimar el flujo de las drogas ilícitas desde sus orígenes hasta nuestras calles. Mediremos nuestro éxito según nuestra capacidad de reducir la oferta de drogas.

Perturbación de los mercados en nuestro país

Para perturbar los mercados de drogas al nivel interno se requerirán los esfuerzos combinados de cooperación de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales, cada una de las cuales hace aportes cruciales. Los esfuerzos eficaces para reducir la oferta de drogas se concentrarán en la interceptación de los mismos en la frontera, y en el desmantelamiento de las redes que transportan y distribuyen las drogas ilegales y las ganancias ilícitas de su venta en todo el territorio de los Estados Unidos.

Para elevar el precio de las drogas como la cocaína y la marihuana tendremos que poner en la mira al ápice de la pirámide del tráfico, utilizando mecanismos sofisticados de cooperación, como la División de Operaciones Especiales, un centro de operación multiinstitucional bajo la gestión de la DEA que incluye a participantes del Departamento de Justicia y de la Tesorería de los EE.UU. La virtud de ese programa es que administra la tarea desafiante de explotar toda información sensible en una forma que permite proteger las fuentes y los métodos de la inteligencia, logrando al mismo tiempos grandes avances en crear un entorno en el que las instituciones federales para el mantenimiento del orden público puedan compartir información.

En 1982 se creó el programa de la Fuerza Antidrogas Contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) para concentrar los recursos en el desmantelamiento y perturbación de las organizaciones traficantes de mayor envergadura y de sus operaciones de lavado o blanqueo de dinero. Hoy, la parte del Departamento de Justicia de la OCDETF ha madurado para convertirse en una estructura de alcance nacional de fuerzas (incluidos fiscales federales y funcionarios del orden público federales, estatales y locales) en nueve regiones, habiendo recibido un total de \$338,6 millones en el año fiscal 2002, y dedicada por completo a hacer cumplir la ley respecto a las drogas. Sin embargo, según las cifras del Departamento de Justicia, en los últimos años, sólo una de cada diez investigaciones de la OCDETF ha incluido una investigación financiera y sólo el 21% de esas investigaciones ha llegado a los niveles de dirigencia de las organizaciones de drogas. El Procurador General ha reorientado la atención del programa OCDETF para garantizar que los esfuerzos de aplicación de la ley se dirijan hacia las organizaciones traficantes más significativas y responsables de distribuir la mayoría de las drogas en los Estados Unidos. Bajo el programa OCDETF, las fuerzas del orden público identificarán en forma estratégica a las organizaciones traficantes más sofisticadas,

eliminarán a sus dirigentes, desintegrarán sus operaciones de transporte y distribución, y desmantelarán su infraestructura financiera. La eficacia del programa OCDETF se medirá según su efecto en la reducción de la oferta de drogas en nuestro país.

El programa de Zonas de Alta Densidad de Tráfico de Drogas (HIDTA, por sus siglas en inglés) es administrado por la ONDCP en veintiocho regiones identificadas como zonas de tráfico elevado en todo el país. En los meses venideros, la ONDCP consultará con el Procurador General, con el Secretario de la Tesorería, con los jefes de las instituciones del orden público federales, estatales y locales, y con los gobernadores y alcaldes pertinentes para determinar la forma en que mejor se pueda garantizar que el programa HIDTA se concentre en los traficantes de alto valor e importancia y en sus infraestructuras financieras.

Los esfuerzos de colaboración, como la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de la Tesorería, tienen que desempeñar un papel de primera línea para ayudar a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales a descubrir los delitos financieros de los traficantes de drogas. El Departamento de la Tesorería, como parte de la Estrategia Nacional para el Lavado de Dinero, ha intensificado los esfuerzos de las Zonas de Alta Intensidad de Lavado de Dinero y de Delitos Financieros Afines (HIFCA, por sus siglas en inglés), bajo una gestión conjunta con el Departamento de Justicia. Las fuerzas del orden público federales y los esfuerzos reglamentarios se concentrarán en las empresas de envergadura dedicadas al lavado de dinero en esas zonas.

Sin embargo, a largo plazo, todo lo que hacen las fuerzas federales para el mantenimiento del orden requiere el consenso público en el sentido de que sean justas tanto las leyes que hacen cumplir como la forma en que las aplican. En los últimos años, ese consenso ha sufrido una erosión alarmante. Las

fuerzas del orden público han sido blanco de una campaña que ridiculiza su labor señalando que lo que hacen es encarcelar a los vendedores de drogas de bajo nivel con sentencias que son excesivamente severas. Un volumen imponente de datos, incluida la información más actualizada sobre las condenas federales, indica lo contrario.

Según la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, la cantidad mediana en los casos de tráfico de cocaína es de 1.999 gramos para la cocaína en polvo y de 68,7 gramos para la cocaína “crack” (más de 600 “rocas” de “crack”). Las cifras pertinentes a la heroína y la marihuana son de 512 gramos y de 56.110 gramos, respectivamente, suficiente, en ambos casos, para decenas de millares de dosis. Por tanto, la idea que el sistema federal de justicia penal esté arrestando a legiones de transgresores de pequeño calibre en el campo de las drogas es insostenible, al igual que el alegato que las instituciones federales del orden público están encarcelando, a toda marcha, a individuos por posesión y no por tráfico de drogas ilegales. En el año fiscal 2000, el año más reciente para el cual se dispone de datos, el total de condenas federales por posesión de cocaína, marihuana y heroína combinadas fue doscientas treinta y dos.

La estructura de las sentencias ha fomentado una cierta percepción de injusticia racial en el sistema de justicia penal. Obviamente, el gobierno tiene que promulgar y administrar las leyes en forma justa y equitativa pero reviste igual importancia que ésa sea la percepción ciudadana, ya que si algunos creen que la ley discrimina contra una población dada, ello obstaculiza la capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley en beneficio de la sociedad en pleno. Este gobierno está comprometido a trabajar con todas las partes interesadas para garantizar que nuestro sistema de justicia penal actúe y sea percibido como justo.

Ir a la fuente

Si bien la mayor parte de nuestro programa para el control de las drogas está basado en nuestro país, algunos elementos de un programa eficaz de esa naturaleza sólo se pueden desarrollar en el extranjero. Al nivel internacional, nosotros y nuestros aliados atacaremos el poder y las finanzas de las organizaciones internacionales terroristas y delictivas que amenazan nuestra seguridad nacional. Apoyaremos a nuestro socios internacionales en sus esfuerzos para atacar el comercio de las drogas dentro de sus fronteras y trabajaremos a través de las instituciones bancarias y financieras internacionales para combatir las actividades de lavado de dinero relacionadas con las drogas y el terrorismo. Asimismo, haremos todo lo posible para fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en las naciones aliadas que están bajo el ataque del comercio de las drogas ilegales. Dejando claramente sentado ante los traficantes que no tendrán refugio seguro alguno contra la justicia, uniremos nuestros esfuerzos a los de nuestros homólogos extranjeros para apoyar sus esfuerzos de enjuiciamiento y sometemos a la justicia a los traficantes extranjeros mediante la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses.

Seguiremos manteniendo bajo la mira el suministro de drogas ilegales en los países fuente. La industria ilícita que cultiva la coca y produce, transporta y comercializa la cocaína es vulnerable a una acción eficaz de aplicación de la ley. La coca, materia prima para la cocaína, sólo se produce en volúmenes comerciales en la región andina de Suramérica. Asimismo, gran parte de la heroína consumida en los Estados Unidos es producida también en la región andina.

La industria de la coca florece en zonas que carecen de un control eficaz por las fuerzas del orden. Sin embargo, con una presencia gubernamental significativa, con unas fuerzas del orden capaces y

CONSECUENCIAS DEL USO DE LAS DROGAS

Costos económicos para la sociedad. El costo económico total para la sociedad del uso de las drogas ilegales en 2000 se estimó en \$160.000 millones, un incremento del 57% respecto a 1992. Los tres principales componentes del costo total son: costos en la atención para la salud (\$14.900 millones), pérdidas en la productividad (\$110.500 millones) y otros costos (\$35.200 millones), incluidos el costo de bienes y servicios perdidos por acciones delictivas, el sistema de justicia penal y bienestar social.

Gastos en drogas ilegales. En 2000, los estadounidenses gastaron aproximadamente \$64.000 millones en drogas ilegales, más de ocho veces del total de erogaciones federales totales para la investigación sobre el VIH/SIDA, el cáncer y las cardiopatías. Los usuarios internos de drogas gastaron más de

la mitad de ese total (\$35.000 millones) en cocaína. Los gastos para la heroína y la marihuana alcanzaron, para cada una de ellas, cerca de \$10.000 millones; los gastos totales para la metanfetamina fueron de \$5.000 millones.

Muertes relacionadas con las drogas. Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estimaron que en 1999, 19.102 personas murieron a consecuencia directa de causas inducidas por drogas (52 de ese tipo de muertes al día). Si bien los datos actuales de los CDC no son directamente comparables con las estimaciones de los años anteriores, hubo un aumento constante en las muertes inducidas por las drogas entre 1990 y 1998, de 9.463 a 16.926.

con la voluntad política de enfrentar la corrupción atrincherada y los grupos políticos poderosos, es posible desintegrar a la industria de la cocaína. Históricamente, los esfuerzos internacionales para reducir la oferta han disminuido el cultivo de la amapola del opio y los cultivos de coca en una serie de países, incluidos Bolivia, Ecuador, Guatemala, Pakistán, Panamá, Perú y Tailandia. En cada uno de esos casos se adaptó con éxito a las condiciones locales una combinación de programas de desarrollo alternativo, de erradicación, de aplicación de la ley y de interdicción.

La democracia está sometida a grandes presiones en la región andina debido, en gran medida, a que el dinero generado por la producción y el tráfico de los narcóticos está a disposición de grupos antidemocráticos bien armados. Los éxitos pasados

en el control de los cultivos en Bolivia y Perú se han visto contrarrestados en parte por los incrementos en el cultivo de la coca en Colombia. En el presente, casi el 90% de la cocaína y la mayoría de la heroína que llegan a los Estados Unidos provienen de Colombia, originándose en la zona meridional de ese país donde es más débil el control del gobierno.

Hasta la fecha, la seguridad y la presencia gubernamental en el sur de Colombia siguen siendo, en el mejor de los casos, limitadas. La erradicación aérea no se ha aplicado con suficiente continuidad o intensidad, y no ha sido suficiente para cambiar la ecuación económica en la región colombiana del Putumayo. La coca sigue siendo el cultivo más lucrativo en las zonas productoras meridionales y los productores, si bien están dispuestos a inscribirse en programas de desarrollo alternativo como protección,

tienen pocos incentivos para proceder con la erradicación voluntaria sin la amenaza omnipresente de la interdicción y la erradicación involuntaria. A medida que el gobierno de Colombia comience a avanzar en la lucha contra el incremento masivo de la producción de coca en zonas que se encuentran bajo el control de grupos armados ilegales, los traficantes de drogas buscarán nuevas fuentes de suministro.

Los Estados Unidos están listos para apoyar a Perú y Bolivia, así como también a Ecuador y otros países de la región, para garantizar que la producción de coca no migre a consecuencia de la presión ejercida en Colombia. El gobierno solicitó \$731 millones en fondos dedicados para el año fiscal 2003 para la Iniciativa Andina Antidroga a ser aplicada en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Casi la mitad de esa suma es para los vecinos de Colombia; el resto es para sustentar los programas en curso en Colombia. De manera similar, casi la mitad de la asistencia se dedica a los esfuerzos de interdicción y erradicación; el resto se aplicará a programas de desarrollo alternativo y de fortalecimiento de las instituciones, como los programas anticorrupción y del sistema judicial. Un ejemplo de esto último es el programa de las Casas de Justicia, que ya ha prestado servicios de tribunales para la solución de controversias a dieciocho comunidades con servicios insuficientes.

Cerca de dos tercios de la cocaína producida en la región andina y destinada a los Estados Unidos entra en el país a través de nuestra frontera común con México. La extradición reciente de traficantes de envergadura, incluido Everardo Arturo Páez Martínez, es prueba que la relación bilateral para el control de las drogas ha mejorado desde el principio de los gobiernos de Fox y Bush. Sin embargo, México enfrenta graves dificultades de implementación debido a la corrupción y a instituciones subdesarrolladas. Nuestra estrategia fundamental en el trabajo con el gobierno mexicano

consistirá en concentrarnos en perturbar y desmantelar las organizaciones narcotraficantes transnacionales de envergadura. El grado de nuestro interés mutuo en esa estrategia está subrayado por las estimaciones que indican que el consumo de cocaína en ese país ha venido aumentando de manera marcada en los últimos años.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre han creado una nueva conciencia de nuestra vulnerabilidad interna y destacan la necesidad de examinar cómo manejamos nuestras fronteras. El gobierno está actualmente revisando toda una gama de opciones para lograr un mejor control de nuestras fronteras para impedir que las drogas entren a los Estados Unidos.

En el Caribe enfrentamos una carencia de recursos en las naciones de esa región para adoptar una postura agresiva contra el narcotráfico. En esa zona nos concentraremos en incrementar la cooperación marítima para la interdicción del flujo de drogas, en mejorar las capacidades nacionales para oponerse al narcotráfico, en proporcionar asistencia para fortalecer las fuerzas regionales antinarcóticos, y en apoyar las iniciativas contra el lavado de dinero.

Emplearemos asimismo paquetes más ágiles para la interdicción, como una combinación de un buque, un helicóptero armado y una lancha de persecución de alcance ampliado utilizada en la actualidad en la Operación Nueva Frontera del Servicio de Guardacostas. El éxito de la Operación Nueva Frontera, que puede utilizar una fuerza no letal, incluidos disparos de advertencia y disparos para incapacitar las embarcaciones de los narcotraficantes, ha obligado a los contrabandistas por vía marítima a cambiar sus cálculos en las zonas donde se ha desplegado esa operación. Desarrollaremos paquetes de interdicción con eficacia similar, incluyendo el uso de la aeronave P-3 del Servicio de Guardacostas, para perturbar las operaciones de tráfico en otras zonas del Caribe.

En el Asia central enfrentamos un conjunto diferente de desafíos. Bajo el Talibán, Afganistán se convirtió en la fuente de más del 70% del opio al nivel mundial. Después de anunciar la prohibición de la producción de opio, el Talibán se benefició muchísimo de los precios más elevados por el opio acumulado que estaba bajo su control. A medida que avance la reconstrucción de ese país, los objetivos de los Estados Unidos incluyen garantizar que los ingresos por concepto de las drogas ilegales nunca más financien la inestabilidad regional ni la amenaza del terrorismo internacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores interino de Afganistán ya hizo una declaración pública en la que indicó que el gobierno provisional dará los pasos necesarios para erradicar la producción y el tráfico de drogas. No obstante, ya se están sembrando los cultivos y una cosecha significativa en la primavera podría permitir que continúe el comercio de las drogas. La asistencia para el desarrollo de Afganistán se debe diseñar en modo que proporcione incentivos para dejar atrás una economía basada en los cultivos para las drogas y las fuerzas del orden público deben imponer sanciones contra los productores y traficantes de drogas. Esas acciones representarán un desafío particular durante los primeros días de la reconstrucción, y requerirán la participación y aliento continuado y sostenido de la comunidad de donantes internacionales.

Las ganancias ilegales por concepto de drogas del Talibán representan sólo una parte de un problema mundial: los ingresos por concepto de las drogas ayudan a alimentar la violencia terrorista. Se alega que doce de los veintiocho grupos terroristas enumerados por el Departamento de Estado participan, en algún nivel, en el narcotráfico. En Colombia, los tres principales grupos terroristas participan en el comercio de las drogas como fuente de fondos operativos. Eso subraya la necesidad de garantizar que las operaciones internacionales en cooperación de las fuerzas del orden público pongan

bajo la mira a las organizaciones traficantes que, directa o indirectamente, ayudan a financiar el terrorismo internacional.

El comercio de las drogas es un mercado transnacional. Para descalabrarlo se requerirá una respuesta internacional de cooperación. Al igual que en nuestros otros esfuerzos al nivel mundial, trataremos de lograr coaliciones internacionales y aliados confiables para combatir la producción y el tráfico de las drogas. Apoyaremos los esfuerzos regionales, bilaterales y multilaterales de lucha contra la industria del narcotráfico y contra el destructivo mercado que ella abastece.

Estrategia Nacional para el Control de las drogas:
APÉNDICES

Resumen del presupuesto nacional para el control de las drogas

Fondos para el control de las drogas: resumen de las instituciones, FY 2001–FY 2003 (Autoridad Presupuestaria en Millones)

| | FY 2001 Final BA | FY 2002 Enacted | FY 2003 Request |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Department of Agriculture | | | |
| Agricultural Research Service | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| U.S. Forest Service | 5.8 | 6.8 | 6.8 |
| Women, Infants & Children | 16.1 | 17.5 | 19.0 |
| Total, Agriculture | 26.7 | 29.1 | 30.6 |
| Corporation for National & Community Service | 9.4 | 9.4 | 14.4 |
| D.C. Court Services and Offender Supervision | 58.6 | 86.4 | 82.3 |
| Department of Defense | | | |
| Counterdrug Operations | 1,047.1 | 997.6 | 998.8 |
| Plan Colombia | 103.3 | 10.9 | 0.0 |
| Total, Defense | 1,150.3 | 1,008.5 | 998.8 |
| Intelligence Community Management Account | 34.0 | 42.8 | 34.0 |
| Department of Education | 634.1 | 659.5 | 634.8 |
| Dept. of Health and Human Services | | | |
| Administration for Children and Families | 83.0 | 89.6 | 90.7 |
| Centers for Disease Control and Prevention | 223.6 | 225.4 | 224.9 |
| Centers for Medicare and Medicaid Services | 500.0 | 560.0 | 620.0 |
| Health Resources & Services Administration | 45.8 | 47.2 | 47.2 |
| Indian Health Service | 59.9 | 62.0 | 63.3 |
| National Institutes of Health (NIDA & NIAAA) | 822.7 | 933.0 | 994.1 |
| Substance Abuse and Mental Health Services Admin. | 1,655.0 | 1,766.5 | 1,820.1 |
| Total, HHS | 3,389.9 | 3,683.7 | 3,860.2 |

| | FY 2001 Final BA | FY 2002 Enacted | FY 2003 Request |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Dept. of Housing and Urban Development | 309.3 | 9.0 | 9.0 |
| Department of the Interior | | | |
| Bureau of Indian Affairs | 23.2 | 23.3 | 23.4 |
| Bureau of Land Management | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| U.S. Fish & Wildlife Service | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
| National Park Service | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
| Total, Department of Interior | 39.5 | 38.8 | 39.0 |
| The Judiciary | 756.8 | 819.7 | 921.1 |
| Department of Justice | | | |
| Assets Forfeiture Fund | 439.9 | 360.0 | 430.0 |
| U.S. Attorneys | 228.2 | 244.6 | 254.4 |
| Bureau of Prisons | 2,341.5 | 2,525.1 | 2,443.0 |
| Community Policing | 374.7 | 427.4 | 653.3 |
| Criminal Division | 35.1 | 37.8 | 38.7 |
| Drug Enforcement Administration | 1,480.4 | 1,605.4 | 1,698.5 |
| Federal Bureau of Investigation | 707.5 | 415.5 | 421.4 |
| Federal Prisoner Detention | 375.5 | 429.4 | 463.9 |
| Immigration and Naturalization Service | 525.0 | 538.0 | 713.4 |
| Interagency Crime and Drug Enforcement | 325.2 | 338.6 | 362.1 |
| INTERPOL | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U.S. Marshals Service | 223.8 | 255.1 | 277.8 |
| Office of Justice Programs | 1,016.6 | 962.6 | 309.2 |
| Tax Division | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total, Department of Justice | 8,074.1 | 8,140.1 | 8,066.5 |
| Department of Labor | 78.8 | 79.2 | 79.4 |
| ONDCP | | | |
| Operations | 24.7 | 25.3 | 25.5 |
| High Intensity Drug Trafficking Areas | 208.3 | 226.4 | 206.4 |
| Counterdrug Technology Assessment Center | 36.0 | 42.3 | 40.0 |
| Special Forfeiture Fund | 233.1 | 239.4 | 251.3 |
| Total, ONDCP | 502.1 | 533.3 | 523.1 |

| | FY 2001 Final BA | FY 2002 Enacted | FY 2003 Request |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Small Business Administration | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| Department of State | | | |
| Bureau of International Narcotics & Law Enforcement | | | |
| International Narcotics Control | 279.3 | 197.5 | 152.2 |
| Plan Colombia / Andean Counterdrug Initiative | 0.0 | 625.0 | 731.0 |
| Subtotal, INL | 279.3 | 822.5 | 883.2 |
| Emergencies in the Diplomatic and Consular Service | 1.7 | 1.0 | 2.5 |
| Public Diplomacy | 8.8 | 9.1 | 9.5 |
| Total, Department of State | 289.8 | 832.6 | 895.2 |
| Department of Transportation | | | |
| U.S. Coast Guard | 745.4 | 540.4 | 629.2 |
| Federal Aviation Administration | 19.9 | 19.1 | 20.3 |
| National Highway Traffic Safety Administration | 30.5 | 31.9 | 32.2 |
| Total, Department of Transportation | 795.8 | 591.4 | 681.7 |
| Department of the Treasury | | | |
| Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms | 164.9 | 185.4 | 199.1 |
| U.S. Customs Service | 707.7 | 994.8 | 995.9 |
| Federal Law Enforcement Training Center | 31.9 | 35.5 | 30.3 |
| Financial Crimes Enforcement Network | 10.8 | 12.3 | 13.2 |
| Interagency Crime and Drug Enforcement | 103.2 | 107.6 | 107.6 |
| Internal Revenue Service | 51.5 | 39.1 | 42.0 |
| U.S. Secret Service | 21.7 | 26.2 | 30.8 |
| Treasury Forfeiture Fund | 170.2 | 145.9 | 145.9 |
| Total, Department of the Treasury | 1,262.0 | 1,546.8 | 1,564.7 |
| Department of Veterans Affairs | 680.9 | 709.4 | 741.8 |
| Total Federal Drug Budget | 18,095.7 | 18,822.8 | 19,179.7 |

(Detail may not add to totals due to rounding)

Reestructuración del presupuesto nacional para el control de las drogas

Para que haya una mayor responsabilidad/rendición de cuentas en los esfuerzos para controlar las drogas, el gobierno propone una reestructuración significativa del presupuesto nacional para su control. Ese presupuesto incluye cerca de cincuenta cuentas presupuestarias por un total superior a los \$19.000 millones para 2003. Los recientes análisis independientes de esos presupuestos encargados por la ONDCP, así como las revisiones en curso requeridas por los inspectores generales de los departamentos, han identificado debilidades en esas presentaciones presupuestarias. Muchos de esos problemas están asociados con las metodologías empleadas en los presupuestos pertinentes a las drogas utilizadas por las instituciones para estimar el gasto en ese renglón. Las metodologías empleadas en los presupuestos pertinentes a las drogas son imprecisas y con frecuencia, sólo tienen una asociación débil con las misiones fundamentales para su control. Se requiere una reforma del presupuesto nacional para el control de las drogas.

En los meses venideros, el gobierno desarrollará una nueva metodología para el registro y presentación del presupuesto pertinente a las drogas. Las principales pautas que se utilizarán para desarrollar esas estimaciones son:

- Todos los fondos que aparezcan en el presupuesto para las drogas deberán poderse identificar con facilidad como rubros individuales asentados en el presupuesto presidencial o en las justificaciones presupuestarias presentadas por las instituciones al Congreso anexas al presupuesto.

- La presentación general del presupuesto se deberá simplificar mediante la eliminación de varias de las instituciones de apoyo de la tabulación del presupuesto para las drogas. Sólo las instituciones con una misión fundamental de aplicación de la ley respecto a las drogas o de reducción de la demanda aparecerían asentadas en el presupuesto. Ese cambio limitaría el presupuesto a aquellas instituciones o cuentas que han sido, o debieran ser, el punto principal de atención de la política para el control de las drogas. Las instituciones que hagan un aporte mínimo al programa nacional para el control de las drogas serían excluidas de la presentación revisada del presupuesto pertinente.

Es probable que la aplicación de esos principios reduciría en forma drástica los recursos federales que supuestamente representan fondos para el control de las drogas, sin afectar el compromiso federal general de reducir su uso. En congruencia con esos principios, en el cuadro anexo se hace una presentación pro forma del presupuesto para las drogas en su versión revisada. Los detalles de esa propuesta se compartirán con los principales interesados en los meses venideros y después de hacer consultas con el Congreso y con las instituciones dedicadas al control de las drogas, el presupuesto presidencial para el año fiscal 2004 mostrará todos esos cambios. Esa nueva estructura para el presupuesto antidrogas prestará un mejor servicio a los formuladores de políticas y a la ciudadanía al concentrarse en programas que estén realmente orientados hacia la reducción del uso de las drogas.

Pro forma de la propuesta para el presupuesto nacional para el control de las drogas (Autoridad Presupuestaria en Millones)

| Agency/Account | FY 01 | FY 02 | FY 03 | Change FY02-03 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Defense | 970.4 | 847.6 | 848.9 | 1.3 |
| Education (Safe & Drug-Free Schools) | 644.3 | 679.3 | 644.3 | (35.0) |
| Health and Human Services | | | | |
| Substance Abuse & Mental Health Services Administration | 2,175.0 | 2,305.8 | 2,371.0 | 65.2 |
| National Institute on Drug Abuse | 783.6 | 890.9 | 948.5 | 57.6 |
| Justice | | | | |
| Drug Enforcement Administration | 1,480.4 | 1,605.4 | 1,698.5 | 93.1 |
| Interagency Crime & Drug Enforcement | 325.2 | 338.6 | 362.1 | 23.5 |
| Immigration & Naturalization Service | 201.7 | 210.1 | 328.5 | 118.4 |
| Office of Justice Programs | 214.8 | 255.5 | 240.2 | (15.3) |
| Office of National Drug Control Policy | 502.1 | 533.3 | 523.1 | (10.2) |
| State | 279.3 | 859.0 | 883.2 | 24.2 |
| Transportation (U.S. Coast Guard) | 745.4 | 540.4 | 629.2 | 88.8 |
| Treasury | | | | |
| Customs Service | 714.7 | 1,004.0 | 1,004.4 | 0.4 |
| Interagency Crime & Drug Enforcement | 103.2 | 107.6 | 107.6 | 0.0 |
| Veterans Affairs | 680.9 | 709.4 | 741.8 | 32.4 |
| Other Presidential Initiatives* | 3.5 | 53.0 | 58.0 | 5.0 |
| Total, Federal Drug Control Budget | 9,824.6 | 10,939.9 | 11,389.3 | 449.4 |

* For SBA's Drug-Free Workplace programs, \$3.5 million is included for FY 2001 and \$3.0 million is included for FYs 2002 and 2003. For Corporation for National Service's Parents Drug Corps program, this includes \$5 million for FY 2003. For the COPS Southwest Border Prosecutor initiative, this includes \$50 million for FYs 2002 and 2003.

Reconocimientos

Consulta

La Ley de Reautorización de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas de 1998 requiere que el Director de la ONDCP consulte con toda una variedad de peritos y funcionarios para el desarrollo y la implementación de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas. Los consultores especificados incluyen a los jefes de las instituciones que integran el Programa Nacional para el Control de las Drogas, el Congreso, funcionarios estatales y locales, ciudadanos y organizaciones con experiencia y conocimientos en el campo de la reducción de la oferta y la demanda, así como representantes pertinentes de gobiernos extranjeros. En 2001, la ONDCP consultó con ambas Cámaras del Congreso y con veintiuna instituciones federales. Al nivel estatal y local, se consultó con cincuenta y ocho gobernadores en función y elegidos, así como con la Asociación Nacional de Gobernadores, la Conferencia de Alcaldes Estadounidenses y la Asociación Nacional de Condados. La ONDCP también solicitó aportes de una amplia gama de organizaciones sin fines de lucro, coaliciones comunitarias antidrogas, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, instituciones educativas y de investigación, y organizaciones religiosas. Durante la elaboración de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas se solicitaron las opiniones de los individuos y organizaciones indicados a continuación.

Miembros del Senado

Daniel K. Akaka – HI
Joseph R. Biden – DE
Jeff Bingaman – NM
Christopher Bond – MO
Sam Brownback – KS
Jim Bunning – KY
Ben Nighthorse Campbell – CO
Maria Cantwell – WA
Jean Carnahan – MO
Thomas R. Carper – DE
Max Cleland – GA
Hillary Rodham Clinton – NY
Thad Cochran – MS
Susan M. Collins – ME
Mark Dayton – MN
Mike DeWine – OH
Christopher J. Dodd – CT
Bryon L. Dorgan – ND
Richard J. Durbin – IL
John Edwards – NC
Michael B. Enzi – WY
Russell D. Feingold – WI
Dianne Feinstein – CA
Bill Frist – TN
Bob Graham – FL
Charles E. Grassley – IA
Judd Gregg – NH
Tom Harkin – IA
Orrin G. Hatch – UT
Tim Hutchinson – AR
Kay Bailey Hutchison – TX
James M. Jeffords – VT
Edward M. Kennedy – MA
Herb Kohl – WI
Jon L. Kyl – AZ
Mary L. Landrieu – LA
Patrick J. Leahy – VT

Carl Levin – MI
 Joseph P. Lieberman – CT
 Mitch McConnell – KY
 Barbara A. Mikulski – MD
 Patty Murray – WA
 Jack Reed – RI
 Pat Roberts – KS
 Charles E. Schumer – NY
 Jeff Sessions – AL
 Richard C. Shelby – AL
 Arlen Specter – PA
 Ted Stevens – AK
 Fred D. Thompson – TN
 Strom Thurmond – SC
 Robert G. Torricelli – NJ
 George V. Voinovich – OH
 John W. Warner – VA
 Paul D. Wellstone – MN

J.D. Hayworth – AZ
 John N. Hostettler – IN
 Steny H. Hoyer – MD
 Duncan L. Hunter – CA
 Henry J. Hyde – IL
 Johnny Isakson – GA
 Ernest J. Istook – OK
 Jack Kingston – GA
 Mark Steven Kirk – IL
 Jim Kolbe – AZ
 Tom Latham – IA
 Ron Lewis – KY
 Frank LoBiondo – NJ
 Carrie Meek – FL
 John L. Mica – FL
 Dan Miller – FL
 Sue Myrick – NC
 George R. Nethercutt – WA
 Anne Meagher Northup – KY
 Doug Ose – CA
 John E. Peterson – PA
 Rob Portman – OH
 David E. Price – NC
 Harold Rogers – KY
 Mike Rogers – MI
 Ileana Ros-Lehtinen – FL
 Steven R. Rothman – NJ
 Bernard Sanders – VT
 Janice D. Schakowsky – IL
 Pete Sessions – TX
 Don Sherwood – PA
 Robert R. Simmons – CT
 Lamar S. Smith – TX
 Mark Souder – IN
 John E. Sununu – NH
 John E. Sweeney – NY
 W. J. “Billy” Tauzin – LA
 Todd Tiahrt – KS
 Jim Turner – TX
 Peter J. Visclosky – IN
 Zach Wamp – TN
 J.C. Watts – OK
 Curt Weldon – PA
 Roger F. Wicker – MS
 Heather Wilson – NM
 Frank R. Wolf – VA

Miembros de la Cámara de Representantes

Robert B. Aderholt – AL
 Thomas H. Allen – ME
 Cass Ballenger – NC
 Bob Barr – GA
 Joe Barton – TX
 Judy Biggert – IL
 Rod R. Blagojevich – IL
 Henry Bonilla – TX
 Dan Burton – IN
 Ken Calvert – CA
 Howard Coble – NC
 Elijah E. Cummings – MD
 Danny K. Davis – IL
 Jo Ann Davis – VA
 Nathan Deal – GA
 Ernie L. Fletcher – KY
 Benjamin A. Gilman – NY
 Robert W. Goodlatte – VA
 Porter J. Goss – FL
 Kay Granger – TX
 Melissa Hart – PA
 J. Dennis Hastert – IL

Instituciones federales

Department of Agriculture
 Department of Defense
 Department of Education
 Department of Health and Human Services
 Department of Housing and Urban Development
 Department of the Interior
 Department of Justice
 Department of Labor
 Department of State
 Department of Transportation
 Department of the Treasury
 Department of Veterans Affairs
 Civil Air Patrol
 Corporation for National and Community Service
 Small Business Administration
 Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
 Drug Enforcement Administration
 Federal Bureau of Investigation
 Joint Task Force 6
 National Institute on Drug Abuse
 Substance Abuse and Mental Health Services
 Administration
 U.S. Customs Service
 U.S. Forest Service
 U.S. Marshals Service
 U.S. Secret Service

Gobernadores

Lincoln C. Almond – RI
 Juan Babauta – MP
 Roy E. Barnes – GA
 Jeb Bush – FL
 Sila M. Calderón – PR
 Benjamin J. Cayetano – HI
 Gray Davis – CA
 Howard Dean – VT
 Donald T. DiFrancesco – NJ (outgoing)
 Michael F. Easley – NC
 John Engler – MI
 Mike Foster, Jr. – LA

Jim Geringer – WY
 James S. Gilmore III – VA (outgoing)
 Parris N. Glendening – MD
 Bill Graves – KS
 Kenny C. Guinn – NV
 Carl T.C. Gutierrez – GU
 Jim Hodges – SC
 John Hoeven – ND
 Bob Holden – MO
 Mike Huckabee – AR
 Jane Dee Hull – AZ
 William J. Janklow – SD
 Mike O. Johanns – NE
 Gary E. Johnson – NM
 Frank Keating – OK
 Dirk Kempthorne – ID
 Angus S. King, Jr. – ME
 John A. Kitzhaber – OR
 Tony Knowles – AK
 Michael O. Leavitt – UT
 Gary Locke – WA
 Judy Martz – MT
 Scott McCallum – WI
 James E. McGreevey – NJ
 Ruth Ann Minner – DE
 Ronnie Musgrove – MS
 Frank O'Bannon – IN
 Bill Owens – CO
 George E. Pataki – NY
 Paul E. Patton – KY
 Rick Perry – TX
 John G. Rowland – CT
 George H. Ryan – IL
 Mark Schweiker – PA
 Jeanne Shaheen – NH
 Don Siegelman – AL
 Don Sundquist – TN
 Jane Swift – MA
 Bob Taft – OH
 Tauese P.F. Sunia – AS
 Pedro P. Tenorio – MP (outgoing)
 Charles W. Turnbull – VI
 Thomas J. Vilsack – IA
 Jesse Ventura – MN
 Mark Warner – VA
 Robert E. Wise, Jr. – WV

Organizaciones y personas particulares

100 Black Men of America, Inc.
 Abt Associates, Inc.
 Addiction Research and Treatment Corporation
 AFL-CIO
 Alcohol and Drug Problems Association of North America
 Alliance for Consumer Education
 America Cares, Inc.
 American Correctional Association
 American Enterprise Institute
 American Federation of Government Employees
 American Federation of Teachers
 American Medical Association
 American Methadone Treatment Association, Inc.
 American Police Command Officers Association
 American Psychological Association
 American Public Health Association
 American Public Welfare Association
 American Society of Addiction Medicine
 Appalachian State University of North Carolina
 Arizona Department of Education
 Ken Barun
 Peter Bell
 Boy Scouts of America
 Boys and Girls Clubs of America
 Brookings Institution
 Caliber Associates
 California Narcotics Officers Association
 Californians for Drug-Free Youth
 Carnegie Mellon University
 Carnevale Associates, LLC
 Catholic Charities U.S.A.
 Center for Media Education, Inc.
 Center for Media Literacy
 Center for Problem-Solving Courts
 Center for Science in the Public Interest
 Century Foundation
 Child Welfare League of America, Inc.
 Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
 Civic Solutions
 Colorado Department of Human Services

Columbia University
 Community Anti-Drug Coalitions of America
 Congress of National Black Churches
 Corporate Community
 Bob Cote
 Council of State Governments
 Barry Crane
 D.A.R.E. America
 Direct Impact
 Drug and Alcohol Service Providers
 Organization of Pennsylvania (DASPOP)
 Drug Free America Foundation, Inc.
 Drug Free Pennsylvania
 Drug Watch International
 Dupont Associates, PA
 Employee Assistance Professionals Association
 Employee Health Programs, Inc.
 Empower America
 Entertainment Industries Council, Inc.
 Family Research Council
 Federal Law Enforcement Officers Association
 Florida Chamber of Commerce
 Fraternal Order of Police
 Georgia State University Department of Psychology
 Girl Scouts of the U.S.A.
 Heritage Foundation
 Hispanic American Police Command
 Officer's Association
 Institute for a Drug-Free Workplace
 Institute for Social Research
 Institute for Youth Development
 Institute on Global Drug Policy
 International Brotherhood of Police Officers
 International City/County Management Association
 Iowa Board of Parole
 Jewish Council for Public Affairs
 Johnson Institute Foundation
 Join Together
 Joint Center for Political and Economic Studies
 Kiwanis International
 Legal Action Center
 Melvyn Levitsky
 Lewin Group
 John Linder
 Los Alamos Citizens Against Substance Abuse
 (LACASA)

Major City Chiefs Organization
 Maximizing Adolescent Potentials
 Miami Coalition
 Milton Eisenhower Foundation
 William Mockler
 Mothers Against Drunk Driving (MADD)
 Nashville Center for Family Life
 National Alliance of State Drug Enforcement Agencies
 National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse (NAPAFASA)
 National Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors
 National Association of Attorneys General
 National Association of Children of Alcoholics (NACOA)
 National Association of Counties
 National Association of County Behavioral Health Directors
 National Association of Drug Court Professionals
 National Association of Elementary School Principals
 National Association of Native American Children of Alcoholics (NANACOA)
 National Association of Neighborhoods
 National Association of Police Organizations
 National Association of Secondary School Principals
 National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors (NASADAD)
 National Association of Student Assistance Professionals
 National Black Child Development Institute, Inc.
 National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University (CASA)
 National Center for Missing and Exploited Children
 National Center for State Courts
 National Center for Tobacco-Free Kids
 National Coalition of Hispanic Health and Human Services Organizations
 National Conference of State Legislators
 National Council of Juvenile and Family Court Judges
 National Crime Prevention Council
 National Criminal Justice Association
 National District Attorneys Association
 National Drug Prevention League
 National Families in Action
 National Family Partnership
 National Federation of State High School Associations
 National Governors' Association
 National Hispanic/Latino Community Prevention Network
 National Inhalant Prevention Coalition
 National Institute of Citizen Anti-drug Policy (NICAP)
 National Legal Aid and Defenders Association
 National Masonic Foundation for Children
 National Mental Health Association
 National Narcotics Officers' Association Coalition
 National Opinion Research Center
 National Organization of Black Law Enforcement Executives
 National Parents and Teachers Association
 National Pharmaceutical Council, Inc.
 National Research Council Committee on National Statistics
 National School Boards Association
 National Sheriffs Association
 National Treatment Accountability for Safer Communities
 National Treatment Consortium
 National Troopers Coalition
 National Development and Research Institutes (NDRI)
 New York University School of Medicine
 Northwestern University Department of Economics and Institute for Policy Research
 Operation PAR, Inc.
 Oregon Partnership
 Orthodox Union
 Parents' Resource Institute for Drug Education, Inc. (PRIDE)
 Partnership for a Drug-Free America
 Phoenix House
 Physicians for Prevention (PFP)
 Police Executive Research Forum
 Police Foundation
 Prevention, Intervention, and Treatment Coalition for Health
 Prevention Think Tank
 RAND Drug Policy Research Center

Research Triangle Institute
 Robert Wood Johnson Foundation
 Robert Wood Johnson Medical School
 Department of Psychiatry
 Laurie Robinson
 Safe Streets
 Sally Satel
 Scott Newman Center
 Southern Christian Leadership Conference
 Substance Abuse Program Administrators
 Association (SAPAA)
 Support Center for Alcohol and Drug Research
 and Education
 Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse
 Therapeutic Communities of America
 Treatment Accountability for Safer Communities
 Troy Community Coalition for the Prevention of
 Drug and Alcohol Abuse
 Union of American Hebrew Congregations
 United Methodist Church Washington
 Episcopal Area
 U.S. Conference of Mayors
 United Synagogue of Conservative Judaism
 University of Arizona
 University of California, Los Angeles
 Neuropsychiatric Institute
 University of Chicago
 University of Delaware Center for Drug and
 Alcohol Studies
 University of Florida Brain Institute
 University of Kentucky Center for Prevention
 Research
 University of Maryland School of Public Affairs
 University of Texas at Austin Institute for
 Advanced Technology
 Urban Institute Justice Policy Center
 Washington Business Group on Health
 Workers Assistance Program
 Yale School of Public Health
 YMCA of America

Datos relacionados con las drogas

Lista de cuadros: datos nacionales

Gastos de los usuarios de drogas

Table 1 Total U.S. Expenditures on Illicit Drugs, 1988–2000 (\$ Billions)

Uso de las drogas

Table 2 Trends in Selected Drug Use Indicators, 1979–2000 (Estimated Number and Percent Prevalence)

Table 3 Estimated Number of Chronic and Occasional Users of Cocaine and Heroin, 1988–2000 (Thousands)

Table 4 Drug Use by Current Employment Status, 1995–2000 (Percent Prevalence)

Table 5 Trends in 30-Day Prevalence of Selected Drugs Among 8th, 10th, and 12th Graders, Monitoring the Future Study, 1991–2001 (Percent Prevalence)

Table 6 Trends in Harmfulness of Drugs as Perceived by 8th, 10th, and 12th Graders, Monitoring the Future Study, 1991–2001

Table 7 Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, Youth Risk Behavior Survey, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, and 1999

Table 8 Percentage of High School Students Who Reported Engaging in Drug-Related Behaviors on School Property by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, Youth Risk Behavior Survey, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, and 1999

Table 9 Percentage of Alternative High School Students Who Used Selected Drugs, by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, 1998

Table 10 Annual High School Dropout Rates for Grades 10–12, by Sex, Race, and Hispanic Origin, 1980–2000

Table 11 Past-Month Drug Use for Youth Ages 12–21, by Age, Dropout Status, Type of Drug Used, and Race/Ethnicity, Youth Risk Behavior Survey, 1992 (Percent Prevalence)

- Table 12** Lifetime Costs of Dropping Out of High School (1993 \$)
- Table 13** Summary of the Monetary Value of Saving a High-Risk Youth
- Table 14** Substance Abuse Among Probationers, State Prison Inmates, and Federal Prison Inmates
- Table 15** Alcohol, Drug, and Mental Health (ADM) Problems Among Homeless Clients, 1996
- Table 16** Characteristics Perceived by Respondents to Prevent Exit From Homelessness, 1996
- Table 17** Substance Use Experiences by Homeless Status, 1996

Consecuencias del uso de las drogas

- Table 18** Estimated Costs to Society of Drug Abuse, 1992–2000 (\$ Millions)
- Table 19** Estimated Productivity Losses Due to Drug Abuse, 1992–2000 (\$ Millions)
- Table 20** Number of Deaths and Death Rates for Drug-Induced Causes, by Sex and Race, United States, 1979–1999
- Table 21** Trends in Drug-Related Emergency Room Episodes and Selected Drug Mentions, 1988–2000
- Table 22** Estimated Number of Persons Living With AIDS, by Sex and Exposure Category, 1993–1999
- Table 23** Estimated Number of Deaths of Persons With AIDS, by Sex and Exposure Category, 1993–1999
- Table 24** Reported Tuberculosis Cases and Percentage of Cases in Injecting and Noninjecting Drug Users 1996–2000
- Table 25** Reported Hepatitis Cases, 1995–1999
- Table 26** Total Crime, Violent Crime, and Property Crime, 1989–2000
- Table 27** Total Estimated Arrests and Drug Arrests, 1989–2000
- Table 28** Adult Drug Offenders in Custody of State or Federal Prisons, 1989–2000

Tratamiento contra las drogas

- Table 29** One-Day Census of Clients in Treatment, by Facility Ownership, 1980–2000
- Table 30** One-Day Census of Clients in Alcohol and/or Drug Abuse Treatment, by Age Group and Type of Care, 1987–2000
- Table 31** Estimated Number of Persons Age 12 or Older Who Needed and Received Treatment for an Illicit Drug Problem in the Past Year, by Demographic Characteristics, 2000 (Thousands)

Disponibilidad de las drogas

- Table 32** Trends in Cocaine Supply, 1989–2000 (Metric Tons)
- Table 33** Average Price and Purity of Cocaine and Heroin in the United States, 1981–2000
- Table 34** Federal-wide Cocaine, Heroin, Methamphetamine, and Cannabis Seizures, 1989–2001 (Kilograms)
- Table 35** Eradicated Domestic Cannabis by Plant Type, 1982–2001 (Plants in Thousands)
- Table 36** Estimated Worldwide Potential Net Production of Opium, 1987–2000 (Metric Tons)
- Table 37** Estimated Worldwide Potential Net Production of Cannabis, 1987–2000 (Metric Tons)
- Table 38** Estimated Worldwide Potential Net Production of Coca Leaf, 1987–2000 (Metric Tons)
- Table 39** Domestic Drug Consumption, Calendar Years 1996–2000 (Metric Tons)
- Table 40** Trends in Heroin Supply, 1996–2000 (Metric Tons)
- Table 41** Amount of Coca Leaf Cultivated and Eradicated, Calendar Years 1987–2000 (Hectares)
- Table 42** Amount of Opium Poppy Cultivated and Eradicated, Calendar Years 1990–2000 (Hectares)
- Table 43** Amount of Cannabis Cultivated and Eradicated by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000 (Hectares)

Table 44 Amount of Cocaine Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000
(Metric Tons)

Table 45 Amount of Heroin Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000
(Kilograms)

Table 46 Amount of Marijuana Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000
(Metric Tons)

Table 47 Number of Drug Labs Destroyed by Foreign Countries, Calendar Years
1990–2000

Table 48 DEA-Reported Seizures of MDMA, 1998–2001

Lista de cuadros: datos estatales, locales e internacionales

- Table 49** Estimated Numbers (Thousands) and Percentages of Past-Month Users of Any Illicit Drug, by State or Jurisdiction, Age 12 or Older 1999
- Table 50** Estimated Numbers of Persons Age 12 or Older Needing But Not Receiving Treatment for an Illicit Drug Problem in the Past Year, by State, 2000
- Table 51** Number of Clients in Treatment Age 12 or Older by Substance Abuse Problem, According to State or Jurisdiction, October 1, 1997, October 1, 1998, and October 1, 2000
- Table 52** Percentage of Adult Male Booked Arrestees Who Used Any Drug, by Location, 1991–2000
- Table 53** Percentage of Adult Male Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1991–2000
- Table 54** Percentage of Adult Male Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1991–2000
- Table 55** Percentage of Adult Male Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1991–2000
- Table 56** Percentage of Adult Male Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1991–2000
- Table 57** Percentage of Adult Female Booked Arrestees Who Used Any Drug, by Location, 1991–2000
- Table 58** Percentage of Adult Female Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1991–2000
- Table 59** Percentage of Adult Female Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1991–2000
- Table 60** Percentage of Adult Female Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1991–2000
- Table 61** Percentage of Adult Female Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1991–2000

- Table 62** Percentage of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Any Drug, by Location, 1994–2000
- Table 63** Percentage of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1994–2000
- Table 64** Percentage of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1994–2000
- Table 65** Percentage of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1994–2000
- Table 66** Percentage of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1997–2000
- Table 67** Methamphetamine Lab Seizures, by State, 1995–2001
- Table 68** Estimated Number of Emergency Department Drug Episodes, by Metropolitan Area, 1993–2000
- Table 69** Estimated Number of Emergency Department Cocaine Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000
- Table 70** Estimated Number of Emergency Department Heroin/Morphine Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000
- Table 71** Estimated Number of Emergency Department Marijuana/Hashish Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000
- Table 72** Estimated Number of Emergency Department Methamphetamine/Speed Mentions, by Metropolitan Area by Year, 1993–2000
- Table 73** Alcohol and Other Drug Use Among Students in Selected European Countries and the U.S., 1995 and 1999
- Table 74** Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs, by State, Youth Risk Behavior Survey, 1999 State Surveys
- Table 75** Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs in Selected Cities, Youth Risk Behavior Survey, 1999 Local Surveys

DRUG USER EXPENDITURES

Table 1. Total U.S. Expenditures on Illicit Drugs, 1988–2000 (\$ Billions)

| Year | Cocaine | Heroin | Marijuana | Meth- amphetamine | Other drugs | Total |
|-------|---------|--------|-----------|----------------------|-------------|-------|
| 1988 | \$107.0 | \$26.1 | \$12.1 | \$5.8 | \$3.3 | \$154 |
| 1989 | \$88.4 | \$24.3 | \$11.0 | \$5.8 | \$2.8 | \$132 |
| 1990 | \$69.9 | \$22.5 | \$15.0 | \$5.7 | \$2.2 | \$115 |
| 1991 | \$57.1 | \$20.3 | \$14.0 | \$3.7 | \$2.3 | \$97 |
| 1992 | \$49.9 | \$17.2 | \$14.6 | \$4.8 | \$1.5 | \$88 |
| 1993 | \$45.0 | \$13.8 | \$12.0 | \$5.1 | \$1.5 | \$77 |
| 1994 | \$42.8 | \$13.2 | \$12.2 | \$7.6 | \$2.6 | \$78 |
| 1995 | \$40.0 | \$13.2 | \$10.2 | \$9.2 | \$2.7 | \$75 |
| 1996 | \$39.2 | \$12.8 | \$9.5 | \$10.1 | \$2.7 | \$74 |
| 1997 | \$34.7 | \$11.4 | \$10.5 | \$9.3 | \$2.5 | \$68 |
| 1998 | \$34.9 | \$11.1 | \$10.8 | \$8.0 | \$2.3 | \$67 |
| 1999 | \$35.6 | \$10.1 | \$10.6 | \$5.8 | \$2.6 | \$65 |
| 2000* | \$35.3 | \$10.0 | \$10.5 | \$5.4 | \$2.4 | \$64 |

*Estimates for 2000 are projections.

Note: Amounts are in constant 2000 dollars.

Source: Office of National Drug Control Policy, *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000*, (in press).

DRUG USE

Table 2. Trends in Selected Drug Use Indicators, 1979–2000¹ (Estimated Number and Percent Prevalence)

| Year | Current use of any illicit drug ² | Current cocaine use ² | Occasional (less than monthly) cocaine use | Current marijuana use ² | Lifetime heroin use | Any adolescent ³ illicit drug use ² | Lifetime adolescent ³ inhalant use ⁴ |
|-------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|--|
| Users (thousands) | | | | | | | |
| 1979 | 25,400 | 4,700 | — | 23,800 | 2,300 | 4,100 | — |
| 1982 | — | 4,500 | — | 21,500 | 1,800 | 2,800 | — |
| 1985 | 23,300 | 5,700 | 7,100 | 18,600 | 1,800 | 3,200 | — |
| 1988 | 15,000 | 3,100 | 5,100 | 12,400 | 1,700 | 1,900 | — |
| 1990 | 13,500 | 1,700 | 3,700 | 10,900 | 1,500 | 1,600 | — |
| 1991 | 13,400 | 2,000 | 3,800 | 10,400 | 2,400 | 1,400 | — |
| 1992 | 12,000 | 1,400 | 3,000 | 9,700 | 1,700 | 1,300 | — |
| 1993 | 12,300 | 1,400 | 2,700 | 9,600 | 2,100 | 1,400 | — |
| 1994 | 12,600 | 1,400 | 2,400 | 10,100 | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| 1995 | 12,800 | 1,500 | 2,500 | 9,800 | 2,500 | 2,400 | 1,600 |
| 1996 | 13,000 | 1,700 | 2,600 | 10,100 | 2,400 | 2,000 | 1,300 |
| 1997 | 13,900 | 1,500 | 2,600 | 11,100 | 2,000 | 2,600 | 1,600 |
| 1998 | 13,600 | 1,800 | 2,400 | 11,000 | 2,400 | 2,300 | 1,400 |
| 1999-CAI | 13,829 | 1,552 | 1,926 | 10,458 | 3,054 | 2,265 | 2,118 |
| 2000-CAI | 14,027 | 1,213 | 1,732 | 10,714 | 2,779 | 2,264 | 2,079 |
| Rate of use (%) | | | | | | | |
| 1979 | 14.1 | 2.6 | — | 13.2 | 1.3 | 16.3 | — |
| 1982 | — | 2.4 | — | 11.5 | 1.0 | — | — |
| 1985 | 12.1 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 0.9 | 13.2 | — |
| 1988 | 7.7 | 1.6 | 2.6 | 6.2 | 0.9 | 8.1 | — |
| 1990 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 7.1 | — |
| 1991 | 6.6 | 1.0 | 1.9 | 5.1 | 1.2 | 5.8 | — |
| 1992 | 5.8 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 0.8 | 5.3 | — |
| 1993 | 5.9 | 0.7 | 1.3 | 4.6 | 1.0 | 5.7 | — |
| 1994 | 6.0 | 0.7 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | 8.2 | 7.0 |
| 1995 | 6.1 | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 10.9 | 7.4 |
| 1996 | 6.1 | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 1.1 | 9.0 | 5.9 |
| 1997 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 11.4 | 7.2 |
| 1998 | 6.2 | 0.8 | 1.1 | 5.0 | 1.1 | 9.9 | 6.1 |
| 1999-PAPI | 7.0 | 0.8 | — | 5.4 | — | 9.0 | — |
| 1999-CAI | 6.3 | 0.7 | 0.9 | 4.7 | 1.4 | 9.8 | 9.1 |
| 2000-CAI | 6.3 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 1.2 | 9.7 | 8.9 |

— Data not available.

¹In 1999, the survey methodology changed from a paper-and-pencil interview (PAPI) to a computer-assisted interview (CAI). A PAPI supplement conducted in 1999 provides estimates that are comparable to previous years. Estimates based on the new CAI methodology are not directly comparable to previous years.

²Data for past-month (current) use.

³Ages 12–17 years.

⁴Prior to a 1994 questionnaire change; data did not allow separate reporting for this age group.

Note: "Any illicit drug use" includes use of marijuana, cocaine, hallucinogens, inhalants (except in 1982), heroin, or nonmedical use of sedatives, tranquilizers, stimulants, or analgesics. The exclusion of inhalants in 1982 is believed to have resulted in underestimates of any illicit use for that year, especially for adolescents.

Sources: National Institute on Drug Abuse (1979–1991), and Substance Abuse and Mental Health Services Administration (1992–2000), *National Household Survey on Drug Abuse*.

Table 3. Estimated Number of Chronic and Occasional Users of Cocaine and Heroin, 1988–2000 (Thousands)

| Year | Cocaine users | | Heroin users | |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Occasional ¹ | Chronic ² | Occasional ¹ | Chronic ² |
| 1988 | 6,000 | 3,984 | 170 | 1,341 |
| 1989 | 5,300 | 3,824 | 150 | 1,266 |
| 1990 | 4,600 | 3,558 | 140 | 1,119 |
| 1991 | 4,478 | 3,379 | 359 | 1,015 |
| 1992 | 3,503 | 3,269 | 304 | 955 |
| 1993 | 3,332 | 3,081 | 230 | 945 |
| 1994 | 2,930 | 3,032 | 281 | 932 |
| 1995 | 3,082 | 2,866 | 428 | 923 |
| 1996 | 3,425 | 2,828 | 455 | 910 |
| 1997 | 3,487 | 2,847 | 597 | 904 |
| 1998 | 3,216 | 2,800 | 253 | 901 |
| 1999 | 3,216 | 2,755 | 253 | 898 |
| 2000* | 3,035 | 2,707 | 253 | 898 |

Note: Data in this table are preliminary composite estimates derived from the *National Household Survey on Drug Abuse* (NHSDA) and the *Arrestee Drug Abuse Monitoring (ADAM)* program (see W. Rhodes "Synthetic Estimation Applied to the Prevalence of Drug Use," *Journal of Drug Issues* 23(2):297–321, 1993, for a detailed description of the methodology). The NHSDA was not administered in 1989. Estimates for 1989 are the average for 1988 and 1990.

*Estimates for 2000 are projections.

¹ "Occasional" is defined as using drugs fewer than 10 days per month.

² "Chronic" is defined as more than 10 days per month.

Source: Office of National Drug Control Policy, *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000*, (in press).

Table 4. Drug Use by Current Employment Status,¹ 1995–2000² (Percent Prevalence)

| | Full-time | Part-time | Unemployed | Other ³ |
|---|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Past month use of any illicit drug | | | | |
| 1995 | 5.5 | 9.0 | 14.3 | 3.1 |
| 1996 | 6.2 | 8.6 | 12.5 | 3.0 |
| 1997 | 6.5 | 7.7 | 13.8 | 3.0 |
| 1998 | 6.4 | 7.4 | 18.2 | 2.8 |
| 1999 CAI | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 3.3 |
| 2000 CAI | 6.3 | 7.8 | 15.4 | 3.5 |
| Past month use of marijuana | | | | |
| 1995 | 4.2 | 7.5 | 12.6 | 1.9 |
| 1996 | 4.9 | 6.2 | 10.0 | 2.3 |
| 1997 | 5.0 | 6.6 | 12.2 | 2.4 |
| 1998 | 5.1 | 6.5 | 15.1 | 2.0 |
| 1999 CAI | 4.7 | 6.6 | 12.1 | 2.2 |
| 2000 CAI | 4.8 | 6.3 | 13.3 | 2.5 |
| Past month use of cocaine | | | | |
| 1995 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 0.4 |
| 1996 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.4 |
| 1997 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 0.3 |
| 1998 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 0.4 |
| 1999 CAI | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 0.3 |
| 2000 CAI | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.3 |

¹Data on current employment are for persons age 18 and older.

²In 1999, the survey methodology changed from a paper-and-pencil interview to a computer-assisted interview (CAI). Estimates based on the new CAI methodology are not directly comparable to previous years.

³Retired, disabled, homemaker, student, or "other."

Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, *National Household Survey on Drug Abuse* (1995–2000).

Table 5. Trends in 30-Day Prevalence of Selected Drugs Among 8th, 10th, and 12th Graders, Monitoring the Future Study, 1991–2001 (Percent Prevalence)

| Selected drug/grade | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2000-2001 Change |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Marijuana/hashish | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 7.8 | 9.1 | 11.3 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | +0.1 |
| 10 th grade | 8.7 | 8.1 | 10.9 | 15.8 | 17.2 | 20.4 | 20.5 | 18.7 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 0.0 |
| 12 th grade | 13.8 | 11.9 | 15.5 | 19.0 | 21.2 | 21.9 | 23.7 | 22.8 | 23.1 | 21.6 | 22.4 | +0.8 |
| Inhalants¹ | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | -0.5 |
| 10 th grade | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | -0.1 |
| 12 th grade ² | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | -0.5 |
| Hallucinogens | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 10 th grade | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | -0.2 |
| 12 th grade | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | +0.6 |
| LSD | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10 th grade | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | -0.2 |
| 12 th grade | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | +0.7s |
| Cocaine | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |
| 10 th grade | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | -0.4 |
| 12 th grade | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | -0.1 |
| Stimulants | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | -0.3 |
| 10 th grade | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | +0.2 |
| 12 th grade | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | +0.2 |
| Alcohol (any use)³ | | | | | | | | | | | | |
| 8 th grade | 25.1 | 26.1 | 24.3 | 25.5 | 24.6 | 26.2 | 24.5 | 23.0 | 24.0 | 22.4 | 21.5 | -0.9 |
| 10 th grade | 42.8 | 39.9 | 38.2 | 39.2 | 38.8 | 40.4 | 40.1 | 38.8 | 40.0 | 41.0 | 39.0 | -2.0 |
| 12 th grade | 54.0 | 51.3 | 48.6 | 50.1 | 51.3 | 50.8 | 52.7 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.8 | -0.3 |

Notes: Level of significance of difference between the two most recent classes: s=.05. Any inconsistency between the 2000–2001 change estimate and the respective prevalence estimates is due to rounding.

| Approximate Ns | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8 th grade | 17,500 | 18,600 | 18,300 | 17,300 | 17,500 | 17,800 | 18,600 | 18,100 | 16,700 | 17,300 | 16,200 |
| 10 th grade | 14,800 | 14,800 | 15,300 | 15,800 | 17,000 | 15,600 | 15,500 | 15,000 | 13,600 | 14,600 | 14,000 |
| 12 th grade | 15,000 | 15,800 | 16,300 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 15,400 | 15,200 | 13,600 | 13,300 | 12,800 |

¹ Unadjusted for underreporting of amyl and butyl nitrites.

² Data for 12th graders only are based on five of six questionnaire forms; N is five-sixths of N indicated.

³ For all grades: For 1993, the question text was changed slightly in one-half of the forms to indicate that a “drink” meant “more than a few sips.” For 1993, N is one-half of N indicated for all groups. Data after 1993 were based on all forms for all grades.

Source: Institute for Social Research, University of Michigan, *Monitoring the Future* study (December 2001).

Table 6. Trends in Harmfulness of Drugs as Perceived by 8th, 10th, and 12th Graders, Monitoring the Future Study, 1991–2001

| Drug Behavior | Percentage saying “great risk” ¹ | | | | | | | | | | | 2000– 2001 Change |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 8th grade | | | | | | | | | | | | |
| How much do you think people risk harming themselves (physically or in other ways), if they . . . | | | | | | | | | | | | |
| Try marijuana once or twice | 40.4 | 39.1 | 36.2 | 31.6 | 28.9 | 27.9 | 25.3 | 28.1 | 28.0 | 29.0 | 27.7 | -1.3 |
| Smoke marijuana occasionally | 57.9 | 56.3 | 53.8 | 48.6 | 45.9 | 44.3 | 43.1 | 45.0 | 45.7 | 47.4 | 46.3 | -1.2 |
| Smoke marijuana regularly | 83.8 | 82.0 | 79.6 | 74.3 | 73.0 | 70.9 | 72.7 | 73.0 | 73.9 | 74.8 | 72.2 | -2.5 |
| Try crack once or twice ² | 62.8 | 61.2 | 57.2 | 54.4 | 50.8 | 51.0 | 49.9 | 49.3 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | +0.2 |
| Take crack occasionally ² | 82.2 | 79.6 | 76.8 | 74.4 | 72.1 | 71.6 | 71.2 | 70.6 | 70.6 | 70.1 | 70.0 | -0.1 |
| Try cocaine powder once or twice ² | 55.5 | 54.1 | 50.7 | 48.4 | 44.9 | 45.2 | 45.0 | 44.0 | 43.3 | 43.3 | 43.9 | +0.6 |
| Take cocaine powder occasionally ² | 77.0 | 74.3 | 71.8 | 69.1 | 66.4 | 65.7 | 65.8 | 65.2 | 65.4 | 65.5 | 65.8 | +0.4 |
| Approximate N | 17,437 | 18,662 | 18,366 | 17,394 | 17,501 | 17,926 | 18,765 | 18,100 | 16,700 | 17,300 | 16,200 | |
| 10th grade | | | | | | | | | | | | |
| How much do you think people risk harming themselves (physically or in other ways), if they . . . | | | | | | | | | | | | |
| Try marijuana once or twice | 30.0 | 31.9 | 29.7 | 24.4 | 21.5 | 20.0 | 18.8 | 19.6 | 19.2 | 18.5 | 17.9 | -0.5 |
| Smoke marijuana occasionally | 48.6 | 48.9 | 46.1 | 38.9 | 35.4 | 32.8 | 31.9 | 32.5 | 33.5 | 32.4 | 31.2 | -1.2 |
| Smoke marijuana regularly | 82.1 | 81.1 | 78.5 | 71.3 | 67.9 | 65.9 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 64.7 | 62.8 | -1.9 |
| Try crack once or twice | 70.4 | 69.6 | 66.6 | 64.7 | 60.9 | 60.9 | 59.2 | 58.0 | 57.8 | 56.1 | 57.1 | +1.0 |
| Take crack occasionally | 87.4 | 86.4 | 84.4 | 83.1 | 81.2 | 80.3 | 78.7 | 77.5 | 79.1 | 76.9 | 77.3 | +0.4 |
| Try cocaine powder once or twice | 59.1 | 59.2 | 57.5 | 56.4 | 53.5 | 53.6 | 52.2 | 50.9 | 51.6 | 48.8 | 50.6 | +1.7 |
| Take cocaine powder occasionally | 82.2 | 80.1 | 79.1 | 77.8 | 75.6 | 75.0 | 73.9 | 71.8 | 73.6 | 70.9 | 72.3 | +1.5 |
| Approximate N | 14,719 | 14,808 | 15,298 | 15,880 | 17,006 | 15,670 | 15,640 | 15,000 | 13,600 | 14,600 | 14,000 | |
| 12th grade | | | | | | | | | | | | |
| How much do you think people risk harming themselves (physically or in other ways), if they . . . | | | | | | | | | | | | |
| Try marijuana once or twice | 27.1 | 24.5 | 21.9 | 19.5 | 16.3 | 15.6 | 14.9 | 16.7 | 15.7 | 13.7 | 15.3 | +1.6 |
| Smoke marijuana occasionally | 40.6 | 39.6 | 35.6 | 30.1 | 25.6 | 25.9 | 24.7 | 24.4 | 23.9 | 23.4 | 23.5 | +0.1 |
| Smoke marijuana regularly | 78.6 | 76.5 | 72.5 | 65.0 | 60.8 | 59.9 | 58.1 | 58.5 | 57.4 | 58.3 | 57.4 | -0.9 |
| Try crack once or twice | 60.6 | 62.4 | 57.6 | 58.4 | 54.6 | 56.0 | 54.0 | 52.2 | 48.2 | 48.4 | 49.4 | +1.0 |
| Take crack occasionally | 76.5 | 76.3 | 73.9 | 73.8 | 72.8 | 71.4 | 70.3 | 68.7 | 67.3 | 65.8 | 65.4 | -0.4 |
| Try cocaine powder once or twice | 53.6 | 57.1 | 53.2 | 55.4 | 52.0 | 53.2 | 51.4 | 48.5 | 46.1 | 47.0 | 49.0 | +2.0 |
| Take cocaine powder occasionally | 69.8 | 70.8 | 68.6 | 70.6 | 69.1 | 68.8 | 67.7 | 65.4 | 64.2 | 64.7 | 63.2 | -1.5 |
| Approximate N | 2,549 | 2,684 | 2,759 | 2,591 | 2,603 | 2,449 | 2,579 | 2,500 | 2,300 | 2,130 | 2,173 | |

Note: s=.05; Any inconsistency between the 2000–2001 change estimate and the respective prevalence estimates is due to rounding.

¹Answer alternatives were: (1) no risk, (2) slight risk, (3) moderate risk, (4) great risk, and (5) can't say, drug unfamiliar.

²8th and 10th grade: Beginning in 1997, data based on two-thirds of N indicated due to changes in questionnaire forms.

Source: Institute for Social Research, University of Michigan, *Monitoring the Future* study (December 2001).

Table 7. Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, Youth Risk Behavior Survey, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, and 1999

| Drug Use Behavior and Year | Sex | | Race/Ethnicity | | | Grade Level | | | | All Groups |
|--------------------------------------|------|--------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | Male | Female | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | |
| Lifetime marijuana | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | 20.6 | 27.9 | 34.7 | 42.2 | 31.4 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.0 |
| 1993 | 36.8 | 28.6 | 32.7 | 33.6 | 35.4 | 24.4 | 28.8 | 36.0 | 40.8 | 32.8 |
| 1995 | 46.2 | 39.4 | 40.5 | 47.2 | 49.2 | 33.8 | 41.4 | 45.8 | 47.0 | 42.4 |
| 1997 | 50.7 | 42.9 | 45.4 | 52.2 | 49.5 | 38.8 | 45.9 | 50.3 | 52.4 | 47.1 |
| 1999 | 51.0 | 43.4 | 45.9 | 48.6 | 51.0 | 34.8 | 49.1 | 49.7 | 58.4 | 47.2 |
| Current marijuana ¹ | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | 9.5 | 13.5 | 13.9 | 18.5 | 13.9 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 |
| 1993 | 20.6 | 14.6 | 17.3 | 18.6 | 19.4 | 13.2 | 16.5 | 18.4 | 22.0 | 17.7 |
| 1995 | 28.4 | 22.0 | 24.6 | 28.6 | 27.8 | 20.9 | 25.6 | 27.6 | 26.2 | 25.3 |
| 1997 | 30.2 | 21.4 | 25.0 | 28.2 | 28.6 | 23.6 | 25.0 | 29.3 | 26.6 | 26.2 |
| 1999 | 30.8 | 22.6 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 21.7 | 27.8 | 26.7 | 31.5 | 26.7 |
| Lifetime cocaine use ² | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 9.3 | 6.6 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| 1993 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | 1.6 | 11.3 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 6.1 | 4.9 |
| 1995 | 8.8 | 5.0 | 6.5 | 2.0 | 16.0 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.0 |
| 1997 | 9.1 | 7.2 | 8.0 | 1.9 | 14.4 | 6.7 | 7.5 | 9.1 | 9.2 | 8.2 |
| 1999 | 10.7 | 8.4 | 9.9 | 2.2 | 15.3 | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 13.7 | 9.5 |
| Current cocaine use ¹ | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 |
| 1993 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 4.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| 1995 | 4.3 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 7.5 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
| 1997 | 4.0 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 6.2 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 |
| 1999 | 5.2 | 2.9 | 4.1 | 1.1 | 6.7 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 4.0 |
| Lifetime use of illegal steroids | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| 1993 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| 1995 | 4.9 | 2.4 | 3.8 | 1.6 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 3.7 |
| 1997 | 4.1 | 2.0 | 3.1 | 1.5 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| 1999 | 5.2 | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| Lifetime injected drug use | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| 1995 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 |
| 1997 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
| 1999 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 |
| Episodic heavy drinking ³ | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | 27.7 | 35.7 | 39.6 | 44.0 | 36.9 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.0 |
| 1993 | 33.7 | 26.0 | 32.6 | 19.1 | 33.4 | 22.0 | 26.2 | 31.3 | 39.1 | 30.0 |
| 1995 | 36.2 | 28.6 | 35.6 | 18.8 | 37.7 | 24.5 | 30.3 | 34.9 | 39.0 | 32.6 |
| 1997 | 37.3 | 28.6 | 37.7 | 16.1 | 34.9 | 25.7 | 29.9 | 37.5 | 39.3 | 33.4 |
| 1999 | 34.9 | 28.1 | 35.8 | 16.0 | 32.1 | 21.1 | 32.2 | 34.0 | 41.6 | 31.5 |
| Current cigarette ¹ | | | | | | | | | | |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 28.0 | 27.0 | — | — | — | — | — | — | — | 28.0 |
| 1993 | 29.8 | 30.5 | 33.7 | 15.4 | 28.7 | 27.8 | 28.0 | 31.1 | 34.5 | 30.5 |
| 1995 | 35.4 | 34.3 | 38.3 | 19.2 | 34.0 | 31.2 | 33.1 | 35.8 | 38.2 | 34.8 |
| 1997 | 37.7 | 34.7 | 39.7 | 22.7 | 34.0 | 33.4 | 35.3 | 36.6 | 36.9 | 36.4 |
| 1999 | 34.7 | 34.9 | 38.6 | 19.7 | 32.7 | 27.6 | 34.7 | 36.0 | 42.8 | 34.8 |

— Data not available.

¹Used one or more times during the past 30 days.

²Ever tried any form of cocaine, including powder, crack, or freebase.

³Drank five or more drinks of alcohol on at least one occasion on one or more days during the last 30 days.

Sources: "Tobacco, Alcohol and Other Drug Use Among High School Students—United States," *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 40 (45) (1990): 776–84; 41 (37) (1991): 698–703; "Youth Risk Behavior Surveillance—United States (1993, 1995, 1997, and 1999)," *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Service, Department of Health and Human Services.

Table 8. Percentage of High School Students Who Reported Engaging in Drug-Related Behaviors on School Property by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, Youth Risk Behavior Survey, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, and 1999

| Drug Use Behavior and Year | Sex | | Race/Ethnicity | | | Grade Level | | | | All Groups |
|---|------|--------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | Male | Female | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | |
| Used marijuana on school property ¹ | | | | | | | | | | |
| 1993 | 7.8 | 3.3 | 5.0 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.6 |
| 1995 | 11.9 | 5.5 | 7.0 | 12.3 | 12.9 | 8.7 | 9.8 | 8.6 | 8.0 | 8.8 |
| 1997 | 9.0 | 4.6 | 5.8 | 9.1 | 10.4 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 5.7 | 7.0 |
| 1999 | 10.1 | 4.4 | 6.5 | 7.2 | 10.7 | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |
| Offered, sold, or was given an illegal drug on school property ² | | | | | | | | | | |
| 1993 | 28.5 | 19.1 | 24.1 | 17.5 | 34.1 | 21.8 | 23.7 | 27.5 | 23.0 | 24.0 |
| 1995 | 38.8 | 24.8 | 31.7 | 28.5 | 40.7 | 31.0 | 35.0 | 32.8 | 29.1 | 32.1 |
| 1997 | 37.4 | 24.7 | 31.0 | 25.4 | 41.1 | 31.4 | 33.4 | 33.2 | 29.0 | 31.7 |
| 1999 | 34.7 | 25.7 | 28.8 | 25.3 | 36.9 | 27.6 | 32.1 | 31.1 | 30.5 | 30.2 |
| Tried marijuana before age 13 | | | | | | | | | | |
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 10.2 | 4.8 | 5.6 | 11.1 | 12.6 | 9.2 | 9.1 | 6.7 | 5.4 | 7.6 |
| 1997 | 12.2 | 6.7 | 7.5 | 11.0 | 13.2 | 14.9 | 10.4 | 8.3 | 5.8 | 9.7 |
| 1999 | 14.5 | 8.0 | 9.4 | 14.8 | 13.8 | 12.7 | 12.6 | 9.5 | 9.5 | 11.3 |
| Tried cocaine before age 13 ³ | | | | | | | | | | |
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
| 1997 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

— Data not available.

¹One or more times during the 30 days preceding the survey.²During the 12 months preceding the survey.³Including powder, crack, and freebase forms of cocaine.Source: "Youth Risk Behavior Surveillance—United States (1993, 1995, 1997, and 1999)," *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Service, Department of Health and Human Services.

Table 9. Percentage of Alternative High School Students Who Used Selected Drugs by Sex, Race/Ethnicity, and Grade, 1998

| Drug use behavior | Sex | | Race/Ethnicity | | | Grade Level | | | | All Groups |
|--------------------------------------|------|--------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | Male | Female | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | |
| Lifetime marijuana | 88.0 | 82.1 | 89.4 | 77.7 | 84.0 | 81.0 | 85.3 | 86.0 | 86.8 | 85.4 |
| Current marijuana ¹ | 58.2 | 46.7 | 56.7 | 47.2 | 50.6 | 51.2 | 52.9 | 55.7 | 51.2 | 53.0 |
| Lifetime cocaine use ² | 38.6 | 33.0 | 43.8 | 5.7 | 46.4 | 32.7 | 36.4 | 37.8 | 36.5 | 36.1 |
| Current cocaine use ¹ | 17.1 | 13.1 | 17.7 | 3.6 | 19.4 | 14.8 | 16.6 | 15.9 | 14.1 | 15.3 |
| Lifetime crack or freebase use | 23.5 | 19.4 | 26.2 | 3.5 | 26.8 | 20.9 | 22.9 | 24.2 | 18.9 | 21.6 |
| Lifetime use of illegal steroids | 9.8 | 7.4 | 10.5 | 6.6 | 6.9 | 12.0 | 9.6 | 6.9 | 7.6 | 8.7 |
| Lifetime injected drug use | 6.8 | 4.4 | 7.0 | 4.1 | 4.5 | 7.6 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.7 |
| Episodic heavy drinking ³ | 55.4 | 42.9 | 58.7 | 28.4 | 52.4 | 43.8 | 48.1 | 51.5 | 51.7 | 49.8 |
| Current cigarette use ¹ | 67.7 | 59.8 | 78.6 | 43.3 | 53.0 | 64.5 | 64.3 | 64.8 | 62.2 | 64.1 |

— Data not available.

¹Used one or more times during the past 30 days.

²Ever tried any form of cocaine, including powder, crack, or freebase.

³Drank five or more drinks of alcohol on at least one occasion on one or more days during the past 30 days.

Source: "Youth Risk Behavior Surveillance—National Alternative High School Youth Risk Behavior Survey, United States, 1998," *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Service, Department of Health and Human Services.

Table 10. Annual High School Dropout Rates¹ for Grades 10–12 by Sex, Race, and Hispanic Origin, 1980–2000

| Year | All races ² , both sexes | | | Male | | | Female | | | White | | | Black | | | Hispanic Origin ³ | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------------|------|----------------|----------------------|------|----------------|----------------------|------|----------------|----------------------|------|------------------------------|----------------------|------|
| | Total students | High school dropouts | | Total students | High school dropouts | | Total students | High school dropouts | | Total students | High school dropouts | | Total students | High school dropouts | | Total students | High school dropouts | |
| | | Number | Rate | | Number | Rate | | Number | Rate | | Number | Rate | | Number | Rate | | Number | Rate |
| 1980 | 10,891 | 658 | 6.0 | 5,445 | 362 | 6.6 | 5,448 | 296 | 5.4 | 9,177 | 517 | 5.6 | 1,496 | 124 | 8.3 | 646 | 74 | 11.5 |
| 1981 | 10,868 | 639 | 5.9 | 5,379 | 322 | 6.0 | 5,487 | 316 | 5.8 | 9,067 | 478 | 5.3 | 1,516 | 146 | 9.6 | 717 | 77 | 10.7 |
| 1982 | 10,611 | 577 | 5.4 | 5,310 | 305 | 5.7 | 5,301 | 271 | 5.1 | 8,769 | 444 | 5.1 | 1,553 | 121 | 7.8 | 692 | 65 | 9.4 |
| 1983 | 10,331 | 535 | 5.2 | 5,130 | 294 | 5.7 | 5,200 | 241 | 4.6 | 8,531 | 410 | 4.8 | 1,498 | 103 | 6.9 | 691 | 68 | 9.8 |
| 1984 | 10,041 | 507 | 5.0 | 4,986 | 268 | 5.4 | 5,054 | 238 | 4.7 | 8,221 | 410 | 5.0 | 1,524 | 88 | 5.8 | 706 | 77 | 10.9 |
| 1985 | 9,704 | 504 | 5.2 | 4,831 | 259 | 5.4 | 4,874 | 245 | 5.0 | 7,967 | 384 | 4.8 | 1,422 | 110 | 7.7 | 729 | 71 | 9.7 |
| 1986 | 9,829 | 421 | 4.3 | 4,910 | 213 | 4.3 | 4,917 | 208 | 4.2 | 8,011 | 333 | 4.2 | 1,449 | 68 | 4.7 | 764 | 91 | 11.9 |
| 1987 | 9,802 | 403 | 4.1 | 4,921 | 215 | 4.4 | 4,879 | 187 | 3.8 | 7,979 | 299 | 3.7 | 1,463 | 93 | 6.4 | 769 | 43 | 5.6 |
| 1988 | 9,590 | 461 | 4.8 | 4,960 | 256 | 5.2 | 4,628 | 206 | 4.5 | 7,727 | 362 | 4.7 | 1,468 | 93 | 6.3 | 730 | 77 | 10.5 |
| 1989 | 8,974 | 404 | 4.5 | 4,519 | 203 | 4.5 | 4,453 | 199 | 4.5 | 7,243 | 286 | 3.9 | 1,384 | 106 | 7.7 | 762 | 59 | 7.7 |
| 1990 | 8,679 | 347 | 4.0 | 4,356 | 177 | 4.1 | 4,323 | 170 | 3.9 | 6,984 | 266 | 3.8 | 1,303 | 66 | 5.1 | 811 | 65 | 8.0 |
| 1991 | 8,612 | 348 | 4.0 | 4,380 | 167 | 3.8 | 4,231 | 180 | 4.3 | 6,856 | 254 | 3.7 | 1,366 | 85 | 6.2 | 809 | 59 | 7.3 |
| 1992 | 8,939 | 384 | 4.3 | 4,580 | 175 | 3.8 | 4,357 | 207 | 4.8 | 7,077 | 292 | 4.1 | 1,422 | 70 | 4.9 | 917 | 72 | 7.9 |
| 1993 ^{r4} | 9,430 | 404 | 4.3 | 4,787 | 211 | 4.4 | 4,640 | 192 | 4.1 | 7,442 | 306 | 4.1 | 1,499 | 80 | 5.4 | 1,061 | 69 | 6.5 |
| 1993 | 9,021 | 382 | 4.2 | 4,570 | 199 | 4.4 | 4,452 | 183 | 4.1 | 7,152 | 290 | 4.1 | 1,447 | 78 | 5.3 | 943 | 60 | 6.4 |
| 1994 | 9,922 | 497 | 5.0 | 5,048 | 249 | 4.9 | 4,873 | 247 | 5.1 | 7,862 | 371 | 4.7 | 1,559 | 96 | 6.1 | 1,179 | 109 | 9.2 |
| 1995 | 10,106 | 544 | 5.4 | 5,161 | 297 | 5.8 | 4,946 | 247 | 5.0 | 7,926 | 402 | 5.1 | 1,598 | 97 | 6.1 | 1,251 | 145 | 11.6 |
| 1996 | 10,249 | 485 | 4.7 | 5,175 | 240 | 4.6 | 5,072 | 244 | 4.8 | 8,005 | 361 | 4.5 | 1,704 | 107 | 6.3 | 1,195 | 100 | 8.4 |
| 1997 | 10,645 | 454 | 4.3 | 5,330 | 251 | 4.7 | 5,313 | 203 | 3.8 | 8,402 | 355 | 4.2 | 1,678 | 80 | 4.8 | 1,377 | 119 | 8.6 |
| 1998 | 10,791 | 479 | 4.4 | 5,486 | 237 | 4.3 | 5,305 | 243 | 4.6 | 8,487 | 371 | 4.4 | 1,759 | 88 | 5.0 | 1,368 | 115 | 8.4 |
| 1999 | 11,067 | 520 | 4.7 | 5,659 | 243 | 4.3 | 5,411 | 277 | 5.1 | 8,665 | 380 | 4.4 | 1,794 | 107 | 6.0 | 1,482 | 105 | 7.1 |
| 2000 | 10,773 | 488 | 4.5 | 5,417 | 280 | 5.2 | 5,356 | 208 | 3.9 | 8,540 | 371 | 4.3 | 1,706 | 96 | 5.6 | 1,465 | 100 | 6.8 |

¹Numbers in thousands; civilian noninstitutionalized population.

²All races" includes whites, blacks, and other races not shown separately.

³Hispanics may be of any race.

⁴r = Revised, controlled to 1990 census-based population estimates; previous 1993 data controlled to 1980 census-based estimates.

Source: U.S. Bureau of the Census, Education and Social Stratification Branch, *Current Population Survey* (1980–2000).

Table 11. Past-Month Drug Use for Youth Aged 12–21, by Age, Dropout Status, Type of Drug Used, and Race/Ethnicity: 1992 Youth Risk Behavior Survey (Percent Prevalence)

| Race/ethnicity | Age | Dropout status | Marijuana use past 30 days | Cocaine use past 30 days |
|----------------|-------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| White | 12–15 | Nondropout | 4.02 | 0.34 |
| | | Dropout | 4.12 | * |
| | 16–21 | Nondropout | 15.93 | 1.61 |
| | | Dropout | 27.60 | 4.12 |
| Black | 12–15 | Nondropout | 1.21 | — |
| | | Dropout | 16.21 | — |
| | 16–21 | Nondropout | 13.24 | 1.00 |
| | | Dropout | 20.80 | 4.40 |
| Hispanic | 12–15 | Nondropout | 3.96 | 0.81 |
| | | Dropout | * | * |
| | 16–21 | Nondropout | 14.92 | 2.89 |
| | | Dropout | 11.56 | 2.83 |
| Other | 12–15 | Nondropout | 4.56 | * |
| | | Dropout | * | * |
| | 16–21 | Nondropout | 5.85 | * |
| | | Dropout | * | — |

*Low precision, no estimate reported.

— No respondents.

Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, *National Health Interview Survey/Youth Risk Behavior Survey* (1992).

Table 12. The Lifetime Costs of Dropping Out of High School (1993 \$)

| | Total costs | Present value (2% discount rate) | Present value (10% discount rate) |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Lost wage/productivity | \$360,000 | \$186,500 | \$15,300 |
| Fringe benefits | \$90,000 | \$46,600 | \$3,800 |
| Nonmarket losses | \$113,000–450,000 | \$58,300–233,200 | \$4,900–19,200 |
| Total | \$563,000–900,000 | \$291,000–466,000 | \$24,000–38,300 |

Note: Numbers may not add to totals due to rounding.

Source: Cohen, Mark, *The Monetary Value of Saving a High Risk Youth* (1995).

Table 13. Summary of the Monetary Value of Saving a High-Risk Youth (\$ Thousands)

| | Total costs | Present value with 2% discount rate | Present value with 10% discount rate |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Career criminal | 1,200–1,500 | 1,000–1,300 | 650–850 |
| Heavy drug user | 435–1,051 | 333–809 | 159–391 |
| High school dropout | 563–900 | 291–466 | 24–38 |
| LESS duplication (crimes committed by heavy drug users) | (252–696) | (196–540) | (96–264) |
| Total | 1,900–2,700 | 1,500–2,000 | 700–1,000 |

Note: Numbers may not add to totals due to rounding.

Source: Cohen, Mark, *The Monetary Value of Saving a High Risk Youth* (1995).

Table 14. Substance Abuse among Probationers, State Prison Inmates, and Federal Prison Inmates

| | Number | Ever Used (%) | Used Regularly (%)* | Used Month Prior to Offense (%) | Used at Time of Offense (%) |
|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Probation (1995)¹ | 2,065,896 | 69.4 | 43.4 | 31.8 | 13.5 |
| State prison inmates (1997)² | 1,059,607 | 83.0 | 69.6 | 56.5 | 32.6 |
| Federal prison inmates (1997)² | 88,018 | 72.9 | 57.3 | 44.8 | 22.4 |
| Jail inmates (1998)^{3**} | 417,000 | 70.3 | 65.5 | 55.0 | 35.6 |

*Regular use defined as once a week or more for at least a month.

¹Substance Abuse of Adults on Probation, 1995 (March 1998).

²Substance Abuse Among State and Federal Prisoners, 1997 (December 1998).

³Drug Use, Testing, and Treatment in Jails, 1998 (May 2000).

**Note: Includes convicted and non-convicted inmates. Other figures include convicted jail inmates only. Based on personal interviews.

Source: Bureau of Justice Statistics, Office of Justice Programs, Department of Justice, *1995 Survey of Adults on Probation* and *1997 Survey on Inmates in State and Federal Correctional Facilities*.

Table 15. Alcohol, Drug, and Mental Health (ADM) Problems Among Homeless Clients, 1996

| ADM combination | Past month (%) | Past year (%) | Lifetime (%) |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Any ADM problem | 66 | 74 | 86 |
| Alcohol problem | 38 | 46 | 62 |
| Drug problem | 26 | 38 | 58 |
| Mental health problem | 39 | 45 | 57 |
| Specific Combinations | | | |
| Alcohol problem only | 13 | 12 | 9 |
| Drug problem only | 7 | 7 | 6 |
| Mental health problem only | 17 | 15 | 10 |
| Alcohol and drug problems | 7 | 10 | 15 |
| Alcohol and mental health problems | 10 | 10 | 15 |
| Drug and mental health problems | 5 | 7 | 8 |
| Alcohol, drug, and mental health problems | 8 | 14 | 30 |
| No ADM problems | 34 | 26 | 14 |

Source: Interagency Council on the Homeless, U.S. Department of Housing and Urban Development, *Homelessness: Programs and the People They Serve* (1999).

Table 16. Characteristics Perceived by Respondents to Prevent Exit From Homelessness, 1996

| | Percent |
|-------------------------------|---------|
| Insufficient income | 30 |
| Lack of job | 24 |
| No suitable housing | 11 |
| Addiction to alcohol or drugs | 9 |
| Other | 24 |

Percentages may not sum to 100 due to rounding.

Source: Interagency Council on the Homeless, U.S. Department of Housing and Urban Development, *Homelessness: Programs and the People They Serve* (1999).

Table 17. Substance Use Experiences by Homeless Status, 1996

| | Currently homeless (%) (N=2,938) | Formerly homeless clients (%) (N=677) | Other service users (%) (N=518) |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Started drinking three or more alcoholic beverages a week: | | | |
| Before age 15 | 36 | 29 | 13 |
| Between ages 15 and 17 | 29 | 28 | 33 |
| Started using illegal drugs: | | | |
| Before age 15 | 31 | 28 | 27 |
| Between ages 15 and 17 | 32 | 21 | 22 |

Source: Interagency Council on the Homeless, U.S. Department of Housing and Urban Development, *Homelessness: Programs and the People They Serve* (1999).

DRUG USE CONSEQUENCES

Table 18. Estimated Costs to Society of Drug Abuse, 1992–2000 (\$ Millions)

| Year | Health care costs | Productivity losses | Other costs | Total |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1992 | 10,820 | 69,421 | 21,912 | 102,154 |
| 1993 | 11,114 | 77,972 | 22,410 | 111,496 |
| 1994 | 11,279 | 82,685 | 24,440 | 118,404 |
| 1995 | 11,305 | 88,085 | 27,120 | 126,510 |
| 1996 | 11,428 | 92,423 | 27,444 | 131,295 |
| 1997 | 12,085 | 94,470 | 30,526 | 137,082 |
| 1998 | 12,862 | 98,467 | 32,083 | 143,411 |
| 1999 ¹ | 13,860 | 104,353 | 34,295 | 152,508 |
| 2000 ¹ | 14,899 | 110,491 | 35,274 | 160,664 |

¹Figures for 1999 and 2000 are projections based on observable trends for 1992 through 1998.

Source: Office of National Drug Control Policy. *The Economic Costs of Drug Abuse in the United States, 1992–2000* (September 2001).

Table 19. Estimated Productivity Losses Due to Drug Abuse, 1992–2000 (\$ Millions)

| Year | Premature death | Drug abuse related illness | Institutionalization/hospitalization | Productivity loss of victims of crime | Incarceration | Crime careers | Total |
|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1992 | 14,575 | 14,205 | 1,477 | 2,059 | 17,907 | 19,198 | 69,421 |
| 1993 | 21,095 | 13,766 | 1,502 | 2,488 | 19,366 | 19,755 | 77,972 |
| 1994 | 21,905 | 15,845 | 1,683 | 2,554 | 21,095 | 19,603 | 82,685 |
| 1995 | 22,943 | 17,737 | 1,872 | 2,377 | 22,983 | 20,172 | 88,085 |
| 1996 | 19,697 | 20,270 | 1,533 | 2,332 | 24,833 | 23,758 | 92,423 |
| 1997 | 16,771 | 19,916 | 1,662 | 2,293 | 27,221 | 26,608 | 94,470 |
| 1998 | 16,611 | 23,143 | 1,786 | 2,165 | 30,133 | 24,627 | 98,467 |
| 1999 ¹ | 17,439 | 24,298 | 1,849 | 2,118 | 32,793 | 25,856 | 104,353 |
| 2000 ¹ | 18,256 | 25,435 | 1,915 | 2,217 | 35,601 | 27,066 | 110,491 |

¹Figures for 1999 and 2000 are projections based on observable trends for 1992–1998.

Source: Office of National Drug Control Policy, *The Economic Costs of Drug Abuse in the United States, 1992–1998* (September 2001).

Table 20. Number of Deaths and Death Rates from Drug-Induced Causes,¹ by Sex and Race: U.S., 1979–1999²

| Year | Both sexes | Male | Female | White | All non-white | Black ³ |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------------|--------------------|
| Number | | | | | | |
| 1979 | 7,101 | 3,656 | 3,445 | 6,116 | 985 | 897 |
| 1980 | 6,900 | 3,771 | 3,129 | 5,814 | 1,086 | 1,006 |
| 1981 | 7,106 | 3,835 | 3,271 | 5,863 | 1,243 | 1,152 |
| 1982 | 7,310 | 4,130 | 3,180 | 5,991 | 1,319 | 1,212 |
| 1983 | 7,492 | 4,145 | 3,347 | 6,187 | 1,305 | 1,194 |
| 1984 | 7,892 | 4,640 | 3,252 | 6,309 | 1,583 | 1,480 |
| 1985 | 8,663 | 5,342 | 3,321 | 6,946 | 1,717 | 1,600 |
| 1986 | 9,976 | 6,284 | 3,692 | 7,948 | 2,028 | 1,906 |
| 1987 | 9,796 | 6,146 | 3,650 | 7,547 | 2,249 | 2,101 |
| 1988 | 10,917 | 7,004 | 3,913 | 8,409 | 2,508 | 2,395 |
| 1989 | 10,710 | 6,895 | 3,815 | 8,336 | 2,374 | 2,236 |
| 1990 | 9,463 | 5,897 | 3,566 | 7,603 | 1,860 | 1,703 |
| 1991 | 10,388 | 6,593 | 3,795 | 8,204 | 2,184 | 2,037 |
| 1992 | 11,703 | 7,766 | 3,937 | 9,360 | 2,343 | 2,148 |
| 1993 | 13,275 | 9,052 | 4,223 | 10,394 | 2,881 | 2,688 |
| 1994 | 13,923 | 9,491 | 4,432 | 10,895 | 3,028 | 2,780 |
| 1995 | 14,218 | 9,909 | 4,309 | 11,173 | 3,045 | 2,800 |
| 1996 | 14,843 | 10,093 | 4,750 | 11,903 | 2,940 | 2,682 |
| 1997 | 15,973 | 10,991 | 4,982 | 12,863 | 3,110 | 2,816 |
| 1998 | 16,926 | 11,462 | 5,464 | 13,811 | 3,115 | 2,831 |
| 1998 ICD-10 | 20,227 | 13,697 | 6,529 | 16,504 | 3,722 | 3,383 |
| 1999 ICD-10 | 19,102 | 12,873 | 6,229 | 15,694 | 3,408 | 3,094 |
| Rate per 100,000 population | | | | | | |
| 1979 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| 1980 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| 1981 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| 1982 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 4.4 |
| 1983 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
| 1984 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 5.2 |
| 1985 | 3.6 | 4.6 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 5.6 |
| 1986 | 4.2 | 5.4 | 3.0 | 3.9 | 5.5 | 6.6 |
| 1987 | 4.0 | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 6.0 | 7.2 |
| 1988 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 8.1 |
| 1989 | 4.3 | 5.7 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.4 |
| 1990 | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.6 |
| 1991 | 4.1 | 5.4 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.5 |
| 1992 | 4.6 | 6.2 | 3.0 | 4.4 | 5.6 | 6.8 |
| 1993 | 5.1 | 7.2 | 3.2 | 4.8 | 6.7 | 8.4 |
| 1994 | 5.3 | 7.5 | 3.3 | 5.0 | 6.9 | 8.5 |
| 1995 | 5.4 | 7.7 | 3.2 | 5.1 | 6.8 | 8.4 |
| 1996 | 5.6 | 7.8 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 8.0 |
| 1997 | 6.0 | 8.4 | 3.6 | 5.8 | 6.7 | 8.3 |
| 1998 | 6.3 | 8.7 | 4.0 | 6.2 | 6.6 | 8.2 |
| 1998 ICD-10 | 7.5 | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 7.9 | 9.8 |
| 1999 ICD-10 | 7.0 | 9.7 | 4.5 | 7.0 | 7.1 | 8.9 |

¹Causes of death attributable to drug-induced mortality under ICD-9 include drug psychoses (292); drug dependence (304); nondependent use of drugs not including alcohol and tobacco (305.2–305.9); accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals (E850–E858); suicide by drugs, medicaments, and biologicals (E950.0–E950.5); assault from poisoning by drugs and medicaments (E962.0); and poisoning by drugs, medicaments, and biologicals, undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E980.0–E980.5). Drug-induced causes exclude accidents, homicides, and other causes indirectly related to drug use. Also excluded are newborn deaths associated with mothers' drug use.

²In 1999, cause of death coding was revised to ICD-10. Modified figures for 1998 were calculated based on comparability ratios for drug-induced deaths according to ICD-9 and ICD-10. The new coding scheme yields 19.5 percent more drug-induced deaths compared to the old system using 1998 data. The implementation of ICD-10 represents a break in the trend data.

³Black is a subgroup of All non-white.

Sources: Murphy, S.L., "Deaths: Final Data for 1998," *National Vital Statistics Reports*, 48 (11) Hyattsville, MD: Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics (2000) for 1979–1998 ICD-9 data; and Hoyert, D.L., Arias, E., Smith, B.L., et al., "Deaths: Final Data for 1999," *National Vital Statistics Reports*, 49 (8), Hyattsville, MD: Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics (2001) for 1998–1999 ICD-10 data.

Table 21. Trends in Drug-Related Emergency Room Episodes and Selected Drug Mentions, 1988–2000

| Year | Emergency room episodes and drug mentions | | | | |
|------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Total drug episodes | Total drug mentions | Total cocaine mentions | Total heroin mentions | Total marijuana mentions |
| 1988 | 403,578 | 668,153 | 101,578 | 38,063 | 19,962 |
| 1989 | 425,904 | 713,392 | 110,013 | 41,656 | 20,703 |
| 1990 | 371,208 | 635,460 | 80,355 | 33,884 | 15,706 |
| 1991 | 393,968 | 674,861 | 101,189 | 35,898 | 16,251 |
| 1992 | 433,493 | 751,731 | 119,843 | 48,003 | 23,997 |
| 1993 | 460,910 | 796,762 | 123,423 | 63,232 | 28,873 |
| 1994 | 518,521 | 900,317 | 142,878 | 64,013 | 40,183 |
| 1995 | 513,633 | 901,206 | 135,801 | 70,838 | 45,271 |
| 1996 | 514,347 | 907,561 | 152,433 | 73,846 | 53,789 |
| 1997 | 527,058 | 943,937 | 161,087 | 72,010 | 64,744 |
| 1998 | 542,544 | 982,856 | 172,014 | 77,645 | 76,870 |
| 1999 | 554,932 | 1,015,206 | 168,763 | 84,409 | 87,150 |
| 2000 | 601,776 | 1,100,539 | 174,896 | 97,287 | 96,446 |

Source: *Drug Abuse Warning Network*, National Institute on Drug Abuse (1988–1991) and Substance Abuse and Mental Health Services Administration (1992–2000).

Table 22. Estimated Number of Persons Living With AIDS¹ by Sex and Exposure Category, 1993–1999

| Sex | Exposure Category | | | | | | | Total | Percent drug-related ³ |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| | Men who have sex with men (MSM) | Injecting drug use (IDU) | MSM and IDU | Hemo- philia/co- agulation disorder | Hetero- sexual contact | Receipt of blood trans- fusion ² | Risk not reported or identified | | |
| Male adult/adolescent | | | | | | | | | |
| 1993 | 86,443 | 34,400 | 13,854 | 1,620 | 6,109 | 893 | 989 | 144,309 | 33.4% |
| 1994 | 94,694 | 40,046 | 14,884 | 1,699 | 7,903 | 914 | 940 | 161,081 | 34.1% |
| 1995 | 100,938 | 44,345 | 15,687 | 1,729 | 9,760 | 963 | 937 | 174,361 | 34.4% |
| 1996 | 110,272 | 46,763 | 16,453 | 1,740 | 12,174 | 1,035 | 974 | 191,410 | 34.0% |
| 1997 | 121,991 | 53,812 | 17,698 | 1,788 | 14,907 | 1,140 | 1,023 | 212,248 | 33.6% |
| 1998 | 132,441 | 58,118 | 18,682 | 1,825 | 17,627 | 1,253 | 1,080 | 231,022 | 33.2% |
| 1999 | 143,108 | 62,418 | 19,553 | 1,853 | 20,495 | 1,375 | 1,151 | 249,951 | 32.7% |
| Female adult/adolescent | | | | | | | | | |
| 1993 | N/A | 13,844 | N/A | 92 | 11,822 | 755 | 373 | 26,886 | 51.4% |
| 1994 | N/A | 16,244 | N/A | 108 | 15,131 | 843 | 376 | 32,702 | 49.6% |
| 1995 | N/A | 18,352 | N/A | 137 | 18,478 | 888 | 379 | 38,234 | 47.9% |
| 1996 | N/A | 20,357 | N/A | 164 | 22,566 | 980 | 416 | 44,484 | 45.7% |
| 1997 | N/A | 22,661 | N/A | 201 | 26,974 | 1,088 | 483 | 51,396 | 44.0% |
| 1998 | N/A | 24,457 | N/A | 229 | 31,187 | 1,203 | 504 | 57,578 | 42.4% |
| 1999 | N/A | 26,122 | N/A | 248 | 35,445 | 1,318 | 548 | 63,682 | 41.0% |

N/A Not applicable.

¹Excludes pediatric (<13 years old) AIDS cases. These numbers do not represent actual cases of persons living with AIDS. Rather, they are point estimates of persons living with AIDS derived by subtracting the estimated cumulative number of deaths in persons with AIDS from the estimated cumulative number of persons with AIDS. Estimated AIDS cases are adjusted for reporting delays and for redistribution of cases initially reported with no identified risk but not for incomplete reporting. Annual estimates are through the most recent year for which reliable estimates are available.

²Includes receipt of blood components or tissue.

³Proportion includes injection drug users and MSM who are injection drug users.

Source: Centers for Disease Control and Prevention, *HIV/AIDS Surveillance Report, 2000*; 12 (2) 2001, Table 27.

Table 23. Estimated Number of Deaths of Persons with AIDS¹ by Sex and Exposure Category, 1993–1999

| Sex | Exposure Category | | | | | | | Total | Percent drug-related ³ |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------|
| | Men who have sex with men (MSM) | Injecting drug use (IDU) | MSM and IDU | Hemo- philia/co- agulation disorder | Hetero- sexual contact | Receipt of blood trans- fusion ² | Risk not reported or identified | | |
| Male adult/adolescent | | | | | | | | | |
| 1993 | 23,904 | 9,298 | 3,184 | 356 | 1,591 | 314 | 170 | 38,818 | 32.1% |
| 1994 | 25,398 | 10,387 | 3,503 | 348 | 2,010 | 307 | 147 | 42,100 | 33.0% |
| 1995 | 24,914 | 10,786 | 3,436 | 331 | 2,388 | 262 | 102 | 42,220 | 33.6% |
| 1996 | 16,847 | 8,527 | 2,585 | 248 | 2,108 | 216 | 68 | 30,601 | 36.3% |
| 1997 | 8,695 | 5,369 | 1,445 | 137 | 1,473 | 107 | 45 | 17,271 | 39.4% |
| 1998 | 6,983 | 4,416 | 1,242 | 115 | 1,214 | 83 | 29 | 14,081 | 40.1% |
| 1999 | 6,069 | 4,041 | 1,124 | 98 | 1,230 | 70 | 27 | 12,660 | 40.7% |
| Female adult/adolescent | | | | | | | | | |
| 1993 | N/A | 3,124 | N/A | 17 | 2,656 | 239 | 76 | 6,132 | 51.2% |
| 1994 | N/A | 3,600 | N/A | 27 | 3,478 | 225 | 56 | 7,486 | 48.1% |
| 1995 | N/A | 3,812 | N/A | 30 | 3,988 | 234 | 56 | 8,119 | 46.9% |
| 1996 | N/A | 3,279 | N/A | 30 | 3,434 | 174 | 33 | 6,950 | 47.1% |
| 1997 | N/A | 2,146 | N/A | 21 | 2,301 | 94 | 20 | 4,582 | 46.8% |
| 1998 | N/A | 1,891 | N/A | 15 | 2,008 | 74 | 15 | 4,004 | 47.2% |
| 1999 | N/A | 1,891 | N/A | 16 | 1,989 | 73 | 19 | 3,989 | 47.4% |

N/A Not applicable.

¹Excludes pediatric (<13 years old) AIDS cases. These numbers do not represent actual deaths of persons with AIDS. Rather, they are point estimates adjusted for delays in the reporting of deaths and for redistribution of cases initially reported with no identified risk, but not for incomplete reporting. Annual estimates are through the most recent year for which reliable estimates are available.

²Includes receipt of blood components or tissue.

³Proportion includes injection drug users and MSM who are injection drug users.

Source: Centers for Disease Control and Prevention, *HIV/AIDS Surveillance Report, 2000*, 12 (2) 2001, Table 30.

Table 24. Reported Tuberculosis Cases and Percent of Cases in Injecting and Noninjecting Drug Users, 1996–2000

| Tuberculosis Cases | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total | 21,337 | 19,851 | 18,361 | 17,531 | 16,377 |
| Number with information on injecting drug use | 18,467 | 17,678 | 16,849 | 16,331 | 15,495 |
| Percent with information on injecting drug use | 86.5 | 89.1 | 91.8 | 93.2 | 94.6 |
| Injecting drug users (%) ¹ | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
| With information on noninjecting drug use (number) | 18,265 | 17,555 | 16,730 | 16,232 | 15,454 |
| Percent with information on noninjecting drug use | 85.6 | 88.4 | 91.1 | 92.6 | 94.4 |
| Noninjecting drug users (%) ¹ | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |

¹Injecting drug use within past 12 months. Percentages shown only for reporting areas with information reported for ≥ 75% of cases.

Source: Centers for Disease Control and Prevention, *Reported Tuberculosis in the United States, 1996, 1997, 1998, 1999, and 2000*.

Table 25. Reported Hepatitis Cases, 1995–1999

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Number of reported cases | | | | | |
| Hepatitis A | 31,582 | 31,032 | 30,021 | 23,229 | 17,047 |
| Hepatitis B | 10,805 | 10,637 | 10,416 | 10,258 | 7,694 |
| Hepatitis C | 4,576 | 3,716 | 3,816 | 3,518 | 3,111 |
| Reported cases per 100,000 Population | | | | | |
| Hepatitis A | 12.13 | 11.70 | 11.22 | 8.59 | 6.25 |
| Hepatitis B | 4.19 | 4.01 | 3.90 | 3.80 | 2.82 |
| Hepatitis C | 1.78 | 1.41 | 1.43 | 1.30 | 1.14 |

Source: Centers for Disease Control and Prevention. Summary of Notifiable Diseases, United States, 1999. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 48 (53), 2001.

Table 26. Total Crime, Violent Crime, and Property Crime, 1989–2000

| Year | Total crime index | | Violent crime index ¹ | | Murder victims | | Property crime ² | |
|------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| | Number ³ | Rate ⁴ | Number ³ | Rate ⁴ | Total ³ | Related to narcotic drug laws ³ | Number ³ | Rate ⁴ |
| 1989 | 14,251,400 | 5,741.0 | 1,646,040 | 663.1 | 21,500 | 1,402 | 12,605,400 | 5,077.9 |
| 1990 | 14,475,613 | 5,820.3 | 1,820,127 | 731.8 | 23,438 | 1,367 | 12,655,486 | 5,088.5 |
| 1991 | 14,872,883 | 5,897.8 | 1,911,767 | 758.1 | 24,703 | 1,353 | 12,961,116 | 5,139.7 |
| 1992 | 14,438,191 | 5,660.2 | 1,932,274 | 757.5 | 23,760 | 1,302 | 12,505,917 | 4,902.7 |
| 1993 | 14,144,794 | 5,484.4 | 1,926,017 | 746.8 | 24,526 | 1,295 | 12,218,777 | 4,737.6 |
| 1994 | 13,989,543 | 5,373.5 | 1,857,670 | 713.6 | 23,326 | 1,239 | 12,131,873 | 4,660.0 |
| 1995 | 13,862,727 | 5,275.9 | 1,798,792 | 684.6 | 21,606 | 1,031 | 12,063,935 | 4,591.3 |
| 1996 | 13,493,863 | 5,086.6 | 1,688,540 | 636.5 | 19,645 | 843 | 11,805,323 | 4,450.1 |
| 1997 | 13,194,751 | 4,930.0 | 1,636,096 | 611.3 | 18,209 | 786 | 11,558,475 | 4,318.7 |
| 1998 | 12,485,714 | 4,619.3 | 1,533,887 | 567.5 | 16,914 | 679 | 10,951,827 | 4,051.8 |
| 1999 | 11,635,378 | 4,266.5 | 1,426,044 | 523.0 | 15,522 | 581 | 10,208,334 | 3,743.6 |
| 2000 | 11,605,751 | 4,124.0 | 1,424,289 | 506.1 | 15,517 | 669 | 10,181,462 | 3,617.9 |

¹Violent crime includes the following four offenses: murder and nonnegligent manslaughter, forcible rape, robbery, and aggravated assault.

²Property crime includes the following offenses: burglary, larceny-theft, motor vehicle theft, and arson.

³Offenses reported to law-enforcement agencies.

⁴Per 100,000 population.

Source: Federal Bureau of Investigation, U.S. Department of Justice, *Crime in the United States: Uniform Crime Reports* (1990–2001).

Table 27. Total Estimated Arrests and Drug Arrests, 1989–2000

| Year | Total arrests ¹ | Arrests for all drug abuse violations | | Distribution of arrests for drug abuse violations ² | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------------------------|---------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | Heroin/cocaine ³ | | Marijuana | | Other drugs | |
| | | Number | Percent | Sale ⁴ | Possession | Sale ⁴ | Possession | Sale ⁴ | Possession |
| 1989 | 14,340,900 | 1,361,700 | 9.4 | 19.1 | 34.7 | 6.2 | 23.1 | 7.0 | 9.8 |
| 1990 | 14,195,100 | 1,089,500 | 7.6 | 21.0 | 33.3 | 6.1 | 23.9 | 4.5 | 11.2 |
| 1991 | 14,211,900 | 1,010,000 | 7.1 | 22.5 | 32.8 | 6.1 | 22.4 | 4.8 | 11.5 |
| 1992 | 14,075,100 | 1,066,400 | 7.5 | 20.6 | 32.4 | 6.6 | 25.5 | 4.6 | 10.4 |
| 1993 | 14,036,300 | 1,126,300 | 8.0 | 19.2 | 31.1 | 6.2 | 27.6 | 4.3 | 11.6 |
| 1994 | 14,648,700 | 1,351,400 | 9.2 | 16.8 | 30.3 | 5.8 | 29.8 | 4.1 | 13.2 |
| 1995 | 15,119,800 | 1,476,100 | 9.7 | 14.7 | 27.8 | 5.8 | 34.1 | 4.4 | 13.3 |
| 1996 | 15,168,100 | 1,506,200 | 9.9 | 14.2 | 25.6 | 6.3 | 36.3 | 4.3 | 13.3 |
| 1997 | 15,284,300 | 1,583,600 | 10.3 | 10.3 | 25.4 | 5.6 | 38.3 | 4.7 | 15.8 |
| 1998 | 14,528,300 | 1,559,100 | 10.7 | 11.0 | 25.6 | 5.4 | 38.4 | 4.8 | 14.8 |
| 1999 | 14,031,070 | 1,532,200 | 10.9 | 10.0 | 24.5 | 5.5 | 40.5 | 4.1 | 15.4 |
| 2000 | 13,980,297 | 1,579,566 | 10.9 | 19.0 | 24.2 | 5.6 | 40.9 | 3.0 | 13.6 |

¹Arrest totals are based on all reporting agencies and estimates for unreported areas from Section IV table entitled "Total Estimated Arrests, United States."

²Percentages may not add to 100 because of rounding.

³Includes heroin or cocaine and their derivatives.

⁴Includes sale/manufacture of drugs.

Source: Federal Bureau of Investigation, U.S. Department of Justice, *Crime in the United States: Uniform Crime Reports*, (1990–2001).

Table 28. Adult Drug Offenders in Custody of State or Federal Prisons, 1989–2000

| Year | All Offenders | | | Prisoners who are drug offenders (%) | | Estimated ¹ number of drug offenders | | |
|-------------------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------|---|---------|-------------------|
| | State | Federal | Total State and Federal | Federal | State | State | Federal | State and Federal |
| 1989 | 629,995 | 53,387 | 683,382 | 49.9 | 19.1 | 120,300 | 26,600 | 147,000 |
| 1990 | 684,544 | 58,838 | 743,382 | 53.5 | 21.7 | 148,500 | 31,500 | 180,000 |
| 1991 | 728,605 | 63,930 | 792,535 | 55.9 | 21.3 | 155,200 | 35,700 | 190,900 |
| 1992 | 778,495 | 72,071 | 850,566 | 58.9 | 22.1 | 172,000 | 42,500 | 214,500 |
| 1993 | 828,566 | 80,815 | 909,381 | 59.2 | 22.1 | 183,100 | 47,800 | 230,900 |
| 1994 | 904,647 | 85,500 | 990,147 | 60.5 | 22.4 | 202,600 | 51,700 | 254,300 |
| 1995 | 989,004 | 89,538 | 1,078,542 | 59.9 | 22.7 | 224,500 | 53,600 | 278,100 |
| 1996 | 1,032,440 | 95,088 | 1,127,528 | 60.0 | 22.7 | 234,400 | 57,100 | 291,500 |
| 1997 | 1,059,588 | 99,175 | 1,176,922 | 62.6 | 20.7 | 219,300 | 62,100 | 281,400 |
| 1998 ² | 1,178,978 | 123,041 | 1,232,900 | 58.7 | 20.7 | 244,000 | 72,200 | 316,200 |
| 1999 | 1,209,123 | 135,246 | 1,366,369 | 61.0 | 21.0 | 253,900 | 82,500 | 336,400 |
| 2000 | 1,236,476 | 145,416 | 1,381,892 | — | — | — | — | — |

— Data not available.

¹Estimated from total prisoners and percent who are drug offenders and rounded to the nearest 100.²The 1998 prison custody count was estimated and rounded to nearest 100.

Sources: Bureau of Justice Statistics Bulletin, *Prisoners in 2000* (August 2001); *Prisoners in 1999* (August 2000), *Prisoners in 1998* (August 1999), *Prisoners in 1997* (August 1998). *Correctional Populations in the United States, 1989–1995*; Data for 1997 percentages of drug offenders are estimated from Bureau of Justice Statistics Special Report, *Substance Abuse and Treatment, State and Federal Prisoners, 1997* (January 1999) and unpublished Bureau of Prisons data.

DRUG TREATMENT

Table 29. One-Day Census of Clients in Treatment, by Facility Ownership, 1980–2000

| Year | Private for-profit | Private nonprofit | State/local government | Federal government | Tribal government | Other | Total |
|------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1980 | 17,977 | 284,483 | 150,356 | 25,977 | n/c | n/c | 478,793 |
| 1982 | 25,072 | 274,927 | 132,525 | 30,888 | n/c | n/c | 463,412 |
| 1984 | 60,191 | 395,831 | 164,232 | 45,595 | n/c | 4,430 | 670,279 |
| 1987 | 71,837 | 362,340 | 152,643 | 26,565 | n/c | n/c | 613,385 |
| 1989 | 94,251 | 441,247 | 174,649 | 24,808 | n/c | n/c | 734,955 |
| 1990 | 113,522 | 451,951 | 172,290 | 27,025 | 3,041 | n/c | 767,829 |
| 1991 | 124,952 | 463,024 | 194,842 | 25,920 | 3,081 | n/c | 811,819 |
| 1992 | 166,470 | 536,628 | 192,594 | 37,146 | 10,328 | n/c | 943,166 |
| 1993 | 169,470 | 534,725 | 192,038 | 41,511 | 6,712 | n/c | 944,208 |
| 1995 | 179,337 | 575,002 | 198,579 | 46,861 | 9,348 | n/c | 1,009,127 |
| 1996 | 195,159 | 529,276 | 163,861 | 42,548 | 9,297 | n/c | 940,141 |
| 1997 | 168,106 | 510,680 | 191,693 | 48,683 | 9,646 | n/c | 929,086 |
| 1998 | 252,369 | 556,191 | 178,545 | 41,627 | 9,646 | n/c | 1,038,378 |
| 2000 | 242,922 | 550,541 | 151,790 | 40,365 | 12,082 | n/c | 997,700 |

n/c: Not collected.

Notes: Changes in data collection methods include: Before 1992, no attempt was made to adjust for survey nonresponse. Beginning in 1992, survey nonrespondents were contacted to obtain a minimum data set. This is reflected in larger and more consistent numbers of clients.

Sources: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, *National Drug and Alcoholism Treatment Unit Survey* (NDATUS) (1980–1993); *Uniform Facility Data Set Survey* (UFDS) (1995–1998); *National Survey of Substance Abuse Treatment Services* (N-SSATS) (2000).

Table 30. One-Day Census of Clients in Alcohol and/or Drug Abuse Treatment, by Age Group and by Type of Care, 1987–2000¹

| Year | Hospital inpatient/residential | | | Outpatient | | | All clients |
|------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Under 18 | 18 or older | Total ² | Under 18 | 18 or older | Total ² | |
| 1987 | 8,479 | 76,873 | 89,686 | 51,311 | 443,516 | 523,699 | 613,385 |
| 1989 | 8,138 | 87,417 | 104,603 | 61,274 | 521,524 | 630,352 | 734,955 |
| 1990 | 7,587 | 81,790 | 93,888 | 37,998 | 585,275 | 673,835 | 767,723 |
| 1991 | 7,137 | 85,821 | 99,150 | 36,561 | 608,852 | 712,669 | 811,819 |
| 1992 | 10,374 | 111,723 | 122,097 | 42,812 | 779,970 | 822,782 | 944,880 |
| 1993 | 10,463 | 110,602 | 121,065 | 49,357 | 773,715 | 823,072 | 944,137 |
| 1995 | 12,841 | 132,001 | 144,842 | 57,209 | 807,076 | 864,285 | 1,009,127 |
| 1996 | 11,376 | 103,589 | 114,965 | 65,311 | 759,865 | 825,176 | 940,141 |
| 1997 | 10,800 | 109,330 | 120,130 | 70,656 | 738,300 | 808,956 | 929,086 |
| 1998 | 13,842 | 108,738 | 122,580 | 86,480 | 829,318 | 915,798 | 1,038,378 |
| 2000 | 10,428 | 98,668 | 109,096 | 74,315 | 814,289 | 888,604 | 997,700 |

¹The following changes in data collection methods are reflected in the table: Before 1992, no attempt was made to adjust for survey nonresponse. Beginning in 1992, survey nonrespondents were contacted to obtain a minimum data set. This is reflected in larger and more consistent numbers of clients. Also, in 1997 only, facilities providing programs for DUI/DWI offenders did not complete the full survey, and did not provide client counts.

²Totals include persons of unknown age.

Sources: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, *National Drug and Alcoholism Treatment Unit Survey* (NDATUS) (1987–1993); *Uniform Facility Data Set Survey* (UFDS), 1995–1998; *National Survey of Substance Abuse Treatment Services* (N-SSATS), 2000.

Table 31. Estimated Number of Persons Age 12 or Older Who Needed and Received Treatment for an Illicit Drug Problem in the Past Year, by Demographic Characteristics, 2000 (Thousands)

| Demographic characteristics | Needed treatment for an illicit drug problem in the past year | | | Received treatment at a specialty facility among persons who needed treatment (%) |
|---|---|--|---|---|
| | Total | Received treatment at a specialty facility | Did not receive treatment at a specialty facility | |
| Totals | 4,655 | 774 | 3,881 | 16.6 |
| Age | | | | |
| 12–17 | 1,074 | 122 | 951 | 11.4 |
| 18–25 | 1,645 | 142 | 1,503 | 8.6 |
| 26 and older | 1,937 | 510 | 1,427 | 26.3 |
| Sex | | | | |
| Male | 2,749 | 411 | 2,337 | 15.0 |
| Female | 1,907 | 363 | 1,544 | 19.0 |
| Hispanic origin/race | | | | |
| Not Hispanic: | | | | |
| White Only | 3,235 | 577 | 2,659 | 17.8 |
| Black | 632 | 118 | 514 | * |
| American Indian/or Alaska Native only | 46 | 4 | 42 | * |
| Native Hawaiian or other Pacific Islander | 10 | 3 | 7 | * |
| Asian only | 54 | 1 | 54 | * |
| More than one race | 103 | 21 | 82 | * |
| Hispanic | 574 | 51 | 523 | 9.0 |

*Low precision; no estimate reported.

Notes: Respondents were classified as needing treatment for an illicit drug problem if they met at least one of three criteria during the past year: (1) dependence on any illicit drug; (2) abuse of any illicit drug; or (3) received treatment for an illicit drug problem at a specialty facility (i.e., drug and alcohol rehabilitation facilities [inpatient or outpatient], hospitals [inpatient only], and mental health centers). Illicit drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), inhalants, hallucinogens, heroin, and prescription-type psychotherapeutic (nonmedical use).

Source: U.S. Department of Health and Human Services, *Closing the Drug Abuse Treatment Gap: A Report to the President of the United States* (September 2001).

DRUG AVAILABILITY

Table 32. Trends in Cocaine Supply, 1989–2000 (Metric Tons)

| Year | Cocaine HCl available for export from producing countries | Cocaine destined for the United States | Cocaine shipped to the United States | Cocaine available for consumption in the United States | Retail value of cocaine in the United States (2000 \$, billions) |
|------|---|---|---|--|--|
| 1989 | 709–842 | 603–716 | 547–660 | 432–545 | \$88.4 |
| 1990 | 714–851 | 595–709 | 509–624 | 413–528 | \$69.9 |
| 1991 | 777–931 | 635–760 | 539–664 | 412–532 | \$57.1 |
| 1992 | 834–972 | 667–778 | 583–694 | 437–555 | \$49.9 |
| 1993 | 581–692 | 455–542 | 375–462 | 364–463 | \$45.0 |
| 1994 | 558–670 | 428–513 | 371–456 | 258–345 | \$42.8 |
| 1995 | 616–738 | 462–553 | 421–513 | 287–376 | \$40.0 |
| 1996 | 608 | 455 | 385 | 301 | \$39.2 |
| 1997 | 560 | 444 | 340 | 275 | \$34.7 |
| 1998 | 521 | 434 | 341 | 267 | \$34.9 |
| 1999 | 518 | 431 | 335 | 271 | \$35.6 |
| 2000 | 501 | 402 | 318 | 259 | \$35.3 ¹ |

Notes: Data in the first four columns for 1985–1995 represent ranges estimated by the U.S. Department of State. Data for 1996–2000 are point estimates derived from ONDCP's *Sequential Transition and Reduction (STAR) Model*.

¹Retail value for 2000 is projected.

Sources: U.S. Department of State, *International Narcotics Control Strategy Report* (various years); Office of National Drug Control Policy, *Estimation of Cocaine Availability, 1996–2000* (in press); and Office of National Drug Control Policy, *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000* (in press).

Table 33. Average Price and Purity of Cocaine and Heroin in the United States, 1981–2000

| Year | Cocaine | | | | Heroin | | | |
|-------------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| | Purchases of 1 gram or less ¹ | | Purchases of 10–100 pure grams ² | | Purchases of 0.1 gram or less ¹ | | Purchases of 1–10 pure grams ² | |
| | Price per pure gram (\$) | Purity (%) | Price per pure gram (\$) | Purity (%) | Price per pure gram (\$) | Purity (%) | Price per pure gram (\$) | Purity (%) |
| 1981 | 423 | 36 | 201 | 44 | 3,295 | 4 | 1,207 | 19 |
| 1982 | 433 | 36 | 184 | 46 | 3,285 | 5 | 1,159 | 32 |
| 1983 | 399 | 39 | 178 | 50 | 3,652 | 6 | 1,310 | 29 |
| 1984 | 378 | 44 | 153 | 55 | 3,485 | 8 | 1,293 | 36 |
| 1985 | 328 | 40 | 145 | 52 | 3,146 | 8 | 1,183 | 43 |
| 1986 | 315 | 51 | 127 | 64 | 3,502 | 9 | 1,153 | 37 |
| 1987 | 292 | 64 | 104 | 71 | 3,306 | 11 | 1,164 | 36 |
| 1988 | 238 | 75 | 80 | 73 | 3,123 | 17 | 960 | 40 |
| 1989 | 226 | 78 | 68 | 71 | 2,597 | 19 | 790 | 44 |
| 1990 | 267 | 69 | 77 | 59 | 2,924 | 16 | 878 | 32 |
| 1991 | 227 | 78 | 69 | 70 | 3,022 | 17 | 872 | 32 |
| 1992 | 224 | 76 | 65 | 74 | 2,863 | 21 | 687 | 39 |
| 1993 | 199 | 74 | 63 | 71 | 2,635 | 25 | 536 | 50 |
| 1994 | 187 | 73 | 57 | 74 | 2,721 | 25 | 433 | 47 |
| 1995 | 196 | 67 | 56 | 69 | 2,652 | 24 | 384 | 51 |
| 1996 | 175 | 72 | 51 | 70 | 2,424 | 23 | 378 | 45 |
| 1997 | 195 | 65 | 52 | 66 | 2,373 | 28 | 336 | 45 |
| 1998 | 183 | 68 | 47 | 68 | 2,087 | 25 | 331 | 49 |
| 1999 | 184 | 64 | 49 | 63 | 1,929 | 27 | 304 | 45 |
| 2000 ³ | 212 | 61 | 51 | 58 | 2,088 | 25 | 269 | 47 |

¹Quantities purchased at the "retail" level.

²Quantities purchased at the "dealer" level.

³2000 data are preliminary, based on first two quarters of data.

Source: Office of National Drug Control Policy, *The Price of Illicit Drugs, 1981-2000* (in press).

Table 34. Federal-wide Cocaine, Heroin, Methamphetamine, and Cannabis Seizures, 1989–2001 (Kilograms)

| Year | Cocaine | Heroin | Methamphetamine | Cannabis | |
|-------------------|---------|--------|-----------------|-----------|---------|
| | | | | Marijuana | Hashish |
| 1989 | 114,903 | 1,311 | — | 393,276 | 23,043 |
| 1990 | 96,085 | 687 | — | 233,478 | 7,683 |
| 1991 | 128,247 | 1,448 | — | 224,603 | 79,110 |
| 1992 | 120,175 | 1,251 | — | 344,899 | 111 |
| 1993 | 121,215 | 1,502 | 7 | 409,922 | 11,396 |
| 1994 | 129,378 | 1,285 | 178 | 474,856 | 561 |
| 1995 | 111,031 | 1,543 | 369 | 627,776 | 14,470 |
| 1996 | 128,555 | 1,362 | 136 | 638,863 | 37,851 |
| 1997 | 101,495 | 1,624 | 1,099 | 698,799 | 756 |
| 1998 | 132,063 | 1,151 | 2,779 | 1,092,604 | 797 |
| 1999 | 103,975 | 1,605 | 3,341 | 1,234,853 | 10,878 |
| 2000 | 56,004 | 581 | 1,756 | 645,693 | — |
| 2001 ¹ | 86,620 | 1,660 | 1,941 | 1,057,456 | 135 |

— Data not available.

¹Figures for 2001 are for January through September only.Source: *Federal-wide Drug Seizure System*, Drug Enforcement Administration, 1989–2001.**Table 35. Eradicated Domestic Cannabis by Plant Type, 1982–2001 (Plants in Thousands)**

| | Cultivated Plants Outdoors ¹ | Ditchweed | Indoor Plants | Total Plants Eradicated |
|-------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|
| 1982 | 2,590 | — | — | 2,590 |
| 1983 | 3,794 | — | — | 3,794 |
| 1984 | 3,803 | 9,178 | — | 12,981 |
| 1985 | 3,961 | 35,270 | — | 39,231 |
| 1986 | 4,673 | 125,013 | — | 129,686 |
| 1987 | 7,433 | 105,842 | — | 113,275 |
| 1988 | 5,344 | 101,932 | — | 107,329 |
| 1989 | 5,636 | 124,289 | — | 129,925 |
| 1990 | 7,329 | 118,548 | — | 125,877 |
| 1991 | 5,257 | 133,786 | 283 | 139,326 |
| 1992 | 7,490 | 264,207 | 349 | 272,046 |
| 1993 | 4,049 | 387,942 | 290 | 392,281 |
| 1994 | 4,032 | 504,414 | 220 | 508,665 |
| 1995 | 3,054 | 370,275 | 243 | 373,572 |
| 1996 | 2,843 | 419,662 | 217 | 422,723 |
| 1997 | 3,827 | 237,140 | 224 | 241,193 |
| 1998 | 2,283 | 132,407 | 233 | 134,924 |
| 1999 | 3,205 | 130,192 | 208 | 133,605 |
| 2000 | 2,598 | 139,581 | 217 | 142,396 |
| 2001 ² | 2,933 | 544,221 | 204 | 547,358 |

— Data not available.

Note: Federal data only.

¹May include tended ditchweed.²Through third quarter 2001 only.

Source: Drug Enforcement Administration, 1982–2001.

Table 36. Estimated Worldwide Potential Net Production of Opium, 1987–2000 (Metric Tons)

| Year | Afghan- istan | India | Iran ¹ | Paki- stan | Total Southwest Asia | Burma | China | Laos | Thailand | Viet- nam | Total Southeast Asia | Colom- bia | Leb- anon ² | Guate- mala | Mexico | Sub- total | Total All Regions |
|------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------------------|-------|-------|------|----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------|---------------|----------------------|
| 1987 | 600 | — | 300 | 205 | 1,105 | 835 | — | 225 | 24 | — | 1,084 | — | — | 3 | 50 | 53 | 2,242 |
| 1988 | 750 | — | — | 205 | 955 | 1,280 | — | 255 | 25 | — | 1,560 | — | — | 8 | 67 | 75 | 2,590 |
| 1989 | 585 | — | — | 130 | 715 | 2,430 | — | 380 | 50 | — | 2,860 | — | 45 | 12 | 66 | 123 | 3,698 |
| 1990 | 415 | — | — | 165 | 580 | 2,255 | — | 275 | 40 | — | 2,570 | — | 32 | 13 | 62 | 107 | 3,257 |
| 1991 | 570 | — | — | 180 | 750 | 2,350 | — | 265 | 35 | — | 2,650 | — | 34 | 11 | 41 | 86 | 3,486 |
| 1992 | 640 | — | — | 175 | 815 | 2,280 | — | 230 | 24 | — | 2,534 | — | — | — | 40 | 40 | 3,389 |
| 1993 | 685 | — | — | 140 | 825 | 2,575 | — | 180 | 42 | — | 2,797 | — | 4 | — | 49 | 53 | 3,675 |
| 1994 | 950 | 90 | — | 160 | 1,200 | 2,030 | 25 | 85 | 17 | — | 2,157 | — | — | — | 60 | 60 | 3,417 |
| 1995 | 1,250 | 77 | — | 155 | 1,482 | 2,340 | 19 | 180 | 25 | — | 2,564 | 65 | 1 | — | 53 | 119 | 4,165 |
| 1996 | 2,174 | 47 | — | 75 | 2,296 | 2,560 | — | 200 | 30 | 25 | 2,815 | 63 | 1 | — | 54 | 118 | 4,285 |
| 1997 | 2,184 | 30 | — | 85 | 2,299 | 2,365 | — | 210 | 25 | 45 | 2,645 | 66 | — | — | 46 | 112 | 5,056 |
| 1998 | 2,340 | — | — | 66 | 2,406 | 1,750 | — | 140 | 16 | 20 | 1,926 | 61 | — | — | 60 | 121 | 4,453 |
| 1999 | 2,861 | — | — | 37 | 2,898 | 1,090 | — | 140 | 6 | 11 | 1,247 | 75 | — | — | 43 | 118 | 4,263 |
| 2000 | 3,656 | — | — | 11 | 3,667 | 1,085 | — | 210 | 6 | 15 | 1,316 | — | — | — | 21 | 21 | 5,004 |

— Data not available.

¹Although there is no solid information on Iranian opium production, the U.S. Government estimates that Iran potentially may produce between 35 and 75 metric tons of opium gum annually.

²There was no information for 1992 production. For 1994, a vigorous eradication campaign reduced potential production to insignificant levels.

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001).

Table 37. Estimated Worldwide Potential Net Production of Cannabis, 1987–2000 (Metric Tons)

| Year | Mexico ¹ | Colombia | Jamaica | Belize | Other | Total |
|------|---------------------|----------|---------|--------|-------|--------|
| 1987 | 5,933 | 5,600 | 460 | 200 | 1,500 | 13,693 |
| 1988 | 5,655 | 7,775 | 405 | 120 | 3,500 | 17,445 |
| 1989 | 30,200 | 2,800 | 190 | 65 | 3,500 | 36,775 |
| 1990 | 19,715 | 1,500 | 825 | 60 | 3,500 | 25,600 |
| 1991 | 7,775 | 1,650 | 641 | 49 | 3,500 | 13,615 |
| 1992 | 7,795 | 1,650 | 263 | — | 3,500 | 13,208 |
| 1993 | 6,280 | 4,125 | 502 | — | 3,500 | 14,407 |
| 1994 | 5,540 | 4,138 | 208 | — | 3,500 | 13,386 |
| 1995 | 12,400 | 4,133 | 206 | — | 3,500 | 20,239 |
| 1996 | 11,700 | 4,133 | 356 | — | 3,500 | 19,689 |
| 1997 | 8,600 | 4,133 | 214 | — | 3,500 | 16,447 |
| 1998 | 8,300 | 4,000 | — | — | 3,500 | 15,800 |
| 1999 | 3,700 | 4,000 | — | — | 3,500 | 11,200 |
| 2000 | 7,000 | 4,000 | — | — | 3,500 | 14,500 |

— Data not available.

¹Cannabis yield figures updated in November 1999, based on information provided by the Mexican Attorney General's Office.Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001).**Table 38. Estimated Worldwide Potential Net Production of Coca Leaf, 1987–2000 (Metric Tons)**

| Year | Bolivia | Colombia ¹ | Peru | Ecuador | Total |
|------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1987 | 79,200 | 20,500 | 191,000 | 400 | 291,100 |
| 1988 | 79,500 | 27,200 | 187,700 | 400 | 294,800 |
| 1989 | 78,200 | 33,900 | 186,300 | 270 | 298,670 |
| 1990 | 77,000 | 32,100 | 196,900 | 170 | 306,170 |
| 1991 | 78,000 | 30,000 | 222,700 | 40 | 330,740 |
| 1992 | 80,300 | 29,600 | 223,900 | 100 | 333,900 |
| 1993 | 84,400 | 31,700 | 155,500 | 100 | 271,700 |
| 1994 | 89,800 | 35,800 | 165,300 | — | 290,900 |
| 1995 | 85,000 | 229,300 | 183,600 | — | 497,900 |
| 1996 | 75,100 | 302,900 | 174,700 | — | 552,700 |
| 1997 | 70,100 | 347,000 | 130,200 | — | 547,300 |
| 1998 | 52,900 | 437,600 | 95,600 | — | 586,100 |
| 1999 | 22,800 | 521,400 | 69,200 | — | 613,400 |
| 2000 | 13,400 | 583,000 | 54,400 | — | 650,800 |

— Data not available.

¹Coca and cocaine yield figures for 1995–1999 were revised upward in 1999, based on United States Government studies. See Methodology section of INCSR 2001 for details.Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001).

Table 39. Domestic Drug Consumption, Calendar Years 1996–2000 (Metric Tons)

| Year | Cocaine | Heroin | Marijuana | Methamphetamine |
|-------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 1988 | 660 | 15 | 894 | 23 |
| 1989 | 576 | 17 | 866 | 19 |
| 1990 | 447 | 14 | 837 | 16 |
| 1991 | 355 | 12 | 793 | 10 |
| 1992 | 346 | 12 | 761 | 14 |
| 1993 | 331 | 11 | 791 | 19 |
| 1994 | 323 | 11 | 874 | 34 |
| 1995 | 321 | 12 | 848 | 54 |
| 1996 | 301 | 13 | 874 | 54 |
| 1997 | 275 | 12 | 960 | 35 |
| 1998 | 267 | 14 | 952 | 27 |
| 1999 | 271 | 14 | 1,028 | 18 |
| 2000 ¹ | 259 | 13 | 1,047 | 20 |

¹Estimated.

Source: Office of National Drug Control Policy, *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000* (in press).

Table 40. Trends in Heroin Supply, 1996–2000 (Metric Tons)

| Year | Heroin availability prior to border entry | Heroin availability after border entry | Heroin available for consumption in the United States | Retail value of heroin in the United States (1998 dollars, billions) |
|-------------------|---|--|---|--|
| 1996 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | \$12.75 |
| 1997 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | \$11.44 |
| 1998 | 13.5 | 12.8 | 12.5 | \$11.12 |
| 1999 ¹ | 13.7 | 13.1 | 12.9 | \$10.08 |
| 2000 ¹ | 13.7 | 13.0 | 12.9 | \$10.04 |

¹Retail values for 1999 and 2000 are projected.

Sources: Office of National Drug Control Policy, *Estimating Heroin Availability* (2000). Retail value data are from Office of National Drug Control Policy, *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000*, (in press).

Table 41. Amount of Coca Leaf Cultivated and Eradicated, Calendar Years 1987–2000 (Hectares)

| Year | Cultivated | | | Eradicated | | |
|------|------------|----------|---------|------------|----------|--------|
| | Bolivia | Colombia | Peru | Bolivia | Colombia | Peru |
| 1987 | 41,400 | 22,960 | 109,155 | 1,040 | 460 | 355 |
| 1988 | 50,400 | 34,230 | 115,530 | 1,475 | 230 | 5,130 |
| 1989 | 55,400 | 43,400 | 121,685 | 2,500 | 640 | 1,285 |
| 1990 | 58,400 | 41,000 | 121,300 | 8,100 | 900 | — |
| 1991 | 53,386 | 38,472 | 120,800 | 5,486 | 972 | — |
| 1992 | 48,652 | 38,059 | 129,100 | 3,152 | 959 | — |
| 1993 | 49,597 | 40,493 | 108,800 | 2,397 | 793 | — |
| 1994 | 49,158 | 49,610 | 108,600 | 1,058 | 4,910 | — |
| 1995 | 54,093 | 59,650 | 115,300 | 5,493 | 8,750 | — |
| 1996 | 55,612 | 72,800 | 95,659 | 7,512 | 5,600 | 1,259 |
| 1997 | 52,826 | 98,500 | 72,262 | 7,026 | 19,000 | 3,462 |
| 1998 | 49,621 | — | 58,825 | 11,621 | — | 7,825 |
| 1999 | 38,779 | — | 52,500 | 16,999 | 43,246 | 13,800 |
| 2000 | 22,253 | 183,200 | 40,200 | 7,653 | 47,000 | 6,200 |

— Data not available.

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.**Table 42. Amount of Opium Poppy Cultivated and Eradicated, Calendar Years 1990–2000 (Hectares)**

| Year | Afghanistan | Pakistan | Burma | Laos | Thailand | Colombia | Guatemala | Mexico ¹ |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|---------------------|
| Cultivated | | | | | | | | |
| 1990 | 12,370 | 8,405 | 150,100 | 30,580 | 3,435 | — | 1,930 | 10,100 |
| 1991 | 17,190 | 8,645 | 160,000 | 29,625 | 3,000 | 2,316 | 1,721 | 10,130 |
| 1992 | 19,470 | 9,147 | 154,915 | 25,610 | 3,630 | 32,858 | 1,200 | 10,170 |
| 1993 | 21,080 | 7,136 | 166,404 | 26,040 | 2,880 | 29,821 | 864 | 11,780 |
| 1994 | 29,180 | 7,733 | 149,945 | 18,520 | 2,110 | 23,906 | 200 | 12,415 |
| 1995 | 38,740 | 6,950 | 154,070 | 19,650 | 2,330 | 10,300 | 125 | 13,500 |
| 1996 | 37,950 | 4,267 | 163,100 | 25,250 | 3,050 | 12,328 | 12 | 13,000 |
| 1997 | 39,150 | 4,754 | 165,651 | 28,150 | 2,700 | 13,572 | 10 | 12,000 |
| 1998 | 41,720 | 5,224 | 146,494 | — | 2,065 | — | 15 | 15,000 |
| 1999 | 51,500 | 2,767 | 99,300 | — | 1,643 | — | 1 | 11,500 |
| 2000 | 64,510 | 2,219 | 108,700 | — | 1,647 | — | 1 | 9,500 |
| Eradicated | | | | | | | | |
| 1990 | — | 185 | — | 0 | 720 | — | 1,085 | 4,650 |
| 1991 | — | 440 | 1,012 | 0 | 1,200 | 1,156 | 576 | 6,545 |
| 1992 | — | 977 | 1,215 | 0 | 1,580 | 12,858 | 470 | 11,583 |
| 1993 | — | 856 | 604 | 0 | 0 | 9,821 | 426 | 13,015 |
| 1994 | — | 463 | 3,345 | 0 | 0 | 3,906 | 150 | 11,036 |
| 1995 | — | 0 | 0 | 0 | 580 | 3,760 | 86 | 15,389 |
| 1996 | — | 867 | 0 | 0 | 880 | 6,028 | 12 | 14,671 |
| 1997 | — | 654 | 10,501 | 0 | 1,050 | 6,972 | 3 | 17,732 |
| 1998 | — | 2,194 | 16,194 | — | 715 | — | 12 | 17,449 |
| 1999 | — | 1,197 | 9,800 | — | 808 | — | 1 | 15,469 |
| 2000 | — | 1,704 | 0 | — | 757 | 9,254 | 1 | 15,300 |

— Data not available.

¹The eradication figures shown for 1992–2000 are derived from data supplied by Mexican authorities to INCSR. The effective eradication figure is an estimate of the actual amount of crop destroyed—factoring in replanting, repeated spraying of one area, and other factors.Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.

Table 43. Amount of Cannabis Cultivated and Eradicated by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000 (Hectares)

| Year | Cultivated | | | Eradicated | | |
|------|------------|---------|----------|---------------------|---------|----------|
| | Mexico | Jamaica | Colombia | Mexico ¹ | Jamaica | Colombia |
| 1990 | — | 2,250 | 2,000 | 6,750 | 1,030 | 500 |
| 1991 | — | 1,783 | 2,000 | 10,795 | 833 | 0 |
| 1992 | 28,520 | 1,200 | 2,049 | 16,872 | 811 | 49 |
| 1993 | 21,190 | 1,200 | 5,050 | 16,645 | 456 | 50 |
| 1994 | 19,045 | 1,000 | 5,000 | 14,227 | 692 | 14 |
| 1995 | 18,650 | 1,000 | 5,000 | 21,573 | 695 | 20 |
| 1996 | 18,700 | 1,000 | 5,000 | 22,961 | 473 | — |
| 1997 | 15,300 | 1,060 | 5,000 | 23,576 | 743 | — |
| 1998 | 14,100 | — | 5,000 | 23,928 | 705 | — |
| 1999 | 23,100 | — | 5,000 | 33,583 | 894 | — |
| 2000 | 16,900 | — | 5,000 | 33,000 | 517 | — |

— Data not available.

¹The eradication figures shown for 1992–2000 are derived from data supplied by Mexican authorities to INCSR. The effective eradication figure is an estimate of the actual amount of crop destroyed—factoring in replanting, repeated spraying of one area, and other factors.

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.

Table 44. Amount of Cocaine Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000 (Metric Tons)

| Year | South America | Caribbean | Central America | Mexico |
|------|---------------|-----------|-----------------|--------|
| 1990 | 71 | 7 | 21 | 49 |
| 1991 | 112 | 7 | 28 | 50 |
| 1992 | 69 | 8 | 24 | 39 |
| 1993 | 65 | 3 | 25 | 46 |
| 1994 | 102 | 3 | 15 | 22 |
| 1995 | 91 | 5 | 10 | 22 |
| 1996 | 94 | 3 | 18 | 24 |
| 1997 | 95 | 4 | 28 | 35 |
| 1998 | 142 | 7 | 24 | 23 |
| 1999 | 82 | 7 | 15 | 34 |
| 2000 | 108 | 6 | 10 | 18 |

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (March 2001).

Table 45. Amount of Heroin Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000 (Kilograms)

| Year | Pakistan | | Thailand | | China | | Laos | | Colombia | |
|------|----------|---------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|
| | Heroin | Opium | Heroin | Opium | Heroin | Opium | Heroin | Opium | Heroin | Opium |
| 1990 | 6,400 | 8,200 | 1,100 | 800 | 1,445 | 720 | 40 | 575 | 0 | 0 |
| 1991 | 5,700 | 5,900 | 1,500 | 1,500 | 2,621 | 2,327 | 15 | 165 | 0 | 0 |
| 1992 | 2,900 | 3,400 | 992 | 600 | 4,489 | 2,660 | 2 | 281 | 50 | 430 |
| 1993 | 3,900 | 4,400 | 2,100 | 2,200 | 4,459 | 3,354 | 1 | 54 | 261 | 261 |
| 1994 | 6,200 | 14,360 | 1,100 | 600 | 3,881 | 1,737 | 62 | 54 | 181 | 128 |
| 1995 | 18,040 | 215,520 | 690 | 920 | 2,376 | 1,110 | 43 | 194 | 419 | 78 |
| 1996 | 4,050 | 8,080 | 390 | 620 | 3,500 | 1,400 | 16 | 216 | 183 | 36 |
| 1997 | 5,070 | 8,540 | 320 | 700 | 5,470 | 1,600 | 72 | 200 | 261 | 120 |
| 1998 | 3,330 | 5,020 | 530 | 1,500 | — | — | 80 | 442 | 317 | 100 |
| 1999 | 4,980 | 16,320 | 310 | 440 | — | — | 15 | 226 | 504 | 183 |
| 2000 | 7,410 | 7,840 | 290 | 630 | — | — | 20 | 78 | 572 | — |

— Data not available.

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.

Table 46. Amount of Marijuana Seized by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000 (Metric Tons)

| Year | Mexico | Jamaica | Colombia | Pakistan | Thailand | Other |
|------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 1990 | 408 | 29 | 664 | 241 | 130 | 10 |
| 1991 | 255 | 43 | 329 | 237 | 54 | 17 |
| 1992 | 405 | 35 | 206 | 188 | 87 | 71 |
| 1993 | 495 | 75 | 549 | 189 | 98 | 130 |
| 1994 | 528 | 46 | 2,000 | 178 | 71 | 32 |
| 1995 | 780 | 37 | 166 | 544 | 46 | 31 |
| 1996 | 1,015 | 53 | 235 | 202 | 44 | 64 |
| 1997 | 1,038 | 24 | 136 | 109 | 9 | 37 |
| 1998 | 1,062 | 36 | 69 | 65 | 6 | 26 |
| 1999 | 1,459 | 56 | 65 | 81 | 45 | 29 |
| 2000 | 1,619 | 56 | 46 | 108 | 7 | 93 |

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.

Table 47. Number of Drug Labs Destroyed by Foreign Countries, Calendar Years 1990–2000

| Year | Bolivia | | Brazil | Colombia | | Ecuador | Peru | Mexico | Thailand | | Pakistan |
|------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | Coca base | Cocaine HCl | Cocaine HCl | Cocaine & base | Morphine & Heroin | Cocaine HCl | Coca base | Not specified | Heroin labs | Metham-phetamine | Not specified |
| 1990 | 1,446 | 33 | 3 | 269 | — | 1 | 151 | 13 | 2 | — | — |
| 1991 | 1,461 | 34 | 3 | 239 | 5 | 4 | 89 | 9 | 5 | — | 18 |
| 1992 | 1,393 | 17 | 0 | 224 | 7 | 0 | 88 | 4 | 0 | — | 11 |
| 1993 | 1,300 | 10 | 5 | 401 | 10 | 0 | 38 | 5 | 2 | — | 13 |
| 1994 | 1,891 | 32 | 0 | 560 | 9 | 0 | 21 | 9 | 0 | — | 18 |
| 1995 | 2,226 | 18 | 0 | 396 | 11 | 0 | 21 | 19 | 1 | — | 15 |
| 1996 | 2,033 | 7 | 0 | 861 | 9 | 1 | 14 | 19 | 2 | 1 | 10 |
| 1997 | 1,022 | 1 | 0 | 213 | 9 | 0 | 18 | 8 | 3 | 19 | 4 |
| 1998 | 1,205 | 1 | 2 | 311 | 10 | 2 | — | 7 | 1 | 13 | 0 |
| 1999 | 89 | 1 | 2 | 156 | 10 | 2 | — | — | 0 | 14 | 2 |
| 2000 | 62 | 2 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 9 | 0 |

— Data not available.

Source: U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report* (1988–2001). Data for 1992–2000 are from the March 2001 report.

Table 48. DEA-Reported Seizures of MDMA, 1998–2001

| Year | Non-Analyzed ¹ | | Analyzed ² |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | Grams | Dosage Units | Dosage Units |
| 1998 | 20,977 | 184,206 | 143,613 |
| 1999 | 180,887 | 543,996 | 1,054,973 |
| 2000 | 358,225 | 3,084,215 | 3,300,864 |
| 2001 ³ | 98,819 | 792,612 | 3,072,704 |

¹Figures based on DEA *Information-7* report.

²Figures based on lab analyses, data taken from STRIDE (dosage units calculated at 0.125 grams per tablet).

³2001 data through September 2001.

Sources: *STRIDE* and DEA *Information-7* reports (FDSS tabulation of MDMA commenced April 2001).

Table 49. Estimated Numbers (Thousands) and Percentages of Past-Month Users of Any Illicit Drug, by State or Jurisdiction,¹ Age 12 and Older, 1999

| State or jurisdiction ¹ | Any illicit drug ² | | | | Marijuana | | | | Cocaine | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Estimated number of users | | Percent who are current users | | Estimated number of users | | Percent who are current users | | Estimated number of users | | Percent who are current users | |
| | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval |
| United States³ | 14,182 | | 6.4 | | 10,769 | | 4.9 | | 4,024 | | 1.8 | |
| Alabama | 176 | (138 - 221) | 4.9 | (3.8 - 6.1) | 120 | (91 - 155) | 3.3 | (2.5 - 4.3) | 73 | (47 - 107) | 2.0 | (1.3 - 3.0) |
| Alaska | 52 | (42 - 63) | 10.7 | (8.6 - 13.0) | 34 | (27 - 42) | 7.1 | (5.6 - 8.8) | 14 | (9 - 21) | 2.9 | (1.8 - 4.3) |
| Arizona | 260 | (202 - 328) | 6.9 | (5.4 - 8.7) | 195 | (145 - 257) | 5.2 | (3.8 - 6.8) | 68 | (47 - 96) | 1.8 | (1.2 - 2.5) |
| Arkansas | 101 | (82 - 124) | 4.7 | (3.8 - 5.8) | 74 | (57 - 94) | 3.5 | (2.7 - 4.4) | 32 | (22 - 45) | 1.5 | (1.0 - 2.1) |
| California | 1,979 | (1,681 - 2,311) | 7.8 | (6.6 - 9.1) | 1,521 | (1,278 - 1,795) | 6.0 | (5.0 - 7.0) | 500 | (380 - 646) | 2.0 | (1.5 - 2.5) |
| Colorado | 291 | (232 - 359) | 8.7 | (6.9 - 10.7) | 259 | (198 - 330) | 7.7 | (5.9 - 9.9) | 76 | (53 - 105) | 2.3 | (1.6 - 3.1) |
| Connecticut | 190 | (148 - 241) | 7.1 | (5.5 - 8.9) | 135 | (102 - 176) | 5.0 | (3.8 - 6.5) | 47 | (31 - 69) | 1.8 | (1.1 - 2.6) |
| Delaware | 49 | (38 - 60) | 7.8 | (6.2 - 9.6) | 41 | (32 - 51) | 6.5 | (5.1 - 8.2) | 15 | (10 - 21) | 2.4 | (1.7 - 3.4) |
| District of Columbia | 32 | (25 - 40) | 7.4 | (5.8 - 9.3) | 30 | (22 - 40) | 7.1 | (5.1 - 9.5) | 11 | (7 - 16) | 2.5 | (1.6 - 3.7) |
| Florida | 777 | (645 - 928) | 6.2 | (5.2 - 7.4) | 628 | (500 - 776) | 5.0 | (4.0 - 6.2) | 253 | (192 - 326) | 2.0 | (1.5 - 2.6) |
| Georgia | 357 | (277 - 449) | 5.7 | (4.4 - 7.2) | 261 | (194 - 342) | 4.2 | (3.1 - 5.5) | 129 | (86 - 184) | 2.1 | (1.4 - 3.0) |
| Hawaii | 65 | (49 - 85) | 6.7 | (5.0 - 8.8) | 57 | (41 - 75) | 5.8 | (4.3 - 7.8) | 21 | (12 - 36) | 2.2 | (1.2 - 3.7) |
| Idaho | 66 | (52 - 81) | 6.2 | (4.9 - 7.7) | 45 | (34 - 57) | 4.2 | (3.2 - 5.4) | 15 | (10 - 20) | 1.4 | (1.0 - 1.9) |
| Illinois | 613 | (527 - 707) | 6.3 | (5.4 - 7.3) | 472 | (406 - 545) | 4.8 | (4.2 - 5.6) | 145 | (109 - 188) | 1.5 | (1.1 - 1.9) |
| Indiana | 330 | (266 - 402) | 6.7 | (5.4 - 8.2) | 228 | (176 - 289) | 4.6 | (3.6 - 5.9) | 68 | (46 - 95) | 1.4 | (0.9 - 1.9) |
| Iowa | 124 | (98 - 154) | 5.2 | (4.1 - 6.4) | 78 | (59 - 101) | 3.3 | (2.5 - 4.2) | 29 | (20 - 39) | 1.2 | (0.9 - 1.6) |
| Kansas | 112 | (88 - 140) | 5.2 | (4.1 - 6.5) | 79 | (61 - 99) | 3.7 | (2.9 - 4.6) | 30 | (20 - 42) | 1.4 | (0.9 - 2.0) |
| Kentucky | 182 | (145 - 224) | 5.6 | (4.4 - 6.9) | 117 | (90 - 149) | 3.6 | (2.7 - 4.6) | 53 | (38 - 72) | 1.6 | (1.2 - 2.2) |
| Louisiana | 193 | (156 - 235) | 5.4 | (4.4 - 6.6) | 125 | (98 - 156) | 3.5 | (2.8 - 4.4) | 69 | (46 - 98) | 1.9 | (1.3 - 2.8) |
| Maine | 67 | (53 - 84) | 6.4 | (5.1 - 8.0) | 61 | (48 - 75) | 5.8 | (4.6 - 7.2) | 12 | (8 - 16) | 1.1 | (0.8 - 1.6) |
| Maryland | 221 | (174 - 276) | 5.2 | (4.1 - 6.5) | 207 | (156 - 269) | 4.9 | (3.7 - 6.3) | 69 | (47 - 96) | 1.6 | (1.1 - 2.3) |
| Massachusetts | 486 | (375 - 614) | 9.5 | (7.4 - 12.1) | 384 | (296 - 485) | 7.5 | (5.8 - 9.5) | 114 | (73 - 168) | 2.2 | (1.4 - 3.3) |
| Michigan | 564 | (487 - 648) | 7.1 | (6.2 - 8.2) | 419 | (360 - 486) | 5.3 | (4.6 - 6.2) | 126 | (96 - 162) | 1.6 | (1.2 - 2.1) |
| Minnesota | 240 | (198 - 287) | 6.1 | (5.0 - 7.3) | 208 | (168 - 253) | 5.3 | (4.3 - 6.5) | 66 | (46 - 90) | 1.7 | (1.2 - 2.3) |
| Mississippi | 120 | (96 - 148) | 5.3 | (4.3 - 6.6) | 75 | (58 - 95) | 3.3 | (2.6 - 4.2) | 40 | (26 - 58) | 1.8 | (1.2 - 2.6) |
| Missouri | 273 | (219 - 334) | 6.1 | (4.9 - 7.4) | 212 | (163 - 269) | 4.7 | (3.6 - 6.0) | 61 | (42 - 85) | 1.3 | (0.9 - 1.9) |
| Montana | 56 | (45 - 69) | 7.4 | (5.9 - 9.1) | 45 | (35 - 57) | 5.9 | (4.6 - 7.4) | 11 | (8 - 15) | 1.4 | (1.0 - 1.9) |

See notes at end of table (continued).

Table 49 (cont.). Estimated Numbers (in Thousands) and Percentages of Past Month Users of Any Illicit Drug, by State or Jurisdiction,¹ Age 12 and Older, 1999

| State or jurisdiction ¹ | Any illicit drug ² | | | | Marijuana | | | | Cocaine | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Estimated number of users | | Percent who are current users | | Estimated number of users | | Percent who are current users | | Estimated number of users | | Percent who are current users | |
| | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval | Num-ber | Prediction interval | Per-cent | Prediction interval |
| Nebraska | 69 | (55 - 87) | 5.1 | (4.0 - 6.4) | 54 | (41 - 69) | 3.9 | (3.0 - 5.0) | 19 | (13 - 27) | 1.4 | (1.0 - 2.0) |
| Nevada | 136 | (104 - 174) | 9.1 | (7.0 - 11.7) | 83 | (62 - 110) | 5.6 | (4.1 - 7.4) | 38 | (23 - 60) | 2.6 | (1.5 - 4.0) |
| New Hampshire | 64 | (51 - 78) | 6.4 | (5.1 - 7.9) | 59 | (46 - 73) | 5.9 | (4.7 - 7.3) | 15 | (10 - 23) | 1.6 | (1.0 - 2.4) |
| New Jersey | 478 | (380 - 593) | 7.2 | (5.7 - 8.9) | 331 | (256 - 421) | 5.0 | (3.8 - 6.3) | 141 | (90 - 209) | 2.1 | (1.4 - 3.1) |
| New Mexico | 114 | (91 - 141) | 7.8 | (6.2 - 9.7) | 95 | (74 - 120) | 6.5 | (5.0 - 8.2) | 44 | (31 - 60) | 3.0 | (2.2 - 4.1) |
| New York | 968 | (805 - 1,153) | 6.6 | (5.5 - 7.8) | 716 | (603 - 843) | 4.9 | (4.1 - 5.7) | 289 | (201 - 403) | 2.0 | (1.4 - 2.7) |
| North Carolina | 363 | (284 - 454) | 5.8 | (4.5 - 7.3) | 295 | (225 - 378) | 4.7 | (3.6 - 6.0) | 118 | (83 - 162) | 1.9 | (1.3 - 2.6) |
| North Dakota | 26 | (21 - 32) | 4.9 | (3.9 - 6.0) | 21 | (16 - 26) | 3.9 | (3.1 - 5.0) | 6 | (4 - 9) | 1.1 | (0.8 - 1.6) |
| Ohio | 560 | (476 - 653) | 6.0 | (5.1 - 7.1) | 399 | (337 - 468) | 4.3 | (3.6 - 5.0) | 143 | (110 - 184) | 1.5 | (1.2 - 2.0) |
| Oklahoma | 138 | (106 - 176) | 5.1 | (3.9 - 6.5) | 95 | (71 - 123) | 3.5 | (2.6 - 4.5) | 47 | (30 - 70) | 1.7 | (1.1 - 2.6) |
| Oregon | 204 | (159 - 257) | 7.3 | (5.7 - 9.2) | 184 | (140 - 236) | 6.6 | (5.0 - 8.5) | 41 | (28 - 57) | 1.5 | (1.0 - 2.1) |
| Pennsylvania | 638 | (529 - 761) | 6.3 | (5.2 - 7.5) | 450 | (374 - 535) | 4.5 | (3.7 - 5.3) | 125 | (95 - 161) | 1.2 | (0.9 - 1.6) |
| Rhode Island | 66 | (53 - 80) | 8.0 | (6.5 - 9.8) | 61 | (47 - 76) | 7.4 | (5.8 - 9.2) | 13 | (9 - 19) | 1.6 | (1.1 - 2.3) |
| South Carolina | 157 | (124 - 196) | 5.1 | (4.0 - 6.3) | 119 | (91 - 151) | 3.8 | (3.0 - 4.9) | 59 | (38 - 87) | 1.9 | (1.2 - 2.8) |
| South Dakota | 33 | (27 - 40) | 5.3 | (4.3 - 6.5) | 25 | (20 - 31) | 4.1 | (3.2 - 5.1) | 9 | (6 - 12) | 1.4 | (1.0 - 1.9) |
| Tennessee | 241 | (187 - 303) | 5.2 | (4.1 - 6.6) | 164 | (122 - 215) | 3.6 | (2.7 - 4.7) | 94 | (62 - 134) | 2.0 | (1.4 - 2.9) |
| Texas | 800 | (694 - 917) | 5.1 | (4.4 - 5.8) | 554 | (469 - 649) | 3.5 | (3.0 - 4.1) | 369 | (298 - 452) | 2.3 | (1.9 - 2.9) |
| Utah | 101 | (82 - 123) | 6.0 | (4.9 - 7.4) | 82 | (62 - 105) | 4.9 | (3.7 - 6.3) | 26 | (20 - 34) | 1.6 | (1.2 - 2.1) |
| Vermont | 31 | (25 - 38) | 6.2 | (5.0 - 7.6) | 27 | (22 - 34) | 5.4 | (4.3 - 6.7) | 7 | (5 - 11) | 1.5 | (1.0 - 2.2) |
| Virginia | 253 | (195 - 322) | 4.5 | (3.5 - 5.8) | 224 | (165 - 297) | 4.0 | (3.0 - 5.3) | 105 | (70 - 150) | 1.9 | (1.3 - 2.7) |
| Washington | 388 | (308 - 480) | 8.2 | (6.5 - 10.2) | 318 | (243 - 408) | 6.8 | (5.2 - 8.7) | 78 | (53 - 111) | 1.7 | (1.1 - 2.3) |
| West Virginia | 75 | (59 - 91) | 4.8 | (3.8 - 5.9) | 56 | (43 - 72) | 3.6 | (2.7 - 4.6) | 21 | (15 - 29) | 1.4 | (0.9 - 1.9) |
| Wisconsin | 274 | (224 - 330) | 6.3 | (5.2 - 7.6) | 223 | (178 - 275) | 5.1 | (4.1 - 6.3) | 65 | (47 - 87) | 1.5 | (1.1 - 2.0) |
| Wyoming | 29 | (23 - 36) | 7.0 | (5.6 - 8.6) | 24 | (18 - 30) | 5.6 | (4.3 - 7.2) | 7 | (5 - 10) | 1.7 | (1.3 - 2.4) |

¹Excludes jurisdictions outside the United States and the District of Columbia.

²"Any illicit drug" indicates use at least once of marijuana/hashish, cocaine (including crack), inhalants, hallucinogens (including PCP and LSD), heroin, or any prescription-type psychotherapeutic used nonmedically.

³The estimated number of users for the United States is the sum of the hierarchical Bayes estimates across all states and the District of Columbia and typically is not equal to the direct sample-weighted estimate for the Nation. The estimated percentage for the United States is the weighted average of the hierarchical Bayes estimates across all states and the District of Columbia, and typically is not equal to the direct sample-weighted estimate for the Nation.

Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, *National Household Survey on Drug Abuse, 1999*.

Table 50. Estimated Number of Persons Age 12 or Older Needing but Not Receiving Treatment for an Illicit Drug Problem in the Past Year, by State, 2000

| State or jurisdiction | Total | Age groups (years) | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | | 12–17 | 18–25 | 26 or older |
| Total ¹ | 3,994,321 | 963,682 | 1,511,823 | 1,518,816 |
| Alabama | 60,846 | 13,085 | 26,845 | 20,916 |
| Alaska | 10,381 | 2,879 | 3,451 | 4,051 |
| Arizona | 88,686 | 19,499 | 25,902 | 43,284 |
| Arkansas | 34,202 | 9,509 | 14,384 | 10,309 |
| California | 563,676 | 147,129 | 172,043 | 244,504 |
| Colorado | 71,131 | 16,164 | 24,240 | 30,727 |
| Connecticut | 52,010 | 13,550 | 20,130 | 18,329 |
| Delaware | 11,100 | 2,743 | 3,719 | 4,637 |
| District of Columbia | 8,820 | 1,852 | 2,820 | 4,148 |
| Florida | 196,128 | 47,578 | 71,294 | 77,256 |
| Georgia | 110,012 | 27,273 | 41,947 | 40,792 |
| Hawaii | 16,838 | 5,034 | 4,375 | 7,492 |
| Idaho | 19,700 | 5,408 | 9,029 | 7,429 |
| Illinois | 164,309 | 34,985 | 65,356 | 5,263 |
| Indiana | 82,093 | 19,227 | 35,911 | 63,967 |
| Iowa | 32,845 | 7,980 | 14,102 | 26,955 |
| Kansas | 35,310 | 7,244 | 13,406 | 10,764 |
| Kentucky | 63,647 | 13,165 | 22,798 | 17,684 |
| Louisiana | 65,208 | 16,667 | 28,934 | 19,607 |
| Maine | 18,817 | 5,463 | 7,565 | 5,789 |
| Maryland | 80,734 | 19,869 | 26,850 | 34,014 |
| Massachusetts | 108,669 | 28,215 | 36,641 | 43,812 |
| Michigan | 137,607 | 34,424 | 61,890 | 41,293 |
| Minnesota | 75,663 | 18,474 | 26,808 | 30,382 |
| Mississippi | 37,181 | 8,488 | 16,533 | 12,160 |
| Missouri | 67,487 | 15,037 | 27,465 | 24,985 |
| Montana | 12,396 | 3,955 | 4,616 | 3,825 |
| Nebraska | 22,267 | 5,205 | 9,747 | 7,315 |
| Nevada | 27,941 | 6,816 | 9,672 | 11,453 |
| New Hampshire | 19,883 | 6,566 | 7,006 | 6,310 |
| New Jersey | 110,186 | 21,851 | 44,599 | 43,737 |
| New Mexico | 25,748 | 7,533 | 8,854 | 9,362 |
| New York | 285,054 | 49,307 | 125,708 | 110,039 |
| North Carolina | 98,671 | 19,877 | 39,033 | 39,762 |
| North Dakota | 8,019 | 2,259 | 3,162 | 2,598 |
| Ohio | 150,150 | 34,443 | 61,867 | 53,840 |
| Oklahoma | 43,449 | 10,098 | 17,632 | 15,719 |
| Oregon | 54,906 | 13,900 | 19,589 | 21,417 |
| Pennsylvania | 160,117 | 30,162 | 72,657 | 57,298 |
| Rhode Island | 13,983 | 3,417 | 5,282 | 5,284 |
| South Carolina | 48,469 | 13,398 | 17,298 | 17,773 |
| South Dakota | 9,262 | 2,784 | 3,739 | 2,739 |
| Tennessee | 78,992 | 22,063 | 30,487 | 26,442 |
| Texas | 287,765 | 88,677 | 106,489 | 92,599 |
| Utah | 36,474 | 8,360 | 15,995 | 12,120 |
| Vermont | 9,810 | 2,511 | 3,980 | 3,320 |
| Virginia | 87,768 | 19,913 | 30,225 | 37,630 |
| Washington | 94,245 | 21,368 | 26,444 | 46,433 |
| West Virginia | 22,959 | 5,606 | 8,916 | 8,437 |
| Wisconsin | 75,832 | 21,142 | 31,298 | 23,392 |
| Wyoming | 6,872 | 1,531 | 3,089 | 2,252 |

Note: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach, and the prediction intervals are generated by Markov Chain Monte Carlo techniques.

¹This estimate is the weighted average of the hierarchical Bayes estimates across all States and the District of Columbia and typically is not equal to the direct sample-weighted estimate for the Nation.

Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, *National Household Survey on Drug Abuse, 2000* (unpublished data).

Table 51. Number of Clients in Treatment Age 12 or Older by Substance Abuse Problem, According to State or Jurisdiction:¹ October 1, 1997, October 1, 1998, and October 1, 2000

| State or jurisdiction | Substance abuse problem | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| | Total | | | Both alcohol and drug abuse | | | Drug abuse only | | | Alcohol abuse only | | |
| | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 |
| Clients in treatment | 916,637 | 1,030,028 | 969,863 | 376,482 | 509,784 | 472,826 | 299,593 | 275,320 | 280,015 | 240,562 | 244,924 | 217,022 |
| Alabama | 10,664 | 8,933 | 8,632 | 2,385 | 4,274 | 3,043 | 5,808 | 2,929 | 4,204 | 2,471 | 1,730 | 1,385 |
| Alaska | 5,261 | 2,915 | 2,762 | 2,101 | 1,439 | 1,292 | 894 | 215 | 297 | 2,266 | 1,261 | 1,173 |
| Arizona | 12,307 | 19,804 | 25,709 | 4,297 | 8,795 | 10,802 | 4,612 | 5,883 | 7,086 | 3,398 | 5,126 | 7,821 |
| Arkansas | 4,129 | 7,006 | 3,112 | 1,652 | 4,096 | 1,629 | 1,588 | 1,480 | 999 | 889 | 1,430 | 484 |
| California | 88,876 | 126,340 | 103,261 | 36,421 | 57,515 | 46,562 | 39,646 | 41,512 | 36,552 | 12,809 | 27,313 | 20,147 |
| Colorado | 13,530 | 24,079 | 28,298 | 4,388 | 10,890 | 11,301 | 4,297 | 4,280 | 5,110 | 4,845 | 8,909 | 11,887 |
| Connecticut | 15,592 | 16,037 | 17,638 | 5,949 | 7,079 | 7,423 | 7,199 | 6,192 | 7,976 | 2,444 | 2,766 | 2,239 |
| Delaware | 3,567 | 3,767 | 3,789 | 2,256 | 1,912 | 2,387 | 624 | 1,059 | 619 | 687 | 796 | 783 |
| District of Columbia | 8,201 | 6,499 | 6,145 | 2,722 | 3,949 | 2,719 | 4,033 | 1,654 | 2,571 | 1,446 | 896 | 855 |
| Florida | 41,663 | 45,591 | 43,158 | 19,358 | 24,867 | 22,717 | 13,908 | 11,961 | 11,804 | 8,397 | 8,763 | 8,637 |
| Georgia | 16,118 | 15,775 | 12,922 | 7,299 | 7,231 | 6,576 | 4,883 | 4,452 | 3,303 | 3,936 | 4,092 | 3,043 |
| Hawaii | 2,177 | 3,012 | 2,601 | 893 | 1,700 | 1,313 | 784 | 663 | 902 | 500 | 649 | 386 |
| Idaho | 2,464 | 2,896 | 2,811 | 1,717 | 1,858 | 1,857 | 360 | 430 | 349 | 387 | 608 | 605 |
| Illinois | 39,040 | 45,872 | 41,183 | 17,967 | 22,638 | 17,631 | 10,839 | 12,088 | 13,390 | 10,234 | 11,146 | 10,162 |
| Indiana | 18,458 | 16,855 | 15,360 | 7,597 | 7,384 | 7,826 | 4,334 | 3,695 | 3,157 | 6,527 | 5,776 | 4,377 |
| Iowa | 5,373 | 7,287 | 5,538 | 2,580 | 3,646 | 2,839 | 870 | 1,028 | 864 | 1,923 | 2,613 | 1,835 |
| Kansas | 8,288 | 8,951 | 12,041 | 3,906 | 5,022 | 7,790 | 1,637 | 1,557 | 1,815 | 2,745 | 2,372 | 2,436 |
| Kentucky | 12,119 | 14,656 | 17,950 | 4,093 | 6,597 | 7,978 | 3,365 | 2,712 | 4,023 | 4,661 | 5,347 | 5,949 |
| Louisiana | 12,185 | 16,991 | 11,303 | 6,273 | 9,664 | 5,747 | 3,595 | 4,162 | 4,032 | 2,317 | 3,165 | 1,524 |
| Maine | 8,188 | 8,577 | 4,680 | 3,948 | 4,306 | 2,465 | 1,496 | 1,195 | 669 | 2,744 | 3,076 | 1,546 |
| Maryland | 23,794 | 23,960 | 30,395 | 10,088 | 11,001 | 12,817 | 8,868 | 7,921 | 11,810 | 4,838 | 5,038 | 5,768 |
| Massachusetts | 33,219 | 42,508 | 34,373 | 13,984 | 23,781 | 16,967 | 10,235 | 9,871 | 10,961 | 9,000 | 8,856 | 6,445 |
| Michigan | 49,788 | 48,963 | 43,380 | 18,123 | 19,858 | 17,467 | 14,135 | 13,266 | 12,253 | 17,530 | 15,839 | 13,660 |
| Minnesota | 7,593 | 10,403 | 8,264 | 3,621 | 5,532 | 4,024 | 1,275 | 2,227 | 2,057 | 2,697 | 2,644 | 2,183 |
| Mississippi | 5,334 | 8,877 | 7,326 | 2,515 | 5,028 | 4,477 | 1,391 | 1,882 | 1,133 | 1,428 | 1,967 | 1,716 |
| Missouri | 11,090 | 17,596 | 17,309 | 5,789 | 11,330 | 9,921 | 2,740 | 2,913 | 4,075 | 2,561 | 3,353 | 3,313 |
| Montana | 2,298 | 2,470 | 1,898 | 1,135 | 1,326 | 846 | 482 | 317 | 307 | 681 | 827 | 745 |

See notes at end of table (continued).

Table 51 (cont.). Number of Clients in Treatment Age 12 and Older by Substance Abuse Problem, According to State or Jurisdiction:¹
October 1, 1997, October 1, 1998, and October 1, 2000

| State or Jurisdiction | Substance abuse problem | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | Total | | | Both alcohol and drug abuse | | | Drug abuse only | | | Alcohol abuse only | | |
| | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2000 |
| Nebraska | 4,197 | 5,515 | 4,559 | 2,140 | 3,065 | 2,300 | 444 | 746 | 906 | 1,613 | 1,704 | 1,353 |
| Nevada | 5,279 | 7,962 | 7,292 | 1,697 | 4,678 | 3,609 | 2,158 | 1,590 | 2,281 | 1,424 | 1,694 | 1,402 |
| New Hampshire | 2,507 | 3,374 | 3,253 | 1,028 | 1,741 | 1,818 | 465 | 312 | 482 | 1,014 | 1,321 | 953 |
| New Jersey | 20,594 | 24,666 | 22,936 | 9,147 | 11,999 | 9,891 | 7,928 | 8,882 | 9,922 | 3,519 | 3,785 | 3,123 |
| New Mexico | 6,452 | 10,304 | 9,791 | 2,469 | 4,280 | 4,136 | 1,132 | 2,051 | 2,529 | 2,851 | 3,973 | 3,126 |
| New York | 127,272 | 115,870 | 115,438 | 35,175 | 49,495 | 55,795 | 64,260 | 49,257 | 44,539 | 27,837 | 17,118 | 15,104 |
| North Carolina | 17,379 | 25,358 | 30,487 | 8,358 | 13,535 | 15,374 | 3,427 | 4,538 | 6,067 | 5,594 | 7,285 | 9,046 |
| North Dakota | 2,086 | 3,011 | 1,290 | 856 | 1,418 | 620 | 242 | 365 | 87 | 988 | 1,228 | 583 |
| Ohio | 40,401 | 42,490 | 37,956 | 20,864 | 23,839 | 21,018 | 7,950 | 7,413 | 7,252 | 11,587 | 11,238 | 9,686 |
| Oklahoma | 7,572 | 8,750 | 7,346 | 2,511 | 3,480 | 4,046 | 2,415 | 2,587 | 1,332 | 2,646 | 2,683 | 1,968 |
| Oregon | 22,627 | 18,116 | 21,319 | 10,731 | 9,644 | 12,166 | 5,154 | 4,631 | 5,011 | 6,742 | 3,841 | 4,142 |
| Pennsylvania | 36,382 | 36,536 | 37,281 | 17,957 | 21,460 | 20,439 | 10,231 | 8,282 | 10,305 | 8,194 | 6,794 | 6,537 |
| Rhode Island | 5,084 | 6,390 | 5,884 | 1,874 | 2,957 | 2,158 | 1,914 | 2,143 | 2,833 | 1,296 | 1,290 | 893 |
| South Carolina | 10,862 | 9,648 | 11,942 | 3,943 | 3,661 | 5,537 | 2,513 | 2,443 | 2,444 | 4,406 | 3,544 | 3,961 |
| South Dakota | 1,880 | 2,785 | 1,797 | 739 | 1,261 | 921 | 229 | 205 | 168 | 912 | 1,319 | 708 |
| Tennessee | 13,166 | 12,903 | 8,217 | 6,113 | 5,111 | 3,288 | 4,069 | 4,502 | 3,170 | 2,984 | 3,290 | 1,759 |
| Texas | 40,693 | 47,379 | 44,211 | 14,860 | 28,033 | 25,459 | 14,346 | 11,108 | 12,470 | 11,487 | 8,238 | 6,282 |
| Utah | 13,621 | 11,650 | 6,250 | 5,771 | 5,815 | 3,156 | 3,709 | 3,431 | 1,893 | 4,141 | 2,404 | 1,201 |
| Vermont | 1,638 | 2,577 | 2,734 | 721 | 1,414 | 1,404 | 215 | 317 | 322 | 702 | 846 | 1,008 |
| Virginia | 21,039 | 20,888 | 22,640 | 10,839 | 10,595 | 12,010 | 4,810 | 4,431 | 4,629 | 5,390 | 5,862 | 6,001 |
| Washington | 31,260 | 31,953 | 32,962 | 17,295 | 18,864 | 19,115 | 4,392 | 4,438 | 5,642 | 9,573 | 8,651 | 8,205 |
| West Virginia | 4,704 | 4,658 | 4,859 | 1,159 | 1,630 | 1,890 | 748 | 792 | 783 | 2,797 | 2,236 | 2,186 |
| Wisconsin | 16,535 | 18,916 | 15,308 | 6,333 | 8,279 | 6,875 | 2,659 | 3,089 | 2,405 | 7,543 | 7,548 | 6,028 |
| Wyoming | 2,091 | 1,709 | 2,273 | 845 | 812 | 1,385 | 285 | 223 | 225 | 961 | 674 | 663 |

¹Excludes jurisdictions outside the United States and the District of Columbia. Facilities operated by Federal agencies are included in the States in which the facilities are located.

Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, *Uniform Facility Data Set (UFDS): 1997 and 1998*. (1999 and 2000).

Table 52. Percentage¹ of Adult Male Booked Arrestees Who Used Any Drug,² by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 64 | 65 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 54 | 52 |
| Atlanta | 63 | 69 | 72 | 69 | 74 | 80 | 72 | 66 | 77 | 70 |
| Birmingham | 63 | 64 | 68 | 69 | 73 | 70 | 67 | 67 | 64 | 65 |
| Charlotte-Metro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
| Chicago | 74 | 69 | 81 | 79 | 79 | 82 | 80 | 74 | 74 | — |
| Cleveland | 56 | 64 | 64 | 66 | 65 | 67 | 64 | 65 | 71 | 72 |
| Dallas | 56 | 59 | 62 | 57 | 60 | 63 | 63 | 63 | 61 | 55 |
| Denver | 50 | 60 | 64 | 67 | 66 | 71 | 71 | 69 | 67 | 64 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 56 | 55 |
| Detroit | 55 | 58 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 | 68 | 65 | 70 |
| Ft. Lauderdale | 61 | 64 | 61 | 58 | 58 | 67 | 73 | 74 | 64 | 62 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| Houston | 65 | 59 | 59 | 48 | 58 | 64 | 63 | 60 | 60 | 57 |
| Indianapolis | 45 | 52 | 60 | 69 | 64 | 74 | 63 | 67 | 64 | 64 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 58 | 59 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 60 | 59 |
| Los Angeles | 62 | 67 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 64 | 62 | — |
| Miami | 68 | 68 | 70 | 66 | 57 | 67 | 61 | 62 | 66 | 63 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 60 | 67 |
| New Orleans | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| New York City ³ | 73 | 77 | 78 | 82 | 83 | 78 | 79 | 77 | 75 | 80 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | 69 | 64 | 71 |
| Omaha | 36 | 48 | 54 | 59 | 54 | 63 | 62 | 60 | 62 | 63 |
| Philadelphia | 74 | 78 | 76 | 76 | 76 | 69 | 67 | 79 | 70 | 72 |
| Phoenix | 42 | 47 | 62 | 65 | 63 | 59 | 64 | 63 | 64 | 66 |
| Portland | 61 | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | 71 | 72 | 64 | 64 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 68 | 74 |
| St. Louis | 59 | 64 | 68 | 74 | 77 | 75 | 74 | 72 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 54 |
| San Antonio | 49 | 54 | 55 | 52 | 51 | 57 | 52 | 56 | 50 | 53 |
| San Diego | 75 | 77 | 78 | 79 | 72 | 71 | 73 | 69 | 64 | 64 |
| San Jose | 58 | 50 | 54 | 55 | 52 | 48 | 51 | 48 | 55 | 53 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 66 | 64 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 62 | 58 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 68 | 69 |
| Washington, D.C. | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 66 | 69 | 65 | 69 | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.²"Any drug" includes cocaine, opiates, PCP, marijuana, amphetamines, methadone, methaqualone, benzodiazepines, barbiturates, and propoxyphene.³Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 53. Percentage¹ of Adult Male Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 37 | 47 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 38 | 38 |
| Atlanta | 12 | 22 | 26 | 25 | 32 | 37 | 36 | 26 | 44 | 38 |
| Birmingham | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 44 | 43 | 39 | 39 | 45 |
| Charlotte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| Chicago | 23 | 26 | 40 | 38 | 41 | 47 | 48 | 42 | 45 | — |
| Cleveland | 12 | 17 | 23 | 28 | 29 | 37 | 46 | 37 | 43 | 49 |
| Dallas | 19 | 28 | 28 | 33 | 37 | 44 | 44 | 43 | 39 | 36 |
| Denver | 25 | 34 | 36 | 39 | 33 | 42 | 42 | 41 | 44 | 41 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 43 | 42 |
| Detroit | 18 | 27 | 37 | 38 | 42 | 46 | 44 | 47 | 48 | 50 |
| Ft. Lauderdale | 28 | 32 | 30 | 29 | 33 | 38 | 38 | 44 | 39 | 43 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Houston | 17 | 24 | 24 | 23 | 29 | 33 | 24 | 36 | 38 | 36 |
| Indianapolis | 23 | 35 | 42 | 39 | 38 | 51 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 33 | 29 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 28 | 33 |
| Los Angeles | 19 | 23 | 23 | 20 | 23 | 30 | 27 | 27 | 32 | — |
| Miami | 23 | 30 | 26 | 28 | 29 | 34 | 32 | 29 | 36 | 39 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 44 | 54 |
| New Orleans | 16 | 19 | 25 | 28 | 32 | 40 | 38 | 38 | 40 | 47 |
| New York City ² | 18 | 22 | 21 | 24 | 28 | 38 | 32 | 39 | 41 | 41 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 48 | 57 |
| Omaha | 26 | 38 | 42 | 44 | 42 | 52 | 33 | 44 | 51 | 48 |
| Philadelphia | 18 | 26 | 32 | 32 | 34 | 39 | 41 | 45 | 41 | 49 |
| Phoenix | 22 | 22 | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 32 | 36 | 34 |
| Portland | 33 | 28 | 30 | 27 | 29 | 35 | 38 | 37 | 35 | 36 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 44 | 50 |
| St. Louis | 16 | 21 | 28 | 36 | 39 | 52 | 48 | 50 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 35 | 34 |
| San Antonio | 20 | 28 | 32 | 30 | 34 | 39 | 34 | 41 | 36 | 41 |
| San Diego | 33 | 35 | 40 | 36 | 35 | 40 | 38 | 36 | 36 | 39 |
| San Jose | 25 | 24 | 27 | 30 | 27 | 27 | 29 | 25 | 34 | 36 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 39 | 38 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 44 | 40 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 45 | 45 |
| Washington, D.C. | 11 | 20 | 26 | 30 | 32 | 40 | 39 | 38 | 35 | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.²Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 54. Percentage¹ of Adult Male Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 43 | 35 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 26 | 22 |
| Atlanta | 57 | 58 | 59 | 57 | 57 | 59 | 51 | 51 | 51 | 49 |
| Birmingham | 52 | 49 | 51 | 50 | 49 | 43 | 39 | 41 | 37 | 33 |
| Charlotte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| Chicago | 61 | 56 | 53 | 57 | 51 | 52 | 49 | 45 | 42 | — |
| Cleveland | 48 | 53 | 48 | 48 | 42 | 41 | 27 | 37 | 40 | 38 |
| Dallas | 43 | 41 | 44 | 35 | 31 | 32 | 32 | 29 | 34 | 28 |
| Denver | 30 | 38 | 41 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 41 | 35 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 16 | 11 |
| Detroit | 41 | 37 | 34 | 34 | 30 | 27 | 23 | 28 | 27 | 24 |
| Ft. Lauderdale | 44 | 46 | 43 | 41 | 39 | 44 | 51 | 50 | 41 | 31 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Houston | 56 | 41 | 41 | 29 | 40 | 39 | 40 | 36 | 36 | 32 |
| Indianapolis | 22 | 23 | 32 | 47 | 39 | 42 | 31 | 34 | 34 | 31 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 42 | 45 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 30 | 23 |
| Los Angeles | 44 | 52 | 48 | 48 | 44 | 44 | 38 | 43 | 36 | — |
| Miami | 61 | 56 | 61 | 56 | 42 | 52 | 46 | 47 | 49 | 44 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 29 | 26 |
| New Orleans | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 44 | 35 |
| New York City ² | 62 | 62 | 66 | 68 | 68 | 56 | 58 | 47 | 44 | 49 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| Omaha | 14 | 16 | 19 | 26 | 19 | 24 | 21 | 25 | 22 | 18 |
| Philadelphia | 62 | 63 | 56 | 54 | 51 | 40 | 34 | 45 | 39 | 31 |
| Phoenix | 20 | 26 | 30 | 28 | 27 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 |
| Portland | 30 | 35 | 33 | 32 | 30 | 34 | 37 | 29 | 23 | 22 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 16 | 18 |
| St. Louis | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 | 43 | 41 | 35 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 22 | 18 |
| San Antonio | 31 | 32 | 31 | 31 | 24 | 28 | 26 | 27 | 23 | 20 |
| San Diego | 45 | 45 | 37 | 30 | 28 | 27 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| San Jose | 33 | 28 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 8 | 14 | 12 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 33 | 31 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 15 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 40 | 41 |
| Washington, D.C. | 49 | 44 | 37 | 38 | 35 | 33 | 33 | 33 | 38 | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

²Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 55. Percentage¹ of Adult Male Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 14 | 12 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| Atlanta | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Birmingham | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| Charlotte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chicago | 21 | 19 | 28 | 27 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | — |
| Cleveland | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Dallas | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Denver | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| Detroit | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| Ft. Lauderdale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Houston | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| Indianapolis | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Los Angeles | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| Miami | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| New Orleans | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| New York City ² | 14 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 21 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| Omaha | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Philadelphia | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 18 | 15 | 12 |
| Phoenix | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| Portland | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| St. Louis | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| San Antonio | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| San Diego | 17 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| San Jose | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 10 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 8 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | 9 |
| Washington, D.C. | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.²Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 56. Percentage¹ of Adult Male Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 5.1 | 4.7 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| Atlanta | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | — | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| Birmingham | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | — | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Charlotte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 |
| Chicago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 | — |
| Cleveland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Dallas | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | — | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.1 |
| Denver | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | — | 5.0 | 5.2 | 3.0 | 2.6 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 10.2 | 14.0 | 18.6 |
| Detroit | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Ft. Lauderdale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.9 |
| Houston | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Indianapolis | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | — | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 13.8 | 16.2 | 17.8 |
| Los Angeles | 5.4 | 4.8 | 8.2 | 7.7 | 5.8 | — | 4.7 | 8.0 | 8.9 | — |
| Miami | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
| New Orleans | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| New York City ² | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.7 | 11.3 |
| Omaha | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 7.8 | — | 9.7 | 10.2 | 7.8 | 11.0 |
| Philadelphia | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | — | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| Phoenix | 4.5 | 5.1 | 15.6 | 25.4 | 22.0 | — | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 19.1 |
| Portland | 7.5 | 5.9 | 11.3 | 16.3 | 18.1 | — | 15.9 | 18.1 | 19.8 | 21.4 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 27.6 | 29.3 |
| St. Louis | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | — | 0.4 | 0.3 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 20.3 | 24.8 | 17.1 |
| San Antonio | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | — | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
| San Diego | 18.0 | 23.7 | 35.5 | 41.0 | 36.0 | — | 39.6 | 33.2 | 26.0 | 26.3 |
| San Jose | 6.6 | 5.9 | 15.3 | 19.9 | 16.3 | — | 18.4 | 19.7 | 24.4 | 21.5 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 9.0 | 9.2 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 15.8 | 20.1 | 20.4 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 5.8 | 6.9 |
| Washington, D.C. | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.3 | 0.0 | 0.9 | — |

— Data not available.

¹ Percent positive by urinalysis, January through December of each year.

² Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 57. Percentage¹ of Adult Female Booked Arrestees Who Used Any Drug,² by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ³ |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 74 | 58 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 56 | 46 |
| Atlanta | 70 | 65 | 74 | 72 | 68 | 77 | 74 | — | 77 | 72 |
| Birmingham | 62 | 59 | 55 | 63 | 57 | 59 | 67 | 74 | 53 | 53 |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 77 | 80 |
| Cleveland | 79 | 74 | 77 | 82 | 71 | 70 | 57 | 58 | 68 | 68 |
| Dallas | 56 | 66 | 61 | 63 | 58 | 58 | 53 | 49 | 56 | 39 |
| Denver | 54 | 61 | 66 | 68 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 53 | 59 |
| Detroit | 68 | 72 | 76 | 62 | 78 | 69 | 69 | 60 | 69 | 70 |
| Ft. Lauderdale | 64 | 62 | 60 | 62 | 60 | 66 | 68 | 67 | 68 | 61 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| Houston | 59 | 54 | 53 | 48 | 50 | 54 | 45 | 52 | 43 | 52 |
| Indianapolis | 54 | 50 | 58 | 69 | 72 | 72 | 67 | 67 | 69 | 72 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 22 | 31 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 72 | 61 |
| Los Angeles | 75 | 72 | 77 | 72 | 68 | 78 | 70 | 71 | 62 | 65 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 57 | 61 |
| New Orleans | 50 | 52 | 47 | 32 | 50 | 35 | 40 | 51 | 59 | 57 |
| New York City ⁴ | 77 | 85 | 83 | 90 | 84 | 83 | 81 | 82 | 81 | 75 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 67 |
| Omaha | — | — | — | 58 | 56 | 51 | 54 | 60 | 62 | 53 |
| Philadelphia | 75 | 78 | 79 | 76 | 77 | 81 | 75 | 77 | 76 | 59 |
| Phoenix | 61 | 63 | 62 | 67 | 63 | 65 | 66 | 71 | 67 | 66 |
| Portland | 68 | 73 | 74 | 74 | 68 | 74 | 78 | 74 | 68 | 69 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 75 | 85 |
| St. Louis | 54 | 70 | 69 | 76 | 69 | 73 | 70 | 69 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 69 | 66 | 59 |
| San Antonio | 45 | 44 | 42 | 39 | 41 | 44 | 37 | 38 | 31 | — |
| San Diego | 73 | 72 | 78 | 76 | 73 | 62 | 73 | 64 | 67 | 66 |
| San Jose | 52 | 56 | 51 | 61 | 50 | 53 | 53 | 42 | 61 | 69 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 81 | 70 | 74 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 71 | 42 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 58 | 71 |
| Washington, D.C. | 75 | 72 | 71 | 67 | 65 | 58 | 57 | 65 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.²“Any drug” includes cocaine, opiates, PCP, marijuana, amphetamines, methadone, methaqualone, benzodiazepines, barbiturates, and propoxyphene.³Data for 2000 are unweighted and not based on probability sampling.⁴Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 58. Percentage¹ of Adult Female Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ² |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 18 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 31 | 28 |
| Atlanta | 8 | 13 | 16 | 15 | 13 | 26 | 28 | — | 34 | 26 |
| Birmingham | 10 | 13 | 12 | 17 | 12 | 22 | 25 | 18 | 26 | 18 |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 27 | 26 |
| Cleveland | 7 | 11 | 13 | 16 | 11 | 22 | 22 | 27 | 28 | 24 |
| Dallas | 11 | 24 | 19 | 22 | 21 | 44 | 28 | 24 | 27 | 21 |
| Denver | 16 | 19 | 24 | 22 | 21 | 27 | 32 | 30 | 34 | 34 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 34 | 36 |
| Detroit | 4 | 11 | 10 | 16 | 18 | 19 | 28 | 22 | 26 | 24 |
| Ft. Lauderdale | 14 | 21 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 25 | 29 | 28 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Houston | 8 | 12 | 15 | 13 | 18 | 26 | 17 | 20 | 23 | 27 |
| Indianapolis | 22 | 26 | 25 | 22 | 24 | 31 | 30 | 31 | 38 | 38 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 17 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 23 | 25 |
| Los Angeles | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 38 | 18 | 22 | 21 | 32 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 29 | 44 |
| New Orleans | 7 | 8 | 14 | 7 | 16 | 13 | 12 | 22 | 25 | 28 |
| New York City ³ | 11 | 12 | 19 | 15 | 16 | 19 | 25 | 23 | 26 | 28 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 45 |
| Omaha | — | — | — | 28 | 24 | 33 | 33 | 28 | 36 | 33 |
| Philadelphia | 14 | 15 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 22 |
| Phoenix | 14 | 15 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 25 | 26 | 23 |
| Portland | 28 | 17 | 17 | 19 | 16 | 26 | 19 | 23 | 23 | 26 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 33 | 26 |
| St. Louis | 8 | 11 | 15 | 15 | 18 | 29 | 31 | 32 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 23 | 25 |
| San Antonio | 9 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | — |
| San Diego | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 27 |
| San Jose | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 19 | 17 | 14 | 26 | 31 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 28 | 48 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 32 | 25 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 24 | 29 |
| Washington, D.C. | 6 | 8 | 9 | 10 | 18 | 23 | 19 | 29 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

²Data for 2000 are unweighted and not based on probability sampling.

³Data before the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 59. Percentage¹ of Adult Female Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ² |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 56 | 41 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 36 | 24 |
| Atlanta | 66 | 58 | 68 | 62 | 62 | 63 | 61 | — | 62 | 58 |
| Birmingham | 44 | 46 | 41 | 50 | 48 | 39 | 49 | 57 | 34 | 42 |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 64 | 59 |
| Cleveland | 76 | 66 | 69 | 74 | 63 | 52 | 39 | 41 | 50 | 52 |
| Dallas | 45 | 48 | 43 | 46 | 44 | 36 | 34 | 30 | 40 | 24 |
| Denver | 41 | 50 | 47 | 51 | 52 | 53 | 50 | 50 | 51 | 47 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 22 | 18 |
| Detroit | 62 | 62 | 64 | 46 | 61 | 53 | 48 | 46 | 46 | 42 |
| Ft. Lauderdale | 55 | 47 | 45 | 52 | 50 | 52 | 57 | 53 | 52 | 45 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Houston | 52 | 44 | 43 | 36 | 32 | 34 | 29 | 37 | 23 | 32 |
| Indianapolis | 26 | 25 | 36 | 56 | 54 | 52 | 45 | 43 | 45 | 45 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 21 | 22 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 50 | 28 |
| Los Angeles | 62 | 58 | 59 | 53 | 49 | 56 | 49 | 45 | 37 | 33 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 36 | 33 |
| New Orleans | 42 | 44 | 37 | 25 | 37 | 26 | 32 | 39 | 41 | 41 |
| New York City ³ | 66 | 72 | 70 | 80 | 71 | 69 | 62 | 67 | 65 | 53 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 27 |
| Omaha | — | — | — | 34 | 30 | 28 | 17 | 36 | 32 | 22 |
| Philadelphia | 64 | 67 | 61 | 61 | 59 | 69 | 58 | 61 | 60 | 41 |
| Phoenix | 45 | 49 | 38 | 36 | 33 | 42 | 33 | 40 | 43 | 35 |
| Portland | 40 | 54 | 47 | 43 | 40 | 46 | 45 | 37 | 33 | 30 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 30 | 37 |
| St. Louis | 47 | 62 | 62 | 69 | 57 | 55 | 53 | 44 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 26 | 15 |
| San Antonio | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 18 | 20 | 19 | — |
| San Diego | 40 | 37 | 36 | 18 | 28 | 22 | 23 | 20 | 23 | 26 |
| San Jose | 30 | 32 | 19 | 23 | 16 | 21 | 16 | 10 | 20 | 8 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 48 | 39 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 31 | 8 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 41 | 49 |
| Washington, D.C. | 68 | 64 | 62 | 55 | 46 | 40 | 39 | 40 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.²Data for 2000 are unweighted and not based on probability sampling.³Data prior to the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 60. Percentage¹ of Adult Female Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ² |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 31 | 14 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 8 |
| Atlanta | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | 5 | 3 |
| Birmingham | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 | 4 | 4 |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 32 | 40 |
| Cleveland | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Dallas | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Denver | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| Detroit | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 9 | 22 | 16 | 24 |
| Ft. Lauderdale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Houston | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| Indianapolis | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 7 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 9 | 5 |
| Los Angeles | 18 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 9 | 6 |
| New Orleans | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| New York City ³ | 21 | 24 | 23 | 30 | 19 | 27 | 20 | 22 | 21 | 19 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 |
| Omaha | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Philadelphia | 9 | 11 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| Phoenix | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8 | 7 | 12 | 7 |
| Portland | 17 | 22 | 19 | 21 | 18 | 26 | 27 | 25 | 19 | 22 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 11 |
| St. Louis | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 15 | 9 |
| San Antonio | 21 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | — |
| San Diego | 21 | 17 | 20 | 13 | 12 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 |
| San Jose | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 5 | 13 | 4 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 20 | 17 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | 17 |
| Washington, D.C. | 16 | 19 | 21 | 13 | 16 | 11 | 11 | 10 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

²Data for 2000 are unweighted and not based on probability sampling.

³Data prior to the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 61. Percentage¹ of Adult Female Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1991–2000

| Location | Year | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ² |
| Albany (Capital Area) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Albuquerque | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | 8.9 | 5.7 |
| Anchorage | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Atlanta | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | — | 0.7 | — | 0.8 | 0.0 |
| Birmingham | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.2 |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Cleveland | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dallas | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | — | 2.8 | 4.0 | 3.2 | 3.0 |
| Denver | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | — | 4.6 | 4.6 | 2.4 | 5.3 |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | 24.2 | 22.4 | 20.5 |
| Detroit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ft. Lauderdale | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Honolulu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.2 |
| Houston | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | — | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| Indianapolis | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| Laredo | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Las Vegas | — | — | — | — | — | — | — | 24.3 | 17.9 | 20.5 |
| Los Angeles | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 11.3 | — | 8.9 | 11.8 | 12.0 | 12.3 |
| Minneapolis | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| New Orleans | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| New York City ³ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oklahoma City | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | 16.2 |
| Omaha | — | — | 2.7 | 2.7 | 10.3 | — | 13.3 | 13.6 | 11.1 | 13.2 |
| Philadelphia | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Phoenix | 5.6 | 6.9 | 26.0 | 26.0 | 21.7 | — | 25.6 | 22.4 | 14.3 | 24.1 |
| Portland | 11.5 | 7.3 | 21.4 | 21.4 | 19.7 | — | 20.7 | 22.3 | 24.8 | 23.5 |
| Sacramento | — | — | — | — | — | — | — | 29.2 | 32.4 | 29.6 |
| St. Louis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 2.1 | 2.5 | — | — |
| Salt Lake City | — | — | — | — | — | — | — | 31.4 | 34.1 | 28.9 |
| San Antonio | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | — | 2.4 | 1.7 | 1.4 | — |
| San Diego | 24.9 | 25.5 | 53.0 | 53.0 | 40.2 | — | 42.2 | 33.3 | 36.3 | 28.7 |
| San Jose | 7.1 | 11.3 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | — | 24.9 | 21.1 | 31.6 | 40.8 |
| Seattle | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 9.5 | 21.7 |
| Spokane | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 | 26.6 | 8.3 |
| Tucson | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 9.6 | 9.0 |
| Washington, D.C. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year.²Data for 2000 are unweighted and not based on probability sampling.³Data prior to the third quarter of 1998 pertain to Manhattan only.

Sources: 1991–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1991–1996); 1997–1998 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997 and 1998); 1999 data from *1999 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees*, Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 62. Percentage¹ of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Any Drug,² by Location, 1994–2000

| Location | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Birmingham | 38 | 44 | 55 | 63 | 51 | 45 | 42 |
| Cleveland | 47 | 53 | 63 | 61 | 62 | 62 | 57 |
| Denver | 54 | 51 | 61 | 65 | 62 | 62 | 67 |
| Indianapolis | 30 | 34 | 44 | 42 | 50 | — | — |
| Los Angeles | 37 | 42 | 57 | 62 | 61 | 54 | 62 |
| Phoenix | 51 | 48 | 56 | 56 | 69 | 69 | 60 |
| Portland | 23 | 19 | 38 | 43 | 53 | 43 | 51 |
| St. Louis | 38 | 38 | 56 | 54 | 40 | — | — |
| San Antonio | 39 | 44 | 50 | 58 | 55 | 56 | 54 |
| San Diego | 42 | 53 | 53 | 63 | 56 | 57 | 47 |
| San Jose | 35 | 35 | 46 | 52 | 42 | — | — |
| Tucson | — | — | — | — | 51 | 56 | 54 |
| Washington, D.C. | 64 | 58 | 67 | 66 | 59 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

²“Any drug” includes cocaine, opiates, PCP, marijuana, amphetamines, methadone, methaqualone, benzodiazepines, barbiturates, and propoxyphene.

Source: 1994–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1994–1996); 1997–1999 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997–1999), Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 63. Percentage¹ of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Marijuana, by Location, 1994–2000

| Location | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Birmingham | 34 | 42 | 53 | 61 | 47 | 43 | 42 |
| Cleveland | 42 | 47 | 62 | 58 | 60 | 60 | 55 |
| Denver | 52 | 49 | 60 | 62 | 59 | 59 | 65 |
| Indianapolis | 26 | 33 | 43 | 39 | 47 | — | — |
| Los Angeles | 31 | 34 | 51 | 55 | 56 | 52 | 57 |
| Phoenix | 41 | 41 | 52 | 49 | 64 | 62 | 55 |
| Portland | 18 | 16 | 36 | 41 | 50 | 41 | 46 |
| St. Louis | 34 | 34 | 56 | 54 | 40 | — | — |
| San Antonio | 35 | 41 | 48 | 53 | 49 | 53 | 54 |
| San Diego | 33 | 48 | 48 | 53 | 49 | 53 | 44 |
| San Jose | 28 | 31 | 41 | 45 | 35 | — | — |
| Tucson | — | — | — | — | 48 | 53 | 52 |
| Washington, D.C. | 61 | 54 | 65 | 65 | 57 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

Source: 1994–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1994–1996); 1997–1999 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997–1999), Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 64. Percentage¹ of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Cocaine, by Location, 1994–2000

| Location | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Birmingham | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 |
| Cleveland | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| Denver | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Indianapolis | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | — | — |
| Los Angeles | 8 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | 9 |
| Phoenix | 11 | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 |
| Portland | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| St. Louis | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — |
| San Antonio | 9 | 6 | 10 | 15 | 8 | 7 | 5 |
| San Diego | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| San Jose | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — |
| Tucson | — | — | — | — | 5 | 12 | 11 |
| Washington, D.C. | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

Source: 1994–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1994–1996); 1997–1999 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997–1999), Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 65. Percentage¹ of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Opiates, by Location, 1994–2000

| Location | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Birmingham | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cleveland | * | 0 | * | 2 | 0 | * | 0 |
| Denver | * | * | * | 0 | 0 | * | 2 |
| Indianapolis | 1 | * | * | 1 | 0 | — | — |
| Los Angeles | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phoenix | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Portland | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 |
| St. Louis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| San Antonio | 1 | * | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| San Diego | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 1 |
| San Jose | * | * | * | 0 | 2 | — | — |
| Tucson | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| Washington, D.C. | * | 1 | * | 0 | 2 | — | — |

— Data not available.

*Less than 1 percent.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year. Percentages are rounded.

Source: 1994–1996 data from *Drug Use Forecasting* (1994–1996); 1997–1999 data from *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997–1999), Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); 2000 data from *2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 66. Percentage¹ of Juvenile Male Booked Arrestees Who Used Methamphetamine, by Location, 1997–2000

| Location | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------|------|------|------|------|
| Birmingham | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cleveland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Denver | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
| Indianapolis | 0.2 | 0.0 | — | — |
| Los Angeles | 6.5 | 3.6 | 2.2 | 3.8 |
| Phoenix | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 5.7 |
| Portland | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 5.8 |
| St. Louis | 0.0 | 0.0 | — | — |
| San Antonio | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| San Diego | 17.2 | 12.2 | 15.8 | 7.8 |
| San Jose | 13.7 | 9.0 | — | — |
| Tucson | — | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Washington, D.C. | 0.0 | 0.0 | — | — |

— Data not available.

¹Percent positive by urinalysis, January through December of each year.

Source: *Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees* (1997–1999) Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM), National Institute of Justice (NIJ); *2000 data from 2000 Annualized Site Visit Reports*, ADAM, NIJ (2001).

Table 67. Methamphetamine Lab Seizures, by State: 1995–2001

| State | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 ¹ |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Alabama | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | 81 | 104 |
| Alaska | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7 |
| Arizona | 16 | 83 | 129 | 222 | 364 | 375 | 235 |
| Arkansas | 19 | 74 | 164 | 148 | 130 | 209 | 205 |
| California | 108 | 155 | 178 | 118 | 164 | 1,625 | 846 |
| Colorado | 13 | 17 | 26 | 51 | 85 | 126 | 101 |
| Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| District of Columbia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 15 | 20 |
| Georgia | 3 | 4 | 10 | 3 | 21 | 52 | 21 |
| Hawaii | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Idaho | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 88 | 65 |
| Illinois | 0 | 5 | 14 | 45 | 67 | 112 | 130 |
| Indiana | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 217 | 204 |
| Iowa | 4 | 10 | 22 | 19 | 16 | 208 | 218 |
| Kansas | 16 | 43 | 43 | 29 | 44 | 379 | 310 |
| Kentucky | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 87 | 95 |
| Louisiana | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 49 |
| Minnesota | 10 | 14 | 14 | 21 | 20 | 102 | 63 |
| Mississippi | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 95 | 89 |
| Missouri | 37 | 235 | 396 | 315 | 195 | 628 | 494 |
| Montana | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 33 |
| Nebraska | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 | 38 |
| Nevada | 23 | 37 | 19 | 15 | 20 | 244 | 144 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| New Jersey | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 4 | 7 | 20 | 26 | 44 | 48 | 45 |
| New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| North Carolina | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 |
| North Dakota | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 27 |
| Ohio | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 27 | 54 |
| Oklahoma | 8 | 71 | 106 | 102 | 200 | 300 | 394 |
| Oregon | 2 | 8 | 10 | 25 | 10 | 237 | 281 |
| Pennsylvania | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| South Dakota | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| Tennessee | 2 | 2 | 22 | 50 | 60 | 221 | 265 |
| Texas | 10 | 12 | 24 | 31 | 101 | 341 | 336 |
| Utah | 29 | 63 | 112 | 91 | 204 | 203 | 113 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Washington | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 708 | 447 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| Wisconsin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Wyoming | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 |
| Total | 327 | 879 | 1,362 | 1,387 | 1,918 | 6,922 | 5,522 |

¹2001 data through September.

Source: El Paso Intelligence Center.

Table 68. Estimated Number of Emergency Department Drug Episodes, by Metropolitan Area, 1993–2000

| Metro area | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total U.S. | 460,910 | 518,521 | 513,633 | 514,347 | 527,058 | 542,544 | 554,932 | 601,776 |
| Atlanta | 7,728 | 10,828 | 11,063 | 9,400 | 8,004 | 10,722 | 10,195 | 11,114 |
| Baltimore | 13,474 | 15,862 | 15,966 | 15,994 | 12,755 | 13,736 | 14,172 | 11,505 |
| Boston | 12,644 | 15,225 | 16,073 | 13,539 | 12,229 | 13,657 | 11,669 | 14,902 |
| Buffalo | 2,522 | 2,926 | 2,714 | 3,587 | 2,812 | 2,683 | 2,711 | 2,899 |
| Chicago | 17,978 | 21,511 | 21,885 | 23,524 | 26,891 | 26,209 | 26,158 | 30,330 |
| Dallas | 4,739 | 5,160 | 5,230 | 4,978 | 6,195 | 7,198 | 6,245 | 6,798 |
| Denver | 3,791 | 5,034 | 4,609 | 3,419 | 4,338 | 4,091 | 4,816 | 4,946 |
| Detroit | 19,169 | 17,162 | 18,630 | 20,822 | 17,604 | 17,483 | 16,126 | 17,042 |
| L.A.-Long Beach | 20,611 | 19,256 | 19,260 | 20,278 | 17,187 | 17,103 | 20,678 | 25,288 |
| Miami-Hialeah | 5,588 | 5,849 | 6,421 | 6,292 | 6,285 | 6,426 | 7,128 | 8,560 |
| Minn.-St. Paul | 4,558 | 4,611 | 4,327 | 4,836 | 4,974 | 4,348 | 4,643 | 5,198 |
| New Orleans | 4,092 | 4,739 | 5,868 | 5,844 | 5,209 | 5,091 | 4,459 | 4,664 |
| New York | 45,116 | 43,127 | 40,792 | 40,471 | 37,116 | 36,142 | 30,662 | 31,885 |
| Newark | 9,216 | 9,395 | 10,870 | 9,909 | 8,893 | 8,944 | 8,301 | 7,749 |
| Philadelphia | 19,801 | 17,711 | 20,502 | 21,634 | 23,229 | 24,928 | 24,413 | 23,433 |
| Phoenix | 5,930 | 6,879 | 7,913 | 7,434 | 7,327 | 7,060 | 8,293 | 9,072 |
| St. Louis | 4,020 | 6,039 | 5,662 | 6,188 | 5,664 | 5,719 | 6,336 | 6,908 |
| San Diego | 5,310 | 5,051 | 4,661 | 5,811 | 6,754 | 6,982 | 7,036 | 7,094 |
| San Francisco | 11,763 | 11,766 | 10,165 | 9,536 | 9,424 | 9,070 | 8,930 | 7,857 |
| Seattle | 7,266 | 10,049 | 8,517 | 8,476 | 10,593 | 8,332 | 8,426 | 11,116 |
| Washington, DC | 12,339 | 14,152 | 11,830 | 11,720 | 11,194 | 11,596 | 10,282 | 10,303 |
| National panel | 223,256 | 266,189 | 260,674 | 260,654 | 282,380 | 295,023 | 313,254 | 343,112 |

Note: These estimates are based on a representative sample of non-Federal short-stay hospitals with 24-hour emergency departments in the coterminous United States.

Source: Office of Applied Studies, *Drug Abuse Warning Network, 2000* (March 2001 update).

Table 69. Estimated Number of Emergency Department Cocaine Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000

| Metro Area | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total U.S. | 123,423 | 142,878 | 135,801 | 152,433 | 161,087 | 172,014 | 168,763 | 174,896 |
| Atlanta | 4,384 | 6,165 | 6,515 | 5,434 | 4,244 | 5,980 | 5,236 | 6,229 |
| Baltimore | 7,643 | 8,882 | 8,603 | 8,515 | 6,253 | 6,871 | 6,921 | 4,943 |
| Boston | 3,912 | 4,715 | 5,267 | 4,109 | 3,333 | 4,526 | 3,560 | 4,101 |
| Buffalo | 974 | 1,207 | 1,334 | 2,203 | 1,526 | 1,225 | 1,119 | 1,018 |
| Chicago | 8,640 | 10,797 | 10,702 | 12,688 | 14,373 | 13,640 | 13,399 | 14,871 |
| Dallas | 1,345 | 1,426 | 1,457 | 1,393 | 1,778 | 2,586 | 2,107 | 2,180 |
| Denver | 968 | 1,299 | 1,149 | 811 | 1,072 | 1,254 | 1,382 | 1,342 |
| Detroit | 8,991 | 7,964 | 8,767 | 10,435 | 8,093 | 8,617 | 7,699 | 7,870 |
| L.A.-Long Beach | 5,362 | 5,070 | 4,985 | 5,710 | 4,707 | 5,783 | 6,772 | 9,111 |
| Miami-Hialeah | 2,662 | 2,742 | 3,078 | 3,104 | 3,254 | 3,553 | 4,018 | 4,381 |
| Minn.-St. Paul | 457 | 578 | 465 | 675 | 736 | 773 | 814 | 841 |
| New Orleans | 1,686 | 1,884 | 2,018 | 2,380 | 2,363 | 2,396 | 2,140 | 1,998 |
| New York | 21,085 | 20,214 | 19,724 | 21,592 | 20,202 | 19,549 | 14,799 | 14,250 |
| Newark | 3,825 | 4,228 | 4,658 | 4,436 | 3,571 | 3,743 | 3,124 | 2,726 |
| Philadelphia | 9,943 | 8,446 | 9,502 | 10,384 | 11,202 | 13,049 | 12,434 | 10,497 |
| Phoenix | 838 | 1,067 | 1,165 | 1,382 | 1,334 | 1,486 | 1,882 | 1,778 |
| St. Louis | 1,220 | 2,329 | 1,841 | 1,852 | 1,494 | 2,073 | 2,329 | 2,403 |
| San Diego | 869 | 668 | 644 | 906 | 846 | 971 | 1,063 | 1,002 |
| San Francisco | 3,035 | 3,123 | 2,560 | 2,315 | 1,979 | 1,843 | 1,936 | 2,056 |
| Seattle | 1,760 | 2,896 | 2,157 | 2,143 | 2,850 | 2,399 | 2,520 | 3,338 |
| Washington, DC | 4,275 | 4,849 | 3,542 | 3,881 | 3,223 | 3,718 | 3,150 | 2,830 |
| National panel | 29,550 | 42,330 | 35,668 | 46,085 | 62,654 | 66,078 | 70,361 | 75,129 |

Note: These estimates are based on a representative sample of non-Federal short-stay hospitals with 24-hour emergency departments in the coterminous United States.

Source: Office of Applied Studies, *Drug Abuse Warning Network, 2000* (March 2001 update).

Table 70. Estimated Number of Emergency Department Heroin/Morphine Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000

| Metro Area | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total U.S. | 63,232 | 64,013 | 70,838 | 73,846 | 72,010 | 77,645 | 84,409 | 97,287 |
| Atlanta | 250 | 456 | 424 | 414 | 400 | 483 | 432 | 507 |
| Baltimore | 5,719 | 7,510 | 8,222 | 8,111 | 5,873 | 6,725 | 7,013 | 5,414 |
| Boston | 2,319 | 2,527 | 2,971 | 2,751 | 2,517 | 2,756 | 2,874 | 3,888 |
| Buffalo | 279 | 355 | 385 | 448 | 471 | 545 | 525 | 687 |
| Chicago | 3,581 | 4,787 | 4,725 | 6,282 | 8,633 | 9,383 | 9,725 | 12,564 |
| Dallas | 297 | 237 | 276 | 347 | 516 | 512 | 444 | 492 |
| Denver | 276 | 495 | 470 | 344 | 476 | 509 | 651 | 682 |
| Detroit | 2,380 | 2,106 | 2,401 | 3,214 | 3,046 | 2,901 | 2,678 | 3,369 |
| L.A.-Long Beach | 3,724 | 2,949 | 3,088 | 3,305 | 2,532 | 2,631 | 2,955 | 3,225 |
| Miami-Hialeah | 251 | 264 | 336 | 391 | 599 | 772 | 921 | 1,459 |
| Minn.-St. Paul | 138 | 78 | 106 | 127 | 170 | 177 | 207 | 237 |
| New Orleans | 140 | 179 | 274 | 308 | 431 | 534 | 664 | 996 |
| New York | 11,351 | 11,185 | 10,728 | 11,167 | 9,491 | 9,244 | 9,331 | 11,028 |
| Newark | 4,526 | 4,498 | 5,686 | 5,392 | 4,367 | 5,080 | 4,736 | 4,401 |
| Philadelphia | 2,478 | 2,440 | 3,879 | 3,941 | 3,817 | 3,586 | 4,152 | 4,719 |
| Phoenix | 487 | 483 | 490 | 635 | 832 | 893 | 877 | 899 |
| St. Louis | 215 | 408 | 394 | 502 | 472 | 644 | 876 | 1,111 |
| San Diego | 842 | 695 | 691 | 982 | 927 | 1,011 | 1,112 | 1,070 |
| San Francisco | 3,694 | 3,555 | 3,139 | 3,157 | 2,751 | 2,386 | 3,074 | 2,773 |
| Seattle | 1,727 | 2,092 | 2,034 | 2,442 | 2,922 | 2,439 | 2,488 | 2,522 |
| Washington, DC | 1,414 | 1,261 | 1,307 | 1,535 | 1,691 | 2,112 | 1,794 | 1,967 |
| National panel | 17,146 | 15,437 | 18,813 | 18,052 | 19,074 | 22,323 | 26,880 | 33,277 |

Note: These estimates are based on a representative sample of non-Federal short-stay hospitals with 24-hour emergency departments in the coterminous United States.

Source: Office of Applied Studies, *Drug Abuse Warning Network, 2000* (March 2001 update).

Table 71. Estimated Number of Emergency Department Marijuana/Hashish Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000

| Metro area | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total U.S. | 28,873 | 40,183 | 45,271 | 53,789 | 64,744 | 76,870 | 87,150 | 96,446 |
| Atlanta | 849 | 1,527 | 1,671 | 1,547 | 1,578 | 2,633 | 2,515 | 2,431 |
| Baltimore | 625 | 770 | 945 | 1,194 | 1,402 | 1,495 | 1,679 | 1,620 |
| Boston | 1,185 | 1,870 | 2,400 | 2,127 | 1,768 | 2,907 | 1,961 | 2,945 |
| Buffalo | 138 | 230 | 295 | 512 | 472 | 453 | 493 | 553 |
| Chicago | 1,366 | 2,219 | 2,919 | 3,533 | 4,424 | 5,002 | 4,561 | 5,401 |
| Dallas | 367 | 477 | 555 | 556 | 916 | 1,513 | 1,176 | 1,226 |
| Denver | 202 | 406 | 497 | 288 | 505 | 579 | 681 | 818 |
| Detroit | 2,716 | 2,849 | 3,875 | 4,215 | 3,746 | 4,335 | 4,100 | 4,344 |
| LA-Long Beach | 1,745 | 1,658 | 1,706 | 2,132 | 2,084 | 3,423 | 5,473 | 5,846 |
| Miami-Hialeah | 472 | 711 | 969 | 1,015 | 1,030 | 1,118 | 1,285 | 1,770 |
| Minn.-St. Paul | 391 | 482 | 469 | 544 | 604 | 491 | 627 | 803 |
| New Orleans | 610 | 885 | 1,025 | 1,247 | 1,345 | 1,196 | 1,044 | 1,068 |
| New York | 2,092 | 2,589 | 2,976 | 3,571 | 3,842 | 3,684 | 3,491 | 3,544 |
| Newark | 436 | 628 | 743 | 627 | 500 | 532 | 533 | 541 |
| Philadelphia | 1,955 | 2,085 | 3,061 | 3,436 | 4,556 | 5,310 | 5,465 | 4,936 |
| Phoenix | 226 | 453 | 474 | 610 | 741 | 726 | 1,028 | 1,073 |
| St. Louis | 155 | 901 | 861 | 925 | 1,109 | 1,338 | 1,640 | 1,763 |
| San Diego | 479 | 513 | 480 | 626 | 970 | 1,127 | 923 | 955 |
| San Francisco | 451 | 479 | 507 | 425 | 390 | 394 | 470 | 627 |
| Seattle | 406 | 870 | 993 | 897 | 1,663 | 936 | 808 | 1,414 |
| Washington, DC | 2,102 | 2,712 | 2,035 | 2,167 | 2,394 | 2,362 | 2,518 | 2,511 |
| National panel | 9,905 | 14,868 | 15,814 | 21,596 | 28,075 | 35,316 | 44,679 | 50,255 |

Note: These estimates are based on a representative sample of non-Federal short-stay hospitals with 24-hour emergency departments in the coterminous United States.

Source: Office of Applied Studies, *Drug Abuse Warning Network, 2000* (March 2001 update).

Table 72. Estimated Number of Emergency Department Methamphetamine/Speed Mentions, by Metropolitan Area, 1993–2000

| Metro area | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total U.S. | 9,926 | 17,665 | 15,936 | 11,002 | 17,154 | 11,491 | 10,447 | 13,513 |
| Atlanta | 55 | 101 | 147 | 135 | 214 | 162 | 83 | 109 |
| Baltimore | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| Boston | 15 | 3 | 7 | — | 13 | 6 | 12 | 14 |
| Buffalo | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Chicago | 20 | 20 | 34 | 28 | 29 | 33 | 22 | 25 |
| Dallas | 79 | 154 | 203 | 115 | 159 | 186 | 100 | 135 |
| Denver | 55 | 145 | 176 | 105 | 292 | 120 | 101 | 110 |
| Detroit | 24 | 17 | 15 | — | — | 0 | — | — |
| LA-Long Beach | 1,226 | 1,400 | 1,276 | 1,268 | 1,229 | 786 | 910 | 1,375 |
| Miami-Hialeah | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 16 | 9 | 15 |
| Minn.-St. Paul | 42 | 64 | 93 | 108 | 217 | 112 | 112 | 153 |
| New Orleans | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 25 | 23 | 27 |
| New York | 16 | 21 | 23 | 21 | 32 | 36 | 17 | 31 |
| Newark | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
| Philadelphia | 110 | 92 | 91 | 66 | 101 | 48 | 47 | 67 |
| Phoenix | 481 | 813 | 777 | 725 | 800 | 446 | 341 | 600 |
| St. Louis | 29 | 52 | 76 | 39 | 67 | 66 | 104 | 162 |
| San Diego | 929 | 913 | 686 | 666 | 976 | 721 | 584 | 747 |
| San Francisco | 992 | 1,258 | 1,106 | 934 | 1,012 | 616 | 554 | 591 |
| Seattle | 177 | 299 | 260 | 195 | 479 | 266 | 353 | 540 |
| Washington, DC | 20 | 33 | 24 | 11 | — | 16 | 33 | 62 |
| National panel | 5,628 | 12,245 | 10,906 | 6,499 | 11,454 | 7,810 | 7,010 | 8,731 |

— Estimate does not meet standard of precision.

Note: These estimates are based on a representative sample of non-Federal short-stay hospitals with 24-hour emergency departments in the coterminous United States.

Source: Office of Applied Studies, *Drug Abuse Warning Network, 2000* (March 2001 update).

Table 73. Alcohol and Other Drug Use Among Students¹ in Select European Countries and the United States, 1995 and 1999

| Country | Cigarette use in past 30 days | | Alcohol use in past 30 days | | Lifetime any illicit drug use | | Lifetime marijuana use | | Marijuana use in past 30 days | | Lifetime inhalant use | |
|--------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------|------|
| | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 |
| Bulgaria | — | 50 | — | 5 | — | 14 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| Croatia | 32 | 38 | 6 | 6 | 8 | 17 | 9 | 16 | 3 | 6 | 13 | 13 |
| Cyprus | 23 | 16 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| Czech Republic | 36 | 44 | 9 | 14 | 23 | 35 | 22 | 35 | 7 | 16 | 8 | 7 |
| Denmark | 28 | 38 | 15 | 18 | 18 | 25 | 17 | 24 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Estonia | 28 | 32 | 2 | 4 | 8 | 16 | 7 | 13 | — | — | 8 | 7 |
| Faroe Islands | 42 | 41 | 4 | 4 | 12 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Finland | 37 | 43 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| France | — | 44 | — | 8 | — | 35 | — | 35 | — | 22 | — | 11 |
| FYROM ² | — | 37 | — | 3 | — | 10 | — | 8 | — | 3 | — | 4 |
| Greece | — | 35 | — | 13 | — | 10 | — | 9 | — | 4 | — | 14 |
| Greenland | — | 67 | — | 3 | — | 21 | — | 23 | — | 10 | — | 19 |
| Hungary | 34 | 36 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Iceland | 32 | 28 | 1 | 1 | 10 | 16 | 10 | 15 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Ireland | 41 | 37 | 12 | 16 | 37 | 32 | 37 | 32 | 19 | 15 | — | 22 |
| Italy | 36 | 40 | 13 | 7 | 21 | 26 | 19 | 25 | 13 | 14 | 8 | 6 |
| Latvia | — | 40 | — | 2 | — | 22 | — | 17 | — | — | — | 6 |
| Lithuania | 25 | 40 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 | 10 |
| Malta | 31 | 32 | 16 | 20 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 17 | 16 |
| Norway | 36 | 40 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Poland | 28 | 33 | 4 | 8 | 9 | 18 | 8 | 14 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| Portugal | 24 | 31 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | — | 3 |
| Romania | — | 24 | — | 4 | — | 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Russia (Moscow) | — | 45 | — | 8 | — | 24 | — | 22 | — | 5 | — | 9 |
| Slovak Republic | 27 | 37 | — | 7 | 10 | 20 | 9 | 19 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Slovenia | 19 | 29 | 5 | 8 | 13 | 26 | 13 | 25 | 5 | 13 | 12 | 4 |
| Sweden | 30 | 30 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| Ukraine | 38 | 40 | 3 | 5 | 14 | 21 | 14 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| United Kingdom | 36 | 34 | 13 | 16 | 42 | 36 | 41 | 35 | 24 | 16 | 20 | 15 |
| United States | — | 26 | — | 5 | — | — | — | 41 | — | 19 | — | 17 |

— Data not available.

¹Students surveyed were in the 15–16 year age range, approximately equivalent to 10th graders in the United States.²Former Yugoslav Republic of Macedonia.Source: *The 1999 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs: Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries*, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, CAN Council of Europe, Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs, Pompidou Group (2000).

Table 74. Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs by State, Youth Risk Behavior Survey, 1999 State Surveys

| State | Current use ¹ | | | | Episodic heavy drinking ² | Lifetime ³ | |
|----------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Marijuana | Cocaine | Inhalant | Cigarette | | Illegal steroid use | Injecting illegal drug use |
| Weighted data⁴ | | | | | | | |
| Alabama | 22.2 | 3.2 | 4.4 | 36.6 | 29.0 | 5.3 | 3.0 |
| Alaska | 30.7 | 4.1 | 4.3 | 33.9 | 34.4 | 5.0 | 3.5 |
| Arkansas | 24.4 | 4.6 | 4.8 | 39.6 | 33.4 | 5.0 | 3.8 |
| Delaware | 29.0 | 2.7 | 4.0 | 32.2 | 27.1 | 3.2 | 2.3 |
| Hawaii | 24.7 | 3.3 | 3.9 | 27.9 | 26.8 | 2.5 | 1.6 |
| Massachusetts | 30.6 | 4.3 | 4.1 | 30.3 | 32.6 | 4.6 | 2.7 |
| Michigan | 25.9 | 3.4 | 4.2 | 34.1 | 29.9 | 4.0 | 2.3 |
| Mississippi | 18.9 | 2.1 | 4.5 | 31.5 | 25.4 | 4.4 | 1.8 |
| Missouri | 25.6 | 2.7 | 3.0 | 32.8 | 32.0 | 3.5 | 2.0 |
| Montana | 25.5 | 4.0 | 4.4 | 35.0 | 43.6 | 4.1 | 2.4 |
| Nevada | 25.9 | 4.9 | 5.1 | 32.6 | 35.6 | 4.0 | 3.0 |
| New York | 23.4 | 3.0 | 3.7 | 31.8 | 28.8 | 3.7 | 2.0 |
| North Dakota | 18.8 | — | 3.7 | 40.6 | 46.2 | 2.5 | 2.4 |
| Ohio | 26.1 | 3.4 | 4.3 | 40.3 | 37.4 | 4.2 | 2.3 |
| South Carolina | 24.5 | 3.5 | 4.1 | 36.0 | 25.4 | 4.6 | 2.8 |
| South Dakota | 20.7 | 3.3 | — | 43.6 | 46.1 | 3.2 | 2.5 |
| Tennessee | 26.6 | 3.8 | 5.0 | 37.5 | 28.5 | 5.6 | 2.2 |
| Utah | 10.6 | 1.5 | 3.6 | 11.9 | 15.8 | 4.3 | 2.3 |
| Vermont | 33.7 | 5.4 | 5.3 | 33.4 | 32.4 | 5.3 | — |
| West Virginia | 29.3 | 4.4 | 6.7 | 42.2 | 35.5 | 5.3 | 3.2 |
| Wisconsin | 21.5 | 4.4 | 3.8 | 38.1 | 34.4 | 3.4 | 2.3 |
| Wyoming | 21.4 | 3.7 | 4.2 | 35.2 | 39.5 | 4.9 | 2.8 |
| Unweighted data | | | | | | | |
| Connecticut | 27.8 | 3.6 | 3.7 | 31.2 | 27.5 | 4.1 | 2.4 |
| Florida | 23.1 | 5.4 | 4.4 | 27.4 | 27.9 | 4.9 | 3.7 |
| Illinois | 21.5 | 2.6 | 4.7 | 34.0 | 33.1 | 2.7 | 1.5 |
| Iowa | 18.5 | 3.0 | 3.2 | 35.8 | 39.6 | 3.3 | 1.7 |
| Kentucky | 23.6 | 4.1 | 5.7 | 41.5 | 36.8 | 5.1 | 3.0 |
| Louisiana | 20.2 | 3.2 | 3.7 | 33.3 | 29.4 | 5.6 | 3.0 |
| Maine | 30.9 | 3.8 | 5.6 | 31.2 | 35.1 | 6.1 | 3.3 |
| Nebraska | 15.6 | 2.3 | 3.5 | 37.3 | 40.8 | 2.6 | 1.8 |
| New Hampshire | 30.3 | 3.4 | 5.2 | 34.1 | 33.2 | 4.3 | 2.5 |
| New Jersey | 22.7 | 2.4 | 4.3 | 33.8 | 30.2 | 2.1 | 1.5 |
| New Mexico | 31.2 | 8.5 | 6.5 | 36.2 | 38.1 | 5.9 | 4.5 |

— Data not available.

¹Use at least once on at least one of the 30 days preceding the survey.

²Drank five or more drinks of alcohol on one or more occasions on at least one of the 30 days preceding the survey.

³Ever used.

⁴Weighted data are representative of the state or jurisdiction.

Source: *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Youth Risk Behavior Surveillance—United States (1999), Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services.

Table 75. Percentage of High School Students Who Used Selected Drugs in Selected Cities, Youth Risk Behavior Survey, 1999 Local Surveys

| Local Area | Current Use ¹ | | | | Episodic heavy drinking ² | Lifetime ³ | |
|----------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Marijuana | Cocaine | Inhalant | Cigarette | | Illegal steroid use | Injecting illegal drug use |
| Weighted data⁴ | | | | | | | |
| Boston | 20.5 | 2.1 | 2.0 | 17.8 | 17.4 | 2.5 | 0.6 |
| Chicago | 27.3 | 2.7 | 3.4 | 29.0 | 19.3 | 3.4 | 2.5 |
| Dallas | 23.2 | 4.1 | 3.6 | 25.0 | 21.1 | 3.2 | 1.1 |
| Detroit | 20.7 | 2.0 | 3.3 | 17.7 | 12.6 | 4.1 | 2.5 |
| District of Columbia | 25.7 | 1.3 | 2.1 | 19.9 | 14.9 | 1.4 | 1.1 |
| Ft. Lauderdale | 20.9 | 2.6 | 3.2 | 21.9 | 20.1 | 2.9 | 1.8 |
| Houston | 19.0 | 3.7 | 2.1 | 25.4 | 20.5 | 3.2 | 1.4 |
| Miami | 19.3 | 5.2 | 4.0 | 20.9 | 19.5 | 4.2 | 2.7 |
| New Orleans | 21.0 | 2.4 | 3.6 | 17.0 | 15.2 | 4.4 | 3.1 |
| New York City | 17.3 | 1.7 | 3.1 | 24.1 | 16.6 | 2.7 | 0.8 |
| Palm Beach | 26.3 | 5.5 | 5.4 | 26.1 | 31.7 | 5.8 | 4.1 |
| Philadelphia | 21.4 | 2.1 | 2.2 | 23.0 | 17.0 | 3.8 | 1.6 |
| San Diego | 22.2 | 3.2 | 4.1 | 23.1 | 22.3 | 3.4 | 1.5 |
| Seattle | 26.2 | — | 2.6 | 25.9 | 21.5 | — | 1.4 |
| Unweighted data | | | | | | | |
| San Bernadino | 19.4 | 2.7 | 3.4 | 19.9 | 29.1 | 4.7 | 1.8 |
| San Francisco | 15.2 | 1.6 | 3.1 | 18.7 | 11.4 | 2.2 | 0.9 |

— Data not available.

¹Use at least once on at least 1 of the 30 days preceding the survey.²Drank 5 or more drinks of alcohol on 1 or more occasions on at least 1 of the 30 days preceding the survey.³Ever used.⁴Weighted data are representative of the state or jurisdiction.Source: *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Youth Risk Behavior Surveillance—United States (1999), Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services.

Lista de siglas

| | |
|---------------|---|
| ADAM | Arrestee Drug Abuse Monitoring system (formerly DUF) |
| AIDS | acquired immunodeficiency syndrome |
| BJS | Bureau of Justice Statistics |
| CAI | computer-assisted interview |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention |
| CPS | Current Population Survey |
| CSAP | Center for Substance Abuse Prevention (under SAMHSA) |
| CSAT | Center for Substance Abuse Treatment (under SAMHSA) |
| DAWN | Drug Abuse Warning Network |
| DEA | Drug Enforcement Administration |
| DHHS | Department of Health and Human Services |
| DUF | Drug Use Forecasting program |
| ED | emergency department |
| EPIC | El Paso Intelligence Center |
| ESPAD | European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs |
| FBI | Federal Bureau of Investigation |
| FDSS | Federal-Wide Drug Seizure System |
| HIV | human immunodeficiency virus |
| ICD-9 | International Classification of Diseases, Version 9 |
| ICD-10 | International Classification of Diseases, Version 10 |
| INCSR | International Narcotics Control Strategy Report |
| MDMA | 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (Ecstasy) |
| ME | medical examiner |

| | |
|---------------|--|
| MTF | Monitoring the Future study |
| NCHS | National Center for Health Statistics (under CDC) |
| NDATUS | National Drug and Alcoholism Treatment Unit Survey |
| NDCS | National Drug Control Strategy |
| NHSDA | National Household Survey on Drug Abuse |
| NIAAA | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism |
| NIDA | National Institute on Drug Abuse |
| NIJ | National Institute of Justice |
| NTOMS | National Treatment Outcome Monitoring System |
| OAS | Office of Applied Studies |
| ONDCP | Office of National Drug Control Policy |
| PAPI | paper-and-pencil interview |
| PME | Performance Measures of Effectiveness |
| SAMHSA | Substance Abuse and Mental Health Services Administration |
| SIFCF | Survey of Inmates in Federal Correctional Facilities |
| SISCF | Survey of Inmates in State Correctional Facilities |
| STAR | Sequential Transition and Reduction Model |
| STRIDE | System To Retrieve Information on Drug Evidence |
| STD | sexually transmitted disease |
| TB | tuberculosis |
| THC | delta-9-tetrahydrocannabinol (the principal psychoactive ingredient of marijuana) |
| UCR | Uniform Crime Reports |
| UFDS | Uniform Facility Data Set |
| YRBS | Youth Risk Behavior Survey |

ANEXO V

N° 2005-12

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus nefastos efectos en la economía, en la administración de justicia y la gobernabilidad de los Estados, lo que afecta gravemente a la democracia;

Que la conversión o transferencia de capitales de origen ilícito de un país a otro y su reinserción en el sistema económico, producen graves problemas y favorecen la perpetración de una cadena indeterminada de actos ilícitos;

Que la conversión o transferencia ilícita de activos influye en el incremento de la delincuencia organizada transnacional, que es necesario combatir en resguardo de los intereses del país y su población;

Que organismos internacionales, como la ONU, la OEA y el GAFISUD, de los que el Ecuador forma parte, recomiendan la adopción de medidas efectivas para luchar contra el lavado de activos;

Que es necesario legislar con la finalidad de tipificar, en forma adecuada, las infracciones que tienen relación con la conversión o transferencia de activos provenientes de actividades ilícitas y de recuperarlos; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS

TITULO I

DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY

CAPITULO I

DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS

Art. 1.- Esta Ley tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades y tiene por objeto reprimir:

a) La propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de actividades ilícitas, o constituyan instrumentos de ellas; y,

b) La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal anterior; la organización de sociedades o empresas que tengan ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles.

La presente Ley tiene por objetivo también, realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos ilícitos de origen ecuatoriano, que se encuentran en el exterior.

CAPITULO II

DE LA INFORMACION

Art. 2.- Quienes conocieren de la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley informarán a las autoridades competentes con el debido sustento y suficientes antecedentes, preferentemente de carácter documental, acerca de la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas.

Por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, se entenderán aquellas que no guarden correspondencia con los patrones regulares de las actividades económicas que normalmente realiza el sujeto por investigarse y cuyo origen no pueda justificarse.

Art. 3.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y obligaciones constantes en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y otras de carácter específico, deberán:

a) Requerir y registrar mediante medios fehacientes, fidedignos y confiables, la identidad, ocupación, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus clientes, permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá la certificación de existencia legal y capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, objeto social y representación legal.

La información se recogerá en expedientes o se registrará en medios magnéticos de fácil acceso y disponibilidad; y, se mantendrá y actualizará durante la vigencia de la relación contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero mantendrán los registros durante los diez años posteriores a la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual;

b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas, de carácter anónimo, ni autorizar o realizar transacciones u operaciones que no tengan carácter nominativo, salvo las expresamente autorizadas por la ley;

c) Registrar las operaciones y transacciones en efectivo cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples en efectivo que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta (30) días. Dicho registro se realizará en los respectivos formularios

aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera;

d) Reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, las operaciones a las que se refiere el literal precedente. Este plazo se contará a partir de la fecha en que se verifique la mencionada operación o transacción; y,

e) Reportar periódica y sistemáticamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo responsabilidad personal e institucional, acerca de la existencia o no de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, de las que tengan conocimiento. Este deber se cumplirá dentro de los quince días posteriores al cierre del ejercicio mensual de cada entidad.

Art. 4.- La Unidad de Inteligencia Financiera podrá solicitar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo precedente a otras personas naturales o jurídicas, vinculadas o no al sistema financiero o de seguros, de conformidad con la ley y en lo que fueren aplicables, previa solicitud motivada a la autoridad competente y debidamente autorizada por ésta.

Art. 5.- Toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo por un monto igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, tiene la obligación de declararlos ante las autoridades aduaneras, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera.

TITULO II

DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Art. 6.- Créase el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en Quito, Distrito Metropolitano, con personería jurídica de derecho público. Estará integrado por el Directorio y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La representación legal y judicial del Consejo la ejercerá el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Son recursos del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos los siguientes:

- a) Los fondos asignados en el Presupuesto General del Estado;
- b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiriera a cualquier título;
- c) Los rendimientos de sus bienes patrimoniales;
- d) Las ayudas provenientes de convenios internacionales;
- e) Las donaciones, herencias y legados que, de aceptarlos, lo hará con beneficio de inventario;

- f) Los provenientes del decomiso de bienes, en los términos previstos en esta Ley;
- g) Los provenientes de decomisos realizados en otros países, de conformidad con los tratados y convenios internacionales vigentes;
- h) Los valores recaudados por concepto de multas previstas en esta Ley; e,
- i) Otros recursos que legalmente se le asignaren.

Art. 7.- El Directorio del Consejo estará integrado por:

- a) El Procurador General del Estado o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
- b) El Superintendente de Bancos y Seguros o su delegado;
- c) El Superintendente de Compañías o su delegado;
- d) El Director del Servicio de Rentas Internas o su delegado;
- e) El Director de la CAE o su delegado;
- f) El Ministro Fiscal o su delegado; y,
- g) El Comandante General de la Policía Nacional o su delegado.

Los delegados serán permanentes y deberán reunir los mismos requisitos que los titulares.

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera actuará como Secretario del Directorio del Consejo, con voz informativa pero sin derecho a voto.

Art. 8.- Las funciones y competencias del Directorio son las siguientes:

- a) Diseñar y aprobar políticas y planes de prevención en materia de lavado de activos;
- b) Aprobar el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- c) Nombrar al Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera, seleccionándolo mediante concurso público de merecimientos y oposición, y con la intervención, por lo menos, de dos firmas auditoras de reconocido prestigio nacional e internacional;
- d) Nombrar al Subdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, seleccionándolo de la terna presentada por el Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- e) Expedir el Reglamento Especial de Control de Bienes;
- f) Absolver las consultas que el Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera estimare necesario someter a su consideración;

- g) Conocer el informe anual del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera y remitirlo al Presidente de la República con las observaciones que creyere conveniente formular;
- h) Conocer y resolver sobre la renuncia del Director General de Unidad de Inteligencia Financiera;
- i) Conocer y resolver, en apelación, sobre las acciones administrativas que se instauraren contra el Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- j) Resolver sobre la remoción, destitución o suspensión temporal del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- k) Conocer y aprobar el plan estratégico, así como los planes y presupuesto anuales de la Unidad de Inteligencia Financiera; y,
- l) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos.

TITULO III

DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y ESTRUCTURA

Art. 9.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizará actividades de inteligencia financiera con la finalidad de solicitar y receptor información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas para procesarla y analizarla, y, de ser el caso, remitirla al Ministerio Público, y estará conformada por la Dirección General, la Subdirección y por los departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad.

CAPITULO II

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Art. 10.- La Unidad de Inteligencia Financiera, deberá cumplir las siguientes funciones:

- a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta Ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de promover su sanción y recuperar sus recursos;
- b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de la información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o ampliaciones;

- c) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos análogos nacionales e internacionales, para intercambiar información general o específica relativa al lavado de activos, así como ejecutar acciones conjuntas, rápidas y eficientes;
- d) Remitir al Ministerio Público la información relacionada con operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas con los sustentos del caso;
- e) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la información obtenida como producto de sus actividades, de conformidad con el reglamento correspondiente;
- f) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos; y,
- g) Contratar, cuando sea del caso, empresas especializadas en ubicación de fondos y activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación.

CAPITULO III

DEL DIRECTOR GENERAL

Art. 11.- La máxima autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera es el Director General, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

Para desempeñar el cargo de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento, mayor de treinta y cinco años, tener título académico de cuarto nivel, esto es, con las respectivas maestrías o doctorados otorgados por universidades nacionales o internacionales, y contar con experiencia en funciones de dirección y administración en el sector público, de por lo menos cinco años, así como una trayectoria personal y pública intachable.

El Director General durará cinco años en sus funciones.

El Director General podrá ser removido por negligencia grave en el desempeño de sus funciones, por divulgar información reservada, e incriminar sin sustento ni antecedentes suficientes.

Sus principales responsabilidades y atribuciones son:

- a) Diseñar y ejecutar las políticas de la Unidad de Inteligencia Financiera destinadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades;
- b) Elaborar y ejecutar programas y acciones para detectar y reportar los casos de lavado de activos, de conformidad con esta Ley;

- c) Determinar las estrategias de trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera en los campos jurídico, administrativo, financiero y operativo, así como dirigir y coordinar su aplicación con el Ministerio Público y otras entidades competentes;
- d) Formular el Plan Estratégico y Operativo, así como preparar el proyecto de Presupuesto Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera, para someterlos a la aprobación del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos;
- e) Dirigir la ejecución del Plan Estratégico y Operativo y del Presupuesto Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- f) Presentar a consideración del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, para su aprobación, el Proyecto de Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera;
- g) Designar, mediante concurso de merecimientos y oposición, a los funcionarios y empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera; y, removerlos por causas legales;
- h) Designar a los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera que deban representarle en misiones de carácter nacional o internacional;
- i) Gestionar y suscribir, en representación del Estado, con la debida autorización del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, convenios o acuerdos de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
- j) Presentar un informe anual de labores al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos;
- k) Celebrar y ejecutar, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país, todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; y,
- l) Otras que le confieran esta Ley y sus reglamentos.

Art. 12.- Para ser designado Subdirector se deberá reunir los mismos requisitos establecidos para el Director General y someterse a los mismos procesos de selección, y durará cinco años en sus funciones.

Sus principales deberes y atribuciones son:

- a) Reemplazar al Director General en casos de ausencia temporal o definitiva; en caso de ausencia definitiva, lo hará por el tiempo que faltare para el cumplimiento del período para el cual hubiere sido designado el Titular;
- b) Cumplir con las comisiones o delegaciones que le asigne el Director General, de cuyo cumplimiento rendirá el respectivo informe;
- c) Dirigir las operaciones de inteligencia financiera; y,

d) Todas las demás que le sean asignadas por el Director General o el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Art. 13.- Los funcionarios y empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas, aún después de haber cesado en sus funciones. El mismo deber de guardar secreto regirá para los sujetos obligados a informar, de conformidad con esta Ley, a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los funcionarios o empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en forma ilícita, revelen de cualquier manera las informaciones reservadas fuera del ámbito de esta entidad, estarán sujetos a las correspondientes acciones administrativas, civiles y penales.

Los funcionarios y empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera no podrán ejercer otras actividades que no sean las propias del desempeño de sus funciones, con excepción de la docencia universitaria.

TITULO IV DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS

CAPITULO I DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Art. 14.- Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta:

- a) Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito;
- b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito;
- c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en esta Ley;
- d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en esta Ley;
- e) Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos; y,
- f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país.

Los delitos tipificados en este artículo, serán investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de los demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos graves.

Art. 15.- Cada uno de estos delitos será sancionado con las siguientes penas:

1. Con prisión de uno a cinco años en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, pero no exceda de cincuenta mil dólares; y,

b) Cuando la comisión del delito no presupone la asociación para delinquir.

2. Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, pero no exceda de trescientos mil dólares;

b) Si la comisión del delito presupone la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas; y,

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas.

3. Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América;

b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas; y,

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos.

Art. 16.- Los delitos tipificados en este Capítulo serán también sancionados con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito.

Art. 17.- La condena por delito de lavado de activos incluirá la pena de comiso especial de conformidad con lo previsto en el Código Penal y las disposiciones de esta Ley.

Asimismo, de ser el caso, la condena por delito de lavado de activos dará lugar a la extinción de la persona jurídica creada para el efecto.

Cuando la condena sea dictada en contra de dignatarios, funcionarios o empleados públicos o privados, éstos serán sancionados con la incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público, o cumplir funciones de dirección en entidades del sistema financiero y de seguros.

Art. 18.- El que, en forma dolosa, realice acciones tendientes a inculpar falsamente a una o más personas en cualquiera de los delitos sancionados por esta Ley, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior fueren cometidos por un funcionario o empleado público o privado.

CAPITULO II

CONTRAVENCIONES

Art. 19.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros que incumplan las obligaciones determinadas en el artículo 3 de esta Ley, serán sancionadas con multa de cinco mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

La reincidencia dará lugar a la suspensión temporal del permiso para operar; y, la reiteración de la falta dentro de los doce meses siguientes a su comisión, será sancionada con la cancelación del certificado de autorización.

Estas sanciones serán dispuestas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Para efecto de lo previsto en este artículo, la reincidencia por tercera ocasión en la misma falta será considerada como incumplimiento doloso y será sancionada con pena de seis meses a dos años de prisión y multa dos mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

En el caso señalado en el inciso anterior, si el sancionado fuere servidor público, además de las sanciones previstas en esta Ley, será destituido de su cargo.

Art. 20.- La persona que no declare, o declare falsamente, ante el funcionario competente, el ingreso de los valores a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley, será sancionada con multa de quinientos a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, si el acto no constituye otro delito. El funcionario que omita exigir esta información será sancionado con la misma pena y la destitución de su cargo.

Art. 21.- Quien estando implicado en las infracciones sancionadas por esta Ley, suministrarle datos o informaciones trascendentales para descubrir la perpetración de estas infracciones o identificar a sus responsables, será sancionado con la cuarta parte de la pena aplicable a los autores de la infracción.

TITULO V

DE LA ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES

Art. 22.- Dictada una medida cautelar sobre bienes que hubieren sido utilizados para cometer lavado de activos, el juez dispondrá en la misma providencia, previo inventario y avalúo

elaborados con la intervención de peritos y técnicos acreditados por la Función Judicial y legalmente posesionados, que dichos bienes pasen a un régimen de administración temporal a cargo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

El control de los bienes sometidos a medidas cautelares corresponderá al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos que, para la administración temporal de los mismos, deberá celebrar los actos jurídicos que fueren indispensables para garantizar su custodia y conservación, a fin de evitar su deterioro, pérdida o destrucción.

Para el efecto, de conformidad con la Ley, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos celebrará contratos de encargo fiduciario con sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, que rindan garantías suficientes por los resultados de su gestión.

Si la cuantía de los bienes no amerita la constitución de un encargo fiduciario, podrá celebrarse otra clase de contrato que asegure su eficaz administración.

Los bienes perecibles podrán ser vendidos o donados, de conformidad con el respectivo reglamento que dicte el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; en caso de donaciones se preferirá a las instituciones de ayuda a ancianos, a niños y a personas con discapacidad, en estado de abandono y enfermos en etapa terminal, así como a instituciones de educación y salud públicas.

Los contratos de encargo fiduciario serán celebrados, por períodos renovables de hasta seis meses, hasta la resolución definitiva del respectivo proceso penal.

Si los bienes sujetos a medida cautelar se encontraren en poder o bajo la administración de terceros de buena fe, éstos podrán expresar su voluntad, dentro del plazo de ocho días contado a partir de la fecha de la notificación judicial, de mantener la administración de tales bienes hasta que el juez lo disponga. Si no expresaren esta voluntad, los bienes pasarán a la administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

Art. 23.- Cuando se dicte sentencia condenatoria por lavado de activos, los bienes decomisados, con sus frutos y rendimientos, pasarán a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

En el caso de bienes inmuebles, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos protocolizará la copia certificada de la sentencia y la inscribirá en el Registro de la Propiedad, para que sirva de justo título.

Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes decomisados, cesarán ipso jure, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que serán reconocidos, liquidados y pagados en forma inmediata, de conformidad con las normas del reglamento respectivo.

Los bienes de origen ilícito no serán susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial.

Los bienes muebles o inmuebles decomisados y en general los activos que han pasado a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, deberán ser vendidos de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo.

Los valores provenientes de la venta, al igual que el dinero en moneda nacional o extranjera que fuere decomisado, serán depositados en la Cuenta Especial de Depósitos que el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos mantendrá en el Banco Central del Ecuador.

Los valores, dinero e instrumentos monetarios recuperados por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, una vez depositados en el Banco Central del Ecuador, serán distribuidos por éste, de manera automática e inmediata, de la siguiente manera:

- a) El 30% de los beneficios que el fondo genere corresponderán, por partes iguales, al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - CONSEP, a la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público, a la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos;
- b) El 60% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que será destinado al mejoramiento y construcción de la infraestructura de los centros de detención y rehabilitación social del país, con el objeto específico de hacer efectiva la clasificación de cárceles por delito, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social;
- c) El 5%, para la Escuela de Jueces de la Función Judicial; y,
- d) El 5%, para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público.

Art. 24.- Si el sindicado fuere sobreseído definitivamente o absuelto, los bienes de su propiedad que fueren objeto de medidas cautelares, le serán restituidos por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos cuando lo disponga la autoridad competente, previo inventario actualizado y mediante la respectiva acta de entrega a recepción, dentro de los treinta días subsiguientes a la notificación del auto o sentencia ejecutoriados.

El dinero o el valor que representen los instrumentos monetarios o documentos bancarios, financieros o comerciales sujetos a medida cautelar, se devolverá en moneda de curso legal, con los respectivos intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, calculados desde la fecha en que se dictó la medida cautelar, según la cotización del mercado libre para la compra de las divisas a la fecha de la devolución.

Cuando las divisas o los instrumentos monetarios sujetos a medida cautelar no fueren negociables o canjeables en el mercado nacional, se mantendrán en custodia en el Banco Central del Ecuador. Su restitución se hará en la propia especie incautada, sin intereses.

Si los bienes consistieren en inmuebles o semovientes, la devolución se hará junto con los respectivos frutos o aumentos que hubieren generado o que hubieren producido durante el tiempo que duró la incautación.

TITULO VI

DE LA PREVENCIÓN Y COOPERACIÓN

Art. 25.- Las entidades del sector público y privado ejecutarán los programas y las acciones de prevención diseñadas, por la Unidad de Inteligencia Financiera, para alcanzar los objetivos de esta Ley.

En los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, se incluirán programas que desarrollen la formación de una cultura individual y una conciencia social orientadas a la prevención del lavado de activos.

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de todos los establecimientos de educación, deberán participar activamente en las campañas de prevención.

Las empresas de correos o transporte de encomiendas, agencias de turismo y operadores turísticos observarán en sus actividades, las instrucciones que la Unidad de Inteligencia Financiera emita para fines de prevención.

Los medios de comunicación social contribuirán a las campañas de prevención, en la forma que determine la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, a pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La autoridad competente atenderá pedidos de tribunales o autoridades similares de otros Estados, para la prestación de asistencia recíproca en relación con investigaciones o procedimientos de carácter administrativo, civil o penal, que tengan relación con el lavado de activos.

La Unidad de Inteligencia Financiera, sobre la base del principio de reciprocidad, cooperará con sus similares de los demás Estados en el intercambio de información de inteligencia en materia de lavado de activos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y demás leyes que fueren pertinentes.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento de sus fines, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará de autoridades públicas o privadas la información que fuere necesaria. Las autoridades y funcionarios, públicos o privados, tendrán la obligación de entregar la información en función del requerimiento hecho por la Unidad de Inteligencia Financiera.

TERCERA.- El origen ilícito de los activos, así como su carácter de inusual e injustificado, se determinará por los medios de prueba previstos en la legislación ecuatoriana, correctamente

aplicados y valorados conforme a las reglas de la sana crítica y a los principios del debido proceso establecidos en la Constitución Política de República.

CUARTA.- En ningún caso, los sujetos obligados a informar, podrán invocar el sigilo o reserva bancarias, ni el secreto profesional o fiscal, para negar el acceso o demorar la entrega de la información solicitada, especialmente cuando lo requieran las autoridades judiciales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Reglamento de la presente Ley será expedido por el Presidente de la República en el plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial; y, el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera será aprobado en el plazo de noventa días contado a partir de la fecha de designación de su Director General. El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos se reunirá dentro de los quince días posteriores a la fecha de vigencia de la ley.

SEGUNDA.- La Unidad de Inteligencia Financiera se integrará en el plazo de noventa días contado a partir de la fecha de expedición de su Reglamento Orgánico Funcional

TERCERA.- La competencia de la Superintendencia de Bancos sobre inteligencia financiera basada en los reportes de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas; y, la del Area de Prevención de Lavado de Activos-Unidad de Procesamiento de Información Reservada del CONSEP, pasará a ser ejercida por la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de la fecha de su integración. Las bases de datos y el resto de información serán transferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En vista de la transferencia de competencias del CONSEP, esta entidad será sometida a un proceso de reorganización y fortalecimiento. Su régimen de remuneraciones se homologará al de la Función Judicial.

CUARTA.- La Unidad de Inteligencia Financiera, mediante resoluciones, aprobará los instructivos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

REFORMAS Y DEROGATORIAS

Refórmase el Literal g) del artículo 91 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que dirá: "g) Cuando la información sea requerida a las instituciones del sistema financiero y del sistema asegurador, bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, o por el Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el ámbito de sus respectivas competencias."

Refórmase el inciso final del artículo 91 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que dirá: "Cuando una institución del sistema financiero o una institución del

sistema asegurador se halle incurso en un proceso de reestructuración, saneamiento o liquidación, los informes previstos en el artículo 90 se harán públicos.".

Derógase el numeral 10 del artículo 3 y el artículo 74 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Se derogan todas las normas, disposiciones e instructivos que se opongan a esta Ley.

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, el Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y siete días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

f.) Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, Presidente.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General.

Palacio Nacional, en Quito, a cinco de octubre del dos mil cinco.

PROMULGUESE.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Luis Herrería Bonnet, Secretario General de la Administración Pública.

ANEXO VI

George Bush
Discurso en el Capitolio
Washington, 21 de septiembre de 2001

«Señor presidente, miembros del Congreso, queridos estadounidenses:

En el transcurso normal de los acontecimientos, los presidentes vienen a esta cámara a informar sobre el estado de la unión. Hoy no hace falta tal informe: ya ha sido enviado por el pueblo estadounidense.

Lo hemos visto en el coraje de los pasajeros que doblegaron a los terroristas para salvar a otros en tierra. Pasajeros como ese hombre excepcional llamado Todd Beamer. Por favor, ayúdenme a dar la bienvenida esta noche a su esposa, Lisa Beamer.

Hemos visto el estado de la unión en la resistencia de los socorristas más allá del agotamiento. Lo hemos visto en el despliegue de banderas, el resplandor de las velas, las donaciones de sangre, las oraciones en inglés, hebreo y árabe. Lo hemos visto en la decencia de personas caritativas y afectuosas que hicieron suyo el luto de los extraños.

Mis queridos compatriotas. En los últimos nueve días, el mundo entero ha visto por sí mismo el estado de la unión y es fuerte.

Esta noche estamos en un país consciente del peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro duelo se ha convertido en ira y la ira en resolución. Ya sea que llevemos nuestros enemigos a la justicia o la justicia a nuestros enemigos, así lo cumpliremos.

Agradezco al Congreso por su liderazgo en un momento tan importante. Todo Estados Unidos se sintió emocionado la noche de la tragedia cuando vieron a demócratas y republicanos unidos en las escalinatas de esta capitolio cantando «Dios bendiga a Estados Unidos» [*God bless America*]. Y ustedes hicieron más que cantar. Ustedes actuaron y entregaron 40.000 millones de dólares para reconstruir nuestras comunidades y satisfacer las necesidades de nuestras fuerzas Armadas. Presidente de la cámara Hastert, líder demócrata Gephardt, líder republicano Daschle y senador Lott, agradezco su amistad, su liderazgo y sus servicios al país.

Y en representación del pueblo estadounidense, agradezco al mundo por el respaldo brindado. Estados Unidos nunca olvidará el sonido de nuestro himno nacional sonando en el Palacio de Buckingham, en las calles de París y en la Puerta de Brandenburgo en Berlín. No olvidaremos a los niños de Corea del Sur congregándose para orar en nuestra embajada en Seúl, o las oraciones de simpatía ofrecidas en una mezquita de El Cairo.

No olvidaremos los momentos de silencio y los días de luto en Australia y África y América Latina. Ni olvidaremos a los ciudadanos de otras 80 naciones que murieron juntos con los nuestros. Docenas de paquistaníes, más de 130 israelíes, más de 250 ciudadanos de India, hombres y mujeres de El Salvador, Irán, México y Japón y cientos de ciudadanos británicos.

Estados Unidos no tiene un amigo más verdadero que Gran Bretaña. Una vez más, estamos unidos

en una gran causa. Así que estoy honrado con que el primer Ministro británico cruzó un océano para mostrar su unión con América. Gracias por venir, amigo.

El 11 de septiembre, enemigos de la libertad cometieron un acto de guerra contra nuestro país. Estados Unidos ha conocido guerras, pero en los últimos 136 años han sido guerras en suelo extranjero, excepto por un domingo en 1941. Estados Unidos ha conocido bajas de guerra, pero no en el centro de una gran ciudad en una mañana pacífica. Los estadounidenses han conocido ataques sorpresivos, pero nunca antes contra miles de ciudadanos. Todo esto nos llegó en un solo día y la noche cayó sobre un mundo diferente, un mundo en el que la libertad misma está bajo amenaza.

Los estadounidenses tienen muchas preguntas esta noche. Los estadounidenses se están preguntando: ¿Quién atacó a nuestro país?

Las pruebas que hemos reunido apuntan todas a una colección de organizaciones terroristas conocida como Al Qaeda. Ellos son algunos de los asesinos condenados por la colocación de bombas en las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia y los responsables por la bomba contra el USS Cole.

Al Qaeda es al terror lo que la mafia es al crimen. Pero su meta no es hacer dinero, su meta es recrear el mundo e imponer sus creencias radicales sobre la gente en todas partes. Los terroristas practican una forma marginal de extremismo islámico que ha sido rechazada por los eruditos musulmanes y por la vasta mayoría de los clérigos musulmanes; un movimiento marginal que pervierte las enseñanzas pacíficas del Islam.

Las directivas de los terroristas les ordenan matar a cristianos y judíos, matar a todos los estadounidenses y no hacer distinción entre militares y civiles, incluyendo mujeres y niños. Este grupo y su líder, una persona llamada Osama bin Laden, están ligados a muchas otras organizaciones en diferentes países, incluyendo la Yihad Islámica egipcia, y el Movimiento Islámico de Uzbekistán.

Hay miles de estos terroristas en más de 60 países. Son reclutados en sus propias naciones y en las vecinas, y llevados a los campos en lugares como Afganistán, donde son entrenados en las tácticas del terror. Son enviados de regreso a sus casas o enviados a ocultarse en países alrededor del mundo para planear maldad y destrucción.

El liderazgo de Al Qaeda tiene una gran influencia en Afganistán y respalda al régimen talibán en el control de la mayoría de ese país. En Afganistán vemos la visión que Al Qaeda tiene para el mundo. El pueblo de Afganistán ha sido tratado brutalmente, muchos están muriendo de hambre y muchos han huido. A las mujeres no se les permite ir a la escuela. Uno puede ser encarcelado por tener un televisor. La religión sólo puede ser practicada como dictan sus dirigentes. Un hombre puede ser encarcelado en Afganistán si su barba no es suficientemente larga.

Estados Unidos respeta al pueblo de Afganistán –después de todo, somos actualmente su primera fuente de ayuda humanitaria–, pero condenamos al régimen talibán. No sólo reprime a su propio pueblo, sino que es una amenaza para las personas de todas partes por patrocinar y dar abrigo y suministros a los terroristas. Ayudando e instigando el asesinato, el régimen talibán está

cometiendo asesinatos y esta noche Estados Unidos de América les hace las siguientes peticiones:

—Que entreguen a las autoridades de Estados Unidos a los dirigentes de Al Qaeda que se esconden en su país.

—Que liberen a todos los ciudadanos extranjeros, incluso a los ciudadanos estadounidenses que tienen encarcelados injustamente.

—Que protejan a los periodistas extranjeros, los diplomáticos y los trabajadores humanitarios que se encuentran en su país.

—Que cierren inmediata y permanentemente todos los campamentos que entrenan a terroristas en Afganistán y entreguen a todo terrorista y a toda persona y su estructura de apoyo a las autoridades apropiadas.

—Que den a Estados Unidos acceso total a los campamentos de los terroristas, para que podamos estar seguros de que no siguen operando.

Estas demandas no están abiertas a negociaciones ni discusiones. Los talibán deben actuar y actuar inmediatamente. Entregarán a los terroristas o compartirán su destino.

Quiero hablar esta noche también directamente a los musulmanes de todo el mundo. Respetamos vuestra fe. Es practicada libremente por muchos millones de estadounidenses y millones de personas más en países que Estados Unidos cuenta como amigos. Sus enseñanzas son buenas y pacíficas y todos los que cometen actos de maldad en nombre de Alá blasfeman el nombre de Alá.

Los terroristas son traidores a su propia fe, tratando, en realidad, de secuestrar todo el islamismo. El enemigo de América no son nuestros numerosos amigos musulmanes. No son nuestros numerosos amigos árabes. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas y cada Gobierno que la respalda.

Nuestra guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero no termina allí. No terminará hasta que cada grupo terrorista de alcance mundial haya sido encontrado, detenido y vencido.

Los estadounidenses se están preguntando: ¿por qué nos odian? Ellos odian lo que ven aquí en esta Cámara: un Gobierno democráticamente elegido. Sus líderes son nombrados por ellos mismos. Ellos nos odian por nuestras libertades: nuestra libertad de religión, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de votar y congregarnos y de estar en desacuerdo entre nosotros. Ellos quieren derrocar gobiernos existentes en muchos países musulmanes como Egipto, Arabia Saudita y Jordania. Ellos quieren sacar a Israel de Oriente Medio. Ellos quieren expulsar a cristianos y judíos de vastas regiones de Asia y Africa.

Estos terroristas no matan sólo para extinguir vidas, sino para interrumpir y poner fin a una manera de vivir. Con cada atrocidad, ellos esperan que Estados Unidos se vuelva más temeroso y se retire del mundo olvidando nuestros amigos. Ellos se enfrentan a nosotros porque nosotros estamos en su camino.

Nosotros no nos dejamos engañar por su religiosidad fingida. Nosotros hemos visto su clase antes. Ellos son los herederos de todas las ideologías asesinas del siglo XX. Al sacrificar vidas humanas para servir sus visiones radicales, al abandonar todos los valores a excepción de su deseo de poder, ellos siguen el camino del fascismo, el nazismo y el totalitarismo. Y ellos van a seguir ese camino hasta donde termina, en el sepulcro sin marcar de la historia de mentiras descartadas.

Los estadounidenses se están preguntando: ¿cómo vamos a pelear y ganar esta guerra? Dirigiremos todos los recursos a nuestra disposición –todos los medios de la diplomacia, toda herramienta de inteligencia, todo instrumento para la aplicación de la ley, toda influencia financiera y toda arma de guerra necesaria– a la destrucción y la derrota de la red global del terror.

Ahora, esta guerra no será como la guerra contra Irak de hace una década, con una liberación decisiva de un territorio y una conclusión rápida. No se parecerá a la guerra aérea sobre Kosovo de hace dos años, donde no se utilizaron tropas terrestres y ni un solo estadounidense se perdió en el combate.

Nuestra respuesta involucra mucho más que una represalia instantánea y golpes aislados. Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una larga campaña como no hemos visto ninguna otra jamás. Puede incluir golpes dramáticos visibles en la televisión y operaciones encubiertas secretas igual de exitosas.

Les quitaremos la financiación a los terroristas, los volveremos el uno contra el otro, los haremos moverse de un lugar a otro hasta que no tengan refugio o descanso. Y perseguiremos a las naciones que proporcionen ayuda o refugio al terrorismo. Todas las naciones en todas las regiones deben tomar ahora una decisión: o están con nosotros o están con los terroristas.

De este día en adelante, cualquier nación que continúe dando refugio o apoyando el terrorismo será considerada por Estados Unidos como un régimen hostil. Nuestra nación ha sido puesta en alerta, no somos inmunes a los ataques. Tomaremos medidas defensivas contra el terrorismo para proteger a los estadounidenses. Hoy, docenas de departamentos federales y agencias, así como gobiernos estatales y locales, tienen responsabilidades que afectan a la seguridad de la patria.

Estos esfuerzos deben ser coordinados al más alto nivel. Por eso, esta noche anuncio la creación de una posición a nivel de gabinete que despachará directamente conmigo: la Oficina de Seguridad Interna. Y esta noche, anunció también a un estadounidense distinguido para dirigir este esfuerzo, para fortalecer la seguridad estadounidense: un veterano militar, un gobernador efectivo, un verdadero patriota, un amigo de confianza, Tom Ridge, de Pensilvania.

Él dirigirá, supervisará y coordinará una amplia estrategia nacional para salvaguardar a nuestro país contra el terrorismo y responder a cualquier ataque que pudiera venir.

Estas medidas son esenciales. La única manera de derrotar al terrorismo como una amenaza a nuestra forma de vida es detenerlo, eliminarlo y destruirlo donde quiera que crezca.

Muchos participarán en este esfuerzo, desde los agentes del FBI hasta los operativos de inteligencia y los reservistas que hemos llamado a servicio activo. Todos se merecen nuestro agradecimiento y

todos tienen nuestras oraciones.

Y esta noche, a pocas millas del dañado Pentágono, tengo un mensaje para los militares: estén preparados. He colocado a las Fuerzas Armadas en alerta y eso tiene una razón. Ha llegado la hora de que Estados Unidos actúe y ustedes nos harán sentir orgullosos.

Esta no es, sin embargo, una lucha sólo de Estados Unidos y lo que está en juego no son solamente las libertades estadounidenses. Esta es una lucha del mundo. Esta es una lucha de la civilización. Esta es una lucha de todos los que crean en el progreso y el pluralismo, la tolerancia y la libertad.

Pedimos a todas las naciones que se unan a nosotros. Pediremos y necesitaremos la ayuda de fuerzas de policía, servicios de inteligencia y sistemas bancarios de todo el mundo. Estados Unidos agradece que tantas naciones y muchas organizaciones internacionales hayan respondido ya con simpatía y apoyo: naciones de América Latina, Asia, Africa, Europa y el mundo islámico.

Quizás la carta de la OTAN refleja mejor la actitud del mundo: un ataque contra uno es un ataque contra todos. El mundo civilizado se está alineando junto a Estados Unidos. Ellos comprenden que si este terror queda sin castigo, sus propias ciudades, sus propios ciudadanos podrían ser los próximos. El terror sin contestar no sólo puede derribar edificios, es capaz de amenazar la estabilidad de gobiernos legítimos. ¿Y saben qué? No vamos a permitirlo.

Los estadounidenses se preguntan: ¿qué se espera de nosotros? Quiero que vivan sus vidas y abracen a sus hijos. Sé que muchos ciudadanos tienen miedo esta noche y yo les pido que tengan calma y resolución, incluso cuando se enfrentan a una continua amenaza. Les pido que mantengan los valores de Estados Unidos y recuerden por qué tantos han venido a este país.

Estamos en una lucha por nuestros principios y nuestra primera responsabilidad es vivir a la altura de ellos. Nadie debe ser señalado, ni maltratado, ni ofendido de palabra por su origen étnico, ni su fe religiosa.

Les pido que sigan apoyando a las víctimas de esta tragedia con sus contribuciones. Los que quieran dar pueden llegar hasta un centro de información, *libertyunites.org*, para encontrar los nombres de los grupos que están ofreciendo ayuda directa en Nueva York, Pensilvania y Virginia.

Los miles de agentes del FBI que están trabajando ahora en esta investigación pudieran necesitar su cooperación y les pido que se la den. Les pido paciencia con las demoras y los inconvenientes que podrían acompañar a la seguridad más estrecha y su paciencia en lo que será una larga lucha. Les pido su participación continua y confianza en la economía estadounidense. Los terroristas atacaron un símbolo de la prosperidad estadounidense; ellos no tocaron su fuente.

Estados Unidos triunfa por el trabajo duro y la creatividad y el emprendimiento de nuestro pueblo. Estas eran las verdaderas fortalezas de nuestra economía antes del 11 de septiembre y estas son nuestras fortalezas hoy.

Y finalmente, por favor, continúen rezando por las víctimas del terror y por sus familias, por aquellos en uniforme y por nuestro gran país. La oración nos ha confortado en la pena y nos ayudará a fortalecernos para la jornada que tenemos por delante. Esta noche agradezco a mis

compatriotas lo que ya han hecho y lo que harán.

Y, señoras y señores del Congreso, les agradezco lo que ya han hecho y lo que harán juntos. Esta noche nos enfrentamos a nuevos y repentinos retos nacionales. Nos uniremos para mejorar la seguridad aérea, para aumentar el número de vigilantes aéreos en los vuelos domésticos y tomaremos nuevas medidas para prevenir los secuestros.

Nos uniremos para promover la estabilidad y mantener nuestras aerolíneas volando con asistencia directa durante esta emergencia. Nos uniremos para dar a los responsables de aplicar la ley las herramientas adicionales que necesitan para localizar el terror aquí, en casa. Nos uniremos para fortalecer nuestras capacidades de inteligencia para conocer los planes de los terroristas antes de que actúen y encontrarlos antes de que golpeen. Nos uniremos para tomar pasos activos que fortalezcan la economía de Estados Unidos y que nuestro pueblo vuelva al trabajo.

Esta noche damos la bienvenida a dos líderes que representan el extraordinario espíritu de todos los neoyorquinos, el gobernador Jorge Pataki y el alcalde Rodolfo Giuliani. Como muestra de la resolución de Estados Unidos, mi administración trabajará con el Congreso y estos dos líderes para demostrarle al mundo que nosotros vamos a reconstruir la ciudad de Nueva York.

Después de todo lo que ha pasado, todas las vidas que fueron perdidas y todas las posibilidades y esperanzas que murieron con ellas, es natural preguntarse si el futuro de Estados Unidos es de temor. Algunos hablan de una era de terror. Yo sé que hay luchas por delante y peligros a los que enfrentarse. Pero este país va a definir nuestra era, no será definido por ella. Siempre y cuando Estados Unidos sea fuerte y mantenga su determinación, ésta no será una era de terror. Ésta será una era de libertad, aquí y a lo largo del mundo.

Se nos ha hecho gran daño. Hemos sufrido una gran pérdida. Y en nuestro dolor y en nuestra ira, hemos encontrado nuestra misión y nuestro momento. La libertad y el temor están en guerra. El avance de la libertad humana, el gran logro de nuestro tiempo y la gran esperanza de cada era, depende ahora de nosotros.

Nuestra nación, esta generación, levantará la oscura amenaza de violencia que recae sobre nuestro pueblo y nuestro futuro. Fomentaremos que el mundo se una a esta causa a través de nuestros esfuerzos y de nuestra valentía. No nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir y no vamos a fracasar. Es mi esperanza que en los próximos meses y años, la vida retorne casi a la normalidad. Regresaremos a nuestras vidas y rutinas, y eso es bueno. Incluso la tristeza disminuye con el tiempo y la buena voluntad.

Sin embargo, nuestra resolución no desaparecerá. Cada uno de nosotros recordará lo que sucedió ese día y a quiénes les sucedió. Recordaremos el momento en que llegaron las noticias, dónde estábamos y lo que hacíamos. Algunos recordarán una imagen de un incendio o una historia o un rescate. Algunos llevarán recuerdos permanentes de un rostro o una voz.

Yo llevaré esto: la placa de un policía llamado Jorge Howard, que murió en el World Trade Center tratando de salvar a los demás. Me la entregó su madre, Arlene, como recuerdo orgulloso de su hijo. Es mi recuerdo de las vidas que terminaron y una tarea que no termina.

Nunca olvidaré la herida a nuestro país ni aquéllos que la infligieron. No flaquearé, no descansaré, no me ablandaré en la tarea de librar esta lucha por la libertad y seguridad del pueblo estadounidense. El curso de este conflicto no se conoce, pero su resultado es cierto. Libertad y temor, justicia y crueldad, siempre han estado en guerra y sabemos que Dios no es neutral.

Mis queridos compatriotas, enfrentaremos violencia con justicia paciente, garantizada por la corrección de nuestra causa y confiados en las victorias que vendrán.

En todo lo que nos espera, que Dios nos dé sabiduría y podamos velar por Estados Unidos de América. Gracias.»

ANEXO VII

afectados; así como al control de la oferta mediante el combate al delito en todas sus manifestaciones, tales como el lavado de activos, la producción de drogas, el desvío de sustancias químicas usadas como precursores, entre otras manifestaciones criminales.

Art. 4.- La colaboración internacional, como acción de fortalecimiento: En el ámbito regional e internacional en general, se promoverá una labor mancomunada, respaldada en acuerdos y convenios, que permita unificar procedimientos, coordinar acciones, compartir información, proveer de asistencia judicial recíproca y, en general, cooperar conjuntamente en la lucha contra la droga, sobre la base de los convenios y acuerdos existentes y aquellos que en el futuro fueren necesarios.

Art. 5.- La descentralización como herramienta: El Estado, a través de sus órganos competentes, integrará y liderará un Sistema Nacional Descentralizado para la aplicación de la política trazada por el Gobierno Nacional, en sus diferentes ámbitos.

CAPITULO II ESTRATEGIAS

Art. 6.- El cumplimiento de la Política de Lucha Contra la Droga exige la adopción de estrategias que orienten la acción y permitan optimizar los esfuerzos, de modo que haya un aprovechamiento eficiente de los recursos y se garanticen los resultados, con el cumplimiento de sus objetivos trascendentales. Esas estrategias, son las siguientes:

· 6.1.- Enfrentar el problema en forma integral:

Equilibrar las acciones que realiza el Estado, distribuyendo los esfuerzos hacia todas las esferas de intervención, en cuanto a reducción de la demanda, tratamiento a las víctimas de la drogadicción, asistencia individual y familiar para la rehabilitación y la reinserción social, sistemas de control y fiscalización de sustancias controladas y desarrollo alternativo preventivo, combate al delito, juzgamiento y sanción de los delitos de narcotráfico.

· 6.2.- Contar con reglas que definan acciones y responsabilidades:

Actualizar la legislación sobre drogas, para dar sustentación a la política y crear el marco normativo necesario para su aplicación, de modo que se adapte a los convenios internacionales y aproveche los avances que en la materia se han dado internacionalmente. Especial énfasis tendrán en este campo, dos vertientes de intervención: la primera, es la definición de competencias y roles de los organismos públicos y el encauzamiento de la iniciativa privada y de las organizaciones no gubernamentales; y la segunda se refiere a las regulaciones sobre los bienes y recursos obtenidos como ganancias de las actividades ilegales de las que provienen, así como de aquellos que sirvieron para la producción almacenamiento, transporte y distribución de drogas.

· 6.3.- Contar con organismos sólidos y capacitados:

Fortalecer y modernizar al CONSEP, para que ejerza su condición de órgano rector en la materia y dirija el cumplimiento de la política de lucha contra la droga; lidere la elaboración del Plan

incrementen la capacidad de acción gubernamental y alentar la formación y fortalecimiento de redes de instituciones vinculadas a la temática sobre las drogas.

· 6.8.- Producir y utilizar información:

Promover la elaboración, la integración y el intercambio de información entre los organismos e instituciones que la producen, alentando la investigación y la producción de estadísticas, que permitan medir la realidad y preparar las bases para el planteamiento de propuestas que se articulen en el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Droga, en lo que concierne el ámbito nacional, y permitan intercambiar experiencias y homologar procedimientos y criterios, en el internacional.

· 6.9.- La prevención de la drogadicción, como paso clave:

Aplicar programas de prevención, a través de la educación, la información pública, la participación comunitaria y los medios de prensa y opinión, que sensibilicen por medio de campañas públicas, y, en general por medio de actividades informativas y de educación, dirigidas a la niñez y la juventud; la familia; el ambiente laboral, las actividades comerciales orientadas a la recreación y uso del tiempo de ocio; y, en términos universales a la sociedad y a los ciudadanos, sobre la necesidad de eliminar el consumo de drogas.

· 6.10.- El tratamiento, como mecanismo para recuperar a los individuos:

Ejecutar programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, que recuperen las capacidades de los individuos y les confieran un sentido de utilidad para si mismos y para la sociedad. Que puedan elegir o incorporarse a actividades alternativas, que sustituyan la producción de drogas y de cultivos destinados a la obtención de éstas, con el soporte de asistencia técnica y crediticia especialmente dirigida a este propósito.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aparte de las medidas concretas que conciernen al Gobierno Nacional para la aplicación inmediata de esta Política Nacional de Lucha Contra la Droga, en el plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Registro Oficial, el CONSEP deberá presentar a consideración del Presidente Constitucional de la República, para su aprobación, el Proyecto de Fortalecimiento Institucional y el Plan Nacional de Lucha Contra la Droga, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

SEGUNDA.- El Ministerio de Economía y Finanzas asignará al CONSEP los recursos necesarios para la aplicación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en el plazo máximo de 30 días, luego de que fuere aprobado por el Presidente de la República.

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución de este decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguense el Procurador General del Estado, los ministros de Economía y Finanzas, Gobierno y Policía, Educación y Culturas, Salud Pública, Bienestar Social, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, y, el Secretario Ejecutivo del CONSEP.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de diciembre de 2003.

f) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.